



**MARCO DE RECUPERACIÓN DEL
COVID-19 PARA
ÁFRICA**

Esta publicación ha sido elaborada en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Unión Europea y el Gobierno de Suecia.



Con contribuciones adicionales de



Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres y de las capacidades de recuperación”, financiado por la Unión Europea y la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico y ejecutado por el PNUD. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la CUA y del PNUD y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea y de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico.

Copyright © 2022 Comisión de la Unión Africana

Contenido

Preface	5
Reconocimientos	6
Abbreviations	7
Resumen ejecutivo	10
Antecedentes	10
Evaluación de la situación	11
Estrategias de recuperación	15
Disposiciones institucionales	18
Mecanismos financieros	18
Consideraciones sobre la implementación	19
Sigüientes pasos	19
I. Introducción	20
Antecedentes	20
Por qué el COVID-19 es una catástrofe sin precedentes y un reto para África	20
¿Qué es un marco de recuperación?	22
Objetivos	23
Principios	24
Metodología	24
Cómo utilizar el marco	25
II. Evaluación de la Situación	27
Antecedentes	27
Consecuencias para la salud	27
Efectos macroeconómicos	30
Impactos humanos ¹³	31
Resultados económicos	40
Efectos transversales	42
Impactos basados en el tipo de país	46
III. Medidas de recuperación	49
Objetivos estratégicos	49
Prioridades continentales y regionales	49
Salud	50
Desafíos macroeconómicos	53
Desarrollo humano ²³	55
Economic recovery	58
Temas transversales	64
Recomendación de recuperación económica basada en la tipología de países	73
SDG Push y otros escenarios ²⁶	76
IV. Disposiciones institucionales para la aplicación del marco	82
Disposiciones institucionales a tres niveles	83
Nivel continental	83
Nivel regional	84
Nivel de país	84

Consideraciones clave para los acuerdos institucionales	85
Selección de una entidad líder eficaz para gestionar la recuperación	85
Legislar para establecer un marco para la(s) institución(es) encargada(s) de la recuperación	87
Equipo de recuperación	88
Asegurar la participación de la comunidad	89
Apoyar el papel del sector privado	89
Garantizar la coordinación gubernamental y la implementación local	90
Capítulo IV lista de control	91
V. Mecanismos financieros para la aplicación del marco	92
Cuantificar rápidamente los costes económicos de la pandemia	92
Desarrollar presupuestos de recuperación post-pandémica	93
Identificar y movilizar fuentes de financiación	93
Sistemas de gestión de las finanzas públicas	101
Capítulo V Lista de comprobación	103
VI. Consideraciones acerca de la implementación del marco	104
Establecer sistemas de seguimiento y evaluación	104
Establecer mecanismos de retroalimentación y gestión de quejas	108
Adoptar procedimientos de implementación acelerados	108
Apoyar la implementación local	108
Desarrollar sistemas de adquisición adaptados al contexto de la recuperación	109
Establecer una estrategia de comunicación para la recuperación	110
Promover la transparencia en la recuperación	111
Siguiendo pasos para la aplicación del Marco	112
Capítulo VI Lista de comprobación	114
Anexo 1: Información detallada sobre la metodología	115
Anexo 2: Recomendaciones detalladas para la recuperación del sector sanitario	119
Anexo 3: Recomendaciones detalladas para la recuperación económica	123
Continental	123
Medidas comunes a todas las regiones	125
Anexo 4: Debates en grupo	134
Referencias	137

Preface



La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto lo susceptibles que son las sociedades modernas a los riesgos sistémicos y que un “efecto dominó” en los sistemas infraestructurales, sociales, medioambientales, políticos y económicos de cada sociedad puede alterar o desbaratar por completo su configuración original. La pandemia y otras crisis de África han exacerbado aún más la vulnerabilidad, especialmente de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las poblaciones desplazadas, los refugiados y los pobres, entre otros grupos vulnerables, lo que exige un enfoque holístico de la recuperación para garantizar que nadie se quede atrás. La planificación y la aplicación de intervenciones de recuperación con conocimiento de los riesgos y resiliencia a los impactos del COVID-19 serán fundamentales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

y las aspiraciones africanas definidas en la Agenda 2063.

Teniendo en cuenta esta necesidad, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana expresaron su firme compromiso con la respuesta y la recuperación del COVID-19 en su trigésimo cuarto período ordinario de sesiones (Decisión - Assembly/AU/Dec.797(XXXIV)) celebrado en febrero de 2021 en Addis Abeba, Etiopía, y posteriormente en la Cumbre sobre la Financiación de las Economías Africanas celebrada el 18 de mayo de 2021 en París. La Asamblea de la Unión hizo un firme llamamiento para que los sectores y las partes interesados se comprometieran estrechamente con el fin de armonizar y coordinar el trabajo de respuesta y recuperación del COVID-19 en el continente. Esto fue reiterado por el Consejo de Paz y Seguridad en su 1043ª reunión celebrada el 29 de octubre de 2021 en Addis Abeba, Etiopía. Además, el Comité Técnico Especializado en Agricultura, Desarrollo Rural, Agua y Medio Ambiente, celebrado los días 9 y 10 de noviembre de 2020, alentó a los Estados miembros, a la Comisión de la Unión Africana (CUA) y a las Comunidades Económicas Regionales (CER) a movilizar recursos financieros, técnicos y humanos para hacer frente a las tareas de recuperación.

En este sentido, la CUA, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras partes interesadas, elaboró un Marco de Recuperación del COVID-19 para África. El objetivo es proporcionar orientación y soluciones para una recuperación resiliente basada en los conocimientos/herramientas/directrices existentes, las buenas prácticas y las experiencias recientes en la recuperación del COVID-19. El objetivo del Marco es orientar los esfuerzos de recuperación socioeconómica resiliente a nivel continental, regional y nacional desde una perspectiva multirriesgo, creando las condiciones previas para construir sociedades resilientes en el continente africano. El Marco se ha desarrollado en colaboración con las CER. También se ha beneficiado de aportaciones recibidas a través de una encuesta por Internet con los Estados miembros, debates de grupos de discusión con las partes interesadas, aportaciones de la Plataforma Regional Africana para la Reducción del Riesgo de Desastres y otros mecanismos consultivos.

Esperamos poner en práctica este Marco a nivel continental, regional y nacional para facilitar una recuperación rápida y resiliente de la pandemia y otras crisis que afectan simultáneamente al continente. La UA hace un llamamiento a los socios en el desarrollo, a las CER y a los Estados miembros para que colaboren en la aplicación de este programa de transformación para el continente.

Atentamente,

Embajadora Josefa Leonel Correia Sacko.

Comisaria.

Departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Economía Azul y Medio Ambiente Sostenible,

Comisión de la Unión Africana.

Reconocimientos

El Marco de Recuperación y su Evaluación de la Situación fueron dirigidos por Gatkuoth Kai (CUA) bajo la dirección general del Sr. Harsen Nyambe (AUC) y con el apoyo de una serie de colegas de la CUA entre los que se encuentran Ndinaye Charumbira, Aboubakar Diane, Nomsa Thembekile Dube, Sandra Kemeh, Alain Koualao, Lusajo Ambukege, Maryanne Muriuki, John Mathias, Leah Wanambwa, Pamela Levira y Nicodemus Nyandiko (PNUD). El marco recibió amplias aportaciones de los Puntos Focales de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) de los Estados Miembros de la UA a lo largo de su desarrollo. A nivel regional, se recibieron valiosas contribuciones del Dr. Ahmed Amdihun (IGAD) y de los participantes en los grupos de discusión regionales (véase la lista completa en el Anexo 4).

El proceso de elaboración del Marco de Recuperación de la UA contó con el apoyo del PNUD, bajo la dirección de la Sra. Cecilia Aipira (PNUD), la Sra. Rita Missal (PNUD) y la Dra. Reshmi Theckethil (PNUD), y fue coordinado por el Dr. Joe Leitmann (jefe de equipo y especialista en recuperación). Las contribuciones a los sectores fueron realizadas por el siguiente equipo de especialistas:

- Dr. Partha Banerjee (Jefe de Sector, Resultados Económicos)
- Dr. Debabani Chakravaty (Resultados económicos)
- Monica Trujillo (Jefe de Sector, Impactos Humanos)
- Joana Sampainho (Analista de Programa PNUD, Impactos Humanos)
- Dr. André Griekspoor (Jefe de Sector, Salud)
- Dr. Ernest Dabire (Salud)
- Dr. Stephen Devereux (Jefe de Sector, Protección Social)
- Dr. Namhla Mniki-Mangaliso (Consultor, Género)
- Dr. Eric Loubaud (PNUD, RRD)
- Sr. Moortaza Jiwaji (Asesor Técnico PNUD, RRD)

Las siguientes personas también contribuyeron al Marco de Recuperación de la UA: Dra. Prachi Acharaya (PNUD), Sr. Samuel Akeru (PNUD), Dra. Roselyn Akombe (PNUD), Dr. Ali Ardalan (OMS), Sr. Adama Bamba (AYAB-DRR), Sra. Diana Mosquera Calle (UNDRR), Dr. Kisan Gunjal (Consultor/FAO), Sra. Renata Jagustovic (PNUD), Sr. Mankan Kone (FAO), Dra. Essy Kinyua (Consultora/UNDRR), Dr. Roberto Lomoriello (PNUD), Essy Kinyua (Consultor/UNDRR), Dr. Sandrine Koissy-Kpein (PNUD), Dr. Roberto Lomoriello (UNDRR), Dr. Neil Marsland (FAO), Dr. Namhla Mniki-Mangaliso (Consultor), Dr. Nicodemus Nyandiko (PNUD), Sr. David Omozuafah (PNUD), Sr. Bryan Tumwa (VNU)

El Marco de Recuperación también se benefició en gran medida de la revisión independiente realizada por el Prof. Dewald van Niekerk, Director del Centro Africano de Estudios sobre Desastres de la Universidad del Noroeste (Sudáfrica) y del Sr. Krishna Vatsa, miembro de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres del Gobierno de la India.

Se recibieron aportaciones adicionales de socios internacionales del Banco Africano de Desarrollo (Zerihun Alemu y Tom Owiyo), del Fondo Monetario Internacional (Jules Leichter) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Raymond Gilpin). Las aportaciones de los principales grupos de interés se realizaron a través de grupos de discusión con el mundo académico y la comunidad investigadora, la sociedad civil y el sector privado; también se celebraron consultas con los economistas nacionales del PNUD (véase la lista completa en el Anexo 4).

Abbreviations

AfCFTA	Zona de Libre Comercio Continental de África
AfDB	Banco Africano de Desarrollo
ASEAN	Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
AUC	Comisión de la Unión Africana
AUDA	Agencia de Desarrollo de la Unión Africana
AWGDRR	Grupo de Trabajo Africano sobre la RRD
BCEAO	Banco Central de los Estados de África Occidental
CAR	República Centroafricana
CCA	Adaptación al cambio climático
CDC (África)	Centro de Control de Enfermedades
CEDEAO	Comunidad Económica de Estados de África Occidental
COMESA	Mercado Común del África Oriental y Meridional
COVID -19	Enfermedad por CoronaVirus 2019
CRNA	Evaluación de las necesidades de recuperación del COVID-19
DARBE	Departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Economía Azul y Desarrollo Sostenible
DEA	Departamento de Asuntos Medioambientales de Sudáfrica
DMMU	Unidad de Gestión y Mitigación de Desastres (Zambia)
DRC	República Democrática del Congo
DRR	Reducción del riesgo de catástrofes
DSSI	Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda
EAC	Comunidad del África Oriental
e-SISTAFE	Sistema Electrónico de Administración Financiera del Estado (Mozambique)
EWS	Sistemas de alerta temprana
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FDI F	oreign Direct Investment (Inversión Extranjera Directa)
FMI	Fondo Monetario Internacional
FTE	Equivalente a tiempo completo
GBV	Violencia de género
GEI	Gases de efecto invernadero
IDWGDRR	Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre RRD
IFIs	Instituciones Financieras Internacionales

IGAD	Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
IHME	Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria
INFF	Marco Financiero Nacional Integrado
INGC	Instituto Nacional de Gestión de Desastres de Mozambique
IT	Tecnología de la información
KOSAP	Kenya Off Grid Solar Access Project (Proyecto de acceso a la energía solar fuera de la red)
LDCs	Least Developed Countries (Países Menos Desarrollados)
LIDC	Países en desarrollo de renta baja
M&E	Seguimiento y evaluación
MDTF	Fondo fiduciario de donantes múltiples
MER	Tipo de cambio de mercado
MHEWS	Sistemas de Alerta Temprana de Riesgos Múltiples Sistemas de información de gestión
MIPYMES	Microempresas, pequeñas y medianas empresas
NDMAs	Agencias Nacionales de Gestión de Desastres
NEET	No en empleo Educación Formación
NEPAD	Nueva Alianza para el Desarrollo de África
NFFS	Estrategias Nacionales de Financiación Forestal
NSPS	Política nacional de protección social (estrategia)
ODA	Ayuda Oficial al Desarrollo
OMM	Organización Meteorológica Mundial
OMS	Organización Mundial de la Salud
PdA	Programa de Acción para la Aplicación del Marco de Sendai
PDI	Personas Desplazadas Internamente
PFM	Sistemas de gestión de la financiación pública
PFNM	Productos forestales no madereros
PIB	Producto Interior Bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPE	Equipo de protección personal
PPP	Asociación Público-Privada
PPP	Paridad de poder adquisitivo
PROFISHBLUE	Programa para mejorar la gobernanza de la pesca y los corredores comerciales de la economía azul
PVVS	Personas que viven con el VIH
REC	Comunidad Económica Regional

RID	Desarrollo Informado por el Riesgo
RMS	Sistema de Seguimiento de Resultados
SACU	Unión Aduanera del África Meridional
SADC	Comunidad para el Desarrollo del África Meridional
SDFP	Política de Financiación del Desarrollo Sostenible
SDGs	Objetivos de Desarrollo Sostenible
SFDRR	Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
Sida	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIDS	Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
SSA	África subsahariana
STEM	Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
TB	Tuberculosis
TFTA	Acuerdo tripartito de libre comercio
TIC	Tecnología de la información y las comunicaciones
TVET	Educación y formación técnica y profesional
UA	Unión Africana
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNDRR	Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
UNECA	Comisión Económica de las Naciones Unidas para África
UNWTO	Organización Mundial del Comercio de las Naciones Unidas
VIH	Virus de la Inmunodeficiencia Humana
WARF-P	Programa Regional de Pesca para África Occidental
WB	Banco Mundial
WEF	Foro Económico Mundial

Resumen ejecutivo

Antecedentes

Visión general. La historia del COVID-19 en África es bastante compleja y todavía se está desarrollando. África, afortunadamente, sobrevivió a una catástrofe total y al colapso de los servicios sanitarios pronosticado durante los primeros días de la pandemia. Sin embargo, mientras los países africanos y el resto del mundo cerraban sus fronteras y aplicaban medidas de bloqueo y distanciamiento social, millones de africanos perdieron sus medios de vida en el sector informal, millones de niños se quedaron sin escolarizar -algunos de los cuales puede que nunca vuelvan a hacerlo (sobre todo las niñas, debido a los matrimonios precoces y los embarazos de adolescentes)-, y la producción agrícola y las cadenas de suministro de alimentos se vieron interrumpidas, lo que provocó inseguridad alimentaria y la contracción de las economías. La pandemia ha ejemplificado la naturaleza sistémica de los riesgos en la actualidad y ha planteado cuestiones sobre la solidez de los sistemas de gobernanza del riesgo en África para la prevención de desastres y el desarrollo con conocimiento de los riesgos.

Con la entrada de la pandemia en su segundo año, la recesión económica se hizo más evidente en todo el continente, donde el Producto Interior Bruto (PIB) africano cayó el 2,1% en 2020. Sin embargo, el PIB real creció un 3,4% en 2021, si bien la pandemia condujo a 30 millones de africanos a la pobreza extrema, habiéndose perdido unos 22 millones de puestos de trabajo en el mismo año. Las estrictas restricciones del COVID-19 y los consiguientes impactos económicos provocaron conflictos civiles en algunos países africanos. La continua mutación del virus significa que, si bien África se ha librado de graves impactos sanitarios hasta ahora, el continente podría seguir estando a su merced. África está luchando por ampliar el despliegue de la vacuna, ya que sólo el 15% de la población está totalmente vacunada (en marzo de 2022). La tasa de vacunación debe multiplicarse por seis si el continente quiere cumplir el objetivo del 70% fijado para mediados de 2022.

Se prevé que las repercusiones del COVID-19 que se están sintiendo hoy en día dejarán cicatrices duraderas. Y para los millones de niñas que abandonaron la escuela en todo el continente, los impactos de la pandemia pueden haber sellado ya su futuro. Las consecuencias de la pandemia, combinadas con la pobreza, el limitado margen de maniobra fiscal, el elevado endeudamiento, el cambio climático, los conflictos y otras limitaciones, probablemente socavarán la capacidad del continente de alcanzar las aspiraciones de la Agenda 2063 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Incluso podría hacer retroceder los avances socioeconómicos que tanto costó conseguir a África antes del COVID-19.

La pandemia está poniendo a prueba la resistencia social, económica y política del continente. Si bien el continente sigue siendo el más vulnerable y continúa acosado por muchas limitaciones socioeconómicas, políticas y medioambientales, no se puede subestimar la capacidad y la resistencia de las sociedades africanas. Incluso en un espacio fiscal restringido, muchos países africanos tales como Argelia y Etiopía, por nombrar algunos, pusieron en marcha sistemas de protección social para mitigar el sufrimiento de los más desfavorecidos del continente. La pandemia también ha acelerado la prestación y adopción de servicios digitales, que se convirtieron en fundamentales durante los confinamientos, y cuyos beneficios se espera que continúen más allá de la pandemia.

A medida que avanzamos en medio de la incertidumbre, los líderes africanos se enfrentan al triple desafío de (1) comprender el impacto socioeconómico de un objetivo en movimiento, (2) recuperarse del COVID-19 mientras se abordan las vulnerabilidades, y (3) hacerlo con recursos cada vez más reducidos. La ingente tarea también supone una oportunidad para que África reconstruya mejor sus economías y sociedades. Los bloqueos y los límites al turismo médico pueden suponer un incentivo para que muchos gobiernos africanos emprendan reformas en el sector sanitario. Las inversiones en energía limpia, tecnología digital, productividad agrícola e igualdad de género podrían apuntalar una recuperación resistente, crear empleo, reducir la desigualdad de género y acelerar la consecución general de algunos de los ODS y las aspiraciones de la Agenda 2063.

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto lo susceptibles que son las sociedades africanas a los riesgos sistémicos y que un “efecto dominó” en los sistemas infraestructurales, sociales, medioambientales, políticos y económicos de cada sociedad puede alterar o desbaratar por completo su configuración original. En la misma línea, las estrategias de recuperación del impacto devastador de la pandemia en África deben ser multidimensionales y centrarse en los múltiples riesgos a los que se enfrentan las sociedades y crear la capacidad para que la sociedad se prepare para las perturbaciones, las afronte y se recupere de ellas si se producen, adaptándose a las nuevas condiciones. Esto requiere un marco de recuperación que no se centre en políticas aisladas (como las políticas sanitarias o económicas únicamente), sino como un todo integrado.

Dada la imprevisibilidad del virus y la incertidumbre sobre cómo responderá y se adaptará África a la evolución de la pandemia, la Comisión de la Unión Africana ha tomado la iniciativa de elaborar un Marco de Recuperación para orientar a sus Estados miembros, socios internacionales y otras partes interesadas a la hora de planificar, priorizar y aplicar una recuperación resiliente. Reconoce las grandes diversidades dentro del continente y la necesidad de conocer a fondo los diversos contextos de África, al tiempo que es consciente de que el COVID-19 sigue siendo un reto común.

MENSAJE CLAVE Nº 1: Aunque el COVID-19 es un reto sin precedentes para los países y regiones de África, también es una oportunidad para mejorar la gestión de los riesgos y volver a la senda del crecimiento social y económico sostenible.

Evaluación de la situación

Para elaborar el Marco de Recuperación, la Evaluación de la Situación examinó las diversas dimensiones de los efectos e impactos que el COVID-19 ha tenido en los países africanos. El documento completo está disponible [aquí](#) e incluye: las metas, los objetivos y la metodología de la Evaluación; las consecuencias para la salud; los impactos macroeconómicos; los impactos humanos; los resultados económicos y las respuestas iniciales; y los efectos transversales que incluyen la protección social, la gobernanza y el estado de derecho, el género, la reducción del riesgo de catástrofes, la migración y los impactos ambientales y psicosociales. Los datos regionales y de otro tipo se presentan en un volumen separado de anexos que puede encontrarse [aquí](#). La Evaluación de la Situación proporcionó la base para las estrategias y recomendaciones propuestas por el Marco de Recuperación.

Impactos generales del COVID-19 en África. Aunque muchos países del mundo han sufrido varias oleadas del brote, África no ha experimentado tanta devastación como otros continentes en términos de mortalidad y número de casos¹. Por ejemplo, África Occidental, con una población de 367 millones de personas, había confirmado 412.178 casos de COVID-19 con 5.363 muertes a mediados de marzo de 2021; en cambio, Estados Unidos había registrado casi 30 millones de casos y 530.000 muertes en la misma fecha, a pesar de tener una población ligeramente menor (328 millones). Sin embargo, el continente ha sufrido impactos socioeconómicos desproporcionados con consecuencias de largo alcance que durarán muchos años. La dependencia de muchas economías africanas de los recursos naturales y la prevalencia de elevadas tasas de pobreza, acompañadas de una escasa capacidad de reacción, han provocado que el COVID-19 haya tenido un efecto devastador en importantes sectores socioeconómicos, y es probable que socave gravemente la capacidad del continente para alcanzar las aspiraciones de la Agenda 2063 y los ODS. Las siguientes secciones ofrecen más detalles sobre algunos de los principales efectos del COVID-19 en África.

¹Teniendo en cuenta las limitaciones y los retos de la recopilación y gestión de datos en muchos estados africanos y la alta probabilidad de que no se notifiquen todos los casos de COVID-19.

MENSAJE CLAVE N° 2: Las repercusiones sanitarias, macroeconómicas, humanas, económicas y transversales de la pandemia han aumentado la pobreza, han disminuido el desarrollo económico y han socavado los esfuerzos para alcanzar la Agenda 2063 y los ODS.

Efectos e impactos en la salud: La población africana se ha librado en gran medida de los estragos del COVID-19, sin embargo, la combinación de las bajas tasas de vacunación, que se sitúan en un 15% a marzo de 2022, y la naturaleza impredecible del virus aún podría dar un giro a las tasas de infección y mortalidad. El efecto crítico de la pandemia ha sido la interrupción de la prestación de servicios sanitarios esenciales, como los servicios de prevención y tratamiento del VIH/sida, la tuberculosis y la malaria, y los servicios esenciales de salud materno-infantil, incluida la inmunización. Esto se debe a que los recursos se han destinado a aplicar medidas de prevención del COVID-19, así como al miedo a contraer la enfermedad en los centros de salud. Por ejemplo, el COVID-19 dejó a 62,1 millones de niños sin acceso a los servicios de inmunización en África y en riesgo de contraer enfermedades mortales y prevenibles como la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la poliomielitis y la malaria.

Impactos macroeconómicos: En África, el COVID-19 ha demostrado ser un desastre económico, más que sanitario, devastador. El PIB general de África disminuyó un 2,1% en 2020 con respecto al año anterior, mientras que la inflación aumentó hasta el 10,4% anual en el mismo año. Las exportaciones cayeron un 18 por ciento y las importaciones un 23 por ciento en 2020. Además, las remesas disminuyeron un 12,5 por ciento en 2020, pero superaron la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la Inversión Extranjera Directa (IED). Las consecuencias de estos descensos provocaron que un tercio de los individuos africanos en edad de trabajar dejara de hacerlo, especialmente las mujeres y los jóvenes. En 2021, sin embargo, el PIB real creció un 3,4%, pero la pandemia siguió empujando hacia la pobreza extrema a más a 30 millones de africanos y se perdieron unos 22 millones de empleos en el mismo año.

Impacto humano: El análisis general indica que casi todos los indicadores de impacto humano (pobreza, seguridad alimentaria, malnutrición, educación, inclusión social e igualdad de género) retrocedieron a causa del COVID-19. La pandemia puede incluso hacer que se reconsidere el enfoque del desarrollo humano, que asume que tal desarrollo es un proceso lineal. Se estima que en 2020, 23 millones de africanos cayeron en la pobreza extrema como consecuencia de la crisis asociada al COVID-19, alcanzando un total de 467 millones en la región, frente a los 439 millones de 2019. A finales de 2021, las cifras pueden aumentar a 29 millones, con lo que el total será de 478 millones (Daniel, Gerszon, Mahler et al., 2021).

En relación con los **ODS y la Agenda 2063** de África, el continente ya se enfrentaba en 2019 a importantes retos para la consecución de estas agendas. Dadas las inmensas consecuencias de la crisis, los obstáculos serán mucho mayores de cara al futuro. Se estima que, sin un sólido impulso de los ODS, el ODS-1 (Erradicación de la pobreza) y el ODS-2 (Cero hambre) no se cumplirán en África. Otros ODS también requerirán una atención significativa, a saber, el ODS-3 (Salud), el ODS-4 (Educación), el ODS-5 (Igualdad de género) y el ODS-8 (Trabajo decente). Al mismo tiempo, se han producido algunos resultados positivos de la crisis que no se esperaban, como el ODS-7 sobre energía asequible y limpia, el ODS-12 sobre consumo responsable y el ODS-15 sobre la vida en la tierra, debido a la reducción de la presión sobre el medio ambiente. Del mismo modo, también es necesario prestar una atención significativa a impulsar la consecución de la aspiración 1 de la Agenda 2063 (un África próspera basada en el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible), la aspiración 4 (un África pacífica y segura) y la aspiración 6 (un África cuyo desarrollo esté impulsado por las personas, basándose en el potencial de los africanos, especialmente de sus mujeres y jóvenes, y cuidando de los niños).

Economic Outcomes: La interrupción inducida por la pandemia en las cadenas de valor mundiales ejerció una presión a la baja sobre la tasa de crecimiento de África, empujando a la región a su primera recesión en 25 años. La relación entre el total de las exportaciones y el total de las importaciones está disminuyendo en el caso de África: en 2018 fue de 0,81, en 2019 bajó a 0,77 y en 2020, en tiempos del COVID-19, se redujo drásticamente a 0,70. El COVID-19 ha tenido un impacto severo en todos los sectores críticos que contribuyen al crecimiento económico de África, incluyendo, la agricultura, la minería, el turismo y otras industrias no esenciales, con la excepción de las telecomunicaciones. En el importante sector de la agricultura hubo impactos negativos en el procesamiento de alimentos, el empleo en el sector agrícola y alimentario y la comercialización de productos agrícolas y alimentarios, los precios de los alimentos, los ingresos agrícolas y los productos agrícolas importados. Además, los trabajadores de la economía informal (cerca del 85% del empleo total de África y con mayoría de mujeres) son los más afectados por la pandemia, por ejemplo, los recicladores de residuos, los vendedores ambulantes, los trabajadores migrantes, los trabajadores del transporte, los trabajadores de la construcción, los trabajadores domésticos y los pequeños comerciantes. Como resultado, se estima que el empleo total en África ha caído de 456,8 millones a 452,8 millones entre 2019 y 2020.

Impacto en aspectos transversales: El COVID-19 no ha dejado de lado ningún ámbito, ya sea social, medioambiental, de gobernanza, económico, etc. Los planes y sistemas de **protección social** se ampliaron y profundizaron en respuesta al COVID-19 en casi todos los países. Las transferencias de efectivo fueron el instrumento más común, ya que 36 países (67%) crearon nuevos programas relacionados con el COVID, y 18 (33%) ampliaron los programas existentes verticalmente (más prestaciones) y/u horizontalmente (más beneficiarios). En general, la respuesta a la pandemia tuvo efectos negativos en la **gobernanza** y el Estado de derecho. Algunos países experimentaron la militarización de la respuesta al COVID-19 con la policía y las fuerzas armadas aplicando políticas de bloqueo y, en algunos casos, dieron lugar a violaciones de los derechos humanos. La crisis exacerbó las desigualdades de **género** ya existentes, poniendo de manifiesto un importante impacto diferenciado por género en la participación económica y el empleo de las mujeres, así como un aumento del trabajo de cuidados no remunerado. La exposición a la violencia de género (VG), los riesgos para la salud física y mental y la educación aparecen también de manera evidente en los datos recientes. La brecha de género en el África Subsahariana (ASS) se redujo del 66,6% en 2020 al 66,1% en 2021, lo que refleja el retroceso de los logros alcanzados hasta la fecha en materia de igualdad de género. A este ritmo, se necesitarán casi 122 años para cerrar la brecha.

La pandemia ejerció presión sobre los ya débiles sistemas de **reducción del riesgo de desastres** (RRD), desvió recursos de otras crisis y contribuyó a que se produjeran desastres en cascada. Se dejaron de lado los mecanismos de coordinación, los compromisos financieros y los marcos legales existentes para la RRD de muchos países y se desarrollaron nuevos mecanismos. El COVID-19 redujo la **emigración** debido al cierre de las fronteras nacionales e internacionales y tuvo un impacto negativo en los **flujos de remesas**. La pandemia tuvo impactos ambientales tanto positivos como negativos a raíz de la mejora de la calidad del aire y del agua potable, así como de la mala gestión de los residuos y la pérdida de biodiversidad, respectivamente. La pandemia también perjudicó el bienestar **psicosocial** de la población africana, con repercusiones que aún podrían tardar años en comprenderse.

Impactos regionales. En la medida de lo posible, la Evaluación de la Situación también tuvo en cuenta las repercusiones regionales de la pandemia. Las principales conclusiones por región son las siguientes:

- **África Central** - El COVID-19 afectó especialmente a los refugiados de África Central. La región respondió con su propio conjunto de medidas de recuperación inicial. Las respuestas de protección social en esta región estuvieron dominadas por la ayuda alimentaria y los subsidios a los servicios públicos.

- **África Oriental** - Los impactos del COVID-19 se mezclaron con múltiples catástrofes, como la peor invasión de langostas del desierto en 70 años, inundaciones y escalada de conflictos. El COVID-19 también provocó el declive económico de las industrias del turismo y la flor cortada/horticultura, especialmente en Kenia, Ruanda, Uganda y Tanzania. Las respuestas de protección social incluyeron planes de transferencia de efectivo nuevos o ampliados y medidas para proteger la seguridad alimentaria, que siempre es una preocupación en el Cuerno de África.
- **Norte de África** - Esta región se caracterizó por resultados económicos mixtos y un crecimiento positivo de las remesas de dinero. En la mitad de los países de la región se aplicó una gama completa de medidas de recuperación inicial, siendo las transferencias de efectivo el instrumento de protección social más común. Marruecos introdujo el mayor programa de transferencias monetarias relacionadas con el COVID-19 de África, llegando al 79% de la población.
- **África meridional** - El COVID-19 se cobró el mayor número de casos y muertes en esta región, que también fue la más afectada económicamente -la mayor parte de los casos y la recesión económica pueden atribuirse a Sudáfrica. Los gobiernos aplicaron una amplia gama de medidas de recuperación, siendo las transferencias de efectivo, ya bien desarrolladas en la mayoría de estos países, y los planes de apoyo salarial los principales vehículos de protección social.
- **África Occidental** - COVID-19 Los impactos fueron particularmente pronunciados en lo que respecta a las remesas de dinero, los desplazamientos internos y la migración. Las medidas de recuperación inicial variaron, pero se prefirieron las transferencias de efectivo en todos los países menos en uno. La digitalización de los pagos de protección social se aceleró en muchos países de África Occidental, con el apoyo de los Bancos Centrales de los Estados de África Occidental.

Impacto basado en la tipología de países. Entre ellos se encuentran: **exportadores de materias primas** (exportadores de productos agrícolas - Gambia, Malawi, Costa de Marfil, Etiopía, entre otros; exportadores de minerales y metales - Liberia, Níger, República Democrática del Congo (RDC), Botsuana, Burundi, entre otros; exportadores de combustible (Camerún, Libia, Guinea Ecuatorial, Gabón, Nigeria, entre otros) sufrirán pérdidas de ingresos en 2020, así como una elevada inflación; los **países africanos dependientes del turismo** (Argelia, Egipto, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Botsuana, Marruecos, Ghana) experimentaron una caída del 74% en las llegadas de turistas internacionales en 2020; estados frágiles y afectados por el conflicto en los que el COVID-19 contribuyó a la interrupción del comercio y a la inseguridad alimentaria (Sahel y Cuerno de África) sin apenas medidas de recuperación inicial; **países que se enfrentan a la inseguridad alimentaria**, especialmente la República Centroafricana, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, Sudán y Zimbabue; y países que se enfrentan a múltiples riesgos y que tuvieron que hacer frente a la pandemia, así como a calamidades concurrentes y en cascada, especialmente en el Cuerno de África.

MENSAJE CLAVE N° 3: El impacto del COVID-19 ha variado en función de grupos de población, regiones y otras agrupaciones de países; estas diferencias deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar estrategias de recuperación a nivel nacional y regional.

Tareas de recuperación inicial. En respuesta a la pandemia, los Estados miembros de la UA introdujeron una serie de medidas para poner en marcha la recuperación social y económica. Los trabajos iniciales se centraron en el fortalecimiento de las capacidades del sector sanitario para responder a la crisis mediante la ampliación de los sistemas de salud con la adquisición de suministros y equipos críticos. Casi todos los 55 Estados miembros de la UA asignaron recursos a la mejora de los sistemas sanitarios. Esto fue seguido de medidas políticas y programáticas para apoyar a los más vulnerables con transferencias de efectivo y asistencia alimentaria para ayudar a los hogares de bajos ingresos a hacer frente a la emergencia. Más de 30 países aumentaron las transferencias de efectivo y 17 proporcionaron asistencia alimentaria y, además, algunos países subvencionaron o aplazaron los pagos de electricidad y agua. Los gobiernos proporcionaron apoyo crediticio a las MIPYMES y a las empresas informales, redujeron los impuestos, aplazaron los pagos de los préstamos

y prestaron apoyo específico a los sectores más afectados (agricultura, turismo, transporte y minería) para sostener sus economías. Sudáfrica y Mauricio fueron algunos de los gobiernos africanos que movilizaron al sector privado y bancario, incluyendo la creación del Fondo de Solidaridad para ayudar a los más vulnerables en Sudáfrica.

La respuesta de los distintos gobiernos varió en función de las circunstancias específicas de cada país, incluyendo el impacto de la pandemia y otras perturbaciones. Según los datos resumidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las principales medidas fiscales que los gobiernos anunciaron para la pandemia hasta septiembre de 2021, nueve Estados miembros de la UA invirtieron entre el 5 y el 7% de su PIB en la recuperación de la pandemia y sólo dos Estados miembros -Mauricio y Ruanda- invirtieron el 9,2 y el 10,1% de su PIB en medidas de recuperación social y económica, respectivamente. La mayoría de los países (34) invirtieron entre el 1 y el 4% de su PIB y seis países destinaron entre el 0 y el 1% de su PIB a hacer frente a la pandemia.

Estas medidas monetarias discrecionales se complementaron con otras medidas políticas más amplias que incluían restricciones a la exportación de bienes escasos, exenciones del IVA sobre los bienes esenciales, reducción de los derechos de importación, controles de precios y ampliación de la conectividad a Internet, al tiempo que se ampliaban las modalidades de pago digital que facilitan la actividad económica y la prestación de servicios.

Estrategias de recuperación

Las medidas de recuperación se diseñan para alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:

- 1) Proteger la salud y el bienestar económico mediante la aceleración de los programas de vacunación y el apoyo a las reformas en el sector sanitario;
- 2) Abordar los retos macroeconómicos que se han visto exacerbados por la pandemia, mediante respuestas monetarias y fiscales, la resolución de los problemas de liquidez y deuda y la ampliación de la financiación internacional para el desarrollo en África;
- 3) Salvaguardar el desarrollo humano mediante la protección contra la pobreza, la prevención de la inseguridad alimentaria y el hambre, la reversión de privaciones en materia de salud y educación, sin dejar a nadie atrás, y la adopción de un enfoque SDG Push para garantizar la consecución de los ODS para 2030 y la Agenda 2063;
- 4) Estimular la recuperación económica facilitando el comercio, abordando el desempleo juvenil y acelerando la digitalización de la economía; y
- 5) Abordar cuestiones transversales para garantizar una recuperación inclusiva y resiliente, incluyendo la protección social, el género, la reducción del riesgo de desastres y la ecologización de la recuperación.

Las prioridades continentales y regionales se resumen en la Tabla 2, con todos los detalles disponibles en el Capítulo 3, donde se presentan las medidas de recuperación económica para agrupaciones de países. Las recomendaciones propuestas también se hacen según tres posibles escenarios (casos bajos, medios y altos).

²Argelia, Benín, Cabo Verde, Camerún, RCA, Chad, Costa de Marfil, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Togo, Túnez, Uganda, Zimbabue

³Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Yibuti, Egipto, Eswatini, Etiopía, Gambia, Lesoto, Madagascar, Malí, Níger, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Togo, Zimbabue

⁴Benín, Botsuana, Burkina Faso, Chad, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Gabón, Guinea, Malí, Níger, Senegal, Seychelles, Togo

⁵Base de datos de políticas fiscales (imf.org)

TABLA 2: Recomendaciones continentales y regionales por objetivo estratégico y plazo

Objetivo estratégico	Corto plazo	Medio a largo plazo
Proteger la salud	<ul style="list-style-type: none"> - Acelerar el programa de vacunación - Ampliación de servicios sanitarios esenciales - Abordar los problemas de suministro y las desigualdades de distribución - Mejorar el acceso a los servicios de tuberculosis, VIH-SIDA e inmunización 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el acceso a los servicios sanitarios - Reforzar los sistemas de información sanitaria - Invertir en personal para ampliar la prestación de servicios - Construir infraestructuras sanitarias - Promover la producción local de medicamentos, vacunas y equipos - Promover y desarrollar la tecnología y la infraestructura sanitaria digital
Abordar retos macroeconómicos	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener las respuestas monetarias y fiscales para la recuperación - Mantener y ampliar las transferencias de efectivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Abordar los problemas de liquidez y sostenibilidad de la deuda mediante iniciativas de deuda internacionales
Salvaguardar el desarrollo humano	<ul style="list-style-type: none"> - Proteger contra la pobreza mediante la ampliación de las medidas de protección social - Impedir la inseguridad alimentaria mediante la ayuda alimentaria y los insumos para aumentar la producción local de alimentos - Educación mediante el lanzamiento de planes de reapertura de escuelas - ODS/Agenda 2063: priorizar las seis transformaciones de los ODS e impulsar la consecución de las aspiraciones 1, 4 y 6 	<ul style="list-style-type: none"> - Proteger contra la pobreza: diseñar políticas y estrategias para evitar el aumento de la pobreza extrema - Impedir la inseguridad alimentaria: invertir en medios de vida resistentes y en la autosuficiencia alimentaria - Educación: ampliar la alfabetización digital y las oportunidades de EFTP - ODS: adoptar el programa SDG Push - Inversión en las siete aspiraciones de la Agenda 2063.
Estimular la recuperación económica (a medio y largo plazo)	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer un mecanismo de financiación para África - Facilitar el comercio - Abordar el desempleo juvenil - Apoyar la recuperación y los medios de subsistencia mediante la restauración ecológica - Apoyar los programas de crecimiento de las MIPYMES - Acelerar la digitalización de la economía - Aprovechar el potencial de la economía azul - Promover las cadenas de valor de la horticultura - Abordar los déficits de energía en las zonas y comunidades desatendidas 	

<p>Abordar temas transversales</p>	<p>Protección social: ampliar la cobertura, aumentar las prestaciones y mejorar la capacidad de respuesta a las crisis</p> <p>Gobernanza: La aplicación del gobierno electrónico en la prestación de servicios sigue siendo fundamental</p> <p>Género: implicar a las mujeres en los procesos de recuperación y abordar la violencia de género</p> <p>RRD: reforzar los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples y las capacidades de reducción del riesgo de catástrofes</p> <p>Ecología: aumento de la financiación del clima y apoyo a las energías renovables</p>	<p>Protección social: reforzar los sistemas nacionales de protección social</p> <p>Gobernanza: reforzar las funciones básicas de gobernanza nacional y local para la gestión de crisis y la prestación de servicios</p> <p>Género: invertir en el empoderamiento económico de las mujeres y ampliar los beneficios socioeconómicos a las mujeres rurales</p> <p>RRD: políticas, programas y financiación para el desarrollo con conocimiento de los riesgos y la innovación tecnológica</p> <p>Ecología: buscar soluciones basadas en la naturaleza, la agricultura resistente y la resiliencia urbana</p>
------------------------------------	---	---

El peor de los casos. Este escenario supone un aumento global de las muertes por COVID-19 en África de casi un millón con respecto al escenario de referencia (medio), pérdidas del PIB en 2021 del ocho por ciento y una reducción del PIB de alrededor del 13 por ciento en los países de menores ingresos para 2030. El resultado del peor escenario es que 207 millones de personas más se verían abocadas a la pobreza en todo el mundo en 2030, 37 millones de personas más estarían malnutridas y habría un descenso del 2% en el número de niños que terminan la enseñanza secundaria en 2030. Los elementos de una estrategia de recuperación para hacer frente a esta grave situación podrían incluir un programa de vacunación rápidamente acelerado, el fortalecimiento de la gobernanza y las reformas institucionales ante el riesgo de desastres múltiples, el aumento de las respuestas monetarias y fiscales, la expansión de las redes de seguridad social, el alivio internacional para la sostenibilidad de la deuda y la asistencia internacional para el impulso de los ODS. En el capítulo 3 se puede encontrar un conjunto más amplio de recomendaciones políticas y programáticas a corto, medio y largo plazo.

Escenario medio. Este es el escenario de referencia que utiliza las proyecciones de mortalidad del Institute for Health Metrics and Evaluation y el supuesto del FMI de que el 80 por ciento de las pérdidas de crecimiento del PIB en 2020-21 son temporales, mientras que el 20 por ciento son pérdidas de ganancias de productividad que normalmente se habrían alcanzado en esos años. Los resultados previstos en este escenario son que la pérdida del PIB en 2030 será de aproximadamente un cuatro por ciento, que 44 millones de personas más seguirán viviendo en la pobreza en 2030 a causa de la pandemia, que casi ocho millones de personas más estarán malnutridas en 2030 que si no hubiera COVID-19, y que la tasa de graduación en la enseñanza secundaria superior será un uno por ciento inferior a la prevista en 2030. Una estrategia de recuperación en este escenario incluiría la aplicación de toda una serie de reformas sanitarias, el mantenimiento de los programas de vacunación y protección social, la inversión en el retorno a la educación de calidad y el impulso de los ODS y la aplicación de políticas para no dejar a nadie atrás (en el capítulo 3 se ofrece una matriz de opciones).

El mejor de los casos. El escenario más favorable supone que los países emprenden esfuerzos centrados y acelerados para alcanzar los ODS y la Agenda 2063 invirtiendo en gobernanza, protección social, economía verde y disrupción e innovación digital. Los resultados previstos en este escenario son una caída del número de personas que viven en la pobreza extrema de 146 millones en 2030 con respecto a las tendencias actuales del COVID-19, la salida de 144 millones de personas de la

malnutrición en 2030 y un aumento de la tasa de finalización de la enseñanza secundaria del 66 al 70% en 2030. Los elementos de una estrategia de recuperación para el mejor de los casos podrían incluir la reducción de las respuestas monetarias y fiscales, la ecologización de la recuperación, la inversión en un programa de resiliencia agroalimentaria y la vuelta a la educación de calidad, el fomento de la integración y la colaboración regionales, y el apoyo a la digitalización, la industrialización y la diversificación (véase el capítulo 3 para el conjunto de recomendaciones).

MENSAJE CLAVE N° 4: Las políticas y los programas de recuperación pueden ser diferentes a corto y a medio y largo plazo, y deben adaptarse para responder a si los países africanos se encuentran en el peor, mediano o mejor de los casos.

Disposiciones institucionales

La forma en que se establezcan las instituciones para responder, recuperar y reconstruir tras el COVID-19 desempeñará un papel fundamental en cuanto a si la recuperación y la reconstrucción avanzan sin problemas o fracasan. Es necesario identificar o establecer instituciones con responsabilidades en la recuperación (donde haya lagunas) para agilizar o acelerar los procesos de recuperación. Hay que dotarlas de los recursos adecuados para que tengan la capacidad de gestionar y ejecutar lo que podría ser un trabajo de recuperación difícil y largo. Esto implica aclarar las funciones y responsabilidades de los distintos organismos, así como las de los socios del gobierno. Es necesario aclarar lo que hará cada institución para reducir la duplicación (y los costes asociados) e integrar las actividades en la recuperación. La confirmación de los acuerdos institucionales y la aclaración de las funciones y responsabilidades son fundamentales tanto a nivel nacional como local y comunitario. La ejecución del programa debe gestionarse con mecanismos claros de coordinación entre los sectores público y privado, las comunidades y los mercados. En el capítulo 4 se describen las buenas prácticas y los principales resultados asociados al desarrollo de acuerdos institucionales para supervisar, gestionar y coordinar la recuperación a nivel continental, regional y nacional.

Mecanismos financieros

En la recuperación pos pandémica, los responsables políticos se enfrentan a cinco grandes retos de financiación:

1. Cuantificar rápidamente los costes económicos de la pandemia;
2. Elaborar presupuestos de recuperación;
3. Identificar las fuentes de financiación, así como los déficits de financiación;
4. Coordinar y asignar los recursos financieros;
5. Establecer los mecanismos de gestión y seguimiento de los fondos.

Las buenas prácticas financieras para la recuperación comparten las características comunes de un desembolso rápido, la coordinación de los recursos y la flexibilidad de las fuentes de financiación. También es importante que los gobiernos se preparen antes de que se produzca la siguiente crisis sanitaria u otra catástrofe, ya que puede ser complejo establecer estas prácticas financieras. Hay que diseñarlas cuidadosamente. Es necesario contar con un sistema de desembolso rápido adaptado a las necesidades de recuperación tras una catástrofe que haya sido probado antes de que ésta ocurra para evitar los riesgos de corrupción y fraude asociados al desembolso rápido. Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) han prometido casi 80.000 millones de dólares para la recuperación de la pandemia en África. En el capítulo 5 se ofrecen más detalles y buenas prácticas para permitir los acuerdos de financiación necesarios para apoyar la recuperación social y económica del COVID-19.

Consideraciones sobre la implementación

Las políticas y programas de recuperación deben aplicarse con rapidez y eficacia de manera que mejoren visiblemente la vida de las poblaciones afectadas. En el capítulo 6 se expone cómo puede conseguirse, con ejemplos de buenas prácticas, mediante:

- Establecer sistemas de seguimiento y evaluación para controlar el progreso de la implementación y la financiación;
- Establecer mecanismos de retroalimentación y gestión de quejas;
- Crear procedimientos y normas de ejecución;
- Apoyar la implementación local;
- Desarrollar sistemas de adquisición adaptados a las necesidades de recuperación;
- Poner en marcha una estrategia de comunicación; y
- Promover la transparencia para la rendición de cuentas.

MENSAJE CLAVE N° 5: Las estrategias de recuperación deben formar parte de un marco más amplio que incluya disposiciones institucionales para gestionar la recuperación, mecanismos de financiación de la misma y consideraciones de ejecución para acelerar el proceso de recuperación.

Siguientes pasos

El Marco de Recuperación ofrece orientación a los países y regiones de África para que preparen o revisen sus propios enfoques para la recuperación del COVID-19. Con tal fin, se pueden adoptar las siguientes medidas:

1. Difundir ampliamente el Marco de Recuperación a nivel nacional y regional como recurso y guía para la planificación;
2. Establecer el Comité Directivo de Ejecución del Programa del Marco de Recuperación del COVID-19
3. Llevar a cabo evaluaciones de las necesidades de recuperación del COVID-19 (CRNA) para identificar los impactos de la pandemia específicos de cada país o región y las correspondientes necesidades de recuperación socioeconómica;
4. Basarse en los resultados de las CRNA para iniciar procesos de planificación participativa para desarrollar marcos de recuperación específicos para cada país o región;
5. Garantizar la existencia de acuerdos institucionales, mecanismos de financiación y enfoques para llevar a cabo una aplicación acelerada; y
6. Iniciar la aplicación de los marcos.

La Unión Africana y sus socios están dispuestos a ayudar a los países individuales y a las Comunidades Económicas Regionales proporcionando asistencia técnica para el desarrollo de la Evaluación de las Necesidades de Recuperación y/o los marcos de recuperación. Se puede prestar un apoyo similar para ayudar a identificar fuentes de financiación externa para la aplicación del marco.

I. Introducción

Este capítulo introductorio proporciona información de fondo, evalúa por qué el COVID-19 es un desafío sin precedentes para África y explica la utilidad de un marco de recuperación para responder al desafío. Posteriormente, expone la meta, los objetivos, la metodología y el uso de un marco de recuperación en este contexto.

Antecedentes

Antes de la pandemia, África había experimentado un crecimiento social y económico sin precedentes, con potencial para mejorar la salud, la vida, la seguridad y el bienestar de millones de personas en todo el continente. En las dos últimas décadas se ha producido un crecimiento sostenido del PIB, y 27 países han pasado a tener ingresos medios y altos entre 2000 y 2018. Entre 2019 y 2023, seis de las 15 economías de más rápido crecimiento estaban en África. El aumento de los ingresos de los hogares y el dinamismo de la población joven contribuyen a la creciente y vibrante clase media africana. La entrada en vigor de la Zona de Libre Comercio Continental de África (AfCFTA) posicionará al continente como un importante centro de producción y un bloque comercial mundial. Se espera que impulse el comercio dentro de África hasta en un 25% para 2040 y desencadene un gasto estimado de 6,7 billones de dólares en consumo y negocios (UNCTAD 2019). Además, se espera que la población de África se duplique para 2050. Su población activa, que se espera que aumente en 20 millones cada año hasta 2030, podría proporcionar el capital humano necesario para el crecimiento en sectores subdesarrollados como la agricultura, la industria manufacturera y los servicios (Suzuki, 2019). Sin embargo, para que África aproveche todo su potencial, debe abordar de forma holística la serie de convulsiones que impactan en el continente de forma simultánea y que han revertido persistentemente los objetivos de desarrollo en muchos países. El impacto sin precedentes del COVID-19 ha supuesto un cambio de las reglas del juego en la gestión de riesgos y es una llamada de atención urgente para reforzar las capacidades de gestión de riesgos en todo el continente.

Por qué el COVID-19 es una catástrofe sin precedentes y un reto para África

El COVID-19 ha planteado a África y al mundo entero retos sin precedentes en cuanto a la preparación, la respuesta y la recuperación tras la pandemia. Entre estos retos se encuentran: a) la necesidad de disponer de datos en tiempo real y desglosados que puedan utilizarse para tomar decisiones acertadas y garantizar que nadie se quede atrás; b) comunicar información precisa y utilizable a audiencias clave; c) dominar la cadena de suministro globalizada; d) hacer frente a una amenaza que abarca a grupos socioeconómicos, sectores y jurisdicciones; e) proteger a los grupos y sectores económicos más vulnerables al virus; y f) garantizar que la recuperación fomente la resiliencia ante futuros riesgos. El argumento general es que: hay que generar información fiable para la toma de decisiones y comunicarla a las partes interesadas (a y b); la respuesta debe garantizar la disponibilidad de suministros críticos, la buena coordinación de los actores y sus recursos y la atención a las necesidades de los vulnerables (c, d y e); y la recuperación debe ser resiliente (f). A diferencia de otras catástrofes, la crisis del COVID-19 ha sido prolongada y sigue evolucionando y sus variaciones añaden nuevos giros a la situación. Además de los efectos nocivos para la salud, las medidas de respuesta han tenido un enorme impacto (véase la Evaluación de la Situación en el capítulo 2).

⁶Se trata de Etiopía, Ruanda, Costa de Marfil, Tanzania, Senegal y Ghana. Ver las Perspectivas Económicas Regionales 2019 del FMI. Se trata de Etiopía, Ruanda, Costa de Marfil, Tanzania, Senegal y Ghana. Consulte las Perspectivas Económicas Regionales 2019 del FMI.

Datos oportunos. La propagación, el impacto y el tratamiento del coronavirus son novedosos, por lo que la recopilación y gestión de datos mediante tecnologías digitales son fundamentales para la elaboración de políticas informadas. Deloitte (2020) ha llegado a la conclusión de que el uso de datos, análisis y tecnologías emergentes ha permitido a los gobiernos tomar decisiones políticas informadas, como la prohibición de viajar, el cierre de escuelas, las medidas de cuarentena y el distanciamiento social para reducir la propagación del virus. Entre las lecciones sobre el uso de datos en torno a COVID-19 se encuentran las siguientes (a) los datos en tiempo real han permitido a los responsables políticos responder con agilidad, utilizar modelos predictivos e identificar patrones emergentes; (b) se necesitan marcos sólidos de gestión de datos que incorporen la propiedad de los mismos, así como aspectos relacionados con la privacidad, la seguridad y la transparencia; (c) el intercambio de datos (reduciendo las barreras, creando plataformas de intercambio de datos y facilitando la participación de los ciudadanos) ha acelerado la colaboración intersectorial y transfronteriza al tiempo que ha fomentado la innovación; y (d) la toma de decisiones es tan buena como la calidad de los datos en los que se basa, por lo que es necesario corregir los sesgos, informar de las incoherencias y garantizar la exhaustividad.

Comunicaciones. El público y las empresas necesitan información precisa y accesible para poder colaborar eficazmente en el control y la recuperación tras la pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la comunicación del riesgo y el compromiso de la comunidad son fundamentales para romper las cadenas de transmisión y mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19. Los comportamientos de las personas y su disposición a seguir las medidas sociales y de salud pública pueden ser las herramientas más poderosas para detener la propagación del virus, junto con la inmunización. Las estrategias que comunican el riesgo, llegan a todos los grupos de interés clave y facilitan los enfoques dirigidos por la comunidad darán como resultado un aumento de la confianza y la cohesión social y, en última instancia, una reducción de los impactos negativos del COVID-19 (OMS 2020).

Cadena de suministro globalizada. Los países dependen de una economía globalizada para obtener materiales clave para responder al virus. Las cadenas de suministro de equipos de protección personal (EPP), vacunas y equipos médicos para el tratamiento se vieron interrumpidas por la pandemia, junto con el acceso a otros bienes y servicios. Dado que la producción se concentra en ciertos países, los bienes críticos tienen que ser adquiridos de forma competitiva y global. El acceso a los suministros clave para mitigar y tratar la propagación del COVID-19 ha requerido destreza y dinero para navegar por este entorno complejo y competitivo, lo que a menudo pone a los países más pobres en desventaja. La inadecuada disponibilidad de equipos de protección personal (EPP), equipos médicos y vacunas inadecuadas, junto con la indecisión sobre las vacunas alimentada por la desconfianza en el gobierno, las noticias falsas a través de los medios de comunicación social, la corrupción y otras herramientas críticas, han obstaculizado los esfuerzos nacionales para responder y recuperarse.

Transversal. Las consecuencias del COVID-19 afectan a todos los grupos socioeconómicos, sectores económicos y zonas geográficas, lo que requiere una respuesta específica, multisectorial e interjurisdiccional. El virus ha afectado con mayor intensidad a determinados grupos de personas y sectores económicos (véase el siguiente párrafo sobre la vulnerabilidad). En cada país, determinadas zonas geográficas se han visto más afectadas, por ejemplo, las ciudades más expuestas a los viajeros internacionales, especialmente de países con una alta tasa de infección. Debido a estas características, la planificación, ejecución y evaluación de la respuesta a la pandemia debe dirigirse a los grupos, sectores económicos y lugares físicos más vulnerables. Además, la respuesta debe coordinarse en un amplio abanico de sectores, como la sanidad, el bienestar, la seguridad pública, la gestión del riesgo de catástrofes y las finanzas. Por último, es necesario coordinar las distintas jurisdicciones (local-nacional, dentro del gobierno central y nacional-internacional) para que los recursos humanos, financieros y físicos se utilicen de forma eficaz.

Vulnerabilidad. El virus afecta a ciertos grupos de personas y segmentos de la economía de forma más severa. Hay dos amplios tipos de personas especialmente expuestas y vulnerables al COVID-19: los trabajadores médicos y de primera línea; y los grupos socioeconómicos que no pueden recibir o seguir los consejos recomendados o no pueden acceder a los servicios debido a su situación física, social o económica. Dependiendo de las condiciones del país, este último grupo puede incluir a las mujeres, los ancianos, las personas con enfermedades preexistentes, los niños, los refugiados y los migrantes, las personas sin hogar, las minorías étnicas/indígenas, las personas con problemas de salud mental, las víctimas de la violencia de género, las personas con discapacidad, los presos y las personas que viven en condiciones de hacinamiento. Desde el punto de vista económico, un estudio reciente de Brookings (2021) concluye que las zonas con economías que dependen del movimiento de personas -como los viajes y el turismo- se enfrentaban a un desempleo sustancialmente mayor a finales de 2020 que las ciudades con industrias básicas basadas en el movimiento de información, por ejemplo, la tecnología y la administración. Así lo confirman los datos que indican un grave declive económico en determinados sectores (por ejemplo, los viajes aéreos, el turismo y la hostelería) y un crecimiento en otros (por ejemplo, los productos farmacéuticos, el comercio minorista en línea y el sector inmobiliario) (BBC, 2021). Además, las pequeñas y medianas empresas (PYMES), las trabajadoras por cuenta ajena y los autónomos han sido segmentos de la economía especialmente vulnerables en muchos países.

Recuperación económica y social. El COVID-19 ha tenido impactos económicos y humanos profundos e inesperados, lo que exige una recuperación flexible y escalonada que puede ser una oportunidad para aumentar la resiliencia ante futuros riesgos. Un análisis realizado por Bloomberg concluyó recientemente que, si bien los 26 billones de dólares de ayuda a la crisis y la llegada de las vacunas han impulsado una recuperación más rápida de lo que muchos preveían, los legados de una educación atrofiada, la destrucción de puestos de trabajo, los niveles de deuda de la época de la guerra y el aumento de las desigualdades entre razas, géneros, generaciones y geografías dejarán cicatrices duraderas, la mayoría de ellas en las naciones más pobres (Curran, y Kennedy, 2021). A esto hay que añadir los efectos de las catástrofes en cascada y concurrentes, que se han sumado a la pérdida de vidas, de medios de subsistencia y de productividad económica. Por lo tanto, es importante aprovechar este momento para invertir en una recuperación económica y social que genere crecimiento al tiempo que se abordan los impactos negativos a largo plazo de la pandemia. El proceso de recuperación también puede ser una oportunidad para aumentar la resiliencia frente a una gama más amplia de amenazas, entre las que se encuentra el cambio climático.

¿Qué es un marco de recuperación?

El concepto y los elementos de un marco de recuperación han surgido de la experiencia en la reducción del riesgo de catástrofes y, más recientemente, gracias a las evaluaciones de las necesidades de recuperación del COVID-19, con el objetivo de reconstruir mejor utilizando un enfoque multirriesgo. La Comisión de la Unión Africana, con el apoyo de las Naciones Unidas y otros socios, se embarcó en el desarrollo del Marco de Recuperación integral para los países y regiones del continente con el fin de ayudar a responder a esta situación sin precedentes. El Marco de Recuperación ha evaluado los diversos efectos e impactos de la pandemia; ha propuesto reformas políticas e institucionales y medidas programáticas; ha identificado mecanismos de financiación; ha esbozado enfoques institucionales para gestionar la recuperación; y ha propuesto disposiciones de implementación para acelerar la recuperación. Abarcará el sector sanitario, la macroeconomía, los impactos humanos, los resultados económicos y las áreas transversales (protección social, gobernanza y consolidación de la paz, género, reducción del riesgo de catástrofes y efectos migratorios/ambientales/psicosociales). Se ha prestado especial atención a las cuestiones de género y vulnerabilidad. Así, un Marco de Recuperación es más completo y flexible que un plan de acción de recuperación aislado. Dependiendo de la escala de la recuperación requerida, la elaboración de un marco a medida puede llevar desde unas semanas hasta varios meses para un país o una región.

Objetivos

El objetivo de este Marco de Recuperación es orientar los esfuerzos de recuperación socioeconómica resiliente a nivel continental, regional y nacional desde una perspectiva multirriesgo, creando las condiciones previas para construir sociedades resilientes en el continente africano.

Los **objetivos** del Marco son, entre otros, los siguientes:

1. Evaluar el impacto socioeconómico del COVID -19 en la región de África;
2. Identificar las tendencias regionales sobre el impacto y el valor de un enfoque común para abordar los efectos económicos y humanos de la pandemia;
3. Proporcionar orientación a los Estados miembros para que planifiquen y lleven a cabo la recuperación a corto, medio y largo plazo; y
4. Explicar una agenda política transformadora que la UA y sus Estados miembros podrían adoptar para afrontar eficazmente los retos sistémicos actuales y futuros (reformas políticas e institucionales, inversiones programáticas, mecanismos de financiación, gobernanza, disposiciones de implementación).

En particular, el Marco es una guía para los esfuerzos de recuperación nacionales y regionales. Sin embargo, no se trata de un modelo único; habrá que desarrollar, apoyar y aplicar políticas y programas de recuperación nacionales y regionales.

Más concretamente, el Marco encarna los principios compartidos y el curso de acción para la recuperación continental, regional y nacional del COVID-19 en África, proporcionando orientación y soluciones para una recuperación resiliente basada en los conocimientos/herramientas/directrices existentes, las buenas prácticas y las experiencias recientes en la recuperación del COVID-19. En concreto, el Marco aporta recomendaciones a los retos que se han identificado en relación con la recuperación en África, que incluyen:

1. Mala coordinación y comunicación durante la fase de recuperación y reconstrucción
2. Falta de un mapeo coordinado de las necesidades a largo plazo tras la catástrofe
3. Escaso seguimiento y evaluación de los esfuerzos de recuperación
4. Falta de financiación para la recuperación y la reconstrucción
5. Falta de claridad en el mandato de los organismos de RRD en la fase de recuperación
6. Problemas de sostenibilidad
7. Falta de legislación y políticas que guíen la recuperación tras la catástrofe
8. Dependencia de la importación y de las cadenas de suministro globales

Principios

Los siguientes son los principios generales que guían el Marco de Recuperación para África:

- 1) Acelerar y ampliar las intervenciones que abordan inmediatamente las necesidades urgentes a corto plazo: a) inseguridad alimentaria, b) pobreza extrema y c) acceso a los servicios sanitarios esenciales.
- 2) Desarrollar un marco político para abordar las necesidades de recuperación a largo plazo de forma sostenible. Garantizar que las políticas y los programas aborden tanto el impacto de la crisis del COVID-19 como las limitaciones estructurales y los retos sistémicos preexistentes, tales como los asociados a la pobreza y la inseguridad alimentaria. Dar prioridad a las políticas transformadoras que ofrezcan el mayor rendimiento, como las que abordan las desigualdades sistémicas en el acceso al mercado laboral, la educación, la sanidad y otros servicios esenciales.
- 3) Adoptar un enfoque integrado en la búsqueda de soluciones, dada la naturaleza transversal del impacto de la pandemia.
- 4) Revisar y actualizar las metas de los ODS y la Agenda 2063 de la Unión Africana de manera que tengan en cuenta el impacto del COVID-19 y se alineen con el Marco de Recuperación.
- 5) Aprovechar las oportunidades que se presenten para lograr estos objetivos. Las crisis anteriores han dado lugar a menudo a importantes transformaciones sociales, como la aplicación del New Deal durante la Gran Depresión y la expansión del Estado de bienestar en las sociedades europeas después de la Segunda Guerra Mundial.

Metodología

El Marco se elaboró utilizando sólidos métodos de recuperación de desastres reconocidos internacionalmente, incluidos los enfoques de evaluación de las necesidades posteriores a los desastres y el marco de recuperación de desastres, y se basa en décadas de práctica en todo el mundo. La metodología para desarrollar el **Marco de Recuperación COVID-19 para África** comprende un proceso de tres fases:

- (i) **Alcance y Evaluación de la Situación** para el Marco de Recuperación del COVID-19 para África;
- (ii) **Redacción** del Marco de Recuperación del COVID-19 para África; y
- (iii) **Apoyar a la CUA para que apruebe** el Marco de Recuperación del COVID-19 para África tras amplias consultas con los Estados miembros de la UA y los actores regionales.

Las tres fases fueron dirigidas por el Departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Economía Azul y Desarrollo Sostenible de la Comisión de la Unión Africana (DARBE), con el apoyo técnico del PNUD, la OMS, la FAO, el UNDRR y el Banco Africano de Desarrollo, y en estrecha consulta con otros departamentos de la Comisión de la Unión Africana y las partes interesadas a nivel continental, regional y nacional. Se movilizó a una serie de partes interesadas para que hicieran aportaciones y ofrecieran una visión crítica sobre la recuperación socioeconómica resiliente del COVID-19. Entre ellos se encuentran autoridades nacionales de gestión de catástrofes, organismos de las Naciones Unidas, otros socios en el desarrollo y actores regionales. Los datos reflejados en el Marco se refieren al período de dos años comprendido entre **marzo de 2019 y febrero de 2022**. Los datos presentados en este informe pertenecen a todo el continente africano, sin embargo, en algunos casos los datos sólo se refieren a la región del África subsahariana en función de la fuente de datos. Una presentación más detallada de la metodología se puede encontrar en el Anexo 1.

Cómo utilizar el marco

El contenido detallado del Marco de Recuperación está organizado en seis capítulos. Estos capítulos siguen la secuencia de pasos necesarios para desarrollar y aplicar un marco.

Capítulo 1: Antecedentes, objetivos y metodología

El capítulo 1 identifica las dinámicas clave que hacen del COVID-19 un desastre sin precedentes y un reto para África y el mundo. A continuación, explica la naturaleza de un marco de recuperación y por qué es más completo y útil que un simple plan de acción para la recuperación. A continuación, expone la meta y los objetivos del Marco. A renglón seguido, esboza la metodología de elaboración de este Marco de Recuperación. Por último, enumera la visión y los principios plasmados en el Marco.

Capítulo 2: Evaluación de la Situación

El capítulo 2 resume una evaluación de la situación más amplia que se preparó para establecer la línea de base del trabajo de recuperación e identificar los efectos e impactos de la pandemia en África. Se ofrece información detallada a nivel continental y regional sobre: las consecuencias en el sector sanitario; los resultados macroeconómicos; los impactos humanos; los resultados económicos; y los efectos transversales (protección social, gobernanza y consolidación de la paz, género, reducción del riesgo de catástrofes, y migración/ambiental/psicosocial).

Los capítulos 3 a 6 describen los componentes críticos del propio Marco de Recuperación del COVID-19: estrategias de recuperación, acuerdos institucionales, mecanismos financieros y disposiciones de ejecución.

Capítulo 3: Estrategias de recuperación

Las opciones estratégicas para la recuperación consisten en reformas políticas e inversiones programáticas. Las recomendaciones políticas para una recuperación socioeconómica resiliente se centran en recomendaciones generales y sectoriales a nivel continental, regional y de grupos de países. Se ofrecen medidas a estos niveles para el sector sanitario, la macroeconomía, los impactos humanos, los resultados económicos y las áreas transversales. Las posibles reformas políticas e inversiones programáticas se adaptan a los peores, medianos y mejores escenarios.

Capítulo 4: Gobernanza y acuerdos institucionales

La forma en que se establecen las instituciones, los mecanismos de coordinación y la capacidad y habilidad de los organismos que realizan actividades de recuperación son factores críticos para el éxito de la recuperación. El capítulo 4 describe las buenas prácticas y los resultados clave relacionados con el desarrollo de estructuras institucionales, liderazgo y recursos humanos eficaces para supervisar, gestionar, coordinar y ejecutar la reconstrucción.

Capítulo 5: Mecanismos de financiación

El capítulo 5 se centra en los principales retos de financiación de la reconstrucción tras una catástrofe. Estos retos incluyen la rápida cuantificación de los costes económicos y financieros inmediatos y actuales de la pandemia, la confirmación de los déficits de financiación, la elaboración de presupuestos de recuperación, la identificación de las fuentes de financiación y el establecimiento de mecanismos de gestión y seguimiento de los fondos.

Capítulo 6: Disposiciones de ejecución

Sobre la base de la priorización acordada, los programas de recuperación deben ejecutarse rápidamente, con la aceptación del público, dentro del presupuesto, y las actividades (especialmente los resultados) deben ser comunicadas al público y supervisadas para mantener el seguimiento o la falta de progreso. El capítulo 6 presenta las consideraciones clave que deben tener en cuenta los gobiernos y los agentes de la recuperación para garantizar que la ejecución de los programas sea eficaz, equitativa y oportuna, y que contribuya a reconstruir un futuro mejor para la población afectada por la catástrofe. Esto incluirá los problemas o desafíos esperados que habrá que prever y gestionar.

II. Evaluación de la Situación

El capítulo II es la síntesis de una evaluación de la situación más amplia que se preparó como aportación al Marco de Recuperación. Se presentan los efectos e impactos de la pandemia en el sector sanitario, la macroeconomía, el desarrollo humano, el desarrollo económico y las áreas transversales (protección social, gobernanza y consolidación de la paz, igualdad de género, reducción del riesgo de desastres, migración, medio ambiente y psicosocial). El capítulo concluye identificando los impactos característicos de las cinco regiones de África, así como de otras agrupaciones de países.

Antecedentes

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto lo susceptibles que son las sociedades modernas a los riesgos sistémicos y que un “efecto dominó” en los sistemas infraestructurales, sociales, medioambientales, políticos y económicos de cada sociedad iniciado por la pandemia puede alterar o desbaratar completamente su configuración original. Una consideración importante para el trabajo de recuperación de los riesgos sistémicos es mantener una perspectiva de resiliencia más amplia que se centre en los múltiples riesgos a los que se enfrentan las sociedades y que desarrolle la capacidad de la sociedad para prepararse para las perturbaciones, hacerles frente y recuperarse de ellas si se producen, y adaptarse a las nuevas condiciones. Estos esfuerzos requieren un marco de recuperación que ayude a guiar a los países africanos, a las principales partes interesadas y a los socios internacionales a planificar y aplicar una recuperación resiliente. El primer paso en el desarrollo del marco es una evaluación de la situación que establece la línea de base previa al COVID-19 e identifica los efectos e impactos socioeconómicos y de otro tipo de la pandemia.

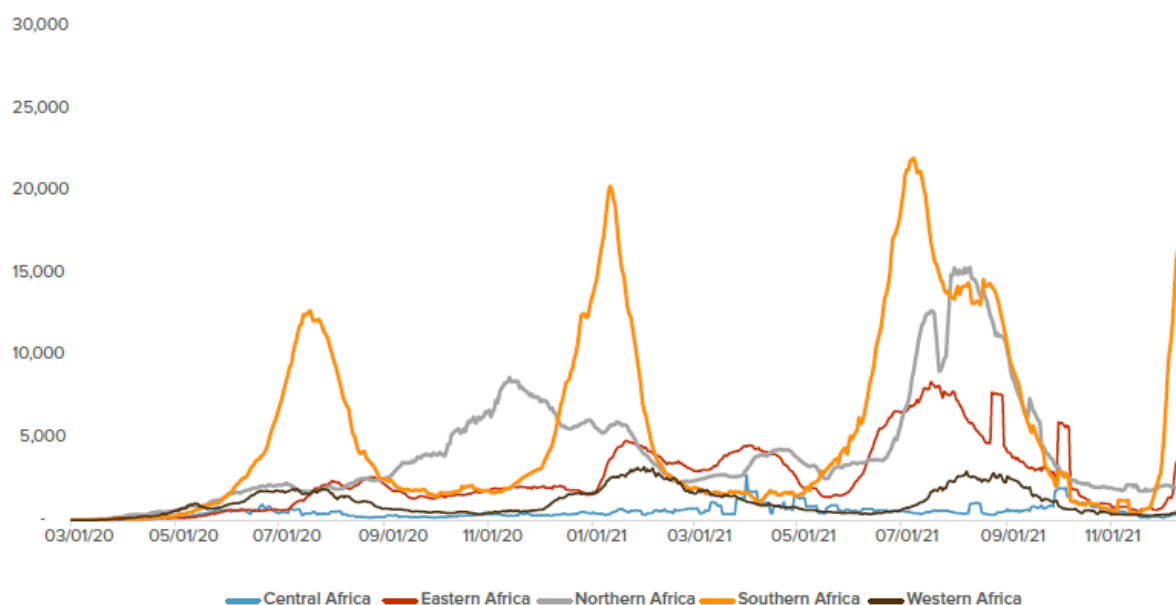
La [Evaluación de la Situación](#) completa es un documento separado preparado en 2021 que examina las diversas dimensiones de los efectos e impactos que el COVID-19 ha tenido en los países africanos, incluyendo: metas, objetivos y metodología de la Evaluación (Capítulo 1); consecuencias para la salud (Capítulo 2); impactos macroeconómicos (Capítulo 3); impactos humanos (Capítulo 4); resultados económicos y respuestas iniciales (Capítulo 5); y efectos transversales que cubren la protección social, la gobernanza y el estado de derecho, el género, la reducción del riesgo de desastres, la migración y los impactos ambientales y psicosociales (Capítulo 6). Los datos regionales y de otro tipo se presentan en un volumen separado de [anexos](#). La información que figura a continuación es una síntesis de la evaluación más amplia y sus anexos.

Consecuencias para la salud

Evolución de la pandemia. El COVID-19 sigue activo en todos los Estados miembros de la región africana y continúa causando trastornos socioeconómicos sin precedentes. A mediados de enero de 2022, los países africanos notificaron un total de 10,39 millones de casos confirmados y 233.000 muertes. Con la variante Omicrón, el continente está experimentando un pico de casos, llegando a un millón de nuevas infecciones cada 23 días. A pesar de estas cifras, el impacto de la pandemia en África ha sido relativamente bajo en comparación con América, Europa y Asia. Aunque las razones de esta situación aún no están claras, se han sugerido varios factores que podrían influir en la baja carga de la enfermedad. Éstos van desde la edad demográfica, la falta de centros de atención a largo plazo, la posible protección cruzada por la exposición previa a los coronavirus circulantes, las limitaciones de las pruebas del SARS-CoV-2 y la mala gestión de los datos, que puede haber dado lugar a una infradeclaración de las muertes, hasta la eficacia de las respuestas gubernamentales en materia de salud pública.

En el continente africano hay variaciones regionales en cuanto a los casos confirmados, siendo el África meridional la que registró el mayor número de casos (4,7 millones) y de muertes (más de 117.000) del continente, lo que supone aproximadamente la mitad de los casos y las muertes del continente, mientras que el África central fue la que menos registró (véase el cuadro 2.1).

TABLA 2.1: Desglose regional de las oleadas de COVID-19 en África - hasta marzo de 2022



Continuidad de servicios esenciales. La pandemia en curso ha ejercido una enorme presión sobre los sistemas de salud y ha alterado la prestación de servicios sanitarios en África. La interrupción de los servicios de salud fue causada por el desvío de recursos de otras áreas de servicio hacia la respuesta al COVID-19; la reordenación de las necesidades de atención sanitaria y los cambios en las políticas de detección, diagnóstico y tratamiento; la reorganización de la prestación de servicios; y las interrupciones en el suministro de equipos médicos y productos sanitarios. Los factores del lado de la demanda también contribuyeron a las interrupciones. Entre ellos se encuentran la reducción del número de personas que acuden a los servicios de salud debido a las dificultades físicas y económicas para acceder a ellos, los cambios en el comportamiento de búsqueda de la salud provocados por el miedo al contagio y, en algunos casos, la desinformación sobre la seguridad, la prevención y el control de la pandemia. Según la tabla 2.2, se espera que la crisis aumente las tasas de morbilidad y mortalidad en África a través del VIH, la tuberculosis y la malaria, así como los servicios de salud materno-infantil y las campañas de vacunación para niños menores de cinco años.

TABLA 2.2: Carencias sanitarias debidas al COVID-19 en África

VIH-Sida⁷	Tuberculosis⁸	Paludismo⁹	Salud materno-infantil¹⁰	Inmunización¹¹
<p>El número de personas que reciben terapia antirretroviral en África se redujo de 12,9 millones en 2019 a 10,1 millones en 2020, lo que deja en riesgo a otros 2,8 millones de pacientes seropositivos. Esto es especialmente preocupante en África oriental, que es la región más afectada por el VIH, con un 46%, seguida de África meridional.</p> <p>Podría haber 534.000 muertes adicionales relacionadas con el VIH como resultado de la pandemia.</p>	<p>La interrupción de los servicios sanitarios contra la tuberculosis dejó a casi 900.000 mil personas en riesgo en África oriental, seguidas por 400.000 en África meridional y 240.000 en África central.</p> <p>Estas interrupciones podrían causar 525.000 muertes adicionales por tuberculosis en el mundo en 2020 en comparación con 2018.</p>	<p>Habría 382.000 muertes adicionales relacionadas con el paludismo en 2020 en comparación con 2018 en el ASS debido a la interrupción de servicios causada por el Covid-19. Esto afectará especialmente a los niños, ya que la mayoría de las muertes por paludismo se producen en niños menores de cinco años.</p>	<p>Se ha calculado que las reducciones en las intervenciones de salud materno-infantil, darían lugar a entre 12.660 y 55.020 muertes maternas adicionales y de 253.800 a 1 millón de muertes infantiles durante 12 meses (en 2021), en 49 países de África.</p>	<p>COVID-19 dejó a 62,1 millones de niños (17 millones en África Occidental, 12 millones en África Oriental) sin acceso a los servicios de inmunización en África y en riesgo de contraer enfermedades mortales y prevenibles como la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la poliomielitis y el paludismo.</p>

Las mujeres jóvenes y los niños son los que más riesgo corren en este sector. Sin embargo, cabe destacar que las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la lucha contra el COVID-19. Las mujeres constituyen más del 60% del personal sanitario de África (Chuku et al., 2020) y fueron y siguen siendo fundamentales para atender a los enfermos en casa. No obstante, el predominio de las mujeres en los sectores sanitarios también las expone a un mayor riesgo de infección por COVID-19 y a enfermedades mentales.

Las personas que viven con discapacidad (PwD) experimentan una mala salud debido a condiciones sanitarias preexistentes y a un mayor índice de comportamientos de riesgo. Por tanto, son más susceptibles de contraer el virus y de experimentar síntomas graves tras la infección, lo que aumenta su riesgo de muerte. Las PwD también corren un mayor riesgo de contraer el COVID-19 porque se enfrentan a mayores barreras para observar las medidas básicas de higiene y distanciamiento social.

El despliegue de la vacuna en África sigue siendo el más lento del mundo. Menos de un adulto de cada cien está totalmente vacunado, frente a una media de más de 30 en las economías más avanzadas. Esto significa que incluso la mayoría de los trabajadores esenciales de primera línea siguen trabajando sin protección. Algunos de los países del norte de África (Argelia, Marruecos y Túnez) obtuvieron resultados ligeramente mejores que las demás regiones de África, excepto Libia y Egipto. África Central es la región más rezagada, donde menos del 0,52% de la población total (en octubre de 2021) declaró estar totalmente vacunada en cuatro países, siendo la RDC la más baja de la región y del continente (0,04%).

⁷UNAIDS (2021); Global Fund (2021); WHO (July, 2021)

⁸WHO (2020a); Global Fund (2021); WHO (March, 2021)

⁹WHO (2021a); Global Fund (2021)

¹⁰WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank (2019); WHO (2021a); UNICEF, WHO, UHC (July, 2021); The Lancet for Global Health (2021); UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation (2019)

¹¹WHO & UNICEF (July, 2021); UNICEF (July 2021)

Retos y buenas prácticas. Estructuralmente, la respuesta del COVID-19 se ha visto complicada por los siguientes retos a los que se enfrenta el sector sanitario en África:

- Lagunas de liderazgo y gobernanza que suelen estar relacionadas con factores como la inestabilidad política y la corrupción.
- Financiación inadecuada del sector de la salud. La financiación no gubernamental, la fatiga de los donantes y la falta de previsibilidad, sostenibilidad y flexibilidad de la financiación han tenido efectos negativos en la financiación de la sanidad. Por ejemplo, los servicios sanitarios esenciales para las mujeres, como la atención prenatal y pródromo, los servicios maternos, las pruebas del VIH y la provisión de anticonceptivos, se han visto interrumpidos, lo que en algunos casos ha provocado un aumento de las muertes maternas y de los mortinatos.
- Suministro inadecuado de productos médicos, vacunas y tecnologías de buena calidad.
- Escasa capacidad de gestión de la información sanitaria. Esto se debe, entre otras cosas, a la utilización de sistemas de información sanitaria obsoletos, a la escasez de personal sanitario con conocimientos suficientes en materia de gestión de la información sanitaria, al uso de herramientas de recopilación de datos inadecuadas y poco fiables, y a la falta de interés y motivación del personal sanitario para recopilar datos sanitarios.
- Barreras financieras, estructurales y geográficas para acceder a una atención sanitaria de buena calidad.
- Una asistencia sanitaria mal organizada, incluyendo falta de coordinación entre los niveles primario, secundario y terciario de la asistencia sanitaria.
- Debilidades en la capacidad de preparación, prevención, vigilancia y respuesta ante epidemias/pandemias.

A pesar de estos retos, hay ejemplos de buenas prácticas en: la gobernanza del sector sanitario; el personal sanitario; los medicamentos, equipos y suministros esenciales; las estrategias de comunicación; el seguimiento y la evaluación; y la prestación de servicios esenciales. Algunos países han aumentado su asignación presupuestaria al sector de la salud hasta al menos el 15%, de acuerdo con la Declaración de Abuja, pero es necesario hacer más para reforzar la resiliencia del sector ante futuras emergencias. El sector se ha enfrentado a una crisis sin precedentes y necesita más recursos, al tiempo que se garantiza que las inversiones actuales se utilicen de forma óptima para reducir el despilfarro a la luz de la disminución de recursos resultante de los choques económicos creados por la pandemia.

Efectos macroeconómicos

África, después de mostrar buenas perspectivas de crecimiento económico antes de la pandemia, está experimentando una conmoción económica sin precedentes que puede tener importantes repercusiones negativas en la trayectoria de desarrollo a largo plazo del continente. El continente sufrió la peor recesión económica en 25 años debido al impacto negativo de la pandemia del COVID-19 en 2020. Esta circunstancia se debió especialmente a los estrechos vínculos del continente con las economías desarrolladas, en términos de viajes, comercio y vínculos con los mercados financieros y otras actividades económicas que redujeron aún más el espacio fiscal de los países africanos. La mayoría de estos países ya tenían dificultades para financiar las actividades destinadas a alcanzar los ODS y las aspiraciones de la Agenda 2063 de la Unión Africana.

La pandemia ha afectado principalmente al desarrollo macroeconómico de África a través de¹²:

- **Crecimiento del PIB - a nivel continental y regional:** El PIB continental se redujo en un 2,1%, siendo la región de África Austral la que experimentó el mayor nivel de contracción económica en 2020. El **sur de África** fue el más afectado en términos de crecimiento económico (Economist 2020). Tras un estricto confinamiento que llevó a la economía sudafricana a contraerse aproximadamente un 7,7 por ciento en 2020, se prevé que el PIB se expanda un 3,3 por ciento en 2021. El lento crecimiento de Sudáfrica, la mayor economía de la región, se extendió a sus vecinos, que dependen de la primera para obtener productos manufacturados y como mercado para sus productos, así como fuente de mercado laboral para sus ciudadanos. En el **norte de África**, el PIB global se contrajo un 1,1% en 2020, apuntalado en gran medida por Egipto, que mantuvo un crecimiento del 3,6%. Túnez y Marruecos fueron los más afectados, registrando cada uno un crecimiento negativo del 8,8 y el 5,9 por ciento respectivamente. La región espera una sólida recuperación del 4,0% en 2021. **África Oriental** fue la más resistente de todas las regiones africanas, debido en gran medida a la menor dependencia de los productos primarios. La región disfrutó de un crecimiento del 5,3 por ciento en 2019, un 0,7 por ciento en 2020 y se espera que crezca un 3,0 por ciento en 2021. Los mejores resultados fueron los de Yibuti (9,9%), Kenia (5,0%) y Tanzania (4,1%). El PIB de África Central se contrajo un 2,7% en 2020. Los países más afectados fueron la República del Congo (-7,9%), Guinea Ecuatorial (-6,1%) y Camerún (-2,4%). Sin embargo, se espera que la región registre una recuperación del 3,2%.
- **Tasa de inflación:** La tasa de inflación de África se estimó en un 10,4 por ciento para 2020, casi igual que el 9,8 por ciento de 2019; sin embargo, se prevé que se modere al 9,0 por ciento en 2021.
- **Empleo:** cerca de un tercio de las personas en edad de trabajar en África dejaron de hacerlo durante la pandemia, y las mujeres se vieron afectadas de forma desproporcionada.
- **Importación y exportación de bienes y servicios:** En un escenario pesimista para 2020, las exportaciones cayeron un 18 por ciento del PIB y las importaciones un 23 por ciento, aumentando así el desequilibrio comercial. Los precios de muchos productos básicos han disminuido, lo que limita los recursos que los países africanos necesitan para recuperar el crecimiento.
- **Ingresos fiscales, gastos y déficit fiscal,** El déficit fiscal en África se estimó en un 8,4% del PIB en 2020. Los gobiernos se vieron obligados a recurrir al endeudamiento para tapar los déficits fiscales que, en parte, se produjeron al ofrecer paquetes de estímulo destinados a apoyar las necesidades sociales.
- **Remesas de dinero:** Se estima que las remesas a África, excluyendo el norte de África, han disminuido un 12,5% en 2020. Aun así, durante la pandemia del COVID-19, las remesas superaron a la ayuda oficial al desarrollo y a la inversión extranjera directa. Otros efectos macroeconómicos negativos relacionados con el COVID-19 en África fueron el aumento del índice de precios al consumo, la reducción del consumo de los hogares y del gobierno, y la disminución de la formación bruta de capital fijo. (Ratha et al., 2021; Allen 2021)

Impactos humanos¹³

El COVID-19 y las respuestas al mismo han dado lugar a una regresión del desarrollo humano en toda África y, en general, a una menor capacidad para alcanzar las agendas 2030 y 2063. Esto ha supuesto un impacto negativo en la pobreza, la seguridad alimentaria, el desarrollo de los recursos humanos (salud y educación), el género y la inclusión social (niños y jóvenes, poblaciones desplazadas por la fuerza, ancianos, personas con discapacidad, personas que viven con el VIH). Estas consecuencias regresivas se detallan a continuación.

¹² Datos de Perspectivas Económicas de África 2021 (AfDB 2021)

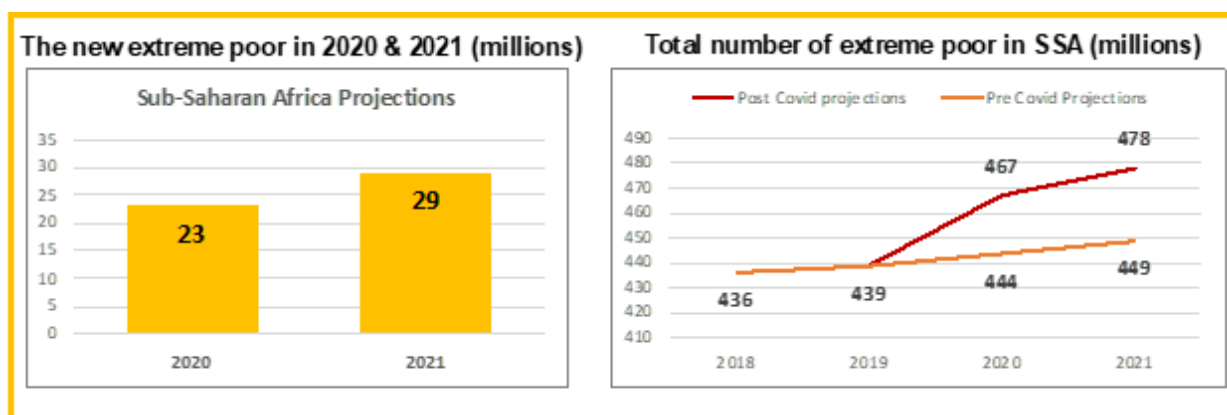
POBREZA

Se estima que 30,4 millones de personas de África cayeron en la pobreza extrema en 2020 y la cifra podría alcanzar los 38,7 millones de personas en 2021 como resultado del COVID-19 (BAfD, 2021). En África oriental, central, meridional y occidental, 23 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en 2020, alcanzando un total de 467 millones en la región, frente a los 439 millones de 2019. A finales de 2021, la cifra puede aumentar a 29 millones, con lo que el total será de 478 millones (Daniel, Gerszon, Mahler et al., 2021).

Los nuevos pobres se concentrarán en los países que ya se enfrentaban a altas tasas de pobreza, pero también se prevé que los países de ingresos medios se vean significativamente afectados. Además, las personas que eran pobres o vulnerables antes del inicio de esta crisis son las más afectadas. Es probable que muchos de los nuevos pobres vivan en zonas urbanas y se dediquen al trabajo informal, especialmente las mujeres. En consecuencia, las mujeres, los jóvenes y los niños se verán afectados de forma desproporcionada por la pobreza (BAfD, 2021; Banco Mundial, 2020).

A nivel regional, se estima que tres países de África Oriental estarán entre los diez primeros países de África con mayor índice de pobreza en 2023, (1,90 dólares per cápita/día), a saber, Sudán del Sur, Somalia y Madagascar (Banco Mundial, 2021). La región también cuenta con cuatro de los diez primeros países de África con el mayor porcentaje de niños que viven en la pobreza, a saber, Sudán del Sur, Burundi y Ruanda (Silwal, Ani Rudra et al., 2020). En África Central, se espera que la República Centroafricana y la RDC estén entre los diez primeros países de África con mayor índice de pobreza en 2023, ambos países tienen uno de los porcentajes más altos de niños que viven en la pobreza (Banco Mundial 2021a).

FIGURA 2.1: Proyecciones de pobreza para el África Subsahariana¹⁴



INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Antes de que el COVID-19 afectara al continente africano, una gran proporción de la población africana ya padecía inseguridad alimentaria. En 2020, 282 millones de personas de África se enfrentaron al hambre debido a la crisis del COVID-19 combinada con los conflictos y los desastres relacionados con el clima, lo que supone unos 46 millones de personas más que en 2019 (FAO et al., 2021). Entre 2016 y 2018, África importó alrededor del 85% de sus alimentos de fuera del continente, lo que supuso una factura alimentaria anual de 35.000 millones de dólares, que se prevé que alcance los 110.000 millones de dólares en 2025.

¹³El análisis de la salud se considera en la sección anterior sobre salud

Esta gran dependencia de los mercados mundiales hace que algunos de los países africanos sean muy vulnerables en momentos como este (Akiwumi, 2020). El COVID-19 no sólo ha interrumpido las cadenas de suministro de alimentos, sino que también ha aumentado el desempleo y la pobreza, todo lo cual ha repercutido en el acceso a los alimentos y la nutrición. Como resultado, la prevalencia de la subnutrición aumentó en África del 18% al 21% entre 2019 y 2020 (FAO et al., 2021). Por ello, se estima que es probable que otros 1,9 millones de niños menores de cinco años sufran de emaciación entre 2020 y 2022 en todas las regiones de África, excepto en el norte, y que 1,2 millones más sufran de retraso en el crecimiento para 2022 (en un escenario moderado) (FAO et al., 2021; Saskia Osendarp et al., 2021).

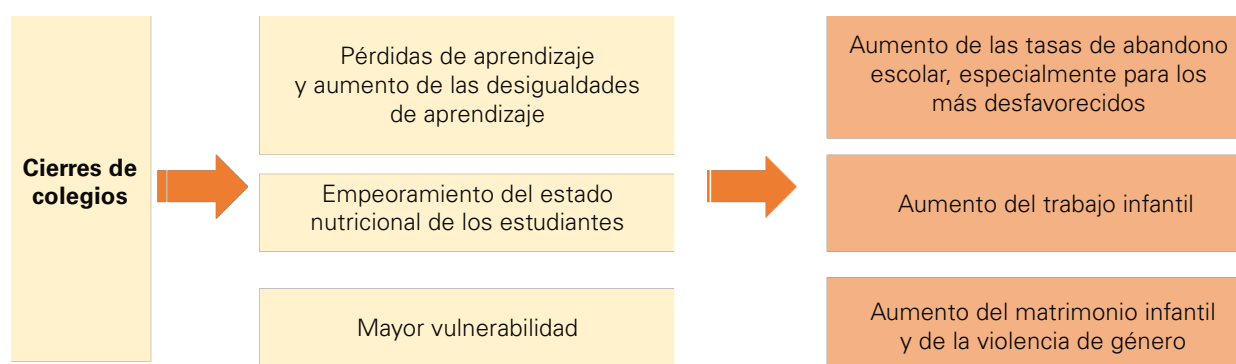
África Oriental es muy preocupante, ya que tenía el mayor número de personas desnutridas de África en 2020, con más de 125 millones, y tenía la segunda mayor prevalencia de desnutrición, con un 28%. Entre los focos de hambre se encuentran Sudán del Sur, Etiopía y Sudán. Del mismo modo, la región también tiene la mayor carga de desnutrición, a saber, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán (cuatro países en los que se calcula que habrá 10 millones de niños con desnutrición aguda en 2021). África Occidental ocupa el segundo lugar en número de personas desnutridas en África en 2020, con más de 75 millones, y es probable que el COVID-19 agrave la situación.

Los principales focos de hambre son el norte de Nigeria y Burkina Faso. En África Central, que ocupa el tercer lugar en número de personas desnutridas de África en 2020, con 57 millones de personas que pasan hambre, la RDC es el principal punto crítico de hambre. En general, Sudán del Sur, Nigeria, Burkina Faso, la RDC, Etiopía y Sudán son especialmente preocupantes debido a la escala, la gravedad y las tendencias de las crisis alimentarias existentes. En estos frágiles contextos, cualquier otro choque, como la actual crisis de sequía en el Cuerno de África, podría empujar a un número significativo de personas a la indigencia y la inanición, según el PMA y la FAO (2021).

PRIVACIONES DE RECURSOS HUMANOS

Educación

El cierre de escuelas interrumpió el funcionamiento del sistema educativo en África, reduciendo el aprendizaje de los alumnos, restringiendo las actividades de las autoridades educativas y perturbando los programas de alimentación escolar para niños vulnerables (Programa Mundial de Alimentos y UNICEF 2021). El impacto directo e indirecto del cierre de escuelas se resume en la siguiente figura:



En todo el continente africano, 327 millones de estudiantes de educación preescolar a secundaria se vieron afectados por el cierre de escuelas en algún momento entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. De ellos, 148 millones perdieron más del 50% del tiempo de instrucción en el aula en 2020, y 14,6 millones en 2021 (UNESCO, 2021).

¹⁵Los debates sobre la salud se tratan en la sección de impactos sobre la salud

La magnitud del cierre de escuelas llevó a los gobiernos a ofrecer oportunidades de aprendizaje a distancia y en línea. Sin embargo, sólo unos pocos escolares disponían en sus hogares de los medios necesarios para continuar su aprendizaje. Se calcula que el número de estudiantes a los que no llegan las políticas de aprendizaje digital a distancia y de radiodifusión es de 67 millones en África Oriental y Meridional, 54 millones en África Occidental y Central y 37 millones en Oriente Medio y África del Norte (UNICEF, 2020). A nivel regional, África Oriental es la región en la que el COVID-19 afectó a un mayor número de estudiantes y en la que las políticas de educación alternativa fueron más difíciles de aplicar y de hacer llegar a los más rezagados. Antes del COVID-19, África Oriental tenía un 28% de niños y jóvenes sin escolarizar, que es la proporción más alta de toda la región (UNESCO, 2021). África Oriental también experimentó la mayor duración del cierre de escuelas, con una media de 146 días de cierre total de escuelas entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. La región también registró el mayor número de estudiantes que perdieron más de la mitad del tiempo de instrucción en el aula, con 69,4 millones de estudiantes afectados en 2020 y 14,1 millones en 2021 (ibid).

Si bien el cierre de escuelas y la pérdida de días de clase afectaron a las niñas y a los niños por igual, las iniciativas de aprendizaje por medios digitales tuvieron el efecto de amplificar involuntariamente las disparidades de género preexistentes. Esto se debe a que en África, con la excepción del norte de África, antes de la pandemia, los niños tenían 1,5 veces más probabilidades de poseer un teléfono que las niñas, y las mujeres tenían un tercio menos de probabilidades de acceder a Internet.

Se estima que 53 millones de niños se quedaron sin comer en las escuelas en 2020 durante el cierre de éstas en África central, meridional, oriental y occidental (PMA, 2020). Además, las estimaciones preliminares muestran que en 2021, 4,3 millones de estudiantes, desde la educación preescolar hasta la terciaria, corren el riesgo de abandonar la escuela o de sencillamente no matricularse debido a las perturbaciones económicas provocadas por el COVID-19 (UNESCO, 2020). El cierre de las escuelas aumentó la vulnerabilidad de las niñas a los embarazos en la adolescencia, la violencia de género y el matrimonio infantil temprano (Banco Mundial, 2020a).

Las personas que viven con discapacidades (PwD) tienen menos probabilidades de acceder a la educación en comparación con sus homólogos sin discapacidades (OMS, 2020a). El cambio a la enseñanza a distancia, debido a las medidas de bloqueo del COVID-19, podría ser un reto para los estudiantes con discapacidad, ya que el material de aprendizaje en línea podría no ser accesible para los estudiantes con discapacidad visual y los sordos. Además, las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas entre los pobres y podrían tener que cargar con los gastos relacionados con la discapacidad.

GÉNERO

La crisis del COVID-19 exacerbó las desigualdades de género ya existentes, revelando graves diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a la seguridad de los ingresos y el empleo, la responsabilidad doméstica y la carga de cuidados, la seguridad, la salud física y mental, la educación y la autonomía (PNUD y ONU Mujeres, 2021). La crisis ha perturbado considerablemente la vida de las mujeres, ya que décadas de progreso en materia de derechos de la mujer e igualdad de género en África empezaron a desmoronarse. Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas africanas desempeñan un papel fundamental en la respuesta al COVID-19, como productoras e impulsoras del comercio y el crecimiento económico, trabajadoras de primera línea, cuidadoras en el hogar y en el trabajo, y como movilizadoras de sus comunidades (Brookings 2021). Las principales repercusiones de la pandemia sobre la igualdad de género son:

Pérdida de medios de vida, ingresos, empleos y acceso a activos productivos - Las restricciones económicas relacionadas con el COVID-19 condujeron a la pérdida generalizada de empleos y salarios, especialmente para las mujeres y las niñas que ya tenían empleos precarios y trabajaban en el sector informal. En el África Subsahariana, el 89,2% de las mujeres constituyen tres de cada cuatro trabajadores del sector informal (Banco Mundial,

2020b), lo que las deja más expuestas a la inseguridad de los ingresos por los prolongados cierres, y las excluye de los sistemas de protección social.

Pobreza e inseguridad alimentaria - En África, antes del COVID 19, se proyectaba que la tasa de pobreza femenina alcanzaría el 42,3 por ciento en 2021, excepto en el norte de África. La proyección es ahora del 44,5 por ciento, sin embargo, entre 2021 y 2030, se espera que el número de mujeres y niñas que viven en hogares extremadamente pobres en el África Subsahariana aumente de 249 a 283 millones (ONU Mujeres y Azcona et al., 2020). Las mujeres también son vulnerables a la escasez extrema de alimentos debido a la interrupción de la producción y el suministro de alimentos, así como al aumento de los precios de los mismos. El hecho de que las mujeres y las niñas constituyan la mayor parte de los pobres de África con menos recursos para acelerar la recuperación significa también que serán las últimas en recuperarse de los impactos del COVID-19.

La crisis del COVID-19 provocó un aumento del trabajo de cuidados no remunerado para las mujeres, ya que son las primeras en cuidar de los demás, lo que reduce su capacidad para participar en actividades productivas, obtener ingresos o seguir sus carreras y aprovechar otras oportunidades económicas.

Los cierres en todo el país, la interrupción de los servicios sanitarios y el miedo a acudir a los centros de salud han repercutido en el bienestar de las mujeres y los niños. La interrupción de los servicios de salud materno-infantil provocará probablemente entre 12.660 y 55.020 muertes maternas adicionales en 12 meses en 2021, en 49 países africanos (The Lancet for Global Health, 2021). Las interrupciones de los servicios sanitarios también crearon dificultades para que las mujeres y las niñas tuvieran acceso a la salud sexual y reproductiva. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que una combinación de trastornos económicos, cierre de escuelas e interrupción de los servicios de salud reproductiva provocará un aumento de 13 millones de matrimonios infantiles entre 2020 y 2030 (UNFPA, 2020). Además, los embarazos de adolescentes también aumentaron sustancialmente durante el cierre debido al incremento de las relaciones sexuales transaccionales por comida y ropa. Con el aumento de la pobreza, estas adolescentes tienen menos probabilidades de volver a la escuela, lo que sería necesario para su empoderamiento económico e independencia financiera.

Los nuevos datos muestran un aumento de las llamadas a las líneas de ayuda contra la violencia doméstica en muchos países africanos desde el estallido de la pandemia. Un estudio de las Naciones Unidas sobre el efecto de la pandemia en las mujeres y las niñas de África oriental y meridional reveló que se produjo un aumento del 775% en las llamadas a la línea telefónica nacional de atención a la violencia de género en Kenia (UNOCHA, 2020). En Nigeria, los datos de dos tercios de los estados demostraron un aumento del 149% en las denuncias de violencia de género de marzo a abril de 2020; y en Sudáfrica, una línea telefónica nacional de asesoramiento documentó un aumento del 500% en el número de llamadas por violencia de género en los dos meses posteriores al inicio del bloqueo (Roy et al., 2022).

INCLUSIÓN SOCIAL

Las poblaciones que ya eran vulnerables antes del inicio de la crisis del Covid-19 se han visto afectadas de forma desproporcionada, especialmente los niños y los jóvenes, los desplazados forzosos, las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas que viven con el VIH y otras enfermedades.

Los niños y los jóvenes se enfrentan a múltiples impactos, tales como privaciones en la educación, la salud y el trabajo. Como consecuencia de la crisis, millones de niños y jóvenes han caído en la pobreza y se enfrentan a una mayor morbilidad y mortalidad, que requiere atención urgente.

TABLA 2.4: Impactos de la pandemia en los niños y jóvenes de África ¹⁶

Privación de educación	Privación de salud	Desnutrición infantil	Pobreza infantil
327 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de escuelas en África (2022-21). De ellos, 148 millones perdieron más del 50% del tiempo de instrucción en el aula en 2020 y 14,6 millones en 2021	9,4 millones de niños corren el riesgo de contraer difteria, tétanos o tos ferina, y otros 1,2 millones de niños corren el riesgo de contraer poliomielitis debido a la interrupción de las campañas de vacunación.	Se estima que 1,9 millones más de niños menores de cinco años han caído en la emaciación en el ASS entre 2020 y 2022. Se estima que en 2022 habrá 1,2 millones más de niños menores de cinco años con emaciación en el ASS, en comparación con 2019	A finales de 2020, otros 26 millones de niños y jóvenes (de 0 a 17 años) vivían por debajo del umbral de pobreza nacional en comparación con el inicio del año -un aumento medio anual del 10%-, lo que eleva el total regional a más de 280 millones

Las poblaciones desplazadas por la fuerza representan 32 millones de africanos que se han visto afectados por la pérdida de ingresos, la inseguridad alimentaria y la restricción del acceso a los servicios sanitarios y a la educación como consecuencia de la crisis

TABLA 2.5: Población desplazada por la fuerza con riesgo del COVID-19 en África ¹⁷

	Este y Cuerno de África y Grandes Lagos	África occidental y central	África meridional	Un total de 32 millones de desplazados forzados en África
Refugiados	4,72 millones	1,4 millones	763,119	
Desplazados internos	8,74 millones	6,3 millones	6,5 millones	
Retornados		1,3 millones		
Apátrida		1,7 millones		
Solicitantes de asilo			315,579	
Otros			36,664	
Total	13,46 millones	10,7 millones	7,6 millones	

Personas mayores. En el continente africano hay 47 millones de personas mayores de 65 años (UNDESA, 2019) que corren un mayor riesgo de contraer el COVID-19 y morir a causa del mismo y de otras enfermedades prevenibles, y pueden sufrir violencia, abuso y abandono debido al aislamiento, medidas restrictivas, pérdida de ingresos y falta de acceso a servicios.

¹⁶Fuente: Educación- UNESCO (2021), datos del UIS de la UNESCO, y UNESCO (2020); Salud- sobre mortalidad infantil; Malnutrición infantil: Saskia Osendarp et al, 2021 y FAO, PMA, FIDA, UNICEF, OMS. 2021. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021; Pobreza infantil: UNICEF, 2020a, Covid-19: Una catástrofe para los niños en el ASS

¹⁷Fuente: ACNUR, 2021, *Tendencias Mundiales 2020*

TABLA 2.6: Impacto de la pandemia sobre las personas mayores en África ¹⁸

Salud y cuidados	Vulnerabilidad y abandono	Bienestar social y económico	Salud mental
<p>La tasa de mortalidad de las personas mayores es cinco veces superior a la media mundial. Se calcula que el 66% de las personas de 70 años o más padecen al menos una enfermedad subyacente.</p> <p>Se enfrentan a dificultades para acceder a los servicios de salud y asistencia debido a las interrupciones en la prestación de servicios de salud, el miedo a contraer el COVID-19 y las restricciones a su movimiento.</p>	<p>La crisis del COVID-19 provocó un aumento de la exposición de las personas mayores a la violencia, el abuso y el abandono debido al aislamiento.</p> <p>En 2017, una de cada seis personas mayores fue objeto de abusos. Con los cierres y la reducción de los cuidados, la violencia contra las personas mayores va en aumento.</p>	<p>La pandemia puede reducir considerablemente los ingresos y el nivel de vida de las personas mayores. En la actualidad, menos del 20% de las personas mayores en edad de jubilación reciben una pensión.</p>	<p>El distanciamiento físico puede haber afectado de forma desproporcionada a las personas mayores. Al vivir solos y estar digitalmente más excluidos que otros, los riesgos son mayores para ellos.</p>

Personas con discapacidad (PCD)

En África, se estima que unos 80 millones de personas están afectadas por discapacidades, y el continente presenta el mayor porcentaje de niños (0-14 años) y adultos (15-59 años) con discapacidades de todas las regiones; en concreto, el seis por ciento y el 19 por ciento de la población, respectivamente (OMS y Banco Mundial, 2011). Las personas con discapacidad que viven en países de bajos ingresos tienen más probabilidades de sufrir desventajas y exclusión, tales como la falta de acceso a la sanidad pública, la educación, el empleo y otros servicios sociales.

Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades que otras de estar empleadas y, cuando lo están, es más probable que trabajen en el sector informal, que se caracteriza por los bajos ingresos y el menor acceso a la seguridad social basada en el empleo (ACNUR, 2020; WIEGO, 2020). En el contexto del COVID-19, especialmente durante los confinamientos, eran más propensos a perder sus empleos y/o a no poder llevar a cabo sus actividades económicas y, por tanto, a perder su fuente de ingresos. La pérdida de ingresos representa una carga desproporcionada para las personas con discapacidad, ya que tienen que hacer frente a los costes adicionales generales relacionados con la discapacidad, lo que las arrastra más rápidamente a la pobreza. Desde el punto de vista de la salud, la interrupción de los servicios sanitarios significa que se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a los mismos, lo que les expone a un mayor riesgo de contraer COVID-19 y otras enfermedades (ibid).

¹⁸ Fuente: Naciones Unidas (2020)

Personas que viven con el VIH

En 2019, había 25,2 millones de personas que viven con el VIH (PVVS) y 484.000 murieron por enfermedades relacionadas con el VIH en África, lo que representa el 68% y el 67% de los casos y muertes por VIH a nivel mundial, respectivamente (ONUSIDA, 2021). El número de personas que reciben terapia antirretroviral en África disminuyó de 12,9 millones en 2019 a 10,1 millones en 2020, lo que deja a otros 2,8 millones de pacientes seropositivos en riesgo. Se estima que habrá 534.000 muertes adicionales relacionadas con el VIH en 2020 con respecto a 2018 en el ASS como resultado de las interrupciones de los servicios de salud relacionadas con la COVID-19 (Fondo Mundial, 2021; OMS, 2021b).

La gran disminución de personas que se someten a las pruebas podría dar lugar a que las personas infectadas propaguen el VIH sin saberlo, aumentando las tasas de infección en África. Las personas que viven con el VIH también experimentan resultados más graves y tienen mayores comorbilidades a causa del COVID-19 que las personas que no viven con el VIH. Las mujeres jóvenes y otras poblaciones vulnerables están especialmente en riesgo.

Refugiados e inmigrantes

Los refugiados, los desplazados internos y los inmigrantes se han visto muy afectados por las devastadoras repercusiones socioeconómicas del COVID-19. La pandemia ha agravado los problemas monetarios a los que se enfrentan diariamente los refugiados y los desplazados internos. Los confinamientos totales o parciales han impedido a los refugiados y a los desplazados internos obtener sus ingresos diarios, especialmente porque muchos no tienen empleos estables. Aunque los refugiados tienen derecho a trabajar según el derecho internacional, la mitad de ellos no pueden hacerlo en su país de refugio y el COVID-19 ha agravado esta situación.

Los ODS en África y las siete aspiraciones de la Agenda 2063

En 2019, África ya se enfrentaba a importantes retos para alcanzar los ODS y las aspiraciones de la Agenda 2063. Dadas las inmensas consecuencias de la crisis, como indican los múltiples impactos humanos en África, los obstáculos serán mucho mayores. Se estima que sin un sólido impulso a los ODS, acompañado de un elevado compromiso e inversión, el ODS-1 (No a la pobreza) y el ODS-2 (Hambre cero) no se alcanzarán en África. Otros ODS también requerirán una atención significativa, ya que se encuentran entre los más afectados por la crisis, a saber, el ODS-3 (Salud), el ODS-4 (Educación), el ODS-5 (Igualdad de género) y el ODS-8 (Trabajo decente).

FIGURA 2.8: Resumen de los impactos del COVID-19 sobre los ODS en África¹⁹

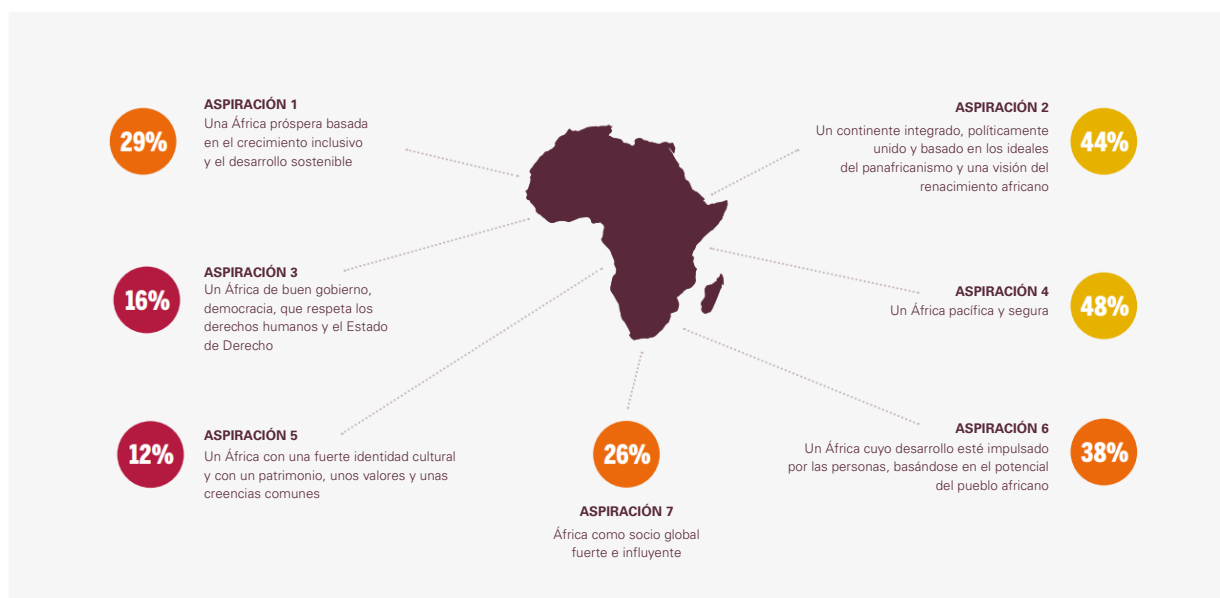


Al mismo tiempo, ha habido algunos resultados positivos inesperados de la crisis, como el ODS-7 sobre energía asequible y limpia, el ODS-12 sobre consumo responsable y el ODS-15 sobre la vida en la tierra, debido a la reducción de la presión sobre el medio ambiente.

Según la UA, el continente ha hecho algunos progresos en la consecución de las siete aspiraciones de la Agenda 2063, con una puntuación global del 32% (CUA 2022). El gráfico 2.9, que se muestra a continuación, ofrece una instantánea de los progresos realizados por África en sus compromisos de la Agenda 2063. Se registraron resultados débiles en las aspiraciones 1, 3, 5 y 7. Se registró una puntuación del 16% en los esfuerzos del continente para hacer realidad su aspiración 1 en relación con la buena gobernanza, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la justicia y el Estado de Derecho, a la luz de los objetivos de 2019. Los resultados del continente en cuanto a la promoción de una fuerte identidad cultural, patrimonio común, valores y ética también registraron la puntuación más baja, un 12%, en relación con los objetivos de 2019. A la luz de estos débiles resultados, el COVID-19 amenaza aún más la consecución de las aspiraciones de la Agenda 2063 y sus objetivos conexos.

¹⁹Construido con datos del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para África y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (2020)

Figura 2.8: Progreso de la implementación de la Agenda 2063 - A nivel de aspiraciones



Resultados económicos

Comercio. La balanza comercial total de África (mercancías y servicios) ha sido negativa, y está aumentando rápidamente hasta alcanzar un máximo de 191.630 millones de dólares en 2020, es decir, más de un 10% por encima de la línea de base de 2019. Del mismo modo, la relación entre importaciones y exportaciones está disminuyendo en el caso de África; en 2018 fue de 0,81, en 2019 disminuyó a 0,77 y después, durante el COVID-19, se redujo drásticamente a 0,70 en 2020. Muchos países africanos no son autosuficientes en la producción de alimentos y la malnutrición está muy extendida. Estos países dependen de las importaciones para una parte considerable de su consumo de alimentos. En esta situación, la restricción de los flujos de alimentos durante el COVID-19 tuvo un efecto adverso en la seguridad alimentaria, como se ha puesto de manifiesto en los impactos humanos.

Agricultura. La agricultura es el sector más crítico de la economía africana, pero al mismo tiempo la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema importante y continuo para las poblaciones urbanas y rurales vulnerables de la mayoría de los países. Los impactos en la agricultura incluyen:

- **Producción de cereales:** La tasa de crecimiento de la producción agregada de cereales en África se estimó en un 6,8% en 2020 y se pronosticó en un 1,9% en 2021. Esto ha sido el resultado del efecto combinado de muchos factores adversos, como las precipitaciones, las infestaciones de langostas y otras plagas, la seguridad, las condiciones económicas generales y las restricciones relacionadas con la pandemia COVID-19 (FAO, 2021).
- **Ganado:** Las encuestas de campo disponibles indican una caída en el número de animales que poseen los hogares en 2020 debido a la venta desesperada de animales y a otros mecanismos perjudiciales para hacer frente a la situación. La pandemia en África ha impactado en el sector ganadero en general, así como en los hogares de pastores y en las mujeres microempresarias que constituyen la mayoría de los productores de leche en el continente.
- **Pesca:** Las limitadas pruebas disponibles indican que las medidas de control del COVID-19, tales como la reducción de la capacidad de las embarcaciones y el cierre parcial de los muelles y restaurantes, afectaron al sector de la pesca y la acuicultura en los países africanos productores de pescado seleccionados. Estas medidas supusieron una pérdida de ingresos para los pescadores y otras personas que dependen del sector.

También se observaron resultados negativos en el procesamiento de alimentos, el empleo en el sector agrícola y alimentario, la comercialización de productos agrícolas y alimentarios, los precios de los alimentos, los ingresos agrícolas y los productos agrícolas importados.

Microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). El camino hacia la recuperación resiliente de África está estrechamente ligado a la salud del sector privado, en particular de las MIPYMES, que representan el 90% de las empresas del continente y emplean a cerca del 60% de los trabajadores. Muchas PYME de África operan en sectores que se han visto muy afectados por la pandemia. El comercio mayorista y minorista, la construcción, la reparación de vehículos de motor y motocicletas, la industria manufacturera, el sector inmobiliario, las actividades empresariales y administrativas y los servicios de alojamiento y alimentación fueron identificados como los sectores más vulnerables a las perturbaciones del COVID-19. En general, muchas MIPYMES experimentaron problemas de liquidez, escasez en la cadena de suministro e incapacidad para acceder a créditos, todo lo cual limitó su capacidad para mantener sus operaciones. Aunque muchas de estas MIPYMES han reabierto sus puertas tras el cierre, los datos que van apareciendo muestran que un mayor número de empresas propiedad de mujeres están tardando más en reabrir o han cerrado definitivamente.

Empleo. El COVID-19 ha tenido un efecto dramático en la vida y los medios de subsistencia de las personas. Desde el punto de vista del mercado laboral, las medidas de contención, los frenos a la actividad económica y las restricciones a los viajes han tenido un efecto adverso en la cantidad de puestos de trabajo (pérdida de empleos, desempleo) y en la calidad del trabajo (horas de trabajo, salario e ingresos y acceso a la protección social). El impacto de la pandemia varió considerablemente entre los distintos grupos de personas, recayendo de forma desproporcionada en aquellos que ya eran más vulnerables a las crisis, como los trabajadores informales, las mujeres y los jóvenes (OIT, 2020). En África, la pérdida total de horas de trabajo se estimó en un 15,6 por ciento, o 60 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (ETC) en el segundo trimestre de 2020, y en un 11,5 por ciento, o 43 millones de ETC, en el tercer trimestre de 2020. Las pérdidas de horas de trabajo implican en la práctica una pérdida de ingresos laborales que registraron una caída del 10,7 por ciento en África durante los tres primeros trimestres de 2020 en comparación con el periodo correspondiente de 2019.

El empleo informal oscila entre el 40 por ciento en el sur de África y más del 90 por ciento en el centro, este y oeste de África, que en su mayoría tiene un mayor empleo agrícola. El empleo informal también es mucho más alto para las mujeres, pues representa el 80 por ciento del empleo total de las mujeres, en comparación con menos del 70 por ciento de los hombres. Un mayor número de personas que trabajan en la economía informal significa que son vulnerables a la pobreza, el hambre y las enfermedades, y que carecen de acceso a la cobertura de la protección social y a los mecanismos de apoyo si pierden su medio de vida. Los confinamientos y las restricciones a la movilidad han afectado especialmente a los trabajadores de la economía informal, tales como los comerciantes transfronterizos, los recicladores de residuos, los vendedores ambulantes, los trabajadores migrantes, los trabajadores del transporte, los trabajadores de la construcción, los trabajadores domésticos y los pequeños comerciantes. Las desigualdades de género y la demanda de ciertos tipos de trabajo hacen que las mujeres tengan que enfrentarse a dificultades para volver a poner en marcha sus empresas debido al limitado acceso a recursos como el crédito y la información.

Respuestas de recuperación inicial. Los trabajos iniciales de recuperación en África están diseñados principalmente para reforzar el sector de la salud, hacer frente a los impactos humanos y estimular la economía. Prácticamente todos los países de la región (96%) realizaron inversiones especiales y asignaron presupuestos adicionales para ampliar la capacidad del sector de la salud de responder y prevenir el COVID-19. Sólo dos países (Eritrea y Sudán del Sur) no emprendieron aparentemente ninguna medida especial para el sector sanitario. Las medidas más comunes de apoyo a los hogares fueron las transferencias de efectivo y los préstamos a bajo interés para grupos de bajos ingresos y otros grupos vulnerables (61% de todos los países) y la asistencia alimentaria y en especie para los grupos vulnerables (31%). El 24% de los países concedieron impuestos diferidos y otros pagos a los hogares y proporcionaron subvenciones para el pago de servicios públicos (agua y electricidad). Los enfoques más comunes para apoyar al sector privado fueron: la concesión de pagos de impuestos reducidos o diferidos (50 por ciento de todos los países); la concesión de créditos y otras ayudas a las MIPYMES, las empresas informales y los trabajadores autónomos (41 por ciento); la oferta de garantías de préstamos y préstamos subvencionados (39 por ciento); y la movilización de ayudas sectoriales específicas, especialmente para la agricultura, el turismo y/o el transporte (37 por ciento).

Las medidas generales más comunes que beneficiaron al sector sanitario, a los hogares y al sector privado fueron: facilitar la importación de bienes esenciales mediante la reducción de tasas, derechos e IVA y/o la aceleración del proceso de importación; y garantizar el suministro de bienes esenciales mediante la creación de reservas de productos básicos y de consumo, la suspensión del IVA en la producción y venta de bienes básicos y/o el control de precios (22%). Catorce países (Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía, Guinea, Kenia, Malí, Níger, Ruanda, Sudáfrica, Togo, Túnez y Zimbabue) adoptaron medidas integrales (seis o más intervenciones que abarcan las cuatro categorías). Siete estados frágiles/afectados por conflictos no tenían medidas identificadas (por ejemplo, Eritrea y Sudán del Sur), sólo apoyo al sector sanitario (Libia) o sólo una medida más allá del apoyo al sector sanitario (Angola, República del Congo, Liberia y Sudán).

Efectos transversales

Protección social²⁰. Los sistemas de protección social se expandieron rápidamente por toda África en las dos primeras décadas del siglo XXI (PNUD, 2019). Esto permitió a muchos países utilizar las políticas, los programas y las plataformas de protección social existentes (por ejemplo, el registro de beneficiarios y los mecanismos de entrega de pagos) en sus respuestas políticas al COVID-19. La protección social "sensible a la crisis" fusiona la ayuda humanitaria a corto plazo y las modalidades de protección social a largo plazo. Las personas afectadas por el COVID, como las que perdieron sus medios de subsistencia durante los confinamientos, se registraron como beneficiarios adicionales en los programas nacionales de transferencia de efectivo, y muchos beneficiarios preinscritos recibieron pagos complementarios mientras duró el confinamiento (Gentilini et al., 2021). Así pues, la protección social demostró su valor durante 2020, pero la pandemia también puso de manifiesto sus limitaciones. Los países con sistemas menos desarrollados estaban mal preparados y tuvieron dificultades para poner en marcha respuestas rápidas y eficaces a las dificultades desencadenadas por el COVID-19. Incluso los países con sistemas bastante completos tuvieron que esforzarse por cubrir las lagunas existentes, en particular la falta de cobertura de la población trabajadora mal pagada y empleada de manera informal, que no tiene acceso ni a la asistencia social ni al seguro social (Devereux, 2021). También es difícil determinar el impacto en la desigualdad de género, ya que la mayoría de las intervenciones de protección social se dirigen a los hogares o a los cabezas de familia.

A nivel regional, hubo una gran variación en la forma en que se desplegó la protección social. Por ejemplo, los planes de asistencia social han proliferado en África oriental en los últimos años. Esto ha permitido que 12 de 13 países -todos excepto Eritrea- entregaran transferencias de dinero en efectivo y/o ayuda alimentaria a sus poblaciones afectadas por el COVID-19 en 2020, utilizando los programas existentes cuando fue posible o lanzando nuevos programas utilizando plataformas y experiencias establecidas. Alrededor de la mitad de los gobiernos de esta región también cubrieron los salarios de los trabajadores durante algunos meses, mientras estaban de permiso especial. La seguridad alimentaria es una preocupación constante en esta región, y varias intervenciones tuvieron como objetivo garantizar un suministro estable y asequible de alimentos básicos durante el periodo de crisis, a pesar de las interrupciones en los sistemas alimentarios.

Al igual que en África oriental, la mayoría de los gobiernos de África meridional utilizaron las transferencias de efectivo como principal vehículo para la entrega de complementos a los ingresos durante los confinamientos del COVID-19. Algunos también entregaron paquetes de alimentos. Estas intervenciones fueron a menudo extensas, llegando a una cuarta parte de la población (Eswatini), hasta 11 millones de empresarios y empleados (Sudáfrica), o a todos los hogares urbanos (Zimbabue). Además, algunos gobiernos contribuyeron a los costes salariales de los trabajadores en sectores comprometidos por las restricciones del COVID-19, como el transporte y el turismo. Los trabajadores informales sólo estaban cubiertos por estas disposiciones en unos pocos casos. Como es habitual en toda África, se fomentó la digitalización mediante la reducción de las tarifas de las transacciones financieras por parte de los bancos, las compañías telefónicas y los operadores de dinero móvil. La seguridad alimentaria se protegió apoyando la producción de alimentos con insumos agrícolas subvencionados y reduciendo los impuestos y aranceles sobre los alimentos.

²⁰Análisis basado en datos de la OIT 2021, el FMI 2021, el PNUD y ONU Mujeres 2021; Gentilini et 2021)

Las transferencias de efectivo dominaron la respuesta de protección social de África Occidental al COVID-19 (14 de 15 países), especialmente dirigidas a los trabajadores informales de sectores vulnerables como el turismo, seguidas de la ayuda alimentaria y las subvenciones a los servicios públicos (en ambos casos, 9 de 15 países). Las intervenciones políticas más populares en esta región fueron facilitar los pagos electrónicos y controlar la inflación de los precios de los alimentos.

A diferencia de otras regiones africanas, la respuesta de política social al COVID-19 en África Central estuvo dominada por la ayuda alimentaria más que por las transferencias de efectivo, ya que pocos países de esta región contaban con programas de transferencia de efectivo. La ayuda financiera indirecta se prestó en forma de servicios públicos gratuitos o subvencionados en varios países, y de aplazamiento del pago de las cotizaciones a la seguridad social. Tres gobiernos del norte de África respondieron de forma amplia al COVID-19 (Argelia, Egipto y Marruecos) y tres respondieron de forma limitada, a menudo con el apoyo de donantes (Libia, Mauritania y Túnez). Las transferencias de efectivo fueron el mecanismo más utilizado, seguido de la ayuda alimentaria y las medidas de seguridad alimentaria.

Remesas de dinero: Se observó un crecimiento de las remesas en 2020 en todo el continente, excepto en Nigeria. Hubo un descenso del 27,7 por ciento en los flujos de remesas a Nigeria (de 23.800 millones de dólares en 2019 a 17.200 millones en 2020), que por sí solo representó más del 40 por ciento de los flujos de remesas a la región. Sin embargo, excluyendo a Nigeria, los flujos de remesas hacia África Occidental, Central, Oriental y Meridional aumentaron un 2,3 por ciento, lo que demuestra la resiliencia en un momento de crisis. Además, también se observó un crecimiento de las remesas en el norte de África. Las remesas a Egipto alcanzaron un récord de 29.600 millones de dólares en 2020, aumentando por quinto año consecutivo. Las remesas a Marruecos aumentaron un 6,5% hasta los 7.400 millones de dólares, mientras que Túnez también registró un crecimiento del 2,5% en las remesas (Ratha et al., 2021).

La gobernanza y el Estado de Derecho. La pandemia ha tenido un impacto discernible en la gobernanza y la construcción de la paz en África y, yendo más allá de la crisis, es necesario examinar las oportunidades de recuperación tras la misma. Un análisis del impacto de las medidas de contención del COVID-19, adoptadas en la fase inicial del brote en 2020 por los países africanos, sobre tres cuestiones que afectan directamente a la gobernanza –elecciones, procesos parlamentarios e instituciones de rendición de cuentas públicas– concluyó que “las medidas impusieron restricciones operativas a las instituciones de los sectores público y privado, a los grupos y a los individuos que se ven cada vez más marginados en su relación” con el gobierno. Otros problemas de gobernanza son la escasa coordinación dentro y fuera de las fronteras, la escasa cobertura de datos sobre los resultados sanitarios en África y la fragilidad institucional de algunos países, que alimenta más conflictos y aumenta la inestabilidad. El negacionismo de la pandemia del COVID-19 al más alto nivel de los gobiernos nacionales y subnacionales de algunos países dificultó el fomento de las medidas de restricción y vacunación. En varios casos, el acceso a la justicia y la eficacia del poder judicial se vieron obstaculizados por las restricciones impuestas en respuesta al COVID-19. Además, algunos países experimentaron un aumento de las tasas de delincuencia asociado al declive económico y a la ausencia de medidas de seguridad adecuadas. El COVID-19 también ha retrasado el progreso en la aplicación de las reformas en algunos países y está inhibiendo la eficacia de los gobiernos en toda la región.

Género: El COVID-19 ha profundizado las desigualdades de género preexistentes en la región, lo que ha provocado un impacto diferencial para hombres y mujeres y ha tenido consecuencias desproporcionadamente negativas para las mujeres. Según el Informe Global de la Brecha de Género, ésta se ha ampliado en un 1% durante el COVID-19, pasando del 31,8% en 2020 al 32,8% en 2021 (WEF, 2020; 2021). Las mayores pérdidas se han producido en los logros educativos y en la participación económica de las mujeres. El informe sugiere que, al ritmo actual, se necesitarán 121,7 años para cerrar la brecha de género en África. Los datos disponibles indican que las mujeres están experimentando un aumento de la pobreza, un menor acceso a los alimentos, menores ingresos y una mayor pérdida de empleos, incluidos los del sector informal. La carga del trabajo de cuidados no remunerado ha aumentado, y las mujeres tienen mayores riesgos en la educación, la salud y la violencia de género. Y lo que es más importante, la pandemia está desafiando la autonomía y la capacidad de las mujeres para recuperarse de la pandemia. La vulnerabilidad de las niñas también ha aumentado debido al cierre de las escuelas, lo que ha provocado el abandono escolar, el aumento de la incidencia de los embarazos en la adolescencia, la violencia de género y el matrimonio infantil precoz. Es probable que estos factores limiten considerablemente las opciones de vida de las niñas en su edad adulta.

Reducción del riesgo de desastre: El COVID-19 es una catástrofe. Por lo tanto, debe analizarse a través de una lente multirriesgo e integrada para crear resiliencia. Debemos aprender de esta catástrofe para reforzar y reformar nuestro enfoque de la gestión de este tipo de fenómenos con el fin de informar mejor el desarrollo. De los dos años de gestión de la pandemia se pueden extraer las siguientes enseñanzas iniciales:

- **Los líderes africanos adoptaron una voz rápida, coherente y unificada:** a alto nivel desde el inicio de la crisis para comunicar a las comunidades africanas la gravedad de la pandemia y la necesidad de adoptar medidas tempranas. Esto se complementó con un rápido despliegue de las redes de seguridad social, así como con un asesoramiento técnico consistente proporcionado a través del Centro Africano para el Control de Enfermedades (CDC).
- **Impacto agravado de otras crisis:** Los países africanos se han visto afectados por otras situaciones de desastre y crisis durante los dos últimos años. Además, la inseguridad alimentaria, la variabilidad y el cambio climático, la invasión de langostas y la degradación medioambiental siguen causando muchos estragos en todo el continente en plena pandemia. Algunos ejemplos ya se han mencionado anteriormente en el informe.
- **Exacerbación de las vulnerabilidades existentes, pero también creación de nuevas vulnerabilidades ante otros peligros:** La sección de impactos económicos y humanos de este informe ya destaca los diferentes elementos de este aumento de la vulnerabilidad. Además, la reducción de las actividades económicas en los países africanos de bajos ingresos y frágiles supone una reducción de los ingresos y del presupuesto para invertir en la reducción de riesgos y en otras acciones de refuerzo de la resiliencia en toda África. Por lo tanto, la población es mucho más vulnerable a otras catástrofes o crisis que ya están ocurriendo o que puedan ocurrir en el futuro. Por último, esto ha contribuido a la desestabilización de países y regiones de África que ya de por sí son frágiles, además de exponer a una población cada vez más frágil a grupos violentos.
- **Mecanismos de respuesta:** En algunos casos, se desplegaron sistemas de gestión de catástrofes que proporcionaron aprendizaje/experiencia para gestionar el COVID-19. Debido a la propia naturaleza de la pandemia y a que también fue identificada por los gobiernos y las organizaciones internacionales como una "crisis sanitaria", estos sistemas se crearon a menudo específicamente para la pandemia o se apoyaron principalmente en el Ministerio de Sanidad. La pandemia ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos existentes para la gestión del riesgo de catástrofes (GRD), para comprender y anticipar las complejas repercusiones de una catástrofe de este tipo en diversos sectores y, por tanto, para adoptar un enfoque multisectorial e incluso multipeligros para hacer frente a los impactos compuestos y en cascada del COVID-19 y de las demás catástrofes que han afectado a los países simultáneamente.
- **Los sistemas y herramientas de respuesta a las catástrofes siguen siendo reactivos, incapaces de anticiparse totalmente a los peligros y de aprender de los acontecimientos pasados:** Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) son particularmente interesantes en ese aspecto, ya que se supone que proporcionan un análisis clave para tomar decisiones para anticiparse y responder a los desastres. A pesar del trabajo realizado para reforzar estos sistemas a nivel nacional y regional, siguen abordando los riesgos individualmente y no de forma coherente a través de un enfoque integrado y multipeligros y proporcionando información para las medidas reactivas. En el caso del COVID-19, sólo informaron de las acciones reactivas (cuarentena, bloqueo, pruebas, cierre de fronteras, etc.) y no de las anticipatorias. Para que los sectores puedan tomar decisiones críticas anticipándose a los posibles impactos y comprendiendo los efectos compuestos de las catástrofes concurrentes y en cascada sobre sus sectores y el sistema o sistemas de los que forman parte. El COVID-19 ha demostrado la importancia de contar con un Sistema de Alerta Temprana Multipeligro (MHEWS) capaz de abordar todos los diferentes riesgos que afectan a los países y de comprender sus complejos efectos.
- **La pandemia del COVID-19 también está proporcionando algunas enseñanzas sobre la necesidad de reformar los enfoques generales de respuesta y gestión de catástrofes:** Varios países de África han ido mejorando sus mecanismos de coordinación de una oleada a otra. En Zambia, el Gobierno aprendió de la primera oleada y de los problemas de coordinación entre la Unidad de Gestión y Mitigación de Desastres (DMMU), ubicada en la Oficina del Primer Ministro, y el Ministerio de Salud para lo que se definió como una "crisis sanitaria" para coordinar

mejor la respuesta al COVID-19. Mejoraron su mecanismo de coordinación al desarrollar conjuntamente el Plan Multisectorial de Respuesta y Preparación para Contingencias COVID-19 en enero de 2021. En este plan se establece un mecanismo de coordinación basado en la Ley de Gestión de Catástrofes con funciones y responsabilidades más claras, especialmente para la DMMU y el Ministerio de Sanidad. El DMMU se convirtió en el líder de la coordinación nacional y multisectorial, mientras que el "Comité de Secretarios Permanentes para la Preparación y Respuesta a Epidemias" se encarga de las actividades de respuesta sanitaria.

- **Los sistemas y enfoques actuales aún no están totalmente calibrados para abordar las causas fundamentales de todos los riesgos:** A pesar de décadas de trabajo en prevención y preparación²¹, las repercusiones económicas y no económicas de las catástrofes van en aumento, y África sigue siendo uno de los continentes más afectados, al tiempo que lucha por mantener las inversiones en desarrollo. El COVID-19 no ha hecho más que revelar a un nivel superior nuestra incapacidad para reducir adecuadamente las vulnerabilidades subyacentes que están en la raíz de los riesgos de desastre. Pero lo que es más importante, ha puesto de manifiesto que la RRD y el desarrollo se abordan a menudo independientemente a través de diferentes instituciones, procesos de toma de decisiones, mecanismos y horizontes temporales.

Migración. Las medidas de control aplicadas desde el inicio de la pandemia del COVID-19 han tenido un impacto sin precedentes en la movilidad humana, afectando a la vida de las sociedades en general y, en particular, de las comunidades que dependen de la movilidad para su subsistencia. En África, se ha producido una reducción general de la emigración y un aumento del retorno de los emigrantes. Hay variaciones regionales de esta dinámica en las regiones más afectadas por la migración: África Oriental, África del Norte y África Occidental. El retorno de los emigrantes, y la reducción de los flujos de remesas, también han tenido impactos localizados en la economía y los medios de vida.

Muchos inmigrantes trabajan en mercados informales, tienen familiares que dependen de las remesas y no tienen derecho a las ayudas económicas del Estado. Los inmigrantes se encuentran potencialmente en una situación más vulnerable en el mercado laboral debido a que sus condiciones de empleo suelen ser menos estables y a su menor antigüedad en el puesto de trabajo. Los estudios también sugieren que la discriminación aumenta fuertemente en épocas de escasez en el mercado laboral. En el sur de África, los inmigrantes económicos de Zimbabue, Malawi y Mozambique perdieron sus empleos y se quedaron a la deriva en Sudáfrica, lo que obligó a los gobiernos de estos países a repatriar a sus ciudadanos. En el caso de África Occidental, datos anecdóticos indican que muchos de los países de destino más populares han reducido el número de visados expedidos a los africanos occidentales, y en algunos casos sólo se permiten los viajes imprescindibles. Al mismo tiempo, muchos de los planes de migración a través de los cuales se contrata a los africanos occidentales para colocarlos en algunas de las regiones de destino emergentes, como los países del Golfo, se han suspendido como consecuencia de la pandemia.

Impactos medioambientales. La reducción de las actividades económicas y de la movilidad de las personas ha dado lugar a una mejora de la calidad del aire, de la limpieza del agua y de las playas en algunos países y regiones del mundo. Especialmente a largo plazo (hasta 2040), se espera que los países africanos presenten mayores reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en el consumo de materiales que muchas otras regiones, y reducciones más modestas en las emisiones de partículas finales y en la superficie cosechada en comparación con sus trayectorias anteriores al COVID-19. Sin embargo, también hay impactos ambientales negativos relacionados con la gestión de residuos, el control de la contaminación industrial, el uso de la tierra, la biodiversidad/áreas protegidas, los medios de vida basados en los recursos naturales, la respuesta humanitaria y los esfuerzos regulatorios.

Impactos psicosociales. Los expertos en salud mental sugieren que la salud mental de las comunidades es preocupante durante la pandemia. La ansiedad puede aumentar por el miedo a contraer el virus y la incertidumbre debida a la escasa información procedente de los gobiernos y los medios de comunicación. Los cierres prolongados, los toques de queda y la pérdida de oportunidades de trabajo están afectando a los medios de vida económicos de muchas personas, lo que influye en su salud mental.

²¹A paper prepared by UNDRR for the 2002 World Summit on Sustainable Development (Natural Disasters and Sustainable Development: Understanding the Links between Development, Environment, and Natural Disasters) already alerted that disaster losses would continue to increase if actors and societies did not shift towards proactive solutions, and that reducing disaster impacts should be part of sustainable development agendas.

Además, el impacto psicosocial del COVID-19 en los niños no está bien investigado y, por lo tanto, se entiende menos. El posible aumento de las personas que necesitan servicios de salud mental también es motivo de preocupación, ya que muchos países africanos carecen de los recursos humanos necesarios para atender el aumento de la demanda de personas que necesitan asistencia de este tipo. En una encuesta realizada en países africanos, los expertos en salud mental señalaron que ésta no era una prioridad durante la pandemia. Los recursos, ya sobrecargados, se vieron sometidos a una presión adicional debido al aumento de las necesidades de salud mental de los países durante esta crisis. A pesar de la falta de atención a las necesidades de salud mental, algunos países africanos han puesto en marcha algunas medidas para satisfacer estas necesidades.

Impactos basados en el tipo de país

Exportadores de materias primas. El impacto económico del choque inducido por el COVID-19 se hizo sentir visiblemente en muchas economías africanas productoras de petróleo y de materias primas. Por ejemplo, en 2019 África exportó más de 7,9 millones de barriles diarios, lo que supone el 9,6% de la producción mundial (Carpenter, 2020). En el primer trimestre de 2020, los precios del petróleo cayeron un 50% (OCDE, 2020). A raíz del COVID-19, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA) estima una pérdida mínima de 65.000 millones de dólares en ingresos por combustible para África (CEPA, 2020). Los precios del combustible cayeron drásticamente durante la pandemia de 2020, alcanzando un precio medio mínimo de 32 dólares por barril en abril de 2020, lo que afectó en gran medida a países exportadores de combustible como Angola y Nigeria. Economías como Sudán del Sur, Chad, Libia, Nigeria y Guinea Ecuatorial experimentaron caídas de los ingresos por exportación superiores al 20% en 2020 con respecto al año anterior como consecuencia del impacto de la pandemia sobre los productos básicos, especialmente la caída del precio del petróleo. Aunque los precios se recuperaron en 2021, la consiguiente aceleración de los ingresos alimentó las presiones inflacionistas mencionadas anteriormente.

Entre los exportadores de petróleo, también se espera que las presiones inflacionistas sigan siendo elevadas para los dos mayores exportadores del continente: Angola y Nigeria. En Angola, tras subir al 25,1% interanual en diciembre de 2020, la tasa de inflación del país se redujo al 24,4% en enero de 2021, antes de subir al 24,8% en febrero; el menor ritmo de depreciación de la moneda al aumentar los precios del petróleo contribuyó a aliviar las presiones sobre la balanza de pagos, de ahí la escasa diferencia entre enero y febrero. En Nigeria, después de aumentar a lo largo de 2020, la inflación se aceleró del 15,7 por ciento interanual en diciembre de 2020 al 17,3 por ciento en febrero de 2021, su nivel más alto desde abril de 2017. El aumento de los precios de los alimentos persistió debido a que la pandemia y la inseguridad continuaron interrumpiendo la cadena de suministro de alimentos, mientras que la debilidad de la moneda y las restricciones de divisas añadieron presiones al alza sobre los precios de los alimentos importados.

En cuanto a los países exportadores de metales, se estima que la inflación seguirá siendo elevada en países como Zambia, Sierra Leona y la República Democrática del Congo. En Zambia, la inflación aumentó del 21,5% interanual en enero al 22,1% en febrero de 2021, impulsada por la subida de los precios de los alimentos y el aumento del coste de las importaciones debido a la continua depreciación de la moneda.

Países dependientes del turismo. En 2019, el continente africano tuvo el segundo sector turístico de más rápido crecimiento del mundo. Hasta 70 millones de turistas internacionales visitaron África y los viajes y el turismo aportaron unos 170.000 millones de dólares al PIB del continente. En Tanzania y Ruanda el turismo contribuye el 17,1% y el 10,0% de sus respectivos PIB. Sin embargo, la pandemia tuvo un efecto devastador en el sector. Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), en 2020 viajaron mil millones menos de turistas internacionales en todo el mundo y África registró una caída del 74% en las llegadas de turistas internacionales y un descenso del 64% en las exportaciones relacionadas con el turismo. El COVID-19 también tuvo un impacto secundario en los empleos del sector turístico.

Sólo en la Comunidad de África Oriental, se estima que los puestos de trabajo en el sector del turismo se redujeron de 4,1 millones de empleos a 2,2 millones en 2020 (AERC, 2021).

Estados frágiles y afectados por conflictos. Es probable que los conflictos u otras formas de violencia armada aumenten en partes de la República Centroafricana, el Sahel Central, Etiopía, el norte

de Nigeria, el norte de Mozambique, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. Aquí, la violencia empeorará la inseguridad alimentaria como consecuencia de nuevos desplazamientos, interrupción del comercio y de los cultivos, movimientos de población, confinamiento de las comunidades, abandono de las tierras agrícolas y pérdida de vidas y bienes, al tiempo que afectará al acceso a la ayuda humanitaria.

Los refugiados que huyen de los conflictos y la inestabilidad política se han vuelto más vulnerables durante la pandemia, ya que la disminución de la asistencia existente durante varios años se ha reducido aún más debido a la escasez de fondos y a la reordenación de las prioridades por parte de los países donantes. Según el ACNUR, los refugiados de al menos 11 países de la subregión (incluidos Etiopía, Uganda, Sudán del Sur, Kenia, Tanzania, Malawi y Zambia) han estado recibiendo raciones del 80% o menos del nivel mínimo requerido para satisfacer sus necesidades (ACNUR, 2020). La reordenación de los recursos debido a las exigencias del COVID-19 puede agravar aún más esta situación.

Las medidas iniciales de recuperación en los Estados frágiles y afectados por conflictos han sido mínimas o inexistentes. Siete Estados frágiles/afectados por conflictos no tenían: ninguna medida de recuperación inicial identificada (Eritrea y Sudán del Sur); sólo apoyo al sector sanitario (Libia); o sólo una medida más allá del apoyo al sector sanitario (Angola, República del Congo, Liberia y Sudán).

Países con inseguridad alimentaria. Entre los países africanos que corren el riesgo de sufrir un mayor deterioro de la seguridad alimentaria hay un grupo específico de países conflictivos que es especialmente preocupante debido a la escala, la gravedad y las tendencias de las crisis alimentarias existentes. En estos contextos frágiles, cualquier nueva perturbación podría empujar a un número importante de personas a la indigencia y el hambre. Estas emergencias requieren un acceso continuo -y en algunos casos mayor- a las poblaciones más vulnerables, junto con una ayuda humanitaria urgente y a escala para salvar vidas y medios de subsistencia. Los países especialmente en riesgo son:

- **Sudán del Sur:** las poblaciones de algunas zonas han caído en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda (fase 5 de la CIP), concretamente en partes del estado de Jonglei, en Sudán del Sur, donde se necesita ahora una acción urgente a escala para detener la probable inanición y muerte generalizadas, así como un colapso completo de las estrategias y los activos de los medios de vida agrícolas. En general, se prevé que la población en situación de crisis o peor (fase 3 de la CIP o superior) alcance los 7,2 millones de personas durante la temporada de escasez de abril a julio. Esto incluye 2,4 millones de personas en situación de emergencia (fase 4 de la CIP) y 108.000 personas en situación de catástrofe (fase 5 de la CIP).
- **Nigeria:** en las zonas afectadas por el conflicto en el norte, se prevé que para la temporada de carestía (junio-agosto de 2021) se produzca un nuevo y marcado deterioro, con personas en situación de inseguridad alimentaria aguda de emergencia (fase 4 de la CIP) que probablemente se dupliquen, aumentando a más de 1,2 millones. La mayoría de las personas con inseguridad alimentaria aguda se encuentra en el estado de Borno, donde algunas zonas pueden estar en riesgo de hambruna. En los próximos seis meses, se espera que el norte de Nigeria se enfrente a un marcado deterioro de la seguridad alimentaria y la nutrición, debido al conflicto y a factores económicos, agravados por los efectos secundarios del COVID-19. Se prevé que unos 13 millones de personas se encuentren en situación de alta inseguridad alimentaria aguda (fases 3 y 4 del CH) entre junio y agosto de 2021, si no se presta asistencia.
- **Etiopía:** el conflicto en Tigray está agravando aún más las preocupantes proyecciones de seguridad alimentaria que estiman que unos 2,6 millones se enfrentarán a niveles de Emergencia (Fase 4 de la CIP) entre enero y junio de 2021. Esto es el resultado de una combinación de conflicto, desafíos macroeconómicos, condiciones meteorológicas extremas y langostas del desierto.
- **Sudán:** una crisis económica en deterioro - agravada por los efectos socioeconómicos del COVID-19 - ha dado lugar a unos precios de los alimentos excepcionalmente altos. Junto con los posibles enfrentamientos entre comunidades, se espera que estos factores sigan impulsando los altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en el país, donde ya se estimó que 1,3 millones de personas estaban en situación de emergencia (fase 4 de la CIP) de octubre a diciembre de 2020.
- Además, **Zimbabue** y la República Centroafricana son también países preocupantes. En Zimbabue hay 3,4 millones de personas con alta inseguridad alimentaria aguda, mientras que en la RCA el número es de 2,3 millones.

Países que se enfrentan a múltiples riesgos. Más allá de la pandemia del COVID-19, muchos países africanos se vieron afectados por otras calamidades concurrentes y en cascada. En 2020, las inundaciones afectaron a más de 1,7 millones de personas en el Sahel. Desde principios de 2021, las inundaciones han afectado a 669.000 personas en África Occidental y Central. Más de 400.000 habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares tras la erupción del volcán Nyiragongo en la RDC. En África oriental y meridional, entre junio y octubre de 2020, al menos 3,6 millones de personas se vieron afectadas por inundaciones o corrimientos de tierra. En África Occidental se produjeron inundaciones y varios golpes de Estado. El sur de África se preparó y sigue preparándose contra los devastadores ciclones del océano Índico, mientras que el norte se enfrentó a incendios forestales en medio de la pandemia. La grave sequía también afecta actualmente a varios países del Cuerno de África, como Kenia, Somalia y Etiopía. En 2020 y 2021, África oriental experimentó la peor invasión de langostas de los últimos 70 años. El cambio climático es acumulativo y se suma a la complejidad de los resultados de los peligros naturales que desencadenan catástrofes, importantes pérdidas de vidas y medios de subsistencia y debilitan los ecosistemas y las sociedades vulnerables.

III. Medidas de recuperación

El capítulo III comienza esbozando los objetivos estratégicos que deben guiar las estrategias de recuperación. A continuación, se ofrece un menú de prioridades políticas y programáticas a corto, medio y largo plazo para su uso a nivel continental y, cuando es posible, a nivel regional y de agrupación de países. Esta orientación se ajusta en función de los peores, medianos y mejores escenarios. Las recomendaciones apoyan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de la Unión Africana.

Objetivos estratégicos

Las medidas de recuperación están diseñadas para alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:

- 6) Proteger la salud y el bienestar económico acelerando los programas de vacunación y apoyando las reformas en el sector sanitario;
- 7) Abordar los retos macroeconómicos que se han visto exacerbados por la pandemia, manteniendo las respuestas monetarias y fiscales, resolviendo los problemas de liquidez y deuda y ampliando la financiación internacional para el desarrollo en África;
- 8) Salvaguardar el desarrollo humano protegiendo contra la pobreza, previniendo la inseguridad alimentaria y el hambre, revirtiendo las privaciones en materia de salud y educación, sin dejar a nadie atrás, y adoptando un enfoque SDG Push para garantizar la consecución de los ODS para 2030;
- 9) Estimular la recuperación económica facilitando el comercio, abordando el desempleo juvenil y acelerando la digitalización de la economía; y
- 10) Abordar las cuestiones transversales para garantizar una recuperación inclusiva y resiliente, incluyendo la protección social, el género, la reducción del riesgo de desastres y la ecologización de la recuperación.

Prioridades continentales y regionales

Se trata de prioridades de muy alto nivel sobre las que la CUA y las CER pueden actuar y que deben aplicarse a nivel continental. También incluyen medidas que deberían ser adaptadas y adoptadas por la mayoría de los Estados africanos, independientemente de las diferencias regionales y de otro tipo. Las recomendaciones a corto plazo son para el periodo 2022-23. Las recomendaciones a medio y largo plazo están diseñadas para su aplicación hasta 2030 y están especialmente orientadas a la consecución de los ODS.

Medidas de recuperación inicial

Merece la pena señalar, sin embargo, que todos los gobiernos africanos emplearon diferentes medidas para acelerar la recuperación inicial de los impactos socioeconómicos del COVID-19. En África meridional, las medidas clave incluyeron el apoyo al sector sanitario (9 países); las transferencias de efectivo y los préstamos a bajo interés para grupos de bajos ingresos y otros grupos vulnerables (6 países); el aplazamiento de los impuestos y otros pagos (6 países); y el crédito y otras ayudas para las microempresas, las empresas informales y los trabajadores autónomos (5 países).

En África Occidental, las medidas iniciales de recuperación incluyeron: apoyo al sector de la salud (15 países); transferencias de efectivo y préstamos a bajo interés para los grupos de bajos ingresos y otros grupos vulnerables (10 países); alimentos y otras ayudas en especie para los grupos vulnerables (7 países); crédito y otras ayudas para las MIPYMES, las empresas informales y los trabajadores autónomos (7 países); garantías de préstamos y préstamos subvencionados (8 países); y apoyo sectorial específico (agricultura, turismo, transporte) (8 países).

En África Central, las medidas incluyeron: apoyo al sector sanitario (9 países); transferencias de efectivo y préstamos a bajo interés para los grupos de bajos ingresos y otros grupos vulnerables (6 países); y reducción o aplazamiento del pago de impuestos y tasas (7 países). Mientras que en África Oriental las medidas de recuperación inicial consistieron en el apoyo al sector sanitario (12 países); la reducción o el aplazamiento del pago de impuestos y tasas (7 países); y el apoyo a las importaciones críticas: reducción de tasas, derechos e IVA; aceleración del proceso de importación (7 países).

En el norte de África, las medidas iniciales de recuperación se extendieron al apoyo al sector sanitario (5 países); transferencias de efectivo y préstamos a bajo interés para los grupos de bajos ingresos y otros grupos vulnerables (6 países); aumento de las prestaciones por desempleo y/o programas específicos de dinero por trabajo (3 países); reducción o aplazamiento de los pagos de impuestos y tasas (3 países); crédito y otras ayudas para las PYME, las empresas informales y los trabajadores autónomos (3 países); y garantías de préstamos y préstamos subvencionados (3 países).

Salud

Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional muestran que si el COVID-19 tuviera un impacto prolongado a medio plazo, podría reducir el PIB mundial en un total de 5,3 billones de dólares durante los próximos cinco años en comparación con las proyecciones actuales. Según el FMI, la principal prioridad política es, por tanto, vacunar al menos al 40% de la población de todos los países para finales de 2021 y al 70% para mediados de 2022. Sin embargo, en el caso de África, sólo seis de los 54 países habían superado la marca del 40% de vacunación en diciembre de 2021. Por lo tanto, es necesario tomar medidas urgentes para mejorar la eficacia del programa de distribución de vacunas en todo el continente.

Además de lo anterior, el COVID-19 también ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios de todo el continente. La OMS declaró que el 40% de los países africanos informaron de interrupciones en los servicios de salud sexual, reproductiva, materna, de recién nacidos, de niños y de adolescentes debido a los confinamientos del COVID-19. Según la encuesta PULSE-3, el 91% de los países informaron de algún grado de interrupción en al menos uno de los servicios sanitarios esenciales (OMS, 2022). Por lo tanto, es urgente aumentar las inversiones que puedan invertir las tendencias actuales de privación de la salud. Lo anterior deberá ser apoyado con inversiones y reformas sostenidas en los sistemas de salud y seguridad con el fin de preparar mejor al continente para futuras pandemias y epidemias.

Las medidas de recuperación en el sector sanitario también tendrán que ser matizadas para que reflejen las diferencias regionales. Por ejemplo, el sur de África registró el mayor número de casos (4,7 millones) y de muertes (más de 117.000) por el COVID-19, lo que supone aproximadamente la mitad de los casos y de las muertes del continente. El norte de África registró el segundo mayor número de casos, mientras que África Central y Occidental fueron las que menos casos registraron en el continente.

El despliegue de los programas de vacunación avanza con lentitud, lo que provoca una profunda divergencia entre África y el resto del mundo. Con la excepción de África del Norte, el despliegue en África sigue siendo el más lento del mundo. Muchos trabajadores esenciales de primera línea siguen trabajando sin protección. África Central es la región más rezagada, donde menos del 8% de la población total (en diciembre de 2021) está totalmente vacunada. **Mejorar la eficacia del programa de despliegue** de la vacunación debería ser una **prioridad a corto plazo**. Al mismo tiempo, una encuesta realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África en 15 países africanos indicaba que la **población dudaba de las vacunas** (Africa CDC, 2020). Alrededor del 25% de los encuestados creía que una vacuna no era segura y el 18% creía que las vacunas en general no eran seguras. Las razones para rechazar la vacuna también incluían la creencia de que el COVID-19 no existe, o que su amenaza es exagerada. La desinformación que circula en los medios de comunicación también puede haber aumentado la desconfianza y las sospechas existentes en torno a las vacunas. Uno de los efectos de las dudas sobre las vacunas puede haber llevado a la caducidad de las dosis disponibles en algunos países²².

²²Por ejemplo, se informó de que más de un millón de dosis de vacunas habían caducado en Nigeria. <https://www.cbc.ca/news/health/nigeria-destroys-expired-covid-vaccines-1.6295131>

El Centro de Control de Enfermedades de África espera que los resultados del estudio COVID 19 Vaccine Perceptions: A 15 country study (Africa CDC, 2021) ayuden a orientar a la organización, a los Estados miembros y a los socios para optimizar la aceptación de las vacunas en el continente.

La falta de suministro de vacunas a África y la distribución desigual entre los países sigue siendo una preocupación crítica para el continente. Las dudas sobre las vacunas entre parte de la población también han ralentizado la tasa de vacunación. Sin una ayuda internacional significativa y por adelantado, y un esfuerzo eficaz de despliegue de la vacunación en toda la región, el futuro a corto plazo puede ser el de repetidas olas de infección como la originada por la variante Omicron. Esto se cobrará un precio cada vez mayor en vidas y medios de subsistencia de los más vulnerables de la región, al tiempo que paralizará la inversión, la productividad y el crecimiento. En concreto, a corto plazo, las mejoras requerirán un esfuerzo a nivel continental para:

- I. Abogar a nivel local, nacional e internacional por un acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19. Esto incluye aprovechar las iniciativas existentes y solicitar apoyo internacional para la adquisición y distribución de vacunas
- II. Establecer objetivos y planes nacionales actualizados para la vacuna contra el COVID-19 que definan los requisitos de dosis e identifiquen las necesidades de recursos financieros y programáticos
- III. Supervisar cuidadosamente la oferta, la demanda y la aceptación de las vacunas para mejorar la agilidad y la capacidad de adaptación según sea necesario para garantizar la continuidad de los servicios de inmunización
- IV. Mejorar las cadenas de suministro en el país y la distribución desde el nivel central al regional y local, prestando especial atención a la cadena de frío. Para ello será necesario mejorar las infraestructuras sanitarias y la formación del personal
- V. Reorganizar los sistemas sanitarios para mejorar la eficiencia de la prestación de servicios de inmunización
- VI. Reforzar el compromiso y la participación de la comunidad para mejorar la comunicación de los riesgos y fomentar la confianza en el sistema sanitario
- VII. Movilizar y empoderar a las comunidades, incluso a través de los medios de comunicación social y las redes comunitarias, para generar una fuerte demanda de vacunas y abordar la desinformación y las percepciones erróneas que contribuyen a la indecisión sobre las vacunas
- VIII. Supervisar e informar mensualmente sobre los progresos realizados en la consecución de los objetivos de vacunación del COVID-19

Como se ha señalado anteriormente, el COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios de todo el continente. A corto plazo hay que esforzarse por acelerar la reanudación de todos los servicios sanitarios esenciales para evitar un aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad en África, tales como las asociadas a la tuberculosis, el paludismo, el VIH-SIDA y la atención prenatal. A nivel regional, África oriental ha sido la región más afectada por las interrupciones en el diagnóstico, la detección y el tratamiento de la tuberculosis, que dejaron a casi 900.000 personas en peligro. En África Oriental también se encuentra el 46% de las personas que viven con el VIH en el continente y se enfrentan a enormes interrupciones en los servicios de prevención, pruebas y tratamiento del VIH-SIDA, lo que deja a 11,5 millones de personas en riesgo. El sur de África es la segunda región más afectada por la interrupción de los servicios de prevención, pruebas y tratamiento del VIH, que dejó a 8,86 millones de personas en peligro. Sólo en Sudáfrica viven 7,8 millones de personas seropositivas de la región, por lo que es un país muy preocupante. A corto plazo, es necesario revisar las modalidades de prestación de servicios y las plataformas para reanudar la prestación de servicios de prevención y tratamiento del VIH, con el fin de evitar el aumento de las tasas de infección y mortalidad asociadas al VIH-SIDA, especialmente para las mujeres jóvenes y las poblaciones clave.

Además, la interrupción de los servicios de inmunización infantil dejó a 17 y 12 millones de niños en África Occidental y Oriental, respectivamente, sin vacunar en la región y en riesgo de contraer difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, polio, paludismo y otras enfermedades prevenibles

África Occidental también tiene la mayor incidencia de paludismo (243 por cada 1.000 habitantes en riesgo). La disminución de los servicios de tratamiento del paludismo afectó a un número importante de personas en la región, especialmente niños, ya que la mayoría de las muertes por paludismo se producen en niños menores de cinco años.

A corto plazo, es importante evaluar y abordar los problemas de acceso a los servicios de tuberculosis, VIH-SIDA e inmunización de manera prioritaria y poner en marcha los servicios relacionados con la tuberculosis y el VIH-SIDA y las campañas de inmunización para niños menores de cinco años. Los gobiernos nacionales y sus socios deben dar prioridad a la reanudación de las campañas de inmunización y de divulgación para niños menores de cinco años para así prevenir el sarampión, el tétanos, la difteria, la tos ferina, la poliomielitis y otras enfermedades prevenibles. También es necesario ampliar los servicios de prevención y tratamiento de la malnutrición para evitar un mayor aumento de las muertes, retrasos en el crecimiento y trastornos en el desarrollo del cerebro. El trabajo de recuperación a corto plazo también debe dar prioridad al restablecimiento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas, al tiempo que se adoptan mecanismos sólidos para proteger a las mujeres y las jóvenes de la violencia de género y otras prácticas nocivas contra ellas. A medio y largo plazo, será necesario garantizar un acceso sin barreras a los servicios sanitarios de forma más general, reforzar los sistemas de información sanitaria e invertir en el personal del sector de la salud para ampliar la prestación de servicios sanitarios.

A largo plazo, las medidas de recuperación, deberán mejorar la prestación de atención sanitaria, incluida la salud mental y el apoyo psicológico, y los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) para los refugiados, los migrantes y los desplazados internos. También es importante garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria y a servicios adecuados de atención y tratamiento para las personas mayores, tales como servicios de salud mental, paliativos y geriátricos.

A medio y largo plazo, África necesita aumentar las capacidades sanitarias, construir infraestructuras hospitalarias y promover la fabricación de fármacos/vacunas/equipos. Es necesario formar a médicos, enfermeros, paramédicos y personal sanitario. Las recomendaciones son:

- I. Evaluar los progresos realizados en la consecución de los objetivos de vacunación del COVID-19 y, basándose en esta información y en cualquier otra prueba que surja, revisar los objetivos, las estrategias y las políticas de vacunación según sea necesario
- II. Abordar las cuestiones clave de investigación, política, seguridad y reglamentación que optimizarán el impacto de la vacuna, incluyendo el suministro efectivo, la dosificación y los calendarios de vacunación, la mezcla y combinación de productos, la protección contra las variantes y otras cuestiones.
- III. Invertir en instituciones de salud pública subnacionales, nacionales, regionales y panafricanas para crear capacidad técnica en el continente
- IV. Reforzar los sistemas de gestión de la información sanitaria y las plataformas de datos, asegurándose de que se adaptan al contexto. Esto también requerirá esfuerzos para mejorar la cantidad de datos, incluida la recopilación de datos desglosados, la cobertura, la calidad y la frecuencia, así como la capacidad de utilizar y gestionar los datos del sector sanitario
- V. Desarrollar y reforzar los sistemas de información sanitaria regionales y panafricanos, así como el intercambio de datos
- VI. Participar en asociaciones panafricanas y mundiales para ampliar la fabricación de vacunas en África, abogando por el apoyo internacional en materia de recursos técnicos, financieros y humanos
- VII. Reforzar las inversiones en ciencia, tecnología y matemáticas (STEM), en particular para las mujeres y las niñas, en la investigación, el desarrollo y la innovación, y fortalecer la capacidad de fabricación local de diagnósticos, vacunas y productos terapéuticos. Además, los gobiernos deben reducir las barreras a la innovación sanitaria y apoyar activamente a los investigadores y centros africanos dedicados a las ciencias.

- VIII. Aumentar las inversiones en la cadena de suministro y en la infraestructura de distribución a todos los niveles, para mejorar y racionalizar las redes existentes, que a menudo son complejas, fragmentadas y, por tanto, ineficaces
- IX. Invertir en el sistema de salud primaria y desarrollar la capacidad del personal comunitario para facilitar la participación de la comunidad en la planificación y la prestación de servicios sanitarios, y mejorar la prestación de servicios a nivel comunitario

Para apoyar las recomendaciones anteriores y aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas sanitarios, hay que centrarse en la aplicación de reformas que refuercen el sistema de salud, mejoren la cobertura sanitaria universal y garanticen que el sistema es capaz de satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población. En concreto, deben realizarse esfuerzos para 1) ampliar la cobertura sanitaria universal y garantizar el acceso a los servicios para todos sin riesgo de dificultades financieras; 2) optimizar y mejorar la eficiencia de la prestación de servicios sanitarios; 3) reforzar el sistema de atención primaria de salud; y 4) abordar las inequidades y desigualdades preexistentes.

A la hora de reforzar la **seguridad sanitaria**, los países africanos deben aprovechar la respuesta actual para reforzar la preparación ante futuras amenazas y los sistemas sanitarios para que sean resilientes, documentando las lecciones aprendidas. Esto debería complementarse con inversiones en funciones esenciales de salud pública, incluyendo las necesarias para la gestión de riesgos de emergencias de todo tipo, revisar y actualizar sus actuales estrategias y planes de preparación y respuesta ante emergencias y establecer estructuras y mecanismos de operaciones de emergencia para gestionar brotes de enfermedades, epidemias y pandemias. Los países africanos también deberían reforzar la vigilancia y los sistemas de datos e información para mejorar la planificación de emergencias y reforzar la capacidad de su personal sanitario comunitario para mejorar la vigilancia y apoyar la respuesta. La Unión Africana y las Comunidades Económicas Regionales también tienen un papel clave que desempeñar en el fortalecimiento de las capacidades regionales, nacionales y subnacionales de prevención, preparación, vigilancia y respuesta ante epidemias y pandemias; y en el establecimiento de asociaciones estratégicas y de estructuras de toma de decisiones subnacionales, nacionales y regionales claras e integradas para apoyar y coordinar la vigilancia, mejorar la preparación y aumentar la eficacia de la respuesta ante futuras emergencias.

Desafíos macroeconómicos

Desarrollar estrategias para mantener las respuestas monetarias y fiscales para la recuperación económica. A corto plazo, los responsables políticos deben mantener el apoyo fiscal y monetario hasta que se produzca la recuperación económica. Los responsables políticos deben contrarrestar el impacto de la pandemia con una gestión macroeconómica eficaz mediante políticas monetarias, fiscales y financieras adecuadas. Mientras los bancos centrales siguen impulsando la liquidez mediante la flexibilización de la política monetaria, las expectativas de inflación deben seguir siendo controladas para evitar cualquier inestabilidad que pueda empeorar el impacto económico adverso de la pandemia. Cuando se logre la recuperación, los gobiernos deberán desarrollar estrategias para restablecer la sostenibilidad de la deuda y del presupuesto. Si es necesario, los responsables políticos deben buscar apoyo internacional a través de subvenciones bilaterales y multilaterales y préstamos en condiciones favorables para apoyar el proceso de recuperación. Aunque es probable que estos programas de apoyo lleven a una mayor acumulación de deuda, los responsables políticos deben prepararse para la reestructuración y resolución de la deuda mediante la vigilancia macro prudencial para evitar el riesgo sistémico.

Mantener y ampliar las transferencias de efectivo. Como componente fundamental de los sistemas nacionales de protección social, las transferencias de efectivo deberían estar en el centro de los planes de respuesta a la crisis y de recuperación en África. Como está bien establecido, las transferencias de efectivo, especialmente los programas incondicionales, tendrán muchos impactos positivos directos e indirectos en el bienestar, incluyendo la seguridad alimentaria y un mejor acceso a los servicios esenciales. Pueden generar fuertes retornos económicos y sociales, incluyendo la prevención o minimización de la mayoría de los riesgos para el bienestar a los que se enfrentan los hogares pobres. Las transferencias de efectivo deben ser sensibles al género, teniendo en cuenta los desafíos de la

pérdida de ingresos exclusivos de las mujeres.

Por ejemplo, las mujeres gastan sus ingresos en los hijos y en los gastos del hogar. Para responder a esta realidad, podría establecerse un sistema dual de transferencias de efectivo, uno que se ocupe de los adultos desempleados y otro que proporcione apoyo a los niños de un hogar. Paralelamente, las oportunidades de empleo son importantes para recuperar los medios de vida de las personas y permitirles volver a ponerse en pie.

RECUADRO 3.1: El alcance de la consolidación de las transferencias de efectivo en Guinea Ecuatorial

La protección social en Guinea Ecuatorial está dominada por los seguros sociales relacionados con el empleo, heredados del periodo colonial y actualizados, que cubren principalmente a los funcionarios y al personal militar. Cuando llegó el COVID-19 en marzo de 2020 no había programas de asistencia social, y Guinea Ecuatorial estaba clasificada por la OMS entre los países menos preparados del mundo. Los socios en el desarrollo, liderados por el Equipo de las Naciones Unidas en el País (UNCT), apoyaron la elaboración de un Plan de Emergencia -que incluía respuestas de protección social y seguridad alimentaria- y trabajo de recaudación de fondos.

Una evaluación del impacto socioeconómico del COVID-19 puso de manifiesto la urgente necesidad de digitalización, ya que actualmente los ciudadanos tienen que acudir a los organismos gubernamentales para recibir y pagar los servicios esenciales. Esto hizo imposible que el gobierno entregara transferencias monetarias de emergencia durante el período de las normas de permanencia en el hogar. El informe de evaluación recomendó desarrollar la capacidad estatal para los pagos digitales (PNUD, 2020).

Guinea Ecuatorial importa el 80% de sus alimentos. Los cierres de fronteras y las restricciones a la movilidad y el transporte debido al COVID-19 limitaron las importaciones de alimentos e insumos agrícolas y provocaron subidas de los precios de los alimentos (23% en 3 meses) que socavaron la seguridad alimentaria de los hogares de bajos ingresos. El gobierno entregó cestas de alimentos a 12.000 hogares en el marco del Programa de Garantías Sociales Públicas.

En general, la respuesta de protección social al COVID-19 fue limitada e inadecuada. Se necesitan acciones urgentes para fortalecer el sistema de protección social de Guinea Ecuatorial, tales como la introducción de esquemas de asistencia social para los grupos pobres y vulnerables, la aprobación de una ley de protección social (ya redactada), el establecimiento de un Registro Único y la creación de capacidad institucional para aplicar políticas y programas (PNUD, 2020).

A medio y largo plazo, los países africanos deberían **abordar los problemas de liquidez y sostenibilidad de la deuda recurriendo a las iniciativas de deuda internacional.**

Antes de la pandemia del COVID-19, algunos países africanos han estado lidiando con grandes cantidades de deuda. Esto ha agravado las vulnerabilidades derivadas de la deuda en muchos de estos países y está conduciendo a una deuda insostenible que está obstaculizando el crecimiento y el desarrollo. Los responsables políticos pueden adoptar políticas para inyectar liquidez en la economía y mejorar el espacio fiscal, de modo que los países puedan utilizar estos recursos para reactivar sus economías. Algunas de las políticas que pueden adoptarse son: la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISPD), y el Marco Común para Tratamientos más allá de la ISPD, la Política de Financiación del Desarrollo Sostenible (PFDS), y la emisión y uso de Derechos Especiales de Giro (DEG). Las dos primeras políticas abordan específicamente las suspensiones de la deuda y el alivio en respuesta a la crisis del COVID-19. Las dos últimas opciones están diseñadas para mejorar la sostenibilidad de la deuda y el alivio de la misma.

Desarrollo humano²³

La pandemia del COVID-19 amenaza con afectar de forma desproporcionada a los países de desarrollo humano bajo y medio -la mayoría de los cuales se encuentra en el continente africano- con impactos potencialmente devastadores en las tres dimensiones del Índice de Desarrollo Humano: salud, educación y nivel de vida, incluyendo los efectos socioeconómicos del virus durante los próximos meses y años. En este sentido, no dejar a nadie atrás durante la recuperación del COVID-19 requerirá que todas las políticas, estrategias e intervenciones específicas de recuperación den siempre prioridad a los grupos de población vulnerables identificados en el análisis del impacto humano de la Evaluación de la Situación (Capítulo 2). En este sentido, los esfuerzos de recuperación deben dirigirse a los hogares que cayeron en la pobreza extrema, las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad, los refugiados y los desplazados internos, entre otros grupos vulnerables.

Protección contra la pobreza. A corto y medio plazo. se recomienda que los países africanos amplíen la protección social, incluyendo las transferencias de efectivo a las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, dando prioridad a los 30,4 millones de personas que cayeron en la pobreza extrema como consecuencia de la crisis. Esta medida debería complementarse con la creación de oportunidades de empleo y de obtener ingresos, dando prioridad a los grupos de población más afectados y vulnerables. A largo plazo, los gobiernos deberían diseñar una política y una estrategia globales para evitar que siga aumentando la pobreza extrema que se prevé para los próximos nueve años. Dicha política y estrategia de reducción de la pobreza debe incluir acciones audaces que aborden las múltiples dimensiones de la pobreza (por ejemplo, la pobreza de ingresos y las privaciones en el acceso a los servicios esenciales), que se ocupen de los múltiples motores de la pobreza (como los conflictos, los peligros naturales y el cambio climático), y que den prioridad a los países en los que la pobreza extrema ha aumentado significativamente como consecuencia de la crisis, así como en los que es persistente y está muy concentrada.

Las medidas de protección contra la pobreza deben ser matizadas en función de la región.

Se prevé que Sudán del Sur, Somalia y Madagascar, en África Oriental, y Burundi, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, en África Central, estén entre los diez países con mayor índice de pobreza en 2023 (1,90 dólares per cápita/día). En estas dos regiones se encuentran también tres de los diez países africanos con mayor porcentaje de niños que viven en la pobreza (Sudán del Sur, Burundi y Ruanda). Burundi, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo también se encuentran entre los porcentajes más altos de niños que viven en la pobreza. En estas regiones, los programas de protección social deberían ampliarse, incluyendo las transferencias de dinero en efectivo, dirigidas a la población que vive en la pobreza y dando prioridad a los hogares vulnerables. Paralelamente, deberían recibir apoyo de los programas de empleo y de otras oportunidades de generación de ingresos. También se debe invertir en la mejora del acceso a los servicios básicos y en programas de empleo resilientes y otras oportunidades de generación de ingresos. Además, deberían aprovecharse la tecnología y la financiación para crear un empoderamiento económico que permita alcanzar el ODS 1.

Prevenir la inseguridad alimentaria y el hambre. Incluso antes del COVID-19 había una gran preocupación por la situación de la seguridad alimentaria en África Occidental, Central y Oriental. El COVID-19, combinado con otras perturbaciones, ha reducido aún más los ingresos y ha interrumpido las cadenas de suministro, lo que ha provocado un aumento de la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todo el continente. A corto plazo, los gobiernos nacionales y sus socios deben ampliar la asistencia alimentaria y nutricional para satisfacer las necesidades esenciales de los más rezagados, superando los problemas de acceso a los alimentos, ampliando la protección social, incluidas las transferencias de efectivo, y tratando la malnutrición.

²³El análisis de los aspectos del desarrollo humano relativos a la salud, la protección social y el empleo se presenta en el análisis del sector de la salud anterior; en el del empleo de los jóvenes, que aparece posteriormente (en el marco de la recuperación económica), y en el de la protección social, que aparece también posteriormente (en el marco del sector transversal).

La ayuda alimentaria que salva vidas debe dar prioridad a las personas que corren el riesgo de morir de hambre o que se enfrentan a ella, al tiempo que garantiza que los niños no se queden atrás, apoyando a los millones de niños que no tienen acceso a comidas escolares. También debe darse prioridad a los grupos de población vulnerables, como los refugiados y otras poblaciones desplazadas por la fuerza, las personas mayores, las personas que viven con el VIH y las personas con discapacidad. A nivel nacional y regional, los gobiernos, las CER y los socios en el desarrollo deben establecer acuerdos de financiación, plataformas digitales y planes de contingencia para la ayuda humanitaria y la protección social armonizadas.

Además de la asistencia alimentaria, el trabajo de recuperación debe proporcionar insumos para la producción de cultivos, ganado y pesca a los pequeños productores para que puedan capear los efectos inmediatos de la crisis económica y mejorar la seguridad alimentaria. Esto debería complementarse proporcionando educación sobre el valor nutricional de distintos alimentos, tales como el huevo, la leche, la soja y el pescado, especialmente para los niños, con el fin de aumentar su ingesta de proteínas y reforzar su sistema inmunológico contra el COVID-19. Las acciones para hacer frente a la inseguridad alimentaria deberían invertir en sistemas de riego sostenibles y en el suministro de agua en las comunidades marginadas de las zonas rurales y urbanas densas. A largo plazo, el trabajo de recuperación debería centrarse en acelerar y mantener las inversiones en medios de vida resilientes y en autosuficiencia alimentaria, al tiempo que se abordan las causas estructurales y los factores de la inseguridad alimentaria en África, para garantizar la consecución del ODS-2. Estas inversiones deberán adaptarse al contexto y a las necesidades particulares de cada subregión y/o país, incluyendo las debidas consideraciones para las poblaciones urbanas y rurales, las limitaciones específicas como las cadenas de suministro de alimentos o el acceso a los mercados, las oportunidades de empleo, los conflictos y el género, entre otros. A nivel político, los gobiernos africanos deben desarrollar políticas sólidas para conseguir la resiliencia agroalimentaria, incluyendo el fortalecimiento de las cadenas de suministro, los mercados nacionales y los sistemas de seguridad alimentaria.

A nivel regional, la recuperación de la inseguridad alimentaria debería centrarse en África Oriental y Occidental. África Oriental tiene el mayor número de personas subalimentadas en África, con más de 125 millones en 2020, así como la segunda mayor prevalencia de subalimentación, con un 28%. Mientras que África Occidental tiene el segundo mayor número de personas desnutridas de África con más de 75 millones en 2020; seguida de África Central con 57 millones de personas que pasan hambre.

En estas regiones, es necesario ampliar la asistencia alimentaria y nutricional, abordando los problemas de acceso a los alimentos, ampliando las transferencias de efectivo y tratando la desnutrición. Debe darse prioridad a la asistencia alimentaria para salvar la vida de personas que corren el riesgo de enfrentarse a condiciones similares a las de la hambruna, especialmente en los países en los que la población ya sufre niveles catastróficos de hambre o en los que se prevé que se enfrenten a la inanición, como es el caso de los focos de hambre de Sudán del Sur, Etiopía y Sudán en África Oriental, y Nigeria en África Occidental y la RDC en África Central, donde se prevé que la población se encuentre en una situación de inseguridad alimentaria aguda. También es urgente abordar la desnutrición en los países prioritarios con la mayor carga de desnutrición, a saber, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán (cuatro países en los que se calcula que habrá 10 millones de niños con desnutrición aguda en 2021). Como medida a medio y largo plazo, las medidas humanitarias deben estar vinculadas a intervenciones a más largo plazo que aborden las causas estructurales y los motores de la inseguridad alimentaria en la región, promuevan medios de vida resilientes y garanticen la consecución del ODS-2.

Recuperar terreno a la educación perdida. Las estimaciones preliminares muestran que en 2021, 4,3 millones de estudiantes, desde la educación preescolar hasta la terciaria en toda África, corrían el riesgo de abandonar la escuela o de sencillamente no matricularse debido a las perturbaciones económicas provocadas por el COVID-19. A nivel regional, el África oriental fue la que tuvo la mayor duración de cierre de escuelas, con una media de 146 días de cierre total entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, y alrededor del 60% de su población estudiantil perdió más de la mitad del tiempo de instrucción en el aula en 2020. Además, entre el este y el sur de África, las políticas de aprendizaje digital y de transmisión a distancia no llegaron a 67 millones de estudiantes.

Para recuperar el terreno perdido en materia de educación es necesario poner en marcha planes de reapertura de escuelas que incentiven el regreso a la escuela, por ejemplo, renunciando a las tasas escolares y a otros gastos escolares a corto plazo. Salvaguardar las escuelas como puntos críticos para acceder a servicios vitales como el asesoramiento, los planes de alimentación escolar y la información general; por lo tanto, deben reabrirse los puntos de servicios vitales situados en las escuelas. Los gobiernos y los socios en el desarrollo deberían centrarse especialmente en los niños más excluidos, como los que tienen discapacidades, los que viven en la pobreza, los refugiados y los desplazados internos, los que trabajan y los de las zonas rurales, y prestar especial atención a las niñas dentro de estos grupos. Todos los esfuerzos de recuperación dentro de este sector deben también priorizar el acceso a oportunidades de aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes. Estas medidas serán aún más críticas para el África Oriental, donde, antes del COVID-19, había un 28% de niños y jóvenes sin escolarizar, lo que constituye la proporción más alta de todo el continente.

La alfabetización digital, tanto de alumnos como de profesores, se reconoce cada vez más como un elemento indispensable del derecho de los niños a la educación. Por lo tanto, a medio y largo plazo, las inversiones en alfabetización digital serán fundamentales para garantizar que los niños tengan acceso a servicios de Internet fiables, accesibles y asequibles. Deben establecerse medidas que permitan el aprendizaje a distancia, especialmente para los niños que viven en zonas rurales. Además, los gobiernos deben actuar con la debida diligencia para garantizar que cualquier tecnología que recomienden para el aprendizaje en línea proteja los derechos de privacidad de los niños. A largo plazo, los gobiernos deberían promulgar leyes de protección de datos para los niños. A nivel continental, la CUA debería fomentar y supervisar los avances en la asignación de los presupuestos nacionales de educación según el compromiso del 20% de la UA.

Las intervenciones de recuperación de la educación también deberían estar vinculadas a la ampliación de oportunidades de formación técnica y profesional (EFTP) y a la creación de vínculos entre el mercado laboral y los sistemas de educación y formación. La creación de un programa inclusivo de desarrollo de habilidades digitales y de capacidades humanas en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la educación, y el diseño de planes de transformación digital para aprovechar las TIC también serán fundamentales para avanzar en la calidad y la equidad de la educación y las oportunidades a lo largo de la vida para todos.

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en África. Dado que la mayoría de los países africanos han sufrido un importante retroceso y seguirán enfrentándose a grandes retos para cumplir la mayoría de los 17 ODS y las siete Aspiraciones, especialmente a la luz de la continuación de la crisis, es imperativo que las acciones impulsadas por las políticas que aceleren la consecución de estos objetivos sean amplias e intensas. A continuación, se presentan propuestas para impulsar los ODS y las aspiraciones de la Agenda 2063 y sus objetivos.

1) Facilitar los intercambios y el comercio. Esto puede lograrse a través de 1) Dar máxima prioridad a los Objetivos 4, 5, 6 y 8 de la Agenda 2063, y a los ODS 1, 2 y 3: Prestar especial atención y dar prioridad a los cuatro objetivos de la Agenda 2063 y a los tres ODS que actualmente encuentran los mayores desafíos en África. Se trata del Objetivo 4 de la Agenda 2063 (economías transformadas y creación de empleo), el Objetivo 5 (agricultura moderna y aumento de la productividad y la producción), el Objetivo 6 (economía azul para acelerar el crecimiento económico), el Objetivo 8 (África unida) y los ODS 3 (buena salud y bienestar), 2 (hambre cero) y 1 (ausencia de pobreza).

2) Centrarse en seis transformaciones de los ODS: En relación con los ODS de África colectivamente, centrar la atención en las siguientes Seis Grandes Transformaciones como estrategia para alcanzar las metas, tal y como propone el Informe de Desarrollo Sostenible 2021 (Sachs et al., 2021). En el centro de todo ello está el reconocimiento de que los 17 ODS pueden alcanzarse a través de estas seis grandes transformaciones de la sociedad, que pueden servir de base para una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente de África. Sin embargo, las necesidades de financiación para estas inversiones en los ODS son mucho mayores que el espacio fiscal disponible para los gobiernos de los países en desarrollo de bajos ingresos (PED).

Para alcanzar los ODS, los LIDC necesitarán un aumento significativo del espacio fiscal, lo que requerirá una combinación de políticas fiscales nacionales y globales. Las seis transformaciones de los ODS son:

Transformación 1 -Educación, género y desigualdad

Transformación 2 -Salud, bienestar y demografía

Transformación 3 -Descarbonización de la energía e industria sostenible

Transformación 4 -Alimentos, tierra, agua y océanos sostenibles

Transformación 5 -Ciudades y comunidades sostenibles

Transformación 6 -Revolución digital para el desarrollo sostenible.

3) Ir más allá de la recuperación y adoptar un SDG Push: Considerar lo que se necesita para ir más allá de la recuperación y un SDG Push para acelerar el progreso. Para ir más allá de la recuperación se puede prestar atención a cuatro áreas de respuesta: 1) Gobernanza (construir un nuevo contrato social), 2) Protección social (desarraigar las desigualdades), 3) Economía verde (reequilibrar la naturaleza, el clima y la economía), y 4) Disrupción e innovación digital (para conseguir velocidad y escala). El impulso de los ODS implica la adopción de acciones audaces en estos cuatro ámbitos para avanzar en el desarrollo humano de África. Debe ser un impulso integrado para mejorar el desarrollo y la consecución de los ODS a pesar de la crisis del COVID, con políticas ambiciosas pero alcanzables (Pardee y PNUD, 2021).

Establecer un mecanismo de financiación para África. Dadas las repercusiones económicas de la crisis en África y las limitaciones de la financiación nacional, se necesitan recursos externos para abordar los retos macroeconómicos y proteger a los hogares pobres. Un mecanismo de financiación mundial podría ayudar a reducir la carga de la deuda de África, apoyar la ampliación de los programas nacionales de transferencia de efectivo y reforzar los sistemas de protección social. Además, el mecanismo puede apoyar a los gobiernos para que aumenten significativamente las inversiones en servicios sociales básicos, tales como la protección de la infancia, la educación, la salud, la nutrición, el agua y el saneamiento. El objetivo de la inversión sería desarrollar el capital humano, más que el físico. Desde el punto de vista operativo, podría adoptar la forma de un mecanismo de financiación supervisado por una o varias instituciones regionales y/o mundiales. La financiación necesaria podría obtenerse, especialmente del G20, a través de los compromisos de ayuda oficial al desarrollo en el marco de la meta 17.2 de los ODS (0,7% de la renta nacional bruta). Un ejemplo de este tipo de iniciativa es el Mecanismo propuesto de Financiación de la Solidaridad en África (véase el recuadro 5.3).

Economic recovery

que se basa en medidas a corto y a medio y largo plazo para: (a) poner en funcionamiento el AfCFTA y armonizar las normas; (b) acelerar el comercio en el marco de los acuerdos regionales; y (c) facilitar el comercio transfronterizo informal y abordar la miríada de barreras arancelarias que impiden a África comerciar consigo misma. En el anexo 3 se detallan las medidas.

Abordar el desempleo de los jóvenes. El continente africano tiene la población más joven y de más rápido crecimiento del mundo, lo que supone un enorme potencial de desarrollo social y económico. Es imperativo que el trabajo de recuperación preste especial atención al desempleo juvenil.

RECUADRO 3.2: El Programa N-Power de Nigeria está diseñado para preparar a los jóvenes nigerianos para una economía moderna y globalizada, ayudando a equiparlos con habilidades y certificaciones para los mercados globales emergentes. Aborda el problema del desempleo juvenil y pretende aumentar el desarrollo social. El Gobierno nigeriano había previsto aumentar su inversión en el programa N-Power en 2021 para impulsar la creación de empleo y estimular la innovación. Ha inscrito a 450.000 voluntarios de N-Power y ha formado/mentado a 54.000 beneficiarios no titulados. El coste estimado del proyecto es de 485 millones de dólares.

FUENTES: Gobierno de Nigeria, 2021 y Premium Times, 2021

Los problemas más importantes del mercado de trabajo en África son el lento crecimiento del empleo, la baja calidad de los puestos de trabajo, el alto desempleo y las elevadas tasas de No empleo, Educación y Formación (NEET) entre los jóvenes. Las medidas a corto plazo incluyen: ampliar las medidas de apoyo a los ingresos y la cobertura de la protección social, incluidas las prestaciones por desempleo, a los jóvenes vulnerables, en particular a las mujeres jóvenes; dotar a los jóvenes de las competencias adecuadas y promover la formación empresarial entre los jóvenes para estimular el empleo en nuevos sectores. Un entorno propicio consistente en redes sociales, mentores, financiación y tecnología puede ser eficaz para promover el espíritu empresarial de los jóvenes; y fomentar la demanda de mano de obra y el empleo apoyando al sector privado, especialmente a las MIPYMES. Las medidas a medio y largo plazo incluyen: desarrollar políticas integrales de empleo para promover empleos de buena calidad entre los jóvenes; identificar oportunidades de crecimiento del empleo para las mujeres jóvenes y los jóvenes vulnerables a través de políticas de desarrollo sectorial. Centrarse en las políticas de EFTP y en las acciones necesarias podría aumentar las perspectivas de empleo de los jóvenes; e identificar las lagunas de la oferta y la demanda y diseñar políticas de desarrollo del capital humano para adaptar la oferta a la demanda.

RECUADRO 3.3: Dirigido a los jóvenes y otros grupos vulnerables de Kenia

Kenya entered the COVID-19 lockdown period with an established and well-functioning Kenya entró en el periodo de confinamiento del COVID-19 con un Programa Nacional de Red de Seguridad (NSNP) establecido y con un buen funcionamiento, que fue movilizado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social para prestar asistencia financiera con el fin de mitigar los efectos económicos adversos del COVID-19, a través de una expansión vertical y horizontal. Un millón de beneficiarios del programa Inua Jamii recibieron un complemento de efectivo por medio de transferencias, y se añadieron 3 millones de nuevos beneficiarios a la lista del NSNP. Las mujeres, los huérfanos, las personas mayores (300.000 nuevos beneficiarios de la pensión social) y otras personas vulnerables fueron los destinatarios de esta ayuda adicional temporal.

Kenya was one of only a few countries to launch a new public works programme as a Kenia fue uno de los pocos países que puso en marcha un nuevo programa de obras públicas como respuesta al COVID-19; otros países suspendieron las actividades de obras públicas por temor al distanciamiento social. El programa Kazi Mtaani ("Trabajos en el barrio") ofreció empleo temporal a 26.000 jóvenes desempleados que realizaron trabajos de limpieza en asentamientos informales de Nairobi y de otros centros urbanos. El gobierno amplió rápidamente el programa a 283.000 trabajadores en todo el país. El salario de 6 dólares al día se pagó a través de M-PESA, una plataforma de dinero móvil con 25 millones de usuarios en Kenia.

La ayuda financiera también se destinó a los trabajadores vulnerables. Los trabajadores sanitarios de primera línea recibieron un subsidio por riesgo. Los artistas y otros creadores recibieron indemnizaciones del Ministerio de TIC, Innovación y Juventud a través de la Junta de Derechos de Autor de Kenia, cuando no pudieron trabajar. Los contribuyentes con bajos ingresos y las PYMES recibieron desgravaciones fiscales. Otras medidas fueron la reducción del IVA del 16 al 14 por ciento y la exención de las tasas por transacciones de dinero móvil hasta diciembre de 2020.

FUENTE: Gikandi, 2020

La ecorrestauración funciona como medida de recuperación: también apoya los medios de vida de los más afectados.

RECUADRO 3.4: Restauración de ecosistemas en Sudáfrica

El Departamento de Asuntos Medioambientales de Sudáfrica (DEA) calcula que la restauración de los ecosistemas puede crear 140.000 puestos de trabajo para los pobres de las zonas rurales del país. Estas inversiones también podrían aumentar los flujos de ingresos generados por los paisajes rurales al incrementar la producción ganadera y el suministro de agua de los ríos y acuíferos. Otros beneficios pueden ser la reducción del impacto de las inundaciones, la mayor resistencia de las comunidades a las sequías y la reducción de los daños causados por los incendios. Sobre la base de los actuales patrones de gasto en los programas pertinentes de la DEA sudafricana, se estima que se necesitarán inversiones anuales de entre 10.000 y 14.000 millones de ZAR en los próximos 15 a 25 años para maximizar los beneficios de la restauración de los ecosistemas en todo el país, lo que conllevará la creación de empleo. El actual déficit anual de aproximadamente 8.000 - 10.000 millones de ZAR debe destinarse a inversiones en restauración de ecosistemas para ayudar al país a recuperarse de la crisis económica del COVID-19.

La totalidad de la cantidad necesaria para la restauración de los ecosistemas a nivel nacional puede ser difícil de financiar únicamente a través de fuentes públicas. Sin embargo, el componente del gasto público puede utilizarse para catalizar las inversiones del sector privado en la restauración de los ecosistemas, creando así puestos de trabajo en el sector privado y, por tanto, sosteniendo los empleos a largo plazo.

FUENTE: PNUD, 2020a

Uno de los objetivos de la generación de empleo a corto y medio plazo de la mano de obra afectada puede cumplirse ampliando las obras públicas para cubrir programas de restauración ecológica, recuperación de tierras degradadas, forestación, adopción de medidas de mejora de la biodiversidad y aplicación de otros programas alineados con el Desafío de Bonn, la Declaración de Kigali y el llamamiento a la acción de Lilongüe (Desafío de Bonn, 2017). La restauración de los ecosistemas no solo puede contribuir a la consecución de los objetivos de los ODS, sino que también puede crear puestos de trabajo y nuevas fuentes de ingresos para los jóvenes, las mujeres y los hombres de las zonas rurales que han perdido sus medios de vida en la época del COVID-19.

Apoyar los programas de crecimiento de las MIPYMES: vinculados a las cadenas de valor, la adopción de tecnología y los medios de vida. La pandemia está dejando un profundo impacto en las MIPYMES y en su mano de obra. El camino hacia la recuperación resiliente de África está estrechamente vinculado a la recuperación de las MIPYMES, que representan el 90% de las empresas del continente y emplean a cerca del 60% de los trabajadores (UNCTAD, 2018). Una gran parte de las MIPYMES de África son de pequeña escala, impulsadas por la necesidad e informales, con un ciclo de vida reducido, una baja productividad en los sectores de uso intensivo de mano de obra y una baja incidencia de la innovación. Por lo tanto, las medidas de recuperación para apoyar a las MIPYMES deben concebirse como un proceso continuo en el que la implementación comienza en el corto plazo, pero luego transita hacia el medio y largo plazo. En el anexo 3 se presentan recomendaciones detalladas para los sectores prioritarios (minería artesanal y a pequeña escala, turismo, industria ligera y servicios de transporte). Los ejercicios de planificación nacional de cada Estado miembro de la UA pueden identificar más posibilidades de este tipo en sus respectivas economías. En el recuadro 3.5 se ofrece un ejemplo de apoyo exitoso a las PYME en Cabo Verde.

RECUADRO 3.5: Centrarse en las microempresas de Cabo Verde

La economía de Cabo Verde se contrajo un 15% en 2020, el segundo mayor impacto del COVID-19 en África, causado principalmente por un cierre de 9 meses del sector turístico -la hostelería y la restauración se contrajeron un 71%-, lo que contribuyó a empujar a la pobreza a casi el 20% de la población. La desigualdad de ingresos aumentó, ya que el decil más bajo perdió la mitad de sus ingresos, mientras que los ingresos del decil superior cayeron entre un 10 y un 15%. Las medidas de contención se aplicaron con más rigor que la media mundial. Las mujeres se vieron gravemente afectadas, ya que trabajan predominantemente en los sectores informal y turístico y como empleadas domésticas. Los ingresos fiscales disminuyeron, aumentando el déficit fiscal y la deuda pública precisamente cuando se necesitaba un mayor gasto social (Banco Mundial, 2021b).

No obstante, el gobierno aplicó medidas de mitigación. El proyecto de protección social existente se amplió tanto verticalmente, aumentando las transferencias de efectivo a 8.000 beneficiarios en un 10% cada mes, como horizontalmente, registrando a otras 24.000 personas para las transferencias de efectivo de emergencia, especialmente a los trabajadores domésticos y a los trabajadores informales de las MIPYME. También se proporcionó asistencia alimentaria a 22.500 familias. El gobierno también pospuso las contribuciones al fondo de pensiones y el pago de la deuda de los préstamos bancarios durante tres meses.

Se estima que se protegieron 12.300 puestos de trabajo con garantías de crédito a las empresas, incluidas las MIPYMES, y se evitaron unos 32.000 despidos al suscribir el gobierno contratos laborales. En general, estas medidas fueron bien aplicadas y proporcionaron un apoyo crucial a los medios de subsistencia, los ingresos de los hogares y la seguridad alimentaria durante los meses más difíciles de la pandemia.

Una gran parte de la población de los países que se extienden a lo largo de la cuenca del Congo depende de los **productos forestales no madereros (PFNM)** para su subsistencia. Las cadenas de valor de los PFNM son un conjunto de recolectores, procesadores y minoristas que

llegan a los consumidores de todo el mundo. Las restricciones a la circulación y las medidas para frenar la propagación del COVID-19 han tenido consecuencias negativas para las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia, así como para las Pequeñas y Medianas Empresas Forestales (PYMES) relacionadas con las cadenas de valor de los PFM.

A corto plazo, los gobiernos nacionales y los socios deben apoyar a las empresas para que pongan sus negocios en línea y ayudarlas a encontrar nuevos mercados y oportunidades de venta. En el caso de los países exportadores de productos primarios de bajos ingresos, se recomienda que, a corto plazo, aprovechen las oportunidades de exportación existentes mediante la exportación de algunos productos especializados relacionados. Por ejemplo, el Banco Mundial recomienda que la República Centroafricana pueda seguir exportando productos especializados relacionados con el algodón y la madera sobre los que tienen una ventaja comparativa (Banco Mundial, 2020c). Esto les permitirá crear nuevos puestos de trabajo y generar ingresos adicionales, un impulso muy necesario para contrarrestar la depresión económica inducida por el COVID-19. También es necesario asociarse con la sociedad civil, el sector privado y las comunidades forestales para conceder microcréditos a las PYMEF con el fin de apoyar su recuperación. Hay que prestar especial atención a las mujeres de las comunidades dependientes de los bosques para responder a sus problemas económicos inmediatos y a sus necesidades sociales y sanitarias de forma más eficaz. Estas medidas deberían complementarse con un aumento de la gestión forestal eficaz para garantizar la sostenibilidad.

A medio y largo plazo, deberían adoptarse Estrategias Nacionales de Financiación Forestal (ENF) como parte integrante de los planes nacionales de recuperación del COVID-19 que pueden incorporarse a los Marcos Nacionales Integrados de Financiación (MNIF). Fomentar la inversión privada en la gestión forestal sostenible, con el apoyo de un marco normativo que equilibre la comercialización y las prácticas de gestión ecológica. Esto debería complementarse con la educación de las comunidades forestales sobre sus derechos y obligaciones legales, el desarrollo de habilidades comerciales y de marketing, y la formación de las empresas forestales en el empaquetado, que puede suponer una gran diferencia en el precio y la calidad y minimizar los daños durante el transporte. La recuperación a largo plazo también debería incluir inversiones en equipos modernos y técnicas de almacenamiento e infraestructura de transporte, que pueden impulsar la producción, acelerar el tiempo de procesamiento y facilitar el comercio. La digitalización también sería fundamental para facilitar la recopilación de datos sobre los bosques en tiempo real, el seguimiento de los mismos y la producción, así como para controlar el comercio ilegal en los bosques.

Acelerar la digitalización de la economía. La Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas estima que se necesita una inversión adicional de 109.000 millones de dólares para lograr un acceso a Internet de banda ancha universal, asequible y de buena calidad, de aquí a 2030 (UNESCO, 2019). Es necesario preparar una sólida hoja de ruta para la digitalización de África respaldada por una financiación combinada del sector privado, el gobierno y los socios en el desarrollo internacionales. Las medidas a corto plazo incluyen la reducción de los costes de las transacciones digitales y la garantía de asequibilidad, la adopción de tecnologías financieras, la reducción de la brecha digital de género mediante el aumento del acceso y la alfabetización, y la eliminación de dicha brecha para las microempresas. Las prioridades a medio y largo plazo incluyen el fortalecimiento de la sanidad y la educación electrónicas, la mejora de las competencias digitales de los usuarios y el impulso de la incipiente demanda de servicios digitales, la promoción de nuevos modelos de inversión en infraestructuras digitales, la continuación de la Estrategia de Transformación Digital de la UA y la ampliación de las redes de fibra óptica. Los detalles de estas medidas se encuentran en el Anexo 3.

Aprovechar el potencial de la economía azul. La pesca y la acuicultura son sectores clave de la economía azul, que contribuyen aproximadamente el 1,4% al PIB africano (AUDA-NEPAD, 2021). El sector proporciona alimentos y nutrición a los pobres y es una fuente de empleo para más de 12 millones de personas en África. Se han formulado medidas de recuperación detalladas para abordar las necesidades de recuperación económica a corto, medio y largo plazo del COVID-19 y se presentan en el Anexo 3. En el recuadro 3.6 se muestran varios ejemplos de buenas prácticas para desarrollar la economía azul en África.

RECUADRO 3.6: Programas de referencia para mejorar la pesca en África

El Programa de Mejora de la Gobernanza Pesquera y los Corredores Comerciales de la Economía Azul (PROFISHBLUE) cubre dieciséis países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC). El PROFISHBLUE comprende grandes sistemas marinos, así como varios ríos y lagos transfronterizos en las zonas interiores. El proyecto se identificó en mayo de 2015. Entre noviembre y diciembre de 2020 se celebró un diálogo político con los Estados miembros de la SADC y los funcionarios de Pesca y Acuicultura sobre las áreas de inversión y las lagunas de desarrollo para obtener el apoyo de los bancos, y en junio de 2021 se llevó a cabo una misión de evaluación. El 25 de marzo de 2021, el Ministerio de Descentralización y la Secretaría de Economía Azul de Kenia lanzaron la Iniciativa Go Blue. El programa, de cuatro años de duración, tiene como objetivo proteger los ecosistemas costeros de Kenia y crear al mismo tiempo puestos de trabajo respetuosos con el medio ambiente en una serie de industrias, como el reciclaje, el turismo y la pesca a pequeña escala. Está diseñado para fomentar una "economía azul sostenible" en seis condados costeros y generar más de 3.000 puestos de trabajo sólo para jóvenes y mujeres. Go Blue ha recibido 25 millones de euros de financiación de la Unión Europea. La iniciativa también cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de ONU-Hábitat. El objetivo general del Programa Regional de Pesca de África Occidental (WARFP), financiado por el Banco Mundial y otros socios, es aumentar de forma sostenible la riqueza global generada por la explotación de los recursos pesqueros marinos de África Occidental. El programa abarca nueve países, que incluyen: Cabo Verde, Liberia, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea, Mauritania, Senegal y Sierra Leona. Los países miembros del WARFP están agrupados según la serie de proyecto que representa el orden de ejecución. La fase indica el periodo de tiempo correspondiente a cada serie. La primera serie "Serie A" se puso en marcha en 2010. Cada fase tendrá una duración de unos cinco años, y se prevén tres fases para cada país. El plazo total del programa WARFP es de unos 15 años por país.

Fuente del recuadro 3.6: Banco Mundial 2020d

Promover las cadenas de valor de la horticultura. Hay que dar prioridad a la horticultura para conseguir una transformación agrícola y atender las necesidades nutricionales de la población africana. El sector emplea a un gran número de personas, especialmente mujeres, y tiene un potencial panafricano. El COVID-19 ha tenido un impacto inmediato en el sector de la horticultura, con un fuerte descenso de la producción y los ingresos, disminución de los mercados y falta de recursos para comprar suministros para la siguiente temporada. Algunos gobiernos respondieron proporcionando incentivos en efectivo, pero es necesario centrarse en la dotación de infraestructuras y el desarrollo de capacidades, que desempeñarían un papel importante en la recuperación de las cadenas de valor hortícolas. Hay un gran margen para aumentar la productividad y el valor añadido en la horticultura. Las PYME tienen la oportunidad de generar ingresos y crear puestos de trabajo participando en las cadenas de valor hortícolas y mejorándolas, atendiendo a la demanda tanto dentro como fuera del continente. En el anexo 3 se presentan medidas detalladas.

Abordar los déficits de energía en las zonas y comunidades desatendidas: soluciones alimentadas por energía solar fuera de la red. La mayoría de los países africanos (como Sudán del Sur, Chad, Burundi, Malawi y Liberia) son deficitarios en energía y tienen escasez crónica de electricidad. Sin embargo, la mejora de la inversión en energías renovables aceleraría la recuperación a corto plazo del COVID-19, al tiempo que crearía economías y sociedades resistentes e inclusivas en toda África. Es necesario que los respectivos Estados miembros pongan en marcha medidas políticas y programáticas para reformar sus respectivos sectores energéticos, y que se refuercen los consorcios energéticos regionales para hacer frente a estos graves déficits, ya que sin estas medidas la recuperación económica se verá limitada.

Este estudio se centra en esbozar una posible intervención programática que ayude a abordar de forma holística esta cuestión en un conjunto de países que se han visto gravemente afectados por la pandemia y corren el riesgo de quedarse atrás.

Prioridad para las intervenciones especiales e integradas basadas en la energía solar fuera de la red en África Central. Entre las cinco regiones, los países de África Central ocupan un lugar relativamente inferior en cuanto al acceso a la electricidad de su población, el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2019a) y la penetración de Internet, y tienen mayores niveles de pobreza. El acceso a la electricidad en estos países sigue siendo lamentablemente bajo, lo que supone un gran impedimento para poner en marcha el motor de crecimiento económico. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de implementar intervenciones especiales e integradas fuera de la red en estos países (incluidos los países con deficiencia energética mencionados anteriormente) para abordar holísticamente las necesidades de recuperación de los hogares, las comunidades y las empresas. Dotados de importantes recursos de energía solar, estos países pueden dar prioridad a la adopción de soluciones innovadoras de energía fotovoltaica fuera de la red para apoyar a las comunidades desatendidas y ayudarlas a instalar pequeños equipos para que empiecen a operar sus micro y pequeñas empresas, reactivando así los motores de la economía paralizados.

Una de estas iniciativas es el Proyecto de Acceso a la Energía Solar sin Red de Kenia (KOSAP), dotado con 150 millones de dólares, cuyo objetivo es aumentar el acceso a los servicios energéticos modernos en los condados desatendidos de Kenia. El proyecto pretende ampliar las minirredes para las instalaciones comunitarias, las empresas y los hogares; los sistemas solares autónomos y las soluciones de cocina limpia para los hogares, los sistemas solares autónomos y las bombas de agua solares para las instalaciones comunitarias, la implementación del apoyo y el desarrollo de capacidades. El KOSAP es un proyecto de referencia que puede adaptarse a las respectivas condiciones nacionales. El diseño y la ejecución de la intervención variarían en cada país preseleccionado (Banco Mundial, 2021c).

Temas transversales

Protección social. La protección social demostró su valor durante 2020 al mantener a miles de personas vulnerables fuera de la pobreza extrema, sin embargo, la pandemia también expuso sus limitaciones. La protección social y las redes de seguridad tienen un papel fundamental que desempeñar en la recuperación, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, hay que ampliar la cobertura (especialmente a los trabajadores informales y otros grupos excluidos), aumentar las prestaciones (y garantizar que los pagos estén indexados a la inflación), y mejorar la capacidad de respuesta a las crisis de los programas de protección social (vinculando la asistencia social y los mecanismos de ayuda humanitaria), con el objetivo de lograr, en última instancia, la cobertura universal de las poblaciones pobres y vulnerables (hogares que han caído en la pobreza extrema, personas con discapacidad, mujeres pobres, ancianos, refugiados y desplazados internos). En el recuadro 3.7 se ofrece un ejemplo de este enfoque en Etiopía. Invertir en protección social no sólo ayudaría a aliviar la pobreza de las comunidades marginadas, sino que también amortiguaría el impacto de futuras crisis en estos hogares.

RECUADRO 3.7: Ampliación de las redes de seguridad en Etiopía

El Plan Nacional de Respuesta a la Emergencia del COVID-19 de Etiopía estimó que 30 millones de personas se enfrentarían a carencias alimentarias en 2020, y anunció un paquete integral de “transferencias de efectivo, subsidios gubernamentales y desgravaciones fiscales para apoyar a los ciudadanos y a las empresas más afectadas por la crisis” (FDRE, 2020: 4), así como tres meses de distribución de alimentos de emergencia a 15 millones de personas.

A pesar de ser un país de bajos ingresos, Etiopía contaba con una importante red de seguridad antes del COVID-19, teniendo 6 millones de personas que ya recibían ayuda humanitaria y 8 millones de beneficiarios del Programa de Red de Seguridad Productiva (PSNP). Etiopía estaba bien posicionada para poner en marcha una ampliación que respondiera a las crisis, con una financiación de contingencia en marcha, cambios en curso de las transferencias de alimentos a las de efectivo y de la entrega manual a la electrónica, y trabajo en curso para armonizar la ayuda humanitaria y la programación de la protección social.

El PSNP rural está dominado por las obras públicas que proporcionan empleo temporal en proyectos de infraestructura comunitaria. Para cumplir con el distanciamiento social, se suspendió el requisito de trabajo, pero los pagos continuaron, con pagos a tanto alzado para ayudar a los beneficiarios a satisfacer sus necesidades alimentarias críticas.

El PSNP urbano apoyó a 600.000 personas en 11 ciudades en 2020. Una “expansión vertical” entregó complementos de transferencias monetarias a los beneficiarios existentes, y una “expansión horizontal” registró nuevos hogares en 16 nuevas ciudades que también recibieron transferencias monetarias incondicionales. Los pagos fueron suficientes para comprar 2.100 calorías por persona y día durante seis meses. La ampliación se llevó a cabo de forma rápida y eficaz aplicando los principios de respuesta a la crisis, utilizando los sistemas existentes de selección, registro y pago del PSNP.

Una encuesta realizada en 2.600 hogares rurales demostró que el PSNP ajustado al COVID proporcionaba una protección eficaz contra los impactos económicos del COVID-19. Los participantes en el PSNP apenas experimentaron un aumento de la inseguridad alimentaria y adoptaron pocas estrategias de supervivencia perjudiciales, mientras que los hogares que no participaron en el PSNP sufrieron un aumento significativo de la inseguridad alimentaria y adoptaron estrategias de supervivencia perjudiciales, tales como recortar sus gastos en sanidad y educación (Abay et al., 2021).

A medio-largo plazo, el trabajo de recuperación debe reforzar los sistemas nacionales de protección social mediante la elaboración o actualización de las políticas y leyes nacionales de protección social, la transición hacia la digitalización de los procesos (por ejemplo, pagos con dinero móvil, registros de beneficiarios informatizados), y el establecimiento de instituciones eficientes que presten asistencia social y seguro social sobre la base de los derechos de todos los ciudadanos y residentes.

A nivel regional, los países de África Oriental deben consolidar, a corto plazo, los logros alcanzados durante el COVID-19 en cuanto al establecimiento de programas nuevos o ampliados de transferencias de efectivo y de asistencia alimentaria para los grupos vulnerables, especialmente en las zonas urbanas, dado el enfoque tradicional en temas de inseguridad alimentaria rural en el Cuerno de África. Los programas de obras públicas, muy populares en esta región, deberían rediseñarse para aumentar la resiliencia de los hogares y las comunidades frente al cambio climático y las crisis de los medios de subsistencia. Dada la alta prevalencia de catástrofes, conflictos e inseguridad en esta región, debe darse prioridad a medio y largo plazo a la armonización de los mecanismos de ayuda humanitaria y de protección social del desarrollo, incluido el refuerzo de la capacidad de respuesta ante crisis para posibilitar que haya un despliegue rápido en crisis futuras.

Casi todos los países de África Occidental (14 de 15) realizaron transferencias de efectivo nuevas o ampliadas como respuesta al COVID-19. A corto plazo, las nuevas categorías identificadas de beneficiarios vulnerables -incluidos los trabajadores informales, los trabajadores domésticos y los pequeños agricultores- deberían seguir siendo incluidos en los sistemas de protección social incluso después de que desaparezca la crisis del COVID-19. La suspensión temporal de las facturas de los servicios públicos, también una respuesta popular del COVID-19 en esta región, debería ser utilizada por los gobiernos como instrumento habitual de la política de protección social para los grupos de bajos ingresos, así como en futuras crisis. A medio y largo plazo, el Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO) facilitó la apertura gratuita o subvencionada de cuentas de dinero móvil y el pago de transferencias electrónicas durante el COVID-19 en al menos ocho países de África Occidental, y los gobiernos de otros países también subvencionaron estos costes temporalmente. Para facilitar el uso del dinero móvil para el pago de transferencias de efectivo esta posibilidad debería ser permanente para todos los beneficiarios de la protección social.

Dado que muy pocos países de África Central han establecido programas de transferencia de efectivo, la asistencia social durante el COVID-19 se entregó principalmente en forma de paquetes de alimentos y la suspensión temporal de las facturas de los servicios de agua, electricidad y alquiler. A corto plazo, es urgente que estos países comiencen a establecer programas regulares de protección social, basados en transferencias de efectivo cuando sea fiscal y administrativamente factible, que puedan ampliarse rápidamente durante futuras crisis. A medio y largo plazo, el desarrollo de los sistemas de protección social en estos países debe estar respaldado por una Política Nacional de Protección Social, actualizada si ya existía antes del COVID-19, con un Plan de Implementación con costes y plazos, para asegurar que esta región cierra la brecha con otras regiones africanas y está ofreciendo una protección social efectiva a los ciudadanos y residentes vulnerables para 2030.

Varios países de África meridional (por ejemplo, Botsuana y Eswatini) (Freeland et al., 2020) rediseñaron las bases institucionales de sus sistemas de protección social como seguimiento de sus respuestas inmediatas al COVID-19, y Sudáfrica está estudiando ahora la posibilidad de convertir su subsidio de alivio social del COVID-19 en un apoyo permanente a la renta básica para personas de 18 a 59 años. A corto plazo, hay que apoyar activamente el impulso de iniciativas como éstas. Además de ampliar los derechos de protección social a los grupos excluidos (incluidos los migrantes y los refugiados), los países de esta región deberían trabajar a medio y largo plazo para armonizar la asistencia y la seguridad social, centrándose en la ampliación de la cobertura del seguro de desempleo (especialmente para los trabajadores informales y autónomos) y del seguro de enfermedad.

A corto plazo, los países del norte de África con programas de protección social bien establecidos (Argelia, Egipto y Marruecos) deben proteger los logros alcanzados en términos de ampliación de las prestaciones e incluir a los trabajadores informales durante la respuesta al COVID-19. Los países con una protección social mínima (Libia, Mauritania y Túnez) deben reconocer la urgencia de invertir en el establecimiento de políticas, programas e instituciones de protección social para ofrecer protección a los ciudadanos y residentes vulnerables tanto contra la pobreza crónica como contra futuras crisis. A medio y largo plazo, los países con sistemas de protección social que funcionan bien deben avanzar hacia un enfoque basado en los derechos mediante la elaboración de su Política Nacional de Protección Social y la aprobación de una legislación que establezca por ley los criterios de elegibilidad y los mecanismos de responsabilidad. Otros países de la región deberían crear sus sistemas de protección social tan rápidamente como sea administrativa y fiscalmente posible, incluso aprendiendo (viajes de estudio) de sus vecinos.

Recuperación con perspectiva de género: El COVID-19 sigue exacerbando las desigualdades sociales y económicas en África, socavando la seguridad económica de las mujeres y su capacidad de recuperación frente a las crisis. El COVID-19 ha provocado un aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas y un incremento de la carga de trabajo de cuidados no remunerado que recae sobre las mujeres y las niñas. Sin embargo, la recuperación del COVID-19 representa una oportunidad para dar forma a un África más sostenible, justa e igualitaria. Los beneficios potenciales de la participación plena y equitativa de las mujeres en el mercado de trabajo, y la sustancial igualdad de género en el mismo, no es sólo una cuestión de justicia, sino que también constituye una buena base para la economía nacional. Los países que mejoren la

igualdad de género en los mercados laborales hasta 2030 podrían obtener grandes beneficios en su crecimiento económico, ya que las mujeres constituyen más de la mitad de la población productiva. Aunque las mujeres han liderado la respuesta al COVID 19 como personal sanitario y de primera respuesta en los hogares, también están mal pagadas, lo que debería abordarse como parte del trabajo de recuperación.

Dicho esto, es necesario realizar más investigaciones para hacer un seguimiento de los factores de éxito y del progreso. Garantizar la disponibilidad de datos y análisis desglosados por sexo y edad para supervisar los impactos relacionados con el género. Es crucial evaluar el impacto de género del COVID-19 en las mujeres y los hombres, con el fin de diseñar medidas preventivas y de respuesta diferenciadas y desarrollar marcos sólidos de seguimiento y presentación de informes que tengan en cuenta el género. El rastreador de género del PNUD y de ONU Mujeres puede ayudar al gobierno a analizar los progresos realizados²⁴. Del mismo modo, debemos diseñar medidas preventivas y de recuperación que tengan en cuenta el género y desarrollar marcos sólidos de seguimiento que igualmente deberán tener en cuenta el género. También es importante evaluar los beneficios que obtienen las mujeres de los planes de protección social, las ayudas de emergencia y otros instrumentos políticos utilizados para responder a la pandemia.

La recuperación resiliente e inclusiva debe estar respaldada por medidas que tengan en cuenta el género, dirigidas a dismantlar las estructuras y los sistemas que crean y refuerzan la desigualdad. A nivel nacional, será fundamental garantizar la participación de las mujeres y las niñas en el diseño y la aplicación de los planes de recuperación nacionales y locales. También es crucial identificar a la población femenina más vulnerable para garantizar que “no se deje a nadie atrás”, lo que es crucial para lograr la Agenda 2030, y desarrollar medidas para reducir su exposición a riesgos y aumentar su acceso a servicios de apoyo. Se proponen soluciones de recuperación con perspectiva de género en dos áreas principales: (i) financiación y toma de decisiones de recuperación con perspectiva de género para garantizar que todas las decisiones e inversiones de recuperación por parte de todos los actores produzcan beneficios equitativos para todas las personas de diferentes géneros y grupos sociales, (ii) intervenciones programáticas específicas para la recuperación con perspectiva de género, que abarcan la pobreza, los ingresos y el empleo, la salud, la educación y las intervenciones contra la violencia de género. A continuación, se proponen medidas destinadas a abordar la desigualdad de género a través de la recuperación de la resiliencia:

La participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones en relación con la recuperación del COVID-19. Tanto las intervenciones a corto como a largo plazo propuestas en este marco deben buscar las aportaciones y perspectivas de las mujeres en las fases de diseño y ejecución para garantizar que se atienden sus necesidades. Las mujeres han estado al frente de la batalla contra el COVID-19 como trabajadoras sanitarias, cuidadoras de las familias y proveedoras económicas de sus hogares. Hay que aprovechar sus conocimientos y su liderazgo para obtener beneficios equitativos de las intervenciones de recuperación.

Invertir en la capacitación económica de las mujeres. Los esfuerzos de recuperación deben ir acompañados de inversiones a largo plazo en la capacitación económica de las mujeres. Estas deben incluir el establecimiento de reformas legales para empoderar a las que trabajen por la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Asimismo, los servicios sensibles al género, los recursos de producción y los mercados en la agricultura, la industria y el comercio deberían mejorar ampliamente el empoderamiento económico de las mujeres y los jóvenes.

Sin embargo, a medio y largo plazo, estas medidas deberían incrementarse con inversiones que saquen a las mujeres de la economía informal y garanticen la resiliencia de los medios de vida frente a futuras crisis.

²⁴<https://data.undp.org/gendertracker/>

Las políticas deberían animar a más mujeres a entrar en el sector formal, centrándose en las limitaciones que sufren más las mujeres, como los bajos niveles de cualificación y educación, la necesidad de un transporte seguro, así como desestigmatizar el trabajo de las mujeres en las fábricas, la construcción y la minería. Los nuevos empleos verdes para las mujeres y las inversiones en tecnología e infraestructuras sostenibles y en energías renovables garantizarán la sostenibilidad medioambiental, al tiempo que sacarán a las mujeres de la economía informal.

También se necesitan soluciones integradas para eliminar la segregación en la educación, abordar los cuidados no remunerados, reducir la discriminación y fomentar la formalización. La diversificación de las oportunidades económicas requiere políticas y programas para eliminar la segregación en la educación y reducir la discriminación en el empleo. También se necesitan soluciones integradas para abordar el trabajo de cuidados no remunerado y la segregación en el empleo. En los sectores informales, el cambio de las normas sociales puede lograr el mayor impacto. Establecer políticas de apoyo a las madres trabajadoras, como permisos familiares remunerados y horarios flexibles, permite que más mujeres se incorporen a la mano de obra formal.

El COVID-19 también puso de manifiesto la gran vulnerabilidad de los medios de vida de las mujeres en África. Es necesario reforzar los sistemas de protección social para reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante el COVID-19 y otras crisis. Las intervenciones de recuperación deben incluir subvenciones para el rescate de empresas y microcréditos con protección contra riesgos para las MIPYMES, con el fin de atender a las mujeres que perdieron sus negocios de MIPYMES durante el cierre. Las subvenciones de apoyo a las MIPYMES o los préstamos con protección contra riesgos también deberían extenderse a nuevos sectores y oportunidades económicas viables para fomentar el establecimiento de nuevas economías en las que las mujeres sean probablemente las propietarias dominantes. Dichas subvenciones/préstamos también deberían tener como objetivo proporcionar un apoyo específico a las empresas propiedad de mujeres para que participen en las cadenas de suministro. Al conceder subvenciones de rescate a las grandes empresas, exigir que se protejan los puestos de trabajo en el extremo inferior (mayoritariamente ocupados por mujeres) como parte del paquete de rescate.

Es crucial hacer llegar los beneficios socioeconómicos a las mujeres rurales, que a menudo carecen de acceso a la información y al capital para facilitar una rápida recuperación. Las mujeres rurales también siguen corriendo el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria y malnutrición, menor participación en actividades económicas y mayor violencia de género. Dado que la pandemia ha afectado más gravemente a las mujeres en la agricultura, debe trabajarse para ampliar los programas destinados a las mujeres de las cadenas de valor agroalimentarias, que son clave en la producción, el procesamiento y el comercio de alimentos y productos agrícolas.

Los responsables de las políticas y de la ejecución de los programas deberían aprovechar la eficacia de los colectivos de mujeres para aumentar los resultados económicos de las mismas y crear capacidad de acción. Por ejemplo, se ha demostrado que las cooperativas agrícolas que mejoran el acceso a los insumos y a los mercados sacan a las mujeres de la pobreza en Uganda (FAO, 2018), donde el plan nacional de desarrollo incluye una agricultura más eficiente.

Abordar la violencia de género (GBV). COVID-19, junto con la restricción de movimientos y las medidas de aislamiento social, provocó un aumento exponencial de la violencia de género. A corto plazo, es necesario aumentar el conocimiento sobre las vías de derivación y otros lugares de apoyo donde las mujeres y las niñas pueden obtener ayuda mediante campañas de comunicación a nivel nacional. Los esfuerzos de recuperación deben garantizar que todos los centros de salud y los refugios respondan a las víctimas de la violencia de género, con kits de pruebas, tratamiento de heridas de emergencia, así como asesoramiento sobre el trauma. Activar el sistema de respuesta de la justicia (la policía como primera respuesta) para aumentar la capacidad de respuesta y el tiempo de reacción durante los cierres.

También es necesario reforzar la capacidad de los Estados miembros de la UA para desarrollar y aplicar programas de prevención de la violencia de género basados en pruebas que promuevan un cambio de comportamiento, la recuperación de la dignidad de mujeres y hombres y la construcción de sociedades solidarias libres de violencia de género. Los Estados miembros también deben establecer sistemas adecuados de respuesta a la violencia de género, para garantizar que las mujeres y los niños tengan acceso a servicios legales y de apoyo. Establecer un sistema de respuesta de emergencia para vigilar los focos de violencia de género durante las crisis. Los gobiernos, al tiempo que promueven las relaciones positivas entre hombres y mujeres, deben poner en marcha programas y campañas a escala nacional para hacer frente a las prácticas culturales nocivas y a las normas sociales que alimentan la violencia de género.

El COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio hacia un desarrollo basado en la información sobre el riesgo frente a las amenazas de múltiples peligros

El COVID-19 es una catástrofe. Un acontecimiento transformador que ha destruido e invertido el orden que le precedía a una escala que lo convierte en el peor desastre que ha vivido esta generación. El COVID-19 se produjo porque un peligro, el virus, se encontró con una sociedad vulnerable debido a las decisiones políticas, las opciones económicas y nuestra propia organización social. La debilidad de los sistemas sanitarios públicos, la creciente interconexión de los sistemas a través de la globalización y la degradación del medio ambiente son algunos de los elementos que han hecho que nuestra sociedad se vea tan afectada por el COVID-19. Y dado que el COVID-19 es una catástrofe, requiere un enfoque coordinado e integrado más amplio para su gestión, que trasciende a un sector específico como el sanitario, aunque la salud sea fundamental para su comprensión y gestión.

Todo el **Marco de Recuperación para África** pretende orientar a los Estados miembros y a las CER a fin de crear resiliencia mientras se recuperan de la pandemia. Sin embargo, pareció importante incorporar esta sección para dar un paso atrás y proporcionar un enfoque multirriesgo, integrado y sistémico. El objetivo general de esta sección es, por lo tanto, ofrecer orientación para pasar a un desarrollo basado en el riesgo a través de una gobernanza anticipatoria e inclusiva para la RRD²⁵. Este enfoque tiene en cuenta todos los riesgos a los que puede enfrentarse un país y sus complejos impactos en los sistemas y sectores para informar el desarrollo. Pretende también proporcionar orientación para construir sistemas que sean lo suficientemente ágiles y flexibles para hacer frente a los desastres imprevisibles, desconocidos e incógnitos que pueden afectar al país. El COVID-19 se convierte, por tanto, en un elemento desencadenante para remodelar nuestro enfoque no sólo de la reducción del riesgo de catástrofes (RRD) y el aumento de la resiliencia, sino también del desarrollo. A continuación, se proponen áreas prioritarias y se hacen recomendaciones estratégicas para llevar a cabo este cambio:

Área prioritaria 1 para la RRD: reforzar las capacidades de los Sistemas de Alerta Temprana de Riesgos Múltiples (MHEWS)

A pesar de las inversiones realizadas en la última década, los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) a menudo abordan los diferentes peligros de manera aislada, proporcionan información para tomar decisiones reactivas, no permitiendo a los responsables de la toma de decisiones anticiparse a las catástrofes y a su posible evolución y, finalmente, la acción temprana sigue siendo un problema.

²⁵La gobernanza anticipatoria puede entenderse como un sistema de sistemas basado en la teoría de la complejidad. Al aportar un enfoque mucho más holístico para comprender los problemas y las perturbaciones que amenazan a nuestras sociedades, la teoría de la complejidad, y por consiguiente la gobernanza anticipatoria, ofrece un enfoque mucho más realista para comprender lo interconectados y sistémicos que están los riesgos de catástrofe y, por extensión, cómo anticiparse, gestionar, absorber y recuperarse mejor de ellos. "Nos alerta sobre el potencial constante de formas abruptas y discontinuas de cambio. Nos ayuda a comprender por qué sólo la Ley de las Consecuencias Inesperadas se mantiene intacta sobre las ruinas de las políticas basadas en conceptos únicos y planes rígidos" (S. Fuerth, 2009). A partir de las lecciones aprendidas en el COVID-19, la SADC ya ha comenzado a reflexionar sobre la gobernanza anticipatoria para la RRD con resultados sustanciales y ha comprometido a sus Estados miembros a adoptar este enfoque para gestionar mejor dicho fenómeno. Para más información sobre la gobernanza anticipatoria, véase Leon S. Fuerth, 2009. Foresight and anticipatory governance. Para la iniciativa de la SADC: Dewald Van Nierkerk, 2021. Gobernanza anticipatoria en la SADC: Reducción de los riesgos de catástrofe después del COVID-19. Abril de 2021. Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales (SAIIA). Véase también <https://saiia.org.za/project/sadc-anticipatory-governance/>

La pandemia también ha puesto de manifiesto la importancia de un mensaje claro para mantener informada a la población, como en el caso de Senegal, que utilizó diferentes tecnologías y medios para llegar a la población (Leo y Winn, 2020). Los Estados miembros han demostrado su compromiso continuo con el fortalecimiento de los MHEWS mediante la adopción del Marco Africano para los Sistemas de Alerta Temprana Multiriesgo y la Acción Temprana en la 7ª Reunión de Alto Nivel sobre RRD (19 de noviembre de 2021). Este marco servirá como documento guía para fortalecer e invertir en los SMAP en África en el futuro, con un llamamiento a tener un vínculo perfecto entre los SMAP a nivel nacional y los SMAP regionales y continentales, así como un sólido Centro de Operaciones de Emergencia para supervisar y pronosticar los peligros a medida que evolucionan.

Por lo tanto, se espera que los países traduzcan el Marco Africano de Sistemas de Alerta Temprana y Acción Temprana en acciones a todos los niveles. Además, los países deberían invertir en la creación de sistemas de alerta temprana multiriesgo vinculados a los sistemas de alerta temprana regionales y continentales con centros de operaciones de emergencia que funcionen y que tengan capacidad para vigilar y predecir los peligros a medida que éstos evolucionen. Teniendo en cuenta la complejidad de estos sistemas, el primer paso es desarrollar directrices sólidas y Procedimientos Operativos Estándar (POE) y asegurarse de que las funciones, las responsabilidades y los mecanismos para compartir y procesar los datos y comunicar para ejecutar una acción temprana están claramente definidos entre los países y dentro de ellos, así como entre las regiones y la AUC. Sin embargo, un MHEWS fuerte está incompleto si no desencadena una acción temprana, que debe basarse en información crítica sobre los impactos potenciales contextualizados de una catástrofe en un formato que sea traducido por las autoridades para darlo a conocer a la población. Por último, la comunicación de crisis debe ser coordinada por un organismo principal que informe a la población de los posibles peligros concurrentes y adapte el lenguaje a los diferentes contextos. Los siguientes cuatro elementos del sistema de alerta temprana centrado en la población (OMM, 2018) deben guiar los esfuerzos:

- Conocimiento del riesgo de desastres
- Detección, seguimiento, análisis y previsión
- Difusión y comunicación de alertas
- Capacidades de preparación y respuesta

Área prioritaria 2 para la RRD: reforzar la gobernanza y las capacidades institucionales para la RRD

La pandemia reveló que las políticas de RRD eran inadecuadas para responder a la crisis del COVID-19, ya que varios de estos marcos excluían los riesgos biológicos de sus estrategias y planes de preparación, mitigación, respuesta y recuperación. Las instituciones responsables de la RRD fueron obviadas en el desarrollo de mecanismos ad hoc para responder a la crisis. Las capacidades humanas y técnicas de las instituciones responsables de la RRD a nivel subnacional, nacional, regional y continental son inadecuadas, y cuentan con un capital humano escaso. Las funciones y responsabilidades de las numerosas partes implicadas en la RRD a distintos niveles no están bien definidas. Además, los dirigentes políticos y los responsables de las políticas han prestado poca atención a los esfuerzos de reducción de riesgos, así como a la preparación y la recuperación. Varios países son signatarios del Marco de Sendai, pero sus estrategias nacionales de RRD no están alineadas con el Marco para abordar todos los riesgos como se requiere. Además, la coherencia de estos marcos con los de adaptación al clima y resiliencia del desarrollo es generalmente escasa. La falta de claridad en las funciones de las partes interesadas y de los sectores fomenta el paralelismo y la duplicación de esfuerzos, así como el despilfarro de los escasos recursos, lo que da lugar a la acumulación de riesgos y vulnerabilidades.

Los gobiernos, con el apoyo de la Comisión de la Unión Africana y de las Comunidades Económicas Regionales, deberían actualizar sus estrategias de RRD y de resiliencia para que estén en consonancia con el SFDRR y el Programa de Acción, asegurándose de que sean multiriesgos, que incluyan los riesgos biológicos, que tengan en cuenta las cuestiones de género y los derechos humanos y que sean capaces de abordar los factores subyacentes de los riesgos de catástrofes y que informen las estrategias y los planes de desarrollo. Además, se anima a todos los Estados miembros a reforzar las Plataformas Nacionales para la RRD con el fin de proporcionar un mecanismo de coordinación de ventanilla única para la RRD. Deben armonizar la coordinación de la RRD asegurando que incluya a las partes interesadas de los sectores técnicos, las agencias de las Naciones Unidas y las ONG, al tiempo que garantizan la planificación conjunta para limitar el desperdicio de los escasos recursos en este período crítico de recuperación.

Los Estados frágiles y los países altamente endeudados deberían recibir el apoyo de los socios en el desarrollo para garantizar que estas estrategias se pongan en marcha para apoyar un desarrollo informado sobre los riesgos.

Área prioritaria 3 para la RRD: Desarrollo consciente del riesgo - cambio transformacional de las personas, los mecanismos y los procesos de desarrollo

Las instituciones y los socios se han visto profundamente afectados por la pandemia, lo que, junto con la crisis climática, ejemplifica la naturaleza sistémica de los riesgos y el potencial de los impactos en cascada. El COVID-19 ha desencadenado una catástrofe social y económica sin precedentes a escala mundial y todos los documentos estratégicos para el desarrollo (sectoriales o generales) reflejan la crisis del COVID-19 como el principal elemento a tener en cuenta. Décadas de progreso en materia de desarrollo en África se han desvanecido.

El Desarrollo Informado por el Riesgo hace hincapié en un cambio de mentalidad, que deje de ver el riesgo como algo negativo a través de lentes aisladas, y pase a considerar que el riesgo tiene atributos tanto negativos como positivos. En resumen, el riesgo debe enfocarse como una amenaza y una oportunidad, empezando por el COVID-19 y su recuperación. El Grupo de Trabajo Africano sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (AWGDRR) debería desempeñar un papel fundamental, así como la Matriz del Programa de Acción (2021-2025), para allanar el camino hacia la institucionalización efectiva del desarrollo basado en los desastres y los riesgos, y así alcanzar los ODS en todo el continente.

Con el fin de emprender una trayectoria sostenible e informada sobre los riesgos, los Estados miembros y las partes interesadas deberían institucionalizar un enfoque integrado de los múltiples riesgos en el contexto de la Matriz del Programa de Acción (2021-2025) con el fin de aplicar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en África. Además, y como ya se ha mencionado en esta sección, el desarrollo y la RRD suelen abordarse aisladamente con instituciones, marcos y horizontes temporales diferentes. Es fundamental conciliar la relación entre las agendas de desarrollo, RRD y ACC para crear resiliencia. El gobierno debe garantizar que los ministerios encargados del desarrollo y la planificación económica, así como de las finanzas, junto con la NDMA, coordinen un proceso integrado e inclusivo. Se espera que el AWGDRR desempeñe un papel importante en este sentido. Los países deberían prever un proceso inclusivo, multirriesgo y multisectorial en el que todos los niveles del gobierno y de la sociedad deben participar y ser consultados para elaborar documentos contextualizados, sostenibles y propios. Las siguientes características clave deberían guiar estos esfuerzos: (1) enfoque sistémico, (2) centrado en las personas y con múltiples partes interesadas, (3) multirriesgo, (4) multiescala.

Área prioritaria 4 para la RRD: Financiación de la respuesta, la recuperación y el desarrollo consciente del riesgo (abordando los factores de vulnerabilidad a los múltiples peligros)

El COVID-19 está teniendo un impacto debilitante en las perspectivas de crecimiento y desarrollo de los países. Se prevé que las pérdidas ocasionadas por las catástrofes no harán más que aumentar a medida que se intensifiquen los efectos del cambio climático en toda la región. Ante estos retos, los gobiernos han dependido a menudo de la ayuda externa y de la reasignación presupuestaria para sufragar la recuperación de los desastres. Sin embargo, esta estrategia de financiación tiene un coste. La incertidumbre y los retrasos en los flujos de ayuda tienden a complicar la planificación del trabajo de socorro y recuperación, y las reasignaciones presupuestarias para el COVID-19 han desviado fondos de programas de desarrollo vitales. Sectores enteros, incluyendo el sector privado, se han quedado sin ninguna protección mientras sufrían los efectos combinados de las medidas restrictivas adoptadas para hacer frente al COVID-19, y otros desastres concurrentes como la sequía y las inundaciones.

El Marco Nacional Integrado de Financiación (MNF) ofrece un marco interesante para financiar de forma coherente y eficaz un desarrollo sostenible basado en los riesgos. El INFF "expone toda la gama de fuentes de financiación -fuentes nacionales e internacionales de financiación tanto pública como privada- y permite a los países desarrollar una estrategia para aumentar la inversión, gestionar los riesgos y alcanzar las prioridades de desarrollo sostenible, tal y como se identifican en la estrategia nacional de desarrollo sostenible de un país". Ayuda a los países a elaborar estrategias de financiación informadas sobre el riesgo y a identificar y aprovechar fuentes de financiación adicionales mejorando la alineación de estos diferentes tipos de financiación. El INFF se basa en las capacidades, políticas, instituciones y procesos existentes a nivel nacional y, por tanto, está contextualizado.

Los elementos comunes (bloques de construcción) del enfoque incluyen:

- Evaluación y diagnóstico en el que se evalúa el panorama de riesgos y la resiliencia
- Fase inicial en la que se identifican las políticas, estrategias y tendencias de financiación existentes, así como todas las partes interesadas. También se crea un mecanismo de supervisión para guiar el INFF con una hoja de ruta clara acordada con todas las partes interesadas
- Gobernanza y coordinación para garantizar el liderazgo de los países, impulsar el diseño y la aplicación del INFF y superar los aislamientos entre sectores y partes interesadas
- Monitoreo y revisión continuos para hacer un seguimiento permanente de las tendencias de financiación, evaluar el progreso e identificar rápidamente los posibles cuellos de botella, y apoyar la elaboración de políticas dinámicas y receptivas
- Estrategia de financiación para encontrar soluciones para cerrar las brechas de financiación y aprovechar al máximo las oportunidades de financiación para financiar mejor el desarrollo informado sobre el riesgo.

Varios países africanos ya están inmersos en este proceso, como Mauritania, Malí, Costa de Marfil, Senegal, RDC, Kenia, Ruanda, Namibia, Botsuana y Madagascar.

Área prioritaria 5 para la RRD: Innovación (tecnológica/digital)

Una de las principales consecuencias del COVID-19 fue la digitalización de muchos aspectos de nuestra sociedad. Si las soluciones digitales globales han proporcionado ciertas herramientas, también se desarrollaron soluciones locales, especialmente en África, para hacer frente a desafíos específicos en contextos concretos. Esta consecuencia positiva debe ser apoyada para construir la resiliencia en la fase de recuperación, en particular en términos de MHEWS, comunicación de crisis, acción temprana y evaluación y gestión del riesgo de desastres. Esto también podría ser una oportunidad para apoyar el desarrollo de las empresas africanas de nueva creación y del sector privado que trabajan en la innovación. La mayoría de los gobiernos todavía tienden a utilizar soluciones globales o a confiar en empresas globales para desarrollar soluciones innovadoras específicas, mientras que los expertos locales existen y podrían desarrollar herramientas contextualizadas para abordar desafíos específicos.

A este respecto, los gobiernos, la CUA, las CER y los socios, incluido el sector privado, deberían comprometerse en mayor medida a apoyar tales iniciativas, estableciendo un entorno propicio para el uso y el desarrollo de soluciones locales, y proporcionando mecanismos para reforzar las capacidades y ampliar las soluciones innovadoras. Esto también puede abordar algunos de los desafíos para entender los riesgos en África y hacer análisis predictivos para planificar mejor el desarrollo sostenible. Tecnologías como el uso de big data, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial pueden ser fundamentales para producir datos regulares y fiables para el análisis continuo de los riesgos y para procesar los datos procedentes de diferentes fuentes y sectores.

Sin embargo, es necesario abordar diferentes cuellos de botella, como la baja tasa de penetración de Internet, el coste de los datos y los protocolos de datos, la infraestructura de telecomunicaciones, el entorno jurídico para el desarrollo del sector, pero también para la protección de los datos, las asociaciones estratégicas público-privadas que deben desarrollarse y/o reforzarse, etc.

Recuperación verde. Según el Plan de Acción para la Recuperación Verde de la UA, el COVID-19 no cambia la urgencia de abordar los retos medioambientales africanos (y de más allá), pero ha acelerado puntos de decisión que podrían tener impactos sustanciales. A medida que los países pasan de la contención del virus a la recuperación económica, se están tomando decisiones que marcarán las trayectorias de las emisiones, la calidad del aire, la resiliencia y la biodiversidad en las próximas décadas. Una recuperación limpia y resistente en África conducirá al empleo en las industrias del futuro, a la vez que garantizará que abordemos los retos vinculados de la salud pública, la prosperidad y el cambio climático.

Esto puede hacerse incluyendo los siguientes elementos en un programa de recuperación:

1. La financiación climática, incluyendo el aumento de los flujos, la eficiencia y el impacto de la financiación;
2. Apoyar las energías renovables, la eficiencia energética y los programas nacionales de Transición Justa;
3. Soluciones basadas en la naturaleza y centradas en la biodiversidad a través del trabajo en la gestión sostenible de la tierra, la silvicultura, los océanos y el ecoturismo;
4. Agricultura resistente, centrándose en el desarrollo económico inclusivo y los empleos verdes; y
5. Ciudades verdes y resilientes, que se centren en la calidad del aire, la infraestructura verde y azul (inundaciones y recursos hídricos) y la mejora de la información, la comunicación y la tecnología.

Gobernanza. En una crisis como la del COVID-19, la buena gobernanza es más importante que nunca y el mantenimiento de un sistema de frenos y contrapesos en la gobernanza no puede socavarse, especialmente mientras el Gobierno planifica la prestación de servicios, crea confianza en las instituciones públicas, desarrolla políticas claras de recuperación socioeconómica y reconstruye la conectividad social. La UA, las CER, la ONU y las organizaciones internacionales deben seguir apoyando los programas de gobernanza y paz y seguridad en el continente. La respuesta debe garantizar que las comunidades y las partes interesadas se comprometan y se sientan partícipes de las soluciones desarrolladas. Las intervenciones para prevenir la violencia deben abordar sus causas fundamentales, tales como la inseguridad alimentaria, la cohesión social y la responsabilidad social, la competencia por los escasos recursos y la ausencia del Estado en la periferia. El COVID-19 ha retrasado las reformas políticas y las elecciones y puede seguir haciéndolo. En este sentido, la AUC y los actores regionales, así como la ONU, deberían apoyar las negociaciones entre los partidos políticos y proporcionar asistencia técnica para favorecer los procesos clave, con el fin de construir y mantener la confianza entre los gobiernos y los ciudadanos. Además, los socios para el desarrollo deberían ayudar a reforzar las funciones básicas de gobernanza nacional y local para la gestión de crisis y la prestación de servicios, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la seguridad, y la inclusión, la rendición de cuentas y la participación. La aplicación y el despliegue del gobierno electrónico, especialmente la digitalización, sigue siendo primordial en la prestación de servicios. La respuesta al COVID-19 ha creado nuevas oportunidades para explotar la debilidad de la gobernanza y la supervisión y desviar fondos de las personas que más los necesitan. Por lo tanto, frenar la corrupción será un componente crítico de una recuperación resiliente.

Recomendación de recuperación económica basada en la tipología de países

En el Capítulo 2, se presentaron impactos para los siguientes grupos de países no regionales: exportadores de productos básicos que sufrieron pérdidas de ingresos en 2020, así como una elevada inflación; estados frágiles y afectados por conflictos en los que el COVID-19 contribuyó a la interrupción del comercio, a la inseguridad alimentaria y a la ausencia casi total de medidas de recuperación inicial; países que se enfrentan a inseguridad alimentaria y que dependen de importaciones de alimentos, países que se enfrentan a múltiples riesgos y que tuvieron que hacer frente a la pandemia, así como a calamidades concurrentes y en cascada, y naciones dependientes del turismo. A continuación, se presentan recomendaciones políticas y programáticas adaptadas a estas categorías de países. Independientemente del grupo en el que se encuentre un país, éste debería aplicar un conjunto básico de políticas e inversiones programáticas recomendadas anteriormente.

Países exportadores de productos básicos (se supone que los altos precios de los productos básicos de 2021 continuarán junto con las mejoras en la cadena de suministro mundial). Para ascender en la escala del desarrollo, la mayoría de los países africanos necesitan diversificar sus economías y añadir valor mediante la transformación de productos primarios. Por un lado, la diversificación contribuye positivamente al crecimiento económico y proporciona protección contra la volatilidad de los precios internacionales de los productos y las fluctuaciones debidas a choques externos.

Por otro lado, la diversificación también puede tomar la forma de mejorar sistemáticamente la adición de valor, sobre todo en la industria manufacturera, mediante intervenciones programáticas. La dimensión de la diversificación de las exportaciones de la economía podría consistir en pasar de la exportación de unos pocos productos primarios a la de un conjunto más amplio de bienes manufacturados y servicios. También implica la exportación a nuevos mercados. Esto permitiría la participación de las empresas nacionales en las cadenas de valor mundiales y les daría la oportunidad de ser competitivas a nivel mundial mediante la transferencia de tecnología y el aumento de la eficiencia.

Transformación estructural centrada en la digitalización y la diversificación También se debe invertir en la creación de un entorno propicio para la innovación y la diversificación económica.

La tecnología y la innovación son motores cruciales de la productividad y el crecimiento. La diversificación económica impulsada por la innovación puede ser el catalizador de la transformación estructural y el desarrollo inclusivo en los países africanos que dependen de la exportación de productos básicos. Muchos gobiernos africanos están apoyando programas que pueden alimentar la innovación y crear un ecosistema para lograr una mayor diversificación y crecimiento. Este tipo de intervención y apoyo debería continuar a medio y largo plazo. Esto también es relevante para los países que han conseguido algunos avances en la transformación estructural. Por ejemplo, aunque la mayoría de los países del norte de África se han transformado estructuralmente y el sector industrial es el segundo que más contribuye, la contribución del sector manufacturero, excluyendo la energía y la construcción, sigue siendo limitada. Más allá de abordar los problemas, es necesario seguir reforzando las infraestructuras de acceso digital, de energía, de transporte y de almacenamiento para alcanzar objetivos específicos de diversificación económica a nivel sectorial, como por ejemplo el desarrollo de las industrias agroalimentarias para fomentar el crecimiento inclusivo.

La diversificación geográfica parece ser más importante que la diversificación de productos en África, especialmente en los países que se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo. Muchos países tienen su actividad económica concentrada en torno a las regiones de la capital nacional o en determinados centros urbanos. En las regiones remotas del interior la población se dedica en gran medida a actividades poco productivas y a la agricultura de subsistencia. Esto explica las importantes disparidades de desarrollo a nivel subnacional. La desigualdad interregional también es pronunciada en África entre los países costeros en comparación con los países del interior sin salida al mar. Participar en acuerdos de libre comercio, reduciendo así los costes comerciales y comerciando con países dentro de África ha seguido recibiendo mucha importancia en los círculos políticos y ha cobrado especial relevancia en el contexto de la actual pandemia.

La transferencia y la adopción de tecnología es una parte integral de la diversificación económica que suele adaptarse a las necesidades de una mano de obra cualificada. En el continente existen importantes carencias de cualificación. Por lo tanto, es necesario promover las instituciones de EFTP y las políticas activas del mercado laboral. También hay que fomentar las formas de adquirir las habilidades que definen la capacidad empresarial y la actividad emprendedora. Algunas de las estrategias de diversificación de una economía dependiente de productos básicos pueden ser políticas que abarcan toda la economía, como la gobernanza y la educación, que contribuyen a fomentar la diversidad de las exportaciones más que las políticas industriales con objetivos específicos.

Agricultura de secano, países dependientes de las importaciones de alimentos y con inseguridad alimentaria, La dependencia de los países que practican la agricultura de secano, la dependencia de las importaciones de alimentos, los precios de los productos básicos en los mercados internacionales y los ingresos por turismo son motivos de volatilidad. La transición sostenible de la agricultura de secano a la de regadío mediante la recogida de agua y las prácticas de gestión inteligente de los cultivos puede ser una forma de frenar la excesiva dependencia de estos países de la agricultura de secano. En este sentido, los Estados miembros deberían considerar la posibilidad de invertir en agricultura de regadío y en prácticas de gestión inteligente de los cultivos. Los países africanos también deberían desarrollar una agricultura climáticamente inteligente y más productiva. Por ejemplo, los países del norte de África tienen un gran potencial agrícola en términos de tierra

cultivable (18% en Marruecos y 17,4% en Túnez) y enormes recursos pesqueros (BAfD, 2020). Además, pueden desarrollarse cadenas de valor, en particular para los productos agroalimentarios, lo que tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico y la mitigación de la pobreza.

Países dependientes del turismo: La OMT estima que en 2020 viajaron mil millones menos de turistas internacionales en todo el mundo y África registró una caída del 74% en las llegadas de turistas internacionales y un descenso del 64% en las exportaciones relacionadas con el turismo. El COVID-19 también tuvo un impacto secundario en los empleos relacionados con el turismo. Sólo en la Comunidad de África Oriental, se estima que los puestos de trabajo en el sector del turismo se redujeron de 4,1 millones de empleos a 2,2 millones en 2020 (AERC, 2021). La recuperación de este sector debe empezar por el turismo nacional y regional. Aunque es menor que el de otras regiones, en 2019, el turismo interno representó solo el 50,2% de los ingresos por viajes y turismo en África, con la excepción del norte de África. Las medidas de recuperación a corto plazo deben estimular el turismo local a través de campañas y tasas turísticas rebajadas o exentas hasta que el sector se restablezca. Estas medidas también allanarían el camino y generarían confianza en el turismo internacional. En el caso de las comunidades que dependen del turismo, las medidas de protección social también deberían extenderse a ellas en combinación con un apoyo específico a las MIPYMES de las industrias de viajes y turismo.

Para reanudar el turismo regional e internacional será fundamental mitigar los posibles problemas de salud y seguridad que puedan desanimar a los turistas. A corto plazo, es importante aplicar y comunicar protocolos claros de seguridad y protección en relación con los requisitos de entrada, y hacerlo también sobre el terreno para recuperar la confianza de los viajeros. En este sentido, también es importante invertir en capacidades para aplicar estrategias de GRD y resiliencia para las zonas y recursos turísticos. A nivel regional, la estimulación del comercio y el turismo dentro de África puede impulsar el crecimiento económico mediante la promoción de un régimen más formal pero más fácil de los mecanismos de comercio y turismo transfronterizos. Estas medidas inmediatas pueden aplicarse a través de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales existentes. A medio y largo plazo, el COVID-19 ofrece al sector turístico la oportunidad de revisar los modelos de negocio turístico y el marco político para mejorar la competitividad. El sector debe poner en marcha medidas que promuevan un turismo socialmente responsable y sostenible.

Estados frágiles y estados afectados por conflictos: El conflicto y la inseguridad y la pandemia del COVID-19 representan una combinación mortal en varios países de las cinco regiones de África. Entre ellos están la República Centroafricana, el Sahel Central (Burkina Faso, Malí y Níger), Etiopía, el norte de Nigeria, el norte de Mozambique, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. El COVID-19 ha exacerbado la pobreza y la desigualdad en los países afectados por el conflicto, añadiendo una enorme presión a unos sistemas sociales y sanitarios ya desbordados. La pobreza crónica y la debilidad de los servicios esenciales, la intensificación de los conflictos, los desplazamientos y la desnutrición aguda, en combinación con la pandemia del COVID-19, han aumentado la vulnerabilidad de las familias.

A corto plazo, el gobierno y los actores humanitarios deberían inyectar fondos esenciales relacionados con el COVID-19 en el apoyo humanitario, especialmente para los refugiados y los desplazados internos, teniendo en cuenta los riesgos desproporcionados que corren las mujeres y los niños desplazados. En combinación con el apoyo humanitario, las medidas de recuperación en estos países deberían apoyar la detección temprana a nivel comunitario y familiar y proporcionar tratamiento para la forma más grave de malnutrición a través de las instalaciones comunitarias y sanitarias. También es necesario ampliar la protección social de los más vulnerables en estos países, al tiempo que se refuerzan las políticas de protección social para que sean más inclusivas y respondan a las crisis. El trabajo de recuperación también debe poner en marcha acuerdos de financiación, plataformas digitales y planes de contingencia para conseguir una ayuda humanitaria y una protección social armonizadas.

A medio y largo plazo, la Unión Africana, los organismos regionales y la ONU deben mantener vivos los procesos de paz y los esfuerzos de prevención de conflictos, colaborando con los enviados de la ONU y otros mediadores para, por ejemplo, mantener comunicaciones electrónicas seguras con las partes en conflicto.

La labor de recuperación también debería centrarse en el fortalecimiento de los canales diplomáticos extraoficiales entre los Estados y los actores no estatales para comunicarse por encima de posibles escaladas de conflictos y otros tipos de riesgos en regiones tensas.

Países que se enfrentan a múltiples riesgos consulte la sección “El COVID-19 ha planteado la necesidad de un cambio hacia un desarrollo basado en la información sobre el riesgo frente a las amenazas de los peligros múltiples” entre las páginas 64 y 66.

SDG Push y otros escenarios²⁶

Escenario del peor de los casos (daños elevados)

Este escenario supone mayores pérdidas del PIB en 2020-21 (alrededor del ocho por ciento en 2020 en relación con la situación anterior al COVID-19), una mayor mortalidad y una menor recuperación económica (reducción del PIB mundial de alrededor del siete por ciento al tipo de cambio de mercado (TEM) en 2030 y una pérdida de alrededor del 13 por ciento en los países de menores ingresos). Una mayor desigualdad pos pandémica y un aumento significativo de los niveles de deuda nacional también ayudan a enmarcar el escenario y contribuyen a aumentar las pérdidas económicas a largo plazo.

Los supuestos en los que se basa el peor escenario son los siguientes:

- Mortalidad - la mortalidad mundial por COVID-19 aumenta en 2020-2021 en casi un millón de muertes con respecto al escenario medio (base de COVID-19);
- Crecimiento económico - disminuye aún más la tasa de crecimiento del PIB en todos los países en un 1,5% en ambos años, asume que el 80% de la disminución del crecimiento del PIB persistirá como pérdida de productividad, añade un 20% del PIB a los niveles de deuda pública; y
- Desigualdad - aumenta el Gini en todas partes en un cinco por ciento (aproximadamente 0,015 puntos en la base del índice 0-1).

²⁶Las referencias para estos escenarios son: Hughes, B.B., Hanna, T., McNeil, K., Bohl, D.K., & Moyer, J.D. (2021). Pursuing the Sustainable Development Goals in a World Reshaped by COVID-19. Denver, CO y Nueva York, NY: Frederick S. Pardee Center for International Futures y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y Abidoye, B., Felix, J., Kapto, S. y Patterson, L. (2021). Leaving No One Behind: Impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals (SDGs). Nueva York, NY y Denver CO: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Frederick S. Pardee Center for International Futures. https://sdgintegration.undp.org/sites/default/files/Foundational_research_report.pdf

Sobre la base de estos supuestos, los resultados previstos para 2030 en el peor de los casos son los siguientes:

- Es probable que el COVID-19 provoque que el 35% de la población africana se encuentre en situación de pobreza extrema (597 millones de personas) en 2030.
- Los efectos en un África con grandes daños se extenderían a todos los indicadores de desarrollo humano. Además de los daños del escenario del COVID-19:
 - El recuento de la pobreza femenina aumenta en 37 millones hasta los 298 millones de personas;
 - Es probable que otros 14 millones de personas sufran desnutrición, de los cuales dos millones serán niños menores de cinco años; y
 - La tasa de niños que completan la escuela secundaria disminuiría en casi dos puntos porcentuales en 2030, pasando del 36,4% en el escenario de referencia del COVID al 34,8% en el peor de los casos (daños elevados).

En el peor de los casos, los elementos de una estrategia de recuperación que deberían considerarse se presentan a continuación en el cuadro 3.2.

Las recomendaciones para este escenario se seleccionaron para ayudar a los países a hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la peor situación: mayor mortalidad y morbilidad; declive económico; mayor desigualdad de ingresos y de género; aumento de la pobreza; y mayor desnutrición. Dado que muchos países africanos ya estaban muy endeudados y que las recomendaciones exigen un gasto público adicional, es necesario que la ayuda internacional contribuya a solucionar los problemas de liquidez y de deuda. La información detallada de cada uno de los elementos puede encontrarse en la sección anterior de este capítulo.

TABLA 3.2: Elementos de la estrategia de recuperación en el peor de los casos

Calendario	Recomendaciones políticas	Inversiones programáticas
Corto plazo	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar las reformas sanitarias prioritarias - Aumentar las respuestas monetarias y fiscales - Ampliar el sistema de transferencias monetarias - Abordar los problemas de exclusión de género 	<ul style="list-style-type: none"> - Acelerar rápidamente el programa de vacunación - Ampliar las redes de seguridad social para proteger a los grupos pobres y vulnerables - Aumentar la asistencia alimentaria y nutricional - Impulsar el apoyo a las microempresas
Corto plazo	<ul style="list-style-type: none"> - Buscar ayuda internacional para los problemas de liquidez y sostenibilidad de la deuda - Reforzar la capacidad de RRD para hacer frente a las amenazas concurrentes y en cascada 	<ul style="list-style-type: none"> - Buscar apoyo externo para impulsar los ODS - Invertir en el retorno a la educación de calidad - Fortalecer los sistemas de producción agroindustrial y las cadenas de valor relacionadas

Largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar una estrategia contra la pobreza y buscar apoyo externo para su aplicación - Apoyar la aplicación del AfCFTA - Promover una legislación de protección social 	<ul style="list-style-type: none"> - Movilizar la ayuda internacional para mejorar y acelerar el aprendizaje - Aprovechar los recursos para realizar un programa de resiliencia agroalimentaria - Desarrollar un sistema integral de protección social
-------------	--	---

Escenario medio (Referencia COVID-19)

Este escenario incorpora el análisis del FMI sobre el impacto que el COVID-19 tendrá probablemente sobre el crecimiento del producto interior bruto (PIB) en 2020 y 2021 y las proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) sobre los posibles patrones de mortalidad. En este escenario, la pérdida global de PIB en 2020 con respecto a la situación anterior al COVID-19 es de aproximadamente un 6,6% tanto en términos de tipo de cambio de mercado (TEM) así como de paridad de poder adquisitivo (PPA). El escenario supone una recuperación muy considerable de las economías después de la pandemia, con una pérdida de PIB en 2030, en términos de TEM, de alrededor del 4,0% (3,5% en PPA). El escenario modela las trayectorias globales resultantes de cara a los ODS.

Los supuestos para el caso medio son:

- Mortalidad - proyecciones de mortalidad basadas en las del IHME.
- Crecimiento económico - utiliza las proyecciones de crecimiento económico del FMI. Se asume que el 80% de las pérdidas de crecimiento del PIB en 2020-21 con respecto a los patrones a largo plazo son interrupciones temporales de la utilización de la capacidad, mientras que el 20% son pérdidas de ganancias de productividad que normalmente se habrían alcanzado en esos años.

Los resultados previstos para 2030 para el escenario medio son que:

- Se estima que 28 millones de africanos han caído ya en la pobreza a causa de la pandemia en 2020. En 2030, otros 26 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza como consecuencia del impacto de la pandemia;
- Esto aumentará el número total previsto de personas en situación de pobreza extrema de 496 millones (en un escenario sin COVID) a 522 millones de personas en 2030 en África;
- De los 26 millones de personas adicionales que viven en la pobreza extrema en África para 2030, casi la mitad (12 millones) serán mujeres y niñas; y
- Para 2030, se estima que 231 millones de africanos, incluidos 31 millones de niños, estarán malnutridos, lo que no representa casi ninguna mejora respecto a las cifras de 2020.

En el escenario medio, los elementos de una estrategia de recuperación que deberían considerarse se presentan en la Tabla 3.3. Las recomendaciones para este escenario se seleccionaron para ayudar a los países a hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de una situación mediana: mortalidad y morbilidad menos graves pero persistentes; recuperación económica gradual; continuación de la desigualdad de ingresos y de género; y continuación de los altos niveles de pobreza y malnutrición.

Esto requerirá políticas y programas que continúen abordando la pobreza, la malnutrición y la desigualdad, al tiempo que tratan de proteger y acelerar el crecimiento económico. La información detallada de cada uno de los elementos puede encontrarse en la sección anterior de este capítulo.

TABLE 3.3: Elementos de la estrategia de recuperación para el escenario medio

Calendario	Recomendaciones políticas	Inversiones programáticas
Corto plazo	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar toda la gama de reformas sanitarias - Mantener las respuestas monetarias y fiscales - Mantener el sistema de transferencias monetarias - Preservar la acumulación de capital humano - Abordar los problemas de exclusión de género 	<ul style="list-style-type: none"> - Seguir acelerando el programa de vacunación - Abordar las deficiencias de las redes de seguridad social para proteger a los grupos pobres y vulnerables - Abordar los problemas de inseguridad alimentaria - Impulsar el apoyo del sector privado a la continuidad de las empresas
Medio plazo	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizar la estrategia de protección social, los criterios de focalización y el registro social - Resolver los problemas de liquidez y sostenibilidad de la deuda, según sea necesario - Las políticas deben centrarse en los ODS prioritarios - Consolidar la capacidad de RRD para gestionar los riesgos concurrentes y en cascada 	<ul style="list-style-type: none"> - Invertir en el impulso de los ODS - Invertir en el retorno a la educación de calidad - Utilizar la digitalización para catalizar el empleo - Fortalecer los sistemas de producción agroindustrial y las cadenas de valor relacionadas
Largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar una estrategia contra la pobreza y buscar apoyo externo para su aplicación - Promover la integración y la colaboración regional - Implementar políticas para no dejar a nadie atrás - Promover la integración regional y la colaboración. 	<ul style="list-style-type: none"> - Invertir en programas para mejorar y acelerar el aprendizaje - Invertir en un programa de resiliencia agroalimentaria - Desarrollar sistemas integrales de protección social y de reducción del riesgo de catástrofes

Escenario óptimo (SDG Push)

Aunque el trabajo para alcanzar los ODS no ha dejado de aumentar en todo el mundo, existe la posibilidad de tratar de alcanzarlos de forma aún más ambiciosa. Las iniciativas del PNUD “Más allá de la recuperación” ejemplifican el potencial para construir un nuevo contrato social, desarraigar las desigualdades, reequilibrar la naturaleza, el clima y la economía, y acelerar y ampliar la disrupción y la innovación digitales (PNUD, 2020a). Esta capacidad de análisis de escenarios se basa en una amplia aplicación de estas iniciativas.

El mejor escenario supone que los países invertirán en lo siguiente:

- **Gobernanza** (construcción de un nuevo contrato social)
 - Reducción de la corrupción, aumento de la eficacia del gobierno y aumento de la democracia (por lo tanto, también de la inclusividad)

- **Protección social** (eliminación de las desigualdades)
 - Mayores transferencias sociales y mayor protección de la nutrición para los hogares menos cualificados y, por lo tanto, de menores ingresos, aumento de la matriculación y la finalización de la educación en todos los niveles, mayor atención de la sociedad a la mejora del acceso al agua potable y al saneamiento, a la electricidad y a los hornillos modernos, y mayor gasto público de apoyo a la educación y la salud
- **Economía verde** (reequilibrar la naturaleza, el clima y la economía)
 - Desplazamiento de las calorías consumidas de carne a verduras y frutas, reducción de residuos agrícolas en la producción, transporte, procesamiento y consumo, aumento de los rendimientos agrícolas permitiendo también el aumento de la superficie forestal, reducción de la contaminación atmosférica urbana, aumento de la eficiencia en el uso del agua y la energía, un impuesto sobre el carbono, aceleración del avance tecnológico y énfasis político en la energía renovable
- **Disrupción e innovación digital** (por la velocidad y la escala)
 - Mayor énfasis en la educación terciaria, especialmente en la ciencia, mayor gasto gubernamental y de la sociedad en investigación y desarrollo, introducción acelerada de la tecnología de banda ancha fija y móvil, incluidas las formas móviles

Los resultados previstos para 2030 en el mejor de los casos son:

- Las intervenciones específicas reducirían el número de africanos que viven en la pobreza extrema en 67 millones en 2030 en relación con las tendencias actuales del COVID-19 y en 217 millones a mediados de siglo;
- Aproximadamente 145 millones de adultos y niños saldrían de la malnutrición en África para 2030; y
- La proporción de niños que completan la escuela secundaria en África también aumentaría de la tasa de finalización estimada del 36% al 40%.

La mayoría de los países y poblaciones que probablemente no alcancen las metas de los ODS, incluso con el empuje de los ODS, estarán en África²⁷ y Asia del Sur. Los resultados dependerán de las variables de las metas de los ODS. Por ejemplo, en 2019, el 58% de la población mundial que vive con menos de 1,90 dólares al día vive en África. La proporción de África crecerá en el escenario medio hasta el 71% en 2030 y el 86% en 2050. Dentro de África, la proporción de personas en situación de pobreza extrema en África Central crecerá del 21 al 35% y la de África Oriental disminuirá del 42 al 29%. La pauta es algo similar con respecto a los niños en edad de asistir a la escuela primaria que no están matriculados; el 58 por ciento lo están ahora en África y el 78-79 por ciento podrían estarlo tanto en 2030 como en 2050. Por el contrario, en 2019 el 29 por ciento de los niños desnutridos vivían en África (con la excepción del norte de África) y es probable que este porcentaje no cambie en 2050.

En el mejor de los casos, los elementos de una estrategia de recuperación que deberían considerarse se resumen en la Tabla 3.4. Las recomendaciones para este escenario se seleccionaron para ayudar a los países a acelerar el empuje de los ODS con el fin de lograr y proteger los avances en la reducción de la pobreza, la reducción de la malnutrición, la mejora de los resultados educativos y un mayor crecimiento económico. La información detallada de cada uno de los elementos puede encontrarse en la sección anterior de este capítulo.

²⁷África en esta sección se aplica a todo el continente con la excepción del norte de África

TABLA 3.4: Elementos de la estrategia de recuperación en el mejor de los casos

Calendario	Recomendaciones políticas	Inversiones programáticas
Corto plazo	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar toda la gama de reformas sanitarias - Reducir las respuestas monetarias y fiscales - Actualizar la estrategia de protección social, los criterios de selección y el registro social - Preservar la acumulación de capital humano - Abordar los problemas de exclusión de género 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener el ritmo del programa de vacunación - Abordar las deficiencias de las redes de seguridad social para proteger a los grupos pobres y vulnerables - Abordar los problemas de inseguridad alimentaria - Impulsar el apoyo del sector privado a la continuidad de las empresas - Reforzar el apoyo del sector privado a la continuidad de las empresas - Invertir en un programa de resiliencia agroalimentaria
Medium-term	<ul style="list-style-type: none"> - Resolver los problemas de liquidez y sostenibilidad de la deuda según sea necesario. - Modernizar los sistemas de protección social - Las políticas deben centrarse en la consecución de los ODS prioritarios - Promover la digitalización, la industrialización y la diversificación 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener los esfuerzos del SDG Push - Invertir en el retorno a la educación de calidad - Utilizar la digitalización para catalizar el empleo - Fortalecer los sistemas de producción agroindustrial y las cadenas de valor relacionadas - Abordar los déficits de energía, calidad y coste del servicio
Longer-term	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar una estrategia contra la pobreza y buscar apoyo externo para su aplicación - Promover la integración y la colaboración regionales - Implementar políticas para no dejar a nadie atrás - Promulgar legislación en materia de protección social 	<ul style="list-style-type: none"> - Invertir en programas para mejorar y acelerar el aprendizaje - Invertir en un programa de resiliencia agroalimentaria - Desarrollar un sistema de protección social más completo

IV. Disposiciones institucionales para la aplicación del marco

El capítulo IV se centra en la importancia de los acuerdos institucionales para garantizar que el proceso de recuperación esté bien gestionado y gobernado. Considera: la selección de una agencia líder eficaz para gestionar la recuperación; la legislación necesaria; el liderazgo y la dotación de personal; la participación de la comunidad; el papel del sector privado; y la coordinación y la implementación local.

La forma en que se establezcan las instituciones para responder, recuperarse y reconstruirse tras el COVID-19 desempeñará un papel fundamental a la hora de determinar si los esfuerzos de recuperación a nivel continental, regional y nacional son capaces de abordar algunos de los factores subyacentes que condujeron a los impactos diferenciales, multisectoriales y duraderos de la pandemia. En el caso del Marco de Recuperación de África COVID-19, el alcance continental del marco justifica un acuerdo institucional de varios niveles que consiste en estructuras a nivel continental, regional y nacional, cada una con su propio conjunto de funciones y responsabilidades, aprovechando su mandato y sus ventajas comparativas para abordar las necesidades de recuperación de la población.

Los efectos generalizados de la pandemia en todos los segmentos de la población y en todos los aspectos del bienestar socioeconómico de las comunidades y las naciones, incluidas las dimensiones transfronterizas y regionales relacionadas con el comercio, la circulación de personas y bienes, etc., exigen acciones coordinadas y complementarias entre los sectores y los grupos interesados que van más allá de las instituciones tradicionales de gestión de desastres e incluyen a los ministerios y organismos sectoriales, así como a actores no estatales, tales como el mundo académico, la sociedad civil, los representantes del sector privado, etc. Aunque los esfuerzos de recuperación del COVID-19 pueden ser específicos para cada sector, existe una necesidad crítica de mantener un alto nivel de coordinación para garantizar las sinergias y crear efectos multiplicadores en varios sectores, al tiempo que se garantiza un enfoque resiliente de los esfuerzos de recuperación.

Los aspectos críticos de cada modalidad de coordinación que definen el éxito de cualquier labor de recuperación socioeconómica son la forma en que los diversos actores estatales y no estatales generan pruebas, se comunican información entre ellos y toman decisiones, con responsabilidad compartida. Si bien se reconoce que no existe un modelo único para todos los casos, sobre la base de la experiencia pasada es importante comprender qué obstaculiza y qué facilita el desempeño eficaz de los diversos mecanismos de coordinación multisectorial y de múltiples partes interesadas, y cómo conformar mejor el mecanismo de gobernanza continental y regional para apoyar adecuadamente los esfuerzos nacionales y subnacionales.

La puesta en marcha de actividades de recuperación socioeconómica resilientes e informadas sobre el riesgo a nivel continental, regional y nacional, debería incluir a las autoridades nacionales y locales, a los actores regionales, a los representantes de las poblaciones afectadas, al mundo académico, al sector privado, a las ONG, a los donantes y a los socios internacionales, a las organizaciones juveniles, a las agencias de la ONU, a los bancos de desarrollo y a otras instituciones financieras. Sin ser prescriptivo sobre los acuerdos institucionales a nivel regional y nacional, este documento ofrece algunas orientaciones que permitirían a las partes interesadas, incluyendo a los gobiernos nacionales así como a las organizaciones regionales y continentales, adaptar sus estructuras y mecanismos existentes para servir al propósito específico de la recuperación del COVID-19.

En el capítulo IV se describen los acuerdos institucionales propuestos a nivel continental, regional y nacional, así como las buenas prácticas y los principales resultados relacionados con el desarrollo de acuerdos institucionales para la supervisión, la gestión y la coordinación de la recuperación, basándose en la bibliografía sobre la recuperación posterior a los desastres.

Disposiciones institucionales a tres niveles

Nivel continental

A nivel continental, como autoridad dentro de la Comisión de la UA responsable de la recuperación de desastres y de la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Economía Azul y Desarrollo Sostenible podría actuar como la entidad principal que coordine la aplicación del Marco de Recuperación para África. La Unidad de Reducción del Riesgo de Desastres (DRR) del Departamento, que ya tiene la experiencia, el mandato y el poder de convocatoria para los esfuerzos de recuperación a nivel continental, podría actuar como secretaria.

Además, la función de coordinación y seguimiento de la Unidad de RRD podría ampliarse y facilitarse a través del grupo de coordinación interdepartamental sobre RRD creado recientemente en la CUA. Esto permitiría que otras partes de la CUA colaboraran en la aplicación del Marco, logran sinergias con los esfuerzos de recuperación sectorial dirigidos/orientados por los departamentos y órganos de la CUA, y proporcionarían orientación a las CER y a los Estados miembros. Al afinar el acuerdo institucional a nivel de la UA, podrían explorarse las oportunidades de aprovechar y, si procede, establecer vínculos con algunas de las estructuras creadas en el contexto de la Estrategia Continental Conjunta de África para el COVID-19, el fondo de respuesta al COVID-19 de la UA, la Cumbre de Financiación de las Economías Africanas en el Contexto del COVID-19 en mayo de 2021 (Presidencia francesa, 2021), etc.

Dado que el COVID-19 es una catástrofe biológica y de salud pública, los mecanismos existentes en la UA para la coordinación de las múltiples partes interesadas, como el Grupo de Trabajo Africano sobre la RRD, pueden servir de plataforma para el seguimiento periódico de los progresos, así como para el intercambio de experiencias sobre la recuperación a medida que avanza la aplicación del marco. Los esfuerzos continentales también podrían aprovechar el liderazgo político de la UA, con fuertes vínculos, cuando sea pertinente, con las oficinas del Enviado Especial de la UA para la respuesta al COVID 19, así como con el recién nombrado abanderado de la RRD de la UA.

Reconociendo el creciente espacio de dependencias transnacionales, regionales y continentales, la CUA puede orientar los esfuerzos de recuperación resiliente en esos ámbitos. Del mismo modo, al dar forma a la recuperación resiliente del continente, se esperan más sinergias entre los trabajos de recuperación a nivel nacional, lo que puede conducir a un efecto de derrame entre los países, desencadenando también una sinergia a nivel regional.

Dado que la ejecución del trabajo de recuperación se llevará a cabo en los países y comunidades de los Estados miembros de la UA, el acuerdo institucional a nivel continental, además de proporcionar liderazgo, orientación y recursos catalizadores (los que existen dentro de la CUA, así como los movilizados por los socios y donantes), podría desempeñar un papel clave en la provisión de una plataforma para el intercambio de conocimientos y experiencias, así como un repositorio para la recopilación de datos, estudios y directrices sobre todos los aspectos relevantes de la recuperación del COVID-19.

Nivel regional

Puede establecerse un acuerdo institucional similar al de la CUA a nivel regional para cada una de las Comunidades Económicas Regionales (CER). La naturaleza específica del mecanismo de coordinación, supervisión técnica y seguimiento en las CER variaría de una región a otra, en función de los mecanismos existentes que permiten la coordinación multisectorial dentro de las CER (incluidos los comités interdepartamentales y los grupos de trabajo), así como otros que permiten la participación de múltiples partes interesadas en aspectos relacionados con la recuperación y el aumento de la resiliencia.

Podría prestarse especial atención a cualquier estructura o mecanismo específico creado en el contexto del COVID-19. Si estos tienen un enfoque multisectorial, podrían ampliarse para coordinar la recuperación socioeconómica,

Independientemente de la entidad específica a nivel regional (dentro de las CER) que se designe como entidad líder para coordinar, guiar y supervisar los esfuerzos de recuperación del COVID-19, es necesario que la institución cuente con la experiencia técnica necesaria con poder de convocatoria y recursos financieros para proporcionar liderazgo. Dada la naturaleza multisectorial de la recuperación de COVID-19, la entidad líder podría reunir recursos y experiencia de los distintos departamentos, direcciones y agencias especializadas pertinentes para aumentar sus capacidades.

Además de las comunidades económicas regionales, las entidades subregionales, como las comisiones y autoridades de las cuencas fluviales y lacustres, pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de facilitar y coordinar la recuperación en las regiones que atraviesan las fronteras nacionales y abarcan varios países. En el caso de las instituciones que abarcan diferentes regiones (por ejemplo, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad, que abarca los países de África Occidental y Central), el acuerdo institucional a nivel continental tendría un papel específico para garantizar la coordinación entre las CER.

Nivel de país

A nivel nacional, es necesario identificar o establecer instituciones responsables de la recuperación (cuando haya lagunas) para agilizar o acelerar los procesos de recuperación. Deben contar con los recursos adecuados para que haya capacidad suficiente para gestionar y ejecutar lo que podría ser un esfuerzo de recuperación difícil y largo. Esto implica aclarar las funciones y responsabilidades de los distintos organismos, así como las de los socios del gobierno. Es necesario aclarar lo que hará cada institución para reducir la duplicación (y los costes asociados) e integrar las actividades en la recuperación. La confirmación de los acuerdos institucionales y la aclaración de las funciones y responsabilidades son fundamentales tanto a nivel nacional como local y comunitario.

La ejecución del trabajo de recuperación, ya sea a través de un programa general de recuperación o de proyectos e iniciativas independientes, debe gestionarse con mecanismos claros de coordinación entre los sectores público y privado, las comunidades y los mercados. Las plataformas de RRD o mecanismos similares podrían desempeñar un papel importante en la coordinación de los esfuerzos de recuperación, especialmente en los países donde son fuertes y pueden influir en la toma de decisiones relacionadas con la recuperación. Sin embargo, la apropiación al más alto nivel del gobierno, así como los vínculos con las partes del gobierno responsables de la planificación y la toma de decisiones económicas, así como las inversiones, serán bastante cruciales para una implementación coordinada y multisectorial de la recuperación que sea rentable, eficiente y esté bien dotada de recursos.

Para llegar a un acuerdo institucional óptimo a nivel de país, los gobiernos nacionales podrían hacer esfuerzos específicos para examinar las diversas estructuras establecidas en el contexto del COVID-19 y explorar formas pragmáticas de establecer vínculos formales entre éstas y las instituciones de GRD existentes; y fortalecer su mandato y capacidades. La recuperación del COVID-19 también podría servir como una oportunidad para establecer directrices claras para la recuperación de desastres en los países, en forma de una política de recuperación, si este aspecto no está adecuadamente cubierto en las legislaciones, políticas y estrategias de gestión de desastres.

Consideraciones clave para los acuerdos institucionales

Las siguientes son consideraciones que, aunque se centran principalmente en el ámbito nacional, también pueden aplicarse a las instituciones continentales y regionales para la gestión de la recuperación del COVID-19. Incluyen a) la selección de una entidad líder eficaz para gestionar la recuperación; b) el establecimiento de un marco jurídico para la(s) institución(es) encargada(s) de la recuperación; c) el nombramiento de un líder y un equipo de recuperación eficaces; d) la garantía de la participación de la comunidad; e) el apoyo al papel del sector privado; y f) la garantía de coordinación gubernamental y aplicación local.

Selección de una entidad líder eficaz para gestionar la recuperación

A medida que los esfuerzos de recuperación del COVID-19 se han ido desarrollando en los países, la entidad líder (ministerio, departamento, agencia u otra entidad relevante) debe ser claramente identificada por el gobierno nacional para evitar la posibilidad de competencia entre agencias y permitir que la entidad ejerza un papel de liderazgo adecuado en la recuperación. La selección de la entidad líder puede guiarse por cinco criterios, que son (a) las características del impacto de la pandemia en el país; (b) la estructura de gobernanza actual; (c) la experiencia previa de la entidad en materia de recuperación; (d) la capacidad de la entidad para llegar a las comunidades e incluirlas en la definición e implementación de su proceso de recuperación, y la capacidad para trabajar con las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales (ONG); y (e) los marcos generales de coordinación, seguimiento, supervisión y control en funcionamiento entre los organismos del país, los ministerios competentes, los gobiernos locales y la sociedad civil.

El gobierno puede elegir una entidad líder después de haber realizado las consultas necesarias con las principales partes interesadas y los ejecutores de los programas en curso y futuros, tanto dentro como fuera del gobierno. No obstante, la decisión, si no se ha tomado ya, debe tomarse urgentemente. Lo ideal es que los gobiernos confirmen o establezcan, antes de una catástrofe, la entidad que probablemente dirigirá el proceso de recuperación.

Sin embargo, los perfiles de la entidad líder para la recuperación del COVID-19 también dependerán de la magnitud y la naturaleza del impacto de la pandemia en el país, así como de su capacidad para liderar el proceso de recuperación.

Si es necesario, deben realizarse evaluaciones de la capacidad para examinar los requisitos de la entidad líder y de los sectores específicos. Los dos criterios principales para medir la capacidad de una entidad para gestionar la recuperación son la capacidad de los recursos humanos y cuáles son sus habilidades.

La entidad principal debe tener la capacidad de mantener la urgencia de obtener resultados, centrándose en resultados y objetivos. La entidad líder necesitará un historial probado de ser capaz de distribuir los recursos de manera eficiente y eficaz; de producir resultados en plazos ajustados; de realizar múltiples tareas; de colaborar con otros organismos, autoridades locales y la sociedad civil; y de ser flexible a la hora de trabajar en circunstancias que evolucionan rápidamente.

La capacidad de gestionar contratos y adquisiciones es fundamental. La capacidad de una entidad líder para gestionar contratos es importante para la adquisición de servicios, equipos y materiales, la evaluación de ofertas y la supervisión de programas y políticas de recuperación.

Estos procesos requieren tiempo y recursos humanos dedicados, así como conocimientos técnicos específicos. Esto significa que los gobiernos deben prepararse antes de que se produzca una pandemia para asegurarse de que cuentan con las capacidades de gestión financiera y de adquisiciones adecuadas para responder rápidamente cuando se produzca una emergencia sanitaria. Una respuesta eficaz puede requerir procesos de adquisición acelerados, que exigen el establecimiento, antes de la pandemia, de marcos de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento y evaluación para evitar el riesgo de corrupción y malversación de fondos. En algunas operaciones de recuperación, los contratistas externos constituyen una parte importante de los ejecutores. En estos casos, la habilidad y la capacidad logística del organismo principal para gestionar los contratos es fundamental para el éxito de la ejecución de la recuperación.

La agencia líder también debe ser capaz de coordinar esfuerzos de recuperación dispares.

Al desarrollar el trabajo de recuperación, la entidad líder debe prestar especial atención a la armonización de las estrategias entre sectores. Esto evitará la duplicación y garantizará que las necesidades transversales se comprendan conjuntamente y se cubran de manera eficiente. Armonizar las estrategias también significa garantizar un uso justo y eficaz de los recursos para evitar la discriminación de las minorías y las desigualdades en el gasto y la calidad de la prestación.

Un ejemplo de este enfoque es el caso de Sudáfrica (véase el recuadro 4.1)

RECUADRO 4.1: Los ministerios dirigirán la recuperación en Sudáfrica

Los departamentos y ministerios competentes serán responsables de la ejecución de los programas correspondientes a sus departamentos en el Plan de Reconstrucción y Recuperación Económica de Sudáfrica. Este trabajo será coordinado por el Equipo Técnico Asesor Presidencial y la Operación Vulindela del Tesoro Nacional, con el Consejo de Mando Nacional para supervisar la pandemia del COVID-19 y el proceso de recuperación. También habrá grupos de trabajo para supervisar e informar sobre el trabajo realizado por los distintos interlocutores sociales como parte de su contribución a la implementación del Plan. Este trabajo será supervisado por un Grupo de Trabajo Presidencial que, en última instancia, informará al Consejo de Mando Nacional.

FUENTE: South African Economic Reconstruction and Recovery Plan (www.gov.za)

1. **Crear un nuevo acuerdo institucional para gestionar la recuperación.** Esta opción crea una única entidad de ejecución principal que concibe, diseña estrategias, planifica, ejecuta y gestiona el programa general de recuperación multisectorial. La creación de una nueva entidad puede ser deseable en situaciones en las que es poco probable que los organismos gubernamentales existentes sean capaces de coordinar y aplicar un elevado número de programas y políticas adicionales a mayor velocidad, manteniendo al mismo tiempo sus servicios públicos habituales. La nueva agencia puede crearse con una fecha de finalización incorporada, es decir, por un periodo determinado considerado para implementar la recuperación, o por un periodo indefinido como agencia que se encargará de implementar toda la recuperación futura de catástrofes. Esta opción tiene varias ventajas, tales como autonomía, una línea clara de responsabilidades, una comunicación interna y externa eficaz y la capacidad de manejar complicados acuerdos financieros y de seguimiento y evaluación (M&E). Los recursos para esta opción podrían provenir de otros organismos pertinentes, por ejemplo, a través de la adscripción de personal dentro del gobierno, así como de socios en el desarrollo, consultores del sector privado, asignaciones a corto plazo, y los acuerdos de recuperación financiera podrían acordarse antes de la pandemia.

Un ejemplo de este tipo de acuerdo institucional es la Autoridad Nacional de Gestión de la Sequía en Kenia (véase el recuadro 4.2).

RECUADRO 4.2: Autoridad Nacional de Gestión de la Sequía de Kenia ²⁸

Kenia creó su Autoridad Nacional de Gestión de la Sequía (NDMA) en 2011, transformándola posteriormente en un organismo estatutario en virtud de la Ley de la NDMA de 2016. Anteriormente, las sequías se habían gestionado mediante una serie de proyectos de duración limitada. Dada la amenaza siempre presente de sequía en Kenia, el gobierno decidió que una institución permanente mejoraría la preparación del país para responder a la misma.

Una evaluación independiente de las actividades de mitigación de la sequía ejecutadas en 2016-17 pareció validar esta decisión. En ella se constataron mejoras significativas en la calidad de la respuesta desde la anterior gran sequía de 2008-11. Las actividades se consideraron más imaginativas, mejor coordinadas y más rápidas: la mitad de los condados afectados tomaron medidas durante la fase de alerta de sequía, el doble que en 2008-11; solo el 7% retrasó su respuesta hasta la fase de emergencia, frente al 34% en 2008-11.²⁹

²⁸Fuente: <http://www.ndma.go.ke/>

2. **Acuerdo híbrido.** Una tercera opción cada vez más utilizada por los gobiernos es un modelo institucional híbrido. En este caso, se refuerza la estructura gubernamental existente mediante la creación de una única unidad, sección o departamento dedicado a la recuperación. La unidad proporcionará orientación central, gestión y servicios de apoyo para mantener los esfuerzos de recuperación en el curso previsto. La opción híbrida garantiza una entrega relativamente rápida de los resultados y objetivos de la recuperación. Esta única unidad, sección o departamento dedicado a la recuperación será el único punto de coordinación de las partes interesadas nacionales e internacionales. Se encargará de garantizar la inclusión de los ministerios competentes, las autoridades locales, el sector privado y la sociedad civil en todas las fases de la recuperación. Trabjará con los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales para delegar las responsabilidades de ejecución. No planifica ni ejecuta proyectos o programas individuales de recuperación.

Legislar para establecer un marco para la(s) institución(es) encargada(s) de la recuperación

La legislación debe codificar claramente las funciones y autoridades de la(s) institución(es) encargada(s) de la ejecución, aclarar el(los) mecanismo(s) de financiación y establecer una fecha de finalización o cláusula de extinción de la institución.

La legislación debe aclarar las funciones y responsabilidades institucionales. La legislación previa y posterior a la pandemia debe incluir especificaciones sobre qué entidad gestionará qué esfuerzos de recuperación, sentando así las bases para organizar las instituciones de recuperación y ejecutar los programas. La experiencia demuestra que la recuperación puede tropezar si hay confusión legislativa sobre la propiedad y la responsabilidad institucional, lo que da lugar a duplicidades y a que no se identifiquen las carencias críticas ni haya colaboración/integración de recursos.

Hay que tener en cuenta los programas y políticas inter-jurisdiccionales. Los programas y políticas que trascienden los límites jurisdiccionales de los gobiernos nacionales y locales son áreas adicionales para las que una clara comprensión de las funciones y responsabilidades ayudará a la recuperación.

²⁹El ciclo de la sequía utilizado en Kenia tiene cinco fases: normal, de alerta, de alarma, de emergencia y de recuperación.

Algunos ejemplos son los sistemas escolares y de salud, los programas de apoyo a las microempresas y los programas de recuperación de los sectores económicos más afectados, como el turismo. Durante la recuperación, las políticas económicas y de subsistencia instituidas por el gobierno central, pero aplicadas por los niveles inferiores del gobierno y la sociedad civil, requieren diálogo y coordinación entre los diferentes socios. La claridad jurídica sobre el grado de autoridad política y de ejecución en cada nivel de gobierno nacional y local ayuda a evitar fricciones entre los niveles de gobierno.

Equipo de recuperación

Una institución de recuperación se potencia tanto con un mandato claro como con el nombramiento de un líder experimentado e informado para dirigirla y con la suficiente capacidad técnica para apoyarla. La importancia de un liderazgo políticamente respetado, competente, coherente, dedicado y empático es fundamental para garantizar la aceptación política y comunitaria y la financiación de la recuperación.

Un líder eficaz debe estar comprometido con el proceso de recuperación, tener una gran capacidad de creación de equipos y la capacidad de llegar a las personas afectadas. El líder debe tener las habilidades para dirigir un proceso de recuperación inclusivo que ayude a superar las barreras institucionales y reúna a las instituciones, las autoridades y las personas afectadas y, al mismo tiempo, tener la capacidad técnica para impulsar la adopción de la aplicación de prácticas de recuperación que reconstruyan mejor y garantizar que las iniciativas de reducción de riesgos formen parte del enfoque de la recuperación resiliente. Un líder eficaz debe garantizar la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos y tener credibilidad ante los socios y las comunidades locales para movilizar fondos para la recuperación.

Personal para la recuperación. La dotación de personal para la recuperación puede ser un reto en función de la naturaleza y el alcance de los impactos de la pandemia en un país determinado. Los gobiernos pueden necesitar conocimientos adicionales para responder a las necesidades de recuperación sectorial, por ejemplo, si se produce una catástrofe durante o después de la pandemia. También es posible que necesiten ampliar su plantilla temporalmente o a largo plazo.

Algunos gobiernos no pueden satisfacer el aumento de las necesidades profesionales y técnicas para la recuperación, tanto a corto como a largo plazo. Estos gobiernos pueden solicitar la experiencia de otras partes (por ejemplo, la sociedad civil, las asociaciones profesionales, los socios en el desarrollo) para dar dirección a las actividades programáticas. Es fundamental que la búsqueda y contratación de estos recursos humanos se incluya en el marco institucional de la recuperación.

Necesidades de recursos humanos a corto plazo. Las competencias profesionales, administrativas y especializadas pueden reforzarse mediante políticas de empleo específicas. Como se ha señalado anteriormente, a veces se establece una nueva entidad líder para la recuperación. Otras veces, se responsabiliza de la recuperación a una institución ya existente. En ambos casos, casi siempre es necesario reforzar la capacidad de los recursos humanos mediante la incorporación de nuevo personal, a menudo con conocimientos especializados. Una opción es recurrir a la experiencia de otras fuentes, como los departamentos competentes, los organismos de respuesta humanitaria, el sector privado nacional e internacional, la sociedad civil y los organismos internacionales. Las líneas de información pueden ser transferidas a la entidad líder mediante comisiones de servicio y otros acuerdos especiales (aunque sean temporales). Esto puede retrasar otras iniciativas habituales, pero es probable que tales retrasos se produzcan cuando las prioridades se centran en los objetivos de recuperación.

La formación de equipos de recuperación que estén bien conectados con la amplia variedad de partes interesadas en la recuperación tiene importantes beneficios. Al contratar a expertos de organismos nacionales e internacionales o de ONG con experiencia, el organismo principal puede aportar buenas prácticas globales a su esfuerzo de recuperación. Pueden establecerse procedimientos de dotación de personal para casos de emergencia, en los que se exponen los procedimientos de contratación de personal a corto plazo para los departamentos afectados.

Necesidades de recursos humanos a largo plazo. La dotación de personal a largo plazo debe incluir la aportación de los organismos sucesores previstos, identificados idealmente en el Marco de Recuperación del COVID-19 específico del país. El aumento del número de expertos profesionales y técnicos para apoyar los esfuerzos de recuperación no es sostenible más allá de los años iniciales de la recuperación del COVID-19. Para facilitar el eventual traspaso de la cartera de recuperación a las agencias de desarrollo, la agencia líder puede reclutar oficiales de enlace y equipos de transición de estas agencias en una etapa temprana de la planificación. Estas personas pueden entonces participar desde el principio como socios de planificación de la recuperación. Combinar las necesidades de recursos humanos a corto y largo plazo también puede alertar a la entidad líder sobre las capacidades y necesidades de los ministerios competentes.

Asegurar la participación de la comunidad

La participación de la comunidad es la piedra angular del proceso de recuperación. El principal recurso disponible para la recuperación son las propias personas afectadas y sus conocimientos y experiencia locales. Las personas afectadas son aquellas que se ven afectadas por el proceso de recuperación, no sólo las que se ven afectadas inmediatamente por la pandemia. Es necesario incluir y consultar a estas personas a lo largo de todo el proceso en las evaluaciones, la definición de los problemas y las necesidades, la identificación de las soluciones y la ejecución de los proyectos, así como en la retroalimentación. La entidad líder es responsable de garantizar esta participación, estableciendo los mecanismos de comunicación, consulta y compromiso necesarios y trabajando estrechamente con la sociedad civil y las ONG para permitir que se escuche a la gente.

La participación de los beneficiarios también debe permitir que aquellos que suelen estar marginados dentro de sus comunidades -mujeres, ancianos, personas con discapacidad, jóvenes y miembros de ciertas clases sociales o grupos étnicos, influyeran en la toma de decisiones. Es esencial que se escuche a todas las poblaciones afectadas: no sólo a los representantes de las comunidades, sino a las propias comunidades.

Incorporar los conocimientos y la experiencia locales a la recuperación y garantizar la apropiación de ésta por parte de la comunidad son medios eficaces para asegurar el éxito a largo plazo de la recuperación y garantizar que ésta satisfaga necesidades reales y ofrezca soluciones sostenibles.

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales pueden garantizar la participación de la comunidad. La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales suelen tener vínculos bien cultivados con las comunidades afectadas, por lo que pueden desempeñar un papel formal a la hora de garantizar la participación de la comunidad y gestionar la ejecución. Garantizar la participación de la sociedad civil, los grupos religiosos y las ONG en la definición y ejecución de la recuperación del COVID-19 desde el principio proporciona al Gobierno acceso a sus conocimientos y conexiones.

En muchos casos, las autoridades gubernamentales pueden subcontratar proyectos a ONG formadas por miembros de las comunidades afectadas. Los acuerdos de los proyectos pueden redactarse entre el gobierno y la ONG para garantizar que haya transparencia y equidad.

Apoyar el papel del sector privado

Los sectores público y privado ganan al trabajar juntos por la recuperación. Tanto si se ha visto afectado por la pandemia como si no, el sector privado paga una parte importante del coste de la recuperación. Genera empleo. A menudo se contrata al sector privado para que proporcione bienes y servicios que puedan ser necesarios en el proceso de recuperación. Para que las economías locales, nacionales y regionales crezcan y se recuperen mejor de la pandemia, la participación del sector privado en la planificación y ejecución de la recuperación es primordial. Debe investigarse una relación formal que vincule a las entidades privadas con las instituciones oficiales de respuesta y recuperación en forma de asociaciones público-privadas (APP).

Las asociaciones público-privadas mejoran la capacidad tanto del gobierno como del sector privado para recuperarse de las pérdidas financieras, de la pérdida de cuota de mercado y de la interrupción de la actividad empresarial, al reunir recursos y fuerzas y hacer de la preparación una opción en la que todos salen ganando. Las APP facilitan la labor del gobierno al hacer que el cumplimiento de los requisitos normativos y de seguridad sea una preocupación de todos. Las APP también pueden aumentar la supervisión para evitar la corrupción.

Las asociaciones profesionales pueden proporcionar asesoramiento experto sobre la planificación de la recuperación. Las asociaciones de expertos y de la industria, como las de salud, agricultura y educadores, pueden servir como centros de coordinación para el asesoramiento de expertos en la planificación, ejecución y evaluación de la recuperación. El diálogo con estos expertos puede comenzar antes de que se produzca una emergencia sanitaria para garantizar la preparación y una respuesta y recuperación eficientes tras la pandemia. Las asociaciones profesionales también pueden proporcionar información valiosa sobre los aspectos operativos de la recuperación. Suelen estar familiarizados de manera informal con los contratistas y sus industrias particulares. Los expertos y las asociaciones de la industria pueden evaluar las licitaciones y las ofertas de contratación, y actuar en otros puestos que requieren un amplio conocimiento de la industria, incluyendo la provisión de un mayor nivel de transparencia y equidad en el proceso de selección. Ambos son especialmente útiles cuando la afluencia de dinero de los donantes hace que la selección de las licitaciones sea un asunto polémico.

Garantizar la coordinación gubernamental y la implementación local

Es necesario definir la visión y la política de recuperación al más alto nivel del gobierno para garantizar la aceptación y la aplicación coherente en los programas y políticas de recuperación simultáneos en curso, y luego confirmar esta visión y las políticas asociadas en el marco de recuperación a nivel nacional. Se recomienda una aplicación escalonada dentro del marco que equilibre el establecimiento de la política del gobierno nacional con la aplicación a nivel local. Se recomienda igualmente que la ejecución de los programas tenga lugar a nivel local, más cerca de las comunidades y personas afectadas.

En el contexto de la implementación de los esfuerzos de recuperación, la coordinación incluye la asignación de diferentes áreas de recuperación a organismos gubernamentales o no gubernamentales en función de sus áreas de experiencia. La participación de diversos actores en la ejecución puede contribuir a la puesta en común de recursos, a nuevas iniciativas e innovaciones y a la mejora de la calidad y la rapidez de la ejecución. La coordinación de los múltiples actores es una función importante del organismo que dirige la recuperación. La formación de grupos temáticos que utilicen el grupo de trabajo en curso del sistema humanitario puede facilitar una mejor coordinación de los múltiples actores en la recuperación. La coordinación puede tener lugar tanto verticalmente entre el gobierno nacional y el gobierno local como horizontalmente con los socios internacionales, el sector privado, los donantes, las OSC, etc. Dado que el sector privado y las ONG son importantes entidades ejecutoras, pueden establecerse mecanismos de coordinación independientes para facilitar la ejecución y hacer un seguimiento del progreso de la misma. Del mismo modo, puede ser necesaria una plataforma de coordinación de donantes o socios para permitir la participación de los organismos de financiación en la recuperación.

RECUADRO 4.3: Gestión descentralizada de la recuperación del COVID-19 en Sudáfrica

El Modelo de Desarrollo de Distritos de Sudáfrica sustentará la ejecución de todos los programas identificados en el Plan de Reconstrucción y Recuperación Económica. Para trasladar en cascada la aplicación del Plan a las provincias y los distritos:

- Las provincias y los departamentos provinciales desarrollarán planes de implementación provinciales de apoyo trabajando con los Departamentos y Distritos Nacionales pertinentes;
- Los Consejos de Mando Provinciales de Coronavirus y los Consejos de Mando Distritales de Coronavirus integrarán el seguimiento de la aplicación del Plan de Reconstrucción y Recuperación Económica;
- Los Grupos Económicos Provinciales que trabajan con las Oficinas de los Primeros Ministros servirán de apoyo técnico para el seguimiento del Plan a nivel provincial; y
- El Comité de Coordinación Presidencial recibirá informes mensuales sobre la implementación del Plan.

FUENTE: South African Economic Reconstruction and Recovery Plan (www.gov.za)

Los organismos internacionales suelen imponer requisitos y condiciones a la financiación. Uno de los requisitos comunes a muchos donantes es que el gobierno receptor debe demostrar que dispone de sólidos mecanismos de seguimiento e información financiera. Se recomienda que los gobiernos doten a sus instituciones de sólidos mecanismos de seguimiento e información financiera para la recuperación. Dado que los donantes tienen la obligación de informar a sus propios electores sobre el buen uso de sus contribuciones para la recuperación, las organizaciones internacionales pueden ser reacias a contribuir directamente al presupuesto de recuperación del gobierno. En su lugar, los donantes pueden optar por gestionar su propia financiación de la recuperación junto con el gobierno.

Capítulo IV lista de control

Esta lista de comprobación abarca los diferentes pasos necesarios para crear acuerdos institucionales eficaces para la recuperación. La lista no es exhaustiva, pero ofrece una visión general de los principales pasos que deben seguirse:

- Decidir los acuerdos institucionales adecuados
- Establecer un mandato legal para la recuperación que aclare las funciones y responsabilidades institucionales
- Designar la entidad líder de la recuperación

Entidad líder de la recuperación

- Garantizar la continuidad entre el trabajo humanitario y el de recuperación
- Aclarar el papel de las organizaciones internacionales y el de los socios en el desarrollo
- Coordinar los esfuerzos de recuperación en todos los sectores con las múltiples partes interesadas
- Incluir a la sociedad civil, el sector privado, las comunidades y las ONG en el proceso de recuperación
- Identificar y garantizar la disponibilidad de los recursos humanos adecuados a lo largo de la recuperación

V. Mecanismos financieros para la aplicación del marco

El capítulo V presenta los pasos necesarios para identificar, desarrollar y poner en marcha mecanismos financieros para la recuperación. Los cinco pasos clave son:

1. *Cuantificar rápidamente los costes económicos de la crisis*
2. *Desarrollar presupuestos de recuperación*
3. *Identificar las fuentes de financiación, así como los déficits de financiación*
4. *Coordinar y asignar los recursos financieros*
5. *Establecer mecanismos de gestión y de seguimiento de los fondos.*

Las buenas prácticas financieras para la recuperación comparten las características comunes de un desembolso rápido, coordinación de recursos y flexibilidad de las fuentes de financiación. También es importante que los gobiernos se preparen antes de que se produzca la siguiente crisis sanitaria u otra catástrofe, ya que estas prácticas financieras pueden ser complejas de establecer. Hay que diseñarlas cuidadosamente. Es necesario contar con un sistema de desembolso rápido adaptado a las necesidades de recuperación después de una crisis que se haya probado antes de ésta, para evitar los riesgos de corrupción y fraude que pueden estar relacionados con el desembolso rápido. En el capítulo 5 se ofrecen más detalles y buenas prácticas para permitir los acuerdos de financiación necesarios para apoyar la recuperación socioeconómica del COVID-19.

Cuantificar rápidamente los costes económicos de la pandemia

Las evaluaciones posteriores al COVID pueden ser la base para la movilización de recursos. En una Evaluación de Necesidades de Recuperación (ERNC) del COVID-19, se identifican los cambios en los flujos/pérdidas económicas de cada sector productivo afectado (por ejemplo, pérdidas de producción e ingresos, gastos contingentes, pérdida de ingresos de existencias). La pérdida comprendería el aumento de los gastos en las intervenciones sanitarias y en otros sectores como la educación y la cultura. También deben evaluarse las pérdidas salariales debidas a la interrupción de los servicios, los servicios públicos y las empresas, la pérdida de puestos de trabajo de los autónomos, los despidos (temporales o no) de los asalariados y la pérdida de ingresos y/o la discriminación de los grupos más vulnerables (por ejemplo, minorías étnicas o religiosas, migrantes, refugiados y desplazados internos). La cuantificación de los costes económicos de la pandemia debe hacerse cuidadosamente, atribuyendo las pérdidas directa y claramente a los efectos económicos y sociales de la pandemia únicamente (PNUD, 2020b).

Desarrollar presupuestos de recuperación post-pandémica

Impacto de la pandemia en las finanzas públicas. Al revisar su presupuesto post-pandémico, los gobiernos deben tener en cuenta que la recuperación del COVID-19 obliga a reasignar los ajustados presupuestos gubernamentales y a buscar ingresos suplementarios. Al mismo tiempo, la pandemia ha reducido a menudo los ingresos públicos al perturbar la actividad económica. Los efectos incluyen la disminución de la productividad, el aumento de la inflación, la reducción del poder adquisitivo y la posible disminución del comercio o de las importaciones y exportaciones. Todos estos efectos repercuten en los ingresos fiscales directos e indirectos.

Revisión presupuestaria continua tras la pandemia. La revisión presupuestaria inicial debe centrarse en la canalización de recursos urgentes para el trabajo humanitario y de socorro. Las revisiones posteriores pueden basarse en las recomendaciones de la CRNA o de una evaluación similar.

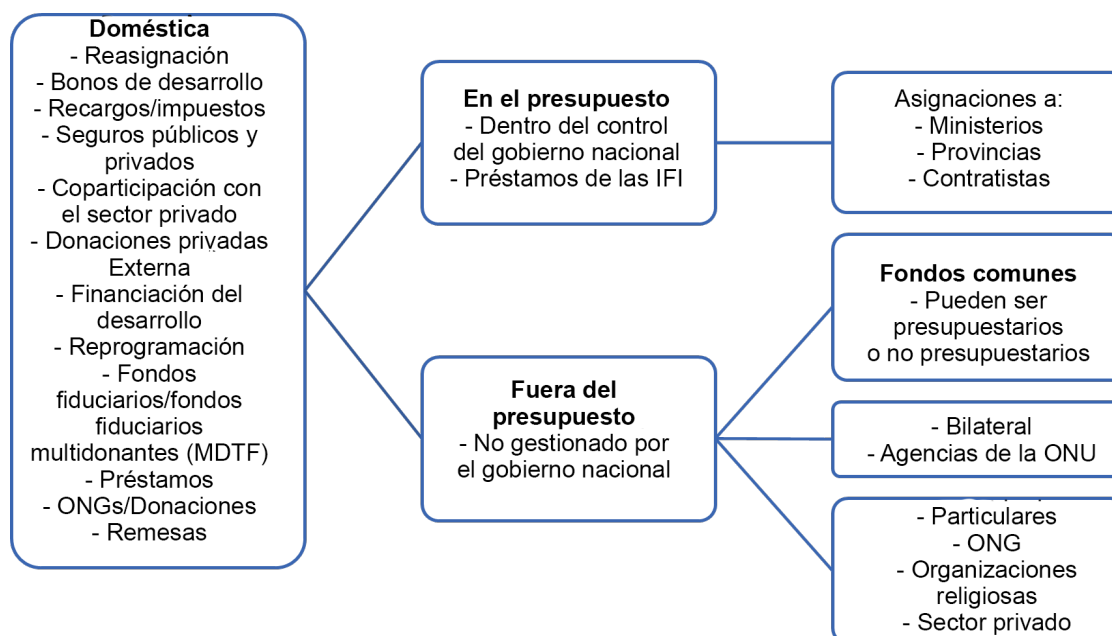
Estas conclusiones implican la secuenciación detallada, el establecimiento de prioridades y la financiación e implementación del proceso de recuperación. Incluso durante la fase de ejecución del marco de recuperación, el organismo principal debe analizar los presupuestos para detectar las desviaciones con respecto a los resultados reales.

Identificar y movilizar fuentes de financiación

Los países africanos se encuentran en una coyuntura crítica, por lo que es imperativo adoptar un enfoque holístico para financiar los ODS y las necesidades de desarrollo. Las iniciativas de recuperación analizadas en el capítulo 3 plantean una demanda de financiación para el desarrollo que puede vincularse con la oferta de financiación de las fuentes de financiación descritas a continuación. Algunas iniciativas requerirán financiación de más de una fuente, como las infraestructuras, mientras que otras pueden ser financiadas por una sola fuente. Pueden explorarse medios no financieros de aplicación, como las políticas comerciales y la promoción del comercio, y otros ámbitos, como la tecnología, para mejorar aún más la dotación de financiación para la recuperación.

Identificar las fuentes de financiación. Las consideraciones financieras de la recuperación comienzan con la elaboración del presupuesto dentro del contexto pre-pandémico y macroeconómico. Dependiendo de la magnitud del impacto de la pandemia y de la capacidad de la economía nacional, el gobierno puede depender en gran medida de los recursos nacionales o apelar a fuentes externas de financiación. Esta última opción es útil sobre todo cuando el gobierno ya tiene acuerdos de cooperación con donantes y/o agencias multilaterales. En la figura 5.2 se detallan los elementos de la financiación de la recuperación a partir de las diversas posibilidades de fuentes de financiación, tanto nacionales como externas. La agencia líder debe asegurarse de que todos estos fondos se asignen de acuerdo con las prioridades nacionales de recuperación, independientemente de que se canalicen dentro o fuera del sistema presupuestario nacional. Un enfoque es utilizar el Marco Nacional Integrado de Financiación, que es una herramienta para ayudar a los países a planificar y superar los impedimentos existentes para la financiación de los ODS a nivel nacional.

FIGURA 5.2: Visión global de la financiación post-pandémica



El reto de la recuperación post-pandémica es movilizar recursos adicionales. En la medida de lo posible, la recuperación no debe ir en detrimento de los procesos normales de desarrollo en curso. Dependiendo de la naturaleza y la escala de la crisis, la financiación de la recuperación puede provenir de recursos nacionales o externos.

Financiación interna. Los recursos internos generados por los gobiernos afectados por la pandemia son:

- Reasignación entre las partidas presupuestarias de los sectores menos afectados a los más afectados. Es útil que los gobiernos hayan adoptado un marco legal sobre las opciones de reasignación antes de que se produzca una crisis sanitaria, para permitir una reasignación flexible en caso de pandemia
- Emitir bonos soberanos de recuperación de la pandemia
- Imponer impuestos o recargos para la recuperación (véase el recuadro 5.1)
- Introducir incentivos políticos para que el sector privado comparta los costes de recuperación
- Contribuciones voluntarias de la sociedad civil y de filántropos privados
- Seguros

Los países tendrán que realizar una evaluación pragmática de su capacidad de financiación que sopesa sus necesidades de gasto monetario y fiscal frente a sus límites macroeconómicos.

Lo más importante es que una gran parte de la recuperación sea apoyada por la propia población. La participación del sector público en la recuperación puede variar mucho. Depende de la naturaleza y la escala de los daños económicos del COVID-19 y del equilibrio relativo de la propiedad de los activos del sector público y privado en las zonas afectadas. En la mayoría de los casos, la mayor contribución a la financiación de la recuperación procede de los ciudadanos del país y del extranjero. Estas fuentes de financiación, entre ellas las remesas de dinero, son cada vez más importantes en los programas de recuperación.

RECUADRO 5.1: Egipto - Recaudación de impuestos para financiar la protección social ante el COVID-19

El COVID-19 afectó a la economía egipcia, habiendo tenido un impacto negativo en los viajes, el turismo, las remesas de los trabajadores y la reducción de la actividad económica debido a las restricciones de cierre. El gobierno puso en marcha una amplia respuesta social, basándose en programas y plataformas de protección social existentes. La financiación de estas intervenciones se obtuvo en parte de un "impuesto Corona" recaudado por el gobierno sobre todos los salarios del sector público y privado (1%) y sobre las pensiones estatales (0,5%).

Fuentes externas/internacionales de financiación. Los recursos externos para la recuperación post-pandémica pueden provenir de bancos multilaterales de desarrollo, bancos regionales de desarrollo, socios bilaterales de desarrollo, ONG internacionales, organizaciones filantrópicas y benéficas privadas, remesas y medios de comunicación social. Los métodos más frecuentes para acceder a fondos externos o internacionales son los llamamientos internacionales, las conferencias de donantes y los mecanismos de financiación conjunta (véase el recuadro 5.2).

RECUADRO 5.2: Ejemplo de fuente regional de financiación conjunta

El Fondo de Respuesta de la ASEAN al COVID-19 se ha creado para proporcionar apoyo a los Estados Miembros de la ASEAN (AMS) en la detección, control y prevención de la transmisión del COVID-19 y en la protección de la seguridad de los profesionales médicos, los trabajadores sanitarios, los trabajadores de primera línea y la población de la ASEAN en general. El Fondo también es fundamental para apoyar la investigación y el desarrollo pertinentes, proporcionando apoyo técnico en la planificación y aplicación de medidas de contención y mitigación; facilitando el intercambio de mejores prácticas; así como para el desarrollo de capacidades y aptitudes de los profesionales sanitarios y otro personal de primera línea.

Además de las contribuciones del Fondo de Desarrollo de la ASEAN, el Fondo de Respuesta de la ASEAN COVID-19 también está abierto a las contribuciones voluntarias de la AMS, los Socios de Diálogo, los Socios de Diálogo Sectorial, los Socios de Desarrollo y otros socios externos de la ASEAN, incluidas las organizaciones internacionales y los organismos de financiación, así como los sectores público y privado.

FUENTE: ASEAN, 2020

Servicio de la deuda. Incluso antes del brote del COVID-19, muchos países africanos estaban muy endeudados y tenían dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago. La pandemia les afectó negativamente y empeoró la situación fiscal. Como medida de respuesta temprana para ayudar a los países gravemente afectados a luchar contra esta pandemia, el Banco Mundial y el FMI anunciaron una Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI). Hasta la fecha, 32 países africanos han participado en la DSSI; de este modo, pueden utilizar sus escasos recursos para luchar contra la pandemia del COVID-19 en sus países. Aunque la DSSI se prorrogó hasta diciembre de 2021, es posible que se necesiten más medidas, como la ampliación de la DSSI y el desarrollo de una solución más permanente para ayudar a los países a superar esta crisis en los próximos años.

Llamamientos internacionales. Los sistemas de ayuda nacionales, regionales e internacionales pueden movilizarse y responder a las catástrofes sanitarias y de otro tipo a gran escala que requieren una respuesta de todo el sistema a las crisis humanitarias mediante el lanzamiento de llamamientos. Tras el primer llamamiento suele lanzarse uno nuevo que cubre en detalle las necesidades de recuperación. El Mecanismo de Financiación de la Solidaridad Africana propuesto, descrito en el Recuadro 5.3, es un mecanismo de recuperación COVID-19 que podría ser el resultado de un llamamiento de este tipo.

Conferencias de donantes. El gobierno o la comunidad internacional pueden organizar una conferencia internacional de donantes lo antes posible, preferiblemente dentro de los tres primeros meses después de una gran crisis. La celebración de una conferencia de donantes es una forma eficaz y coherente de comunicar las necesidades de recuperación y presentar el marco o la estrategia de recuperación. La provisión de esta información -incluyendo una demostración de cómo podría desarrollarse la recuperación y las actividades prioritarias- debería ser una oportunidad para obtener financiación para las actividades posteriores a la crisis de los gobiernos donantes.

RECUADRO 5.3: El Mecanismo de Financiación Solidaria para África

The UN is in the process of designing an Africa Solidarity Funding Mechanism for Sub-Saharan Africa. Consistirá en un mecanismo de respuesta para atender las necesidades sanitarias y socioeconómicas inmediatas y un mecanismo de recuperación para apoyar la recuperación sostenida tras los efectos del COVID, haciendo hincapié en la reconstrucción inclusiva y ecológica del capital humano y financiero. El enfoque del fondo se alinearán con iniciativas del Marco Nacional Integrado de Financiación (MNF) que se están llevando a cabo a nivel nacional, regional y mundial, tal y como se indica en la Agenda de Acción de Addis Abeba. En el momento de redactar este documento, 32 Estados africanos ya han completado o están en proceso de completar los INFF. Éstas serían atendidas por una plataforma que podría proporcionar diferentes tipos de apoyo, entre ellos: subvenciones, asistencia técnica, capital de inversión, desarrollo de capacidades y soluciones de ayuda en caso de catástrofe. Se están buscando contribuciones públicas y privadas para el Mecanismo, del orden de 20.000 millones de dólares, a través de un proceso consultivo dirigido por el PNUD y UNICEF.

FUENTE: UNDP y UNICEF, 2021

Instituciones financieras internacionales. Las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo (incluidos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo), se han dedicado cada vez más a prestar servicios de préstamo y no préstamo a los países en desarrollo para la recuperación pos pandémica. La ayuda crediticia se describe en el siguiente párrafo. La asistencia no crediticia de las IFI incluye las CRNA, que actúan en calidad de asesores, y otras formas de asistencia técnica. Los préstamos y la asistencia pueden obtenerse no sólo después de que se produzca una crisis sanitaria, sino también antes, para centrarse en la preparación y la capacidad de respuesta rápida. En las recientes crisis sanitarias de África, las IFI han sido una de las fuentes más importantes de ayuda financiera para la recuperación.³²

³¹La movilización de recursos, tanto nacionales como mundiales, para apoyar el desarrollo sostenible sigue siendo un reto fundamental para muchos países en desarrollo. En 2015, los líderes mundiales se reunieron en Addis Abeba (Etiopía) para acordar un nuevo marco global para la financiación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el centro de la Agenda de Acción de Addis Abeba se encuentran los planes y estrategias nacionales de desarrollo sostenible apoyados por los marcos nacionales de financiación integrados, o INFF.

La estrategia de desarrollo sostenible de un país establece lo que debe financiarse. Los INFF explican cómo se financiará y aplicará la estrategia nacional, recurriendo a toda la gama de fuentes de financiación públicas y privadas. Los INFF son una herramienta de planificación y ejecución para ayudar a los países a fortalecer los procesos de planificación y superar los obstáculos a la financiación del desarrollo sostenible y los ODS a nivel nacional

³² http://sheltercentre.org/sites/default/files/transitional_settlement_and_reconstruction_after_natural_disasters_0.pdf.

La financiación específica que las IFI han puesto a disposición de la recuperación del COVID-19 en África incluye:

- Más de 41.000 millones de dólares movilizados por el Banco Mundial desde abril de 2020 para ampliar el apoyo al continente africano ante los retos impuestos por el COVID-19, centrándose en salvar vidas a través de gastos relacionados con la salud, proteger a los pobres, crear puestos de trabajo y reconstruir mejor la crisis;
- 33.600 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro asignados por el Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países más vulnerables de África que están luchando para hacer frente al impacto de la crisis del COVID-19;
- 2.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para apoyar a las mujeres de toda África ampliando la Iniciativa She-Invest y el programa de asistencia técnica African Women Rising, con una inversión similar prometida para un paquete de recuperación ecológica;
- 2.000 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional, la mitad en nueva financiación directa para las MIPYMES, la columna vertebral de las economías africanas, y la otra mitad en apoyo de la financiación del comercio internacional para África, con el fin de facilitar el flujo de importaciones y exportaciones de bienes esenciales, incluidos los alimentos y los productos médicos; y
- La Alianza para el Emprendimiento en África de la Unión Africana para apoyar al sector privado africano y promover el espíritu empresarial; movilizará 1.000 millones de dólares para las pequeñas y medianas empresas con el apoyo de Francia y otros países.

Los países africanos también tienen que innovar o mantenerse al día de las innovaciones en los instrumentos de financiación, tanto jurídicos (como las cláusulas de acción colectiva y de agregación) como financieros (como la recuperación del valor y los instrumentos de deuda similares a las acciones). Para hacer frente a la recurrencia de las crisis de la deuda, ha llegado el momento de reconsiderar si los instrumentos de deuda contingente del Estado que vinculan los pagos del servicio de la deuda a la capacidad de pago de un país pueden utilizarse ampliamente como herramienta para minimizar la posibilidad de una futura dinámica de deuda insostenible. Las instituciones financieras internacionales están en condiciones de asociarse a este esfuerzo, ofreciendo a los países deudores incentivos para hacer suya esta iniciativa.

El BAfD indica que, en última instancia, sólo las reformas audaces en materia de gobernanza ayudarán a reactivar el crecimiento y a situar la deuda africana en una senda sostenible. África necesita poner en marcha políticas para reactivar el crecimiento, tales como las relacionadas con la digitalización y la mejora de la competencia, las destinadas a reducir fugas y, fundamentalmente, las destinadas a mejorar la transparencia de la deuda.

Fuentes de financiación flexibles. En los entornos posteriores a la crisis, las condiciones cambian tan rápidamente que pueden producirse retrasos inaceptables si las revisiones presupuestarias tienen que esperar hasta el ciclo presupuestario normal. El gobierno puede haber establecido un fondo de contingencia para responder a la inmediatez de un desastre. Este tipo de fondos se caracterizan por su flexibilidad para responder adecuadamente, sobre todo en el período inmediatamente posterior a la catástrofe. Los fondos mancomunados de los donantes que son administrados por un fideicomisario también se caracterizan por su flexibilidad para financiar las necesidades de recuperación que pueden ser poco atractivas para los donantes bilaterales o que no encajan en el presupuesto del gobierno.

Asignar y coordinar los recursos financieros. La experiencia ha demostrado que si los gobiernos no establecen un amplio marco financiero para la recuperación a corto, medio y largo plazo, sólo las intervenciones a corto plazo suelen contar con fondos suficientes para su ejecución. Sin embargo, los programas de recuperación a medio y largo plazo son igualmente importantes para una recuperación sostenible. Por ello, los gobiernos deben asegurarse de establecer un marco financiero completo con una financiación predecible y plurianual que esté alineada con los programas de recuperación sectoriales. De lo contrario, se corre el riesgo de que los fondos para las intervenciones urgentes y a corto plazo se asignen en el momento álgido de la situación post-pandémica, pero que no se garanticen los compromisos para los años siguientes. La gestión de las entradas de recursos y su gasto efectivo son un reto en el entorno del COVID-19. La asignación real de recursos se produce a través de un proceso presupuestario.

La figura 5.4 destaca los diferentes plazos de asignación de recursos.

FIGURA 5.4: Calendario de utilización de los recursos asignados

Financiación post-desastre	Corto plazo	Medio plazo	Largo plazo
Presupuesto de contingencia	■	■	
Asistencia de los donantes (ayuda)	■	■	■
Reasignación del presupuesto anual	■	■	■
Préstamos externos		■	■
Reajuste del presupuesto de capital			■
Asistencia de los donantes (recuperación)			■
Subida de impuestos			■

Fuente: Adaptado de ASEAN, "Advancing Disaster Risk Financing and Insurance in ASEAN Member States: Framework and Options for Implementation," Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Yakarta, 2012.

Los fondos del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales ajenos al presupuesto gubernamental son fundamentales para la recuperación. En muchos casos, la financiación gubernamental no es suficiente. El enfoque programático puede ayudar a coordinar las fuentes de financiación, garantizar la comunicación entre las diferentes fuentes de fondos y asegurar que el dinero gastado no duplique el trabajo. Por ejemplo, los fondos del sector privado pueden asignarse a un sector o área específicos. Los fondos procedentes de organizaciones no gubernamentales podrían asignarse a necesidades sociales.

Un resumen de las iniciativas (Tabla 5.1) extraídas de la experiencia pionera de Nigeria para desarrollar su Estrategia de Financiación Nacional Integrada puede servir de guía a otros Estados miembros de la UA para ampliar la financiación y movilizar recursos de las fuentes de financiación públicas, privadas, nacionales e internacionales para alcanzar los ODS. La combinación de iniciativas de financiación convencionales e innovadoras deberá ser coherente con la sostenibilidad financiera a largo plazo del país y garantizar su alineación con sus prioridades de desarrollo.

TABLA 5.1: Resumen de las opciones de financiación de la recuperación para Nigeria

Fuentes internas	Fuentes internacionales
Financiación pública	
<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la base de ingresos: ampliar la base impositiva, eliminar los incentivos fiscales ineficaces existentes • Potenciar la política fiscal y mejorar la administración: digitalizar, mejorar la colaboración interinstitucional, actualizar los registros fiscales, incentivar, hacer cumplir, reformar según sea necesario, educación fiscal y divulgación • Coordinar los procesos presupuestarios • Modificar el gasto y la gestión públicos: contratación transparente, eliminar el despilfarro, renovar las prioridades de gasto, centrarse en los sectores altamente productivos • Gestionar la deuda de forma sostenible • Catalizar las empresas estatales • Innovar para captar los flujos financieros ilícitos • Poner en marcha un plan para movilizar múltiples fuentes de financiación relacionadas con el clima • Incorporar la perspectiva de género en los presupuestos • Integrar la política comercial y su administración 	<ul style="list-style-type: none"> • Bancos Multilaterales de Desarrollo: desarrollar objetivos de financiación amplios, explorar garantías conjuntas entre el Banco Central y los Bancos Multilaterales de Desarrollo para atraer y movilizar capital privado, crear capacidad para preparar proyectos y ejecutarlos. • Instituciones Financieras de Desarrollo: identificar oportunidades de inversión que merezcan la pena, desarrollar un registro central de proyectos para atraer a las IFD, proporcionar una “envoltura de crédito” o una garantía de riesgo parcial para inversiones de capital específicas • Ayuda Oficial al Desarrollo: coordinar eficazmente a la comunidad de donantes y asociarse en el diálogo político, entre otros trabajos preliminares, identificar las oportunidades de utilizar la AOD para aumentar la resistencia al riesgo climático, apoyar los bienes públicos y mejorar la gestión de las crisis • Agencias de crédito a la exportación: Implicar a las partes interesadas en las ventajas de respetar los contratos y los calendarios de reembolso, minimizar el riesgo político para los proyectos y las inversiones extranjeras
Financiación privada	

<ul style="list-style-type: none"> • Facilitar el entorno empresarial: facilitar la actividad empresarial, reformar los mercados de capitales y los mercados de factores, la colaboración público-privada, la transparencia y la aplicación de las normas necesarias • Movilizar a los bancos y las instituciones financieras locales: ampliar la inclusión financiera, penetrar en los servicios financieros, fomentar la innovación FinTech, reformar para abordar la transparencia, el acceso al crédito, la protección de los depositantes, la calidad del crédito y la adecuación del capital • Incentivar a los inversores locales e institucionales: garantizar las inversiones en áreas de alto rendimiento social, financiero y económico. Incentivos eficaces para apoyar a las MIPYMES, política para fomentar la sindicación de préstamos en grandes proyectos. Reforzar las colaboraciones. • Aprovechar los fondos de pensiones • Ampliar la financiación sostenible: desarrollar un marco de política climática, adoptar las recomendaciones de la TCFD,[5] explorar el mercado nacional de bonos verdes para la emisión soberana, no soberana y corporativa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remesas: prioridades de financiación alineadas con las prioridades de la diáspora e inversiones directas de la diáspora, uso de incentivos adecuados para las inversiones de la diáspora, fondo fiduciario de inversiones de la diáspora, trabajar con los transmisores de dinero para reducir los costes de transacción de las remesas • Política de inversión y de IED: examinar la eficacia de los incentivos fiscales para movilizar las inversiones/ la IED, revisar las actuales políticas de inversión del país, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio, reformar y aclarar las competencias normativas de los Estados de acogida • Fomentar las inversiones de capital riesgo y de inversores informales: revisar las políticas, desarrollar planes nuevos e innovadores • Compra de bonos externos y financiación de la deuda • Fundaciones, financiación filantrópica e inversiones temáticas Aumentar el apoyo a las OSC y al sector privado para impulsar la financiación confesional y filantrópica, identificar proyectos y oportunidades de inversión social alineados con las prioridades/objetivos de los inversores de impacto
---	--

Cuidado con la brecha. Una vez identificadas todas las fuentes de financiación realistas, es necesario compararlas con las necesidades de financiación de la recuperación a lo largo del tiempo. Esto permitirá a los países identificar los déficits de financiación y otras opciones para cubrir las carencias presupuestarias. En el recuadro 5.4 se presenta un ejemplo a nivel de país.

RECUADRO 5.4: Identificación de recursos y carencias de financiación para el Plan de Respuesta en Gambia

En su Plan de Acción Nacional para la Respuesta al COVID-19, Gambia identificó claramente las fuentes de financiación existentes, las carencias y las posibles fuentes de financiación nuevas. El Plan señala que no todas las intervenciones son totalmente nuevas; hay un número importante de intervenciones que ya estaban planificadas, en curso o completadas antes de la elaboración del Plan. Para la mayoría de ellas, los fondos ya se han obtenido y comprometido, por lo que se trataba de reprogramarlas para dar a las intervenciones una dimensión añadida y nueva en el contexto de COVID-19. Lo que se presenta en el resumen de las finanzas para la respuesta al COVID-19 es el déficit de financiación que hay que movilizar y los fondos disponibles ya movilizados. El Plan identificó 151 millones de dólares de financiación disponible de siete fuentes (Gobierno, socios en el desarrollo y sociedad civil) y un déficit de financiación de 152 millones de dólares.

FUENTE: Gobierno de Gambia 2020. Plan de acción nacional para la respuesta al COVID-19.

Sistemas de gestión de las finanzas públicas

Un paso importante para cumplir los objetivos de recuperación es establecer sistemas financieros que asignen y desembolsen fondos de un nivel de gobierno a otro; y/o comunidades o sistemas que gestionen los recursos externos. En las crisis sanitarias a gran escala y otras catástrofes, los flujos de recursos externos suelen ser importantes. Por lo tanto, es probable que la financiación de la recuperación se gestione a través del presupuesto del gobierno (dentro del presupuesto) y de la financiación fuera del presupuesto. Los sistemas de financiación deben establecerse para respetar la transparencia, la responsabilidad y la integridad, en particular para controlar los riesgos de corrupción.

Que una parte de los recursos externos se canalice a través de los sistemas presupuestarios del gobierno dependerá probablemente de muchos factores.

Para maximizar el impacto de los recursos internos y externos, la comunidad internacional aboga cada vez más por el uso de sistemas presupuestarios y otros sistemas de gestión de las finanzas públicas (PFM). Los mismos principios de eficacia de la ayuda se aplican en un contexto de recuperación. La clave de los acuerdos de gestión de las finanzas públicas es la flexibilidad del gobierno y de los donantes. La razón es que, aunque se apliquen los principios fiduciarios básicos, la financiación de la recuperación ha demostrado ser fundamentalmente diferente de la ejecución de la financiación regular del desarrollo. Dada la necesidad de una respuesta rápida después de una crisis, es importante que los gobiernos trabajen en el fortalecimiento de su gestión de las finanzas públicas nacionales antes de una crisis.

Los esfuerzos para apoyar y fortalecer el sistema nacional de gestión de las finanzas públicas pueden tener en cuenta lo siguiente:

- Capacidad de las instituciones y de los sistemas presupuestarios, y oportunidades para fortalecerlos
- Escala y coordinación de la ayuda internacional
- Escala de la ayuda presupuestaria frente a la extrapresupuestaria antes de la catástrofe
- Número de niveles institucionales implicados en el ciclo de gestión de las finanzas públicas
- Acuerdos financieros para la ayuda de emergencia y la recuperación a largo plazo
- Naturaleza de los procedimientos de emergencia y disposiciones de ejecución (incluidas las adquisiciones y la logística)
- Integridad fiduciaria y lucha contra la corrupción

Fondos fiduciarios de múltiples donantes. En muchos países afectados por catástrofes a gran escala, se han creado fondos fiduciarios de múltiples donantes (MDTF) para canalizar los recursos de los donantes de forma coordinada y de acuerdo con las prioridades nacionales. Los fondos fiduciarios multi-donantes ofrecen una forma cómoda de agrupar los recursos de los donantes y evitan la creación de múltiples cuentas bancarias y programas. Están en consonancia con los principios de armonización de los donantes y de liderazgo de los países, y proporcionan recursos no asignados que pueden subsanar las deficiencias en la financiación de la recuperación. Por último, proporcionan un foro para la coordinación de los donantes, así como para el diálogo entre la comunidad internacional y el gobierno nacional sobre cuestiones de política y programación de la recuperación.

Los gastos de los fondos fiduciarios multi-donantes son iniciados, planificados y ejecutados principalmente por los gobiernos. Las asignaciones de fondos son aprobadas por un comité directivo en el que participan el gobierno, los donantes y la sociedad civil. La función del administrador del fondo es garantizar que los fondos se desembolsen, contabilicen y gasten de acuerdo con los objetivos, con resultados medibles y procedimientos transparentes. El fondo fiduciario devenga intereses a la espera de su desembolso. El Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial han actuado como fideicomisarios y administradores de estos fondos comunes. Este proceso puede reducir la fragmentación de la ayuda creando un foro para el diálogo político y la coordinación de la ayuda entre los donantes y el gobierno.

Auditoría y supervisión.

La auditoría y la supervisión están diseñadas en tres niveles. En el nivel más alto se encuentra la supervisión general del programa de recuperación. La supervisión a nivel de programa se basa en la supervisión a nivel de sector, que consolida los informes de cada sector. En el nivel más bajo se encuentra el seguimiento de los proyectos individuales. El sistema de auditoría y seguimiento debe estar diseñado para integrar la supervisión en los tres niveles. Es posible que se necesiten sistemas especiales adicionales para supervisar las entradas, el uso y el impacto de la financiación de la recuperación.

La credibilidad del presupuesto de recuperación del gobierno se basa en la entrega de los recursos prometidos para la recuperación y su utilización para los fines previstos en un plazo determinado. La rendición de cuentas del plan de recuperación a la población afectada y a las fuentes de financiación es fundamental. A menudo, como parte del proceso de rendición de cuentas, es beneficioso que el gobierno cuente con un auditor externo independiente.

Tanto las auditorías internas como las externas son necesarias porque cada una de ellas tiene un propósito diferente. En general, el alcance de una auditoría externa está mucho más definido y tiene un fin determinado. Las auditorías externas se centran a posteriori en un hecho concreto (un conjunto de estados financieros) y plantean la siguiente pregunta: "¿Qué ha fallado, si es que algo ha fallado, en la gestión de los gastos de recuperación?" El alcance de una auditoría interna es más amplio y abierto:³³ se centran en un proceso continuo y evalúan los riesgos y los controles para responder a la pregunta: "¿Qué podría salir mal en la gestión de la financiación de la recuperación a varios niveles?"

Los contribuyentes a la financiación de la recuperación probablemente exigirán garantías de que los recursos se asignan de forma eficiente y de que los sectores y subsectores específicos están totalmente financiados.

Por lo tanto, el seguimiento de la ayuda para la recuperación es muy importante. Dicho seguimiento es complejo debido a las diversas fuentes de financiación, así como a los distintos canales a través de los cuales se asignan los fondos. Sin embargo, es extremadamente importante establecer un sistema de seguimiento desde el principio para garantizar que los fondos se gastan para los fines previstos. El sistema de seguimiento debe captar los flujos de ayuda tanto a nivel de sector como de proyecto. Un sistema eficaz de seguimiento de la ayuda debe incorporar el seguimiento de múltiples flujos de financiación, incluidas las fuentes públicas, los fondos de los donantes (dentro y fuera del presupuesto), las contribuciones del sector privado y las fuentes de las ONG.

³³M. Locatelli, "Good Internal Control and Auditor Independence," The CPA Journal, 2002.

Capítulo V Lista de comprobación

Esta lista de comprobación abarca cuestiones financieras, desde la revisión del presupuesto y la movilización de recursos hasta la buena supervisión de los desembolsos de fondos. La lista no es exhaustiva, pero cubre las acciones clave que deben tomarse con respecto a la movilización y la gestión de los recursos.

Ministerio de Finanzas/Agencia de Recuperación Principal

- Llevar a cabo un análisis del déficit de financiación y una revisión del presupuesto
- Identificar las fuentes de financiación nacionales
- Identificar las fuentes de financiación externas
- Organizar un llamamiento internacional o una conferencia de donantes para acceder a la financiación internacional
- Definir el mecanismo para gestionar la entrada de fondos. Específicamente, sistemas financieros que desembolsen fondos entre niveles de gobierno, o directamente a las comunidades o sistemas que gestionen recursos externos.
- Coordinar y asignar los fondos
- Establecer un sistema de seguimiento de la ayuda
- Reforzar el sistema de gestión de las finanzas públicas
- Contratar servicios de auditoría externa de terceros

VI. Consideraciones acerca de la implementación del marco

Las políticas, los programas y las actividades de recuperación deben aplicarse con rapidez y eficacia para que mejoren visiblemente la vida de las poblaciones afectadas por la pandemia. En el capítulo VI se describe cómo puede hacerse esto, con ejemplos de buenas prácticas, por medio de lo siguiente:

- *Estableciendo sistemas de seguimiento y evaluación para controlar el progreso de la implementación y la financiación;*
- *Estableciendo mecanismos de retroalimentación y gestión de quejas;*
- *La creación de procedimientos y normas de aplicación;*
- *Apoyar la aplicación local;*
- *Desarrollar sistemas de adquisición adaptados a las necesidades de recuperación;*
- *Poner en marcha una estrategia de comunicación; y*
- *Promover la transparencia para la rendición de cuentas.*

Establecer sistemas de seguimiento y evaluación

Los sistemas de seguimiento y evaluación (M&E) pueden utilizarse para hacer un seguimiento tanto de la ejecución del programa como de la financiación. La experiencia ha demostrado que los gobiernos tienden a aplicar mal, o simplemente a no aplicar, los sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a la recuperación del COVID-19. Esto es problemático porque significa que cuando los programas de recuperación no están bien implementados estos pueden seguir su curso en lugar de ser reajustados y mejorados. Significa igualmente que el mal uso de los fondos vinculados a la ejecución de los proyectos puede pasar inadvertido. Asimismo, es posible que no se identifiquen a tiempo las deficiencias de financiación. Por lo tanto, los gobiernos deben prestar mucha atención al establecimiento de un proceso funcional de seguimiento y evaluación. Esto se basa en un sistema informático adecuado de recogida y gestión de datos con personal asociado para gestionar y supervisar los programas de recuperación. El sistema también debe ser capaz de proporcionar información sobre cómo las intervenciones de recuperación están contribuyendo a las políticas y estrategias nacionales. Por último, el sistema debe poder hacer un seguimiento no sólo de los programas de recuperación gestionados por el gobierno, sino también de los de los diferentes socios que implementan el marco de recuperación. Los sistemas de seguimiento y evaluación eficaces permiten evaluar el progreso de la recuperación, garantizar el cumplimiento de las políticas y estrategias de recuperación sectoriales y proporcionar una alerta temprana para la adopción de medidas correctivas. El seguimiento y la evaluación continuos son fundamentales para comunicar a la comunidad y a las partes interesadas los avances o la falta de ellos, así como para identificar las correcciones a mitad de camino en la ejecución y ajustar la estrategia, sobre todo en respuesta a los comentarios de la comunidad sobre el diseño y los resultados del proyecto.

Las revisiones de M&E proporcionan:

- Una evaluación holística de la aplicación del marco de recuperación
- Una nueva visión de la aplicación del marco de recuperación
- Potenciales de mejora
- Recomendaciones accionables, realistas, orientadas a resultados y concretas
- Una oportunidad de aprendizaje para todos los implicados.

Es importante que el seguimiento y la evaluación proporcionen aportaciones sustanciales a las evaluaciones periódicas que los donantes exigen para seguir financiando los proyectos.

Establecer un sistema de seguimiento y evaluación implica definir qué se va a supervisar y evaluar (actividades y resultados), cuándo se va a supervisar y evaluar (calendario y frecuencia), cómo se va a supervisar y evaluar (herramientas e indicadores), quién va a supervisar y evaluar, y cómo se van a utilizar los resultados.

El seguimiento continuo es necesario. El seguimiento es una actividad continua que indica si las actividades van por buen camino. Se recomienda hacer un seguimiento tanto de los resultados como de las actividades. El seguimiento de los resultados se refiere al seguimiento de los objetivos y prioridades de recuperación. Lo ideal es que dicho seguimiento se realice trimestralmente y que lo lleve a cabo o lo guíe el principal organismo ejecutor.

El seguimiento de los resultados. junto con la presentación de informes y el seguimiento de las actividades, genera buenos datos. La combinación de la presentación de informes, el seguimiento de las actividades y la supervisión de los resultados establece una buena base de datos e indica si las actividades y los programas planificados pueden ejecutarse según lo previsto. El seguimiento de los resultados puede ser realizado por el principal organismo de recuperación. El seguimiento de las actividades debería ser realizado preferentemente por todos los organismos para sus respectivos sectores y programas y ser consolidado por el organismo principal de recuperación.

El marco de resultados. se implementa mejor a través de un sistema de seguimiento de resultados. El marco de resultados debe aplicarse a través de un Sistema de Seguimiento de Resultados (SGR) sistemático. El RMS especifica los planes de seguimiento y evaluación, los instrumentos de recogida de datos y las metodologías de determinación del valor de los indicadores para todos los productos y resultados. Un producto se define como una cantidad que una persona, máquina u organización produce y un resultado se define como el resultado o efecto de una acción, situación o evento. Una vez que esté completamente desarrollado, el RMS también proporcionará un plan general de M&E a medio plazo. Este plan especifica la frecuencia, los requisitos y los medios para el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes, tanto a nivel general como para cada uno de los resultados seleccionados.

Para crear un sistema de seguimiento y evaluación basado en los resultados se necesitan sistemas de información de gestión (SIG) específicos. El SIG es el sistema digital para almacenar toda la información de S&E y cotejar los resultados basados en los diferentes insumos.

Seguimiento de los recursos del COVID-19. Dada la gran magnitud de los fondos nacionales e internacionales recibidos para la gestión de la pandemia, es importante establecer un mecanismo para supervisar el uso de los fondos a intervalos regulares y evaluar los programas lanzados para la recuperación de la pandemia después de 2-3 años para comprender el impacto del trabajo de recuperación en la vida de las personas y en la economía.

Para el Marco del COVID -19 de África a nivel continental, es importante decidir qué institución o unidad dentro de la CUA puede asumir la función de seguimiento del progreso del Marco de Recuperación. Es importante que se reconozca esta función de seguimiento y se asignen recursos para ello. La CUA puede recurrir a las organizaciones intergubernamentales regionales y a determinados Estados miembros para formar un equipo que realice misiones de seguimiento en los países o lleve a cabo revisiones a distancia de los programas de recuperación de la pandemia. La institución/unidad que supervisa el progreso de los programas de recuperación de la pandemia también debe desarrollar un conjunto de indicadores clave y una fuente de información para recopilar datos sobre el progreso.

El seguimiento puede hacerse de dos maneras; puede utilizarse para seguir tanto la implementación del programa como la financiación, es decir, para seguir el progreso del uso de los fondos, y la segunda es para evaluar el impacto/cambio que ha causado en los programas de los beneficiarios dirigidos a evaluar la eficacia de los servicios que se les han prestado. Los esfuerzos de recuperación de la pandemia se han realizado a través de inversiones de fondos y apoyo en especie, así como de decisiones políticas.

El mecanismo de seguimiento puede tener en cuenta estos amplios enfoques para evaluar la relevancia y la eficacia de los programas y las políticas.

A partir de marzo de 2020, los gobiernos han gastado una cantidad considerable de fondos del presupuesto en varias áreas. Estos incluyen, pero no se limitan a: 1) el fortalecimiento de los sistemas de salud, incluido el equipamiento de los hospitales, los EPI para los trabajadores sanitarios y otros servicios, la sensibilización en materia de salud pública, etc. 2) la adquisición y distribución de vacunas; 3) la ampliación y el aumento de los regímenes de protección social mediante transferencias monetarias y ayudas en especie para las personas más vulnerables; 4) la transición a los sistemas de educación en línea, incluida la formación de los profesores y la preparación de la reapertura de las escuelas; 5) subvenciones, acceso al crédito y aplazamiento de los préstamos para las PYME y las microempresas; 6) ampliación de los programas de obras públicas para dar empleo; 7) programas de capacitación y recualificación para jóvenes y desempleados; 8) inversión en agua, saneamiento e higiene para el público en general; 9) mejora de los sistemas de gestión de residuos; y 10) servicios especiales para niños, mujeres, personas con discapacidad, ancianos, refugiados e inmigrantes.

Será importante establecer puntos de referencia/indicadores para el progreso en estas diez áreas del programa y definir la frecuencia con la que se recogerá la información para seguir el progreso de los programas. El cuadro 6.1 sugiere indicadores clave para cada sector. Éstos pueden adaptarse a nivel nacional o regional en función de la situación local.

TABLA 6.1: Indicadores clave para el seguimiento y la evaluación de la utilización de los fondos

Área de programa	Indicadores clave	Porcentaje de fondos utilizados con respecto a la asignación [RM1]
Sistemas de salud	Nº de hospitales nuevos o con instalaciones mejoradas con camas adicionales asignadas para los pacientes de COVID-19	
	Nº de hospitales con nuevas bombonas de oxígeno, otros equipos, medicamentos, equipos EPI y otros equipos para el personal sanitario	
	Aumento de la cobertura de la vacuna/número de personas por grupos de edad y dosis	
	Nº de trabajadores sanitarios formados en atención a la pandemia, administración de vacunas	
	Número de hospitales con planes de preparación sanitaria	

Protección social	Número de personas adicionales cubiertas por la protección social, desglosado por niños, mujeres, personas con discapacidad, ancianos, refugiados e inmigrantes	
	Número de nuevos regímenes de protección social introducidos	
Educación	Número de estudiantes que acceden a la educación en línea	
	Nº de jornadas escolares presenciales y en línea	
	Nº de profesores formados en métodos de enseñanza y aprendizaje en línea y planes de estudio adaptados al aprendizaje en línea	
Recuperación económica	Aumento del número de jóvenes empleados	
	Nº de jóvenes formados y retenidos en nuevas competencias	
	Nº de MIPYMES que han reabierto su negocio	
	Nº de negocios gestionados por mujeres reabiertos	
	Nº de personas empleadas en hoteles, restaurantes y otros sectores de servicios en comparación con años anteriores	
	Número de agroindustrias restauradas	
	Nº de personas empleadas a través del programa de restauración de infraestructuras públicas	
Agua, saneamiento y sistemas de gestión de residuos	Número de nuevas instalaciones de agua potable en espacios públicos, escuelas y hospitales	
	Número de sistemas de gestión de residuos para eliminar los residuos peligrosos	
	Nº de recolectores de residuos y trabajadores comunitarios y asistidos con formación y equipamiento	
Protección de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los ancianos, los refugiados y los inmigrantes	Número de casos de violencia de género registrados y tratados	
	Nº de servicios de apoyo a la infancia prestados, y niños que reciben apoyo adicional, incluyendo alimentos y otros suministros	
	Nº de personas con discapacidad a las que se les ha prestado servicios sanitarios y de otro tipo	
<p>Indicadores de nivel de impacto para una evaluación en 3-5 años</p> <p>Disminución de las tasas de mortalidad por grupos de edad en comparación con los años anteriores</p> <p>Disminución del desempleo</p> <p>Aumento de la producción agrícola</p> <p>Disminución de la inseguridad alimentaria</p> <p>Descenso de las tasas de pobreza</p> <p>Mejora de los indicadores de educación y salud</p> <p>Disminución de la violencia de género, el maltrato infantil y el maltrato a los ancianos</p> <p>Aumento del PIB del país</p>		

Establecer mecanismos de retroalimentación y gestión de quejas

El fomento de la transparencia se apoya en el establecimiento de mecanismos de retroalimentación y gestión de quejas que permitan a las distintas partes interesadas en la recuperación y a las comunidades beneficiarias expresarse sobre lo que funciona y lo que no, y reflexionar sobre cómo adoptar medidas correctivas.

Adoptar procedimientos de implementación acelerados

Es posible que haya que simplificar los procedimientos existentes en el país para la aprobación y contratación de proyectos, la presentación de informes y la dotación de personal, a fin de satisfacer las apremiantes demandas del proceso de recuperación. A menudo, los proyectos de recuperación se estancan debido a los largos procedimientos burocráticos de aprobación y aprovisionamiento de los proyectos. Aunque existan procesos de aprobación acelerados, a veces los funcionarios responsables son reacios a utilizarlos. La autoridad otorgada por el gobierno al organismo principal de recuperación puede desempeñar un papel fundamental en la promoción del uso de procedimientos y procesos simplificados en todos los sectores y entidades para lograr una ejecución más rápida.

Apoyar la implementación local

La política y la coordinación para la recuperación pueden ser supervisadas por el organismo principal, pero la responsabilidad de la ejecución es mejor que se sitúe en el ámbito local.³⁴ La política y la coordinación para la recuperación pueden ser supervisadas por el organismo principal, pero la responsabilidad de la ejecución es mejor que se sitúe en el ámbito local. No existe una receta única para decidir si la ejecución debe estar centralizada en una sola agencia o en diferentes agencias y a varios niveles. La forma de gobierno de un país debe conducir a la mejor fórmula. Por ejemplo, un país con un historial de poder centralizado podría beneficiarse de la centralización de la aplicación en una sola agencia, porque es probable que ésta tenga más capacidades que las de los niveles locales. Por otro lado, en los países que están efectivamente descentralizados y donde la capacidad fiscal es fuerte en los niveles locales, la aplicación local es probablemente la mejor solución. De hecho, en la medida de lo posible, las decisiones de aplicación deben ser tomadas por los responsables de las mismas.

La ejecución local ayuda a que la comunidad se apropie del proceso de recuperación. Involucrar a las personas y a las comunidades sobre el terreno las empoderará y les dará la oportunidad de encontrar soluciones locales a los problemas locales. Además, la ejecución local podría reforzar, si fuera necesario, la capacidad de los organismos de ejecución para gestionar proyectos de pequeña a gran escala. Los programas de desarrollo impulsados por la comunidad son un vehículo que se utiliza habitualmente.

³²T. Courchene, J. Martinez-Vazquez, C.E. McLure, Jr., and S.B. Webb, "Principles of Decentralization," in *Achievements and Challenges of Fiscal Decentralization: Lessons from Mexico*, Washington, DC: World Bank, 2000, 85, <http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/Decentralization/achievementsandchallengesTOC.pdf>

En el recuadro 6.2 se presenta un ejemplo de este enfoque.

RECUADRO 6.2: Aplicación local de la recuperación del COVID-19 en la RDC

La RDC, un vasto país situado en África Central con una superficie estimada de 2,345 millones de km² y una población estimada de 98 millones de habitantes en 2020, ha adoptado un enfoque comunitario de recuperación para corregir los fallos de las políticas de crecimiento a favor de los pobres. El Gobierno ha adoptado el Programa de Desarrollo Local de 145 Territorios, cuyo objetivo es reducir las desigualdades espaciales, transformar las condiciones de vida y los marcos de la población que vive en zonas rurales hasta ahora mal atendidas por las infraestructuras y los servicios sociales básicos. Este programa de recuperación del COVID-19 evalúa las necesidades prioritarias de los 145 territorios (muchos de ellos alejados y afectados por el conflicto) con el objetivo de responder a las necesidades más importantes, haciendo así un intento único de no dejar ningún territorio atrás.

Con un presupuesto de 1.660 millones de dólares financiados con fondos propios de la RDC, las actividades del programa se llevarán a cabo bajo cuatro componentes (a) desarrollo de infraestructuras socioeconómicas básicas; (b) revitalización de las economías locales y rurales; (c) fortalecimiento de la gobernanza local; y (d) desarrollo de un sistema de información georreferenciada para el seguimiento de éste y otros programas públicos. De esta implementación se esperan los siguientes resultados:

- i. Una reducción significativa de la pobreza y de las desigualdades espaciales,
- ii. Un mejor acceso de las poblaciones rurales a las infraestructuras y servicios socioeconómicos básicos,
- iii. Un aumento de los ingresos de los productores agrícolas rurales,
- iv. La mejora de la seguridad alimentaria,
- v. Un mayor acceso de los jóvenes y las mujeres a las actividades generadoras de ingresos, y
- vi. Mejor gestión de los riesgos a los que están expuestas las poblaciones rurales.

Además, se espera que el programa refuerce aún más la gobernanza local y esta iniciativa y desarrolle las capacidades de resiliencia de las comunidades vulnerables.

Dichas iniciativas pueden adaptarse convenientemente al contexto de otros Estados miembros de la UA y aplicarse en función de las necesidades de recuperación de los respectivos países tras el COVID-19.

Desarrollar sistemas de adquisición adaptados al contexto de la recuperación

Sistemas de adquisición rápida. La adquisición rápida de bienes y servicios puede ser un elemento crucial para una recuperación eficiente y exitosa. Sin embargo, las adquisiciones durante y después del COVID-19 pueden ser desordenadas, lo que conduce a lagunas en la aplicación y a un posible abuso de los procedimientos. Varios tipos de sistemas de adquisición facilitarán la compra de bienes y servicios durante la recuperación. Dos de ellos son la adquisición preestablecida y la adquisición acelerada.

Adquisición preestablecida. La contratación preestablecida prepara una lista de contratistas cualificados. Esta lista puede clasificarse por tipo de experiencia y competencias. Contar con un sistema de precalificación agiliza la adjudicación de contratos y la evaluación de las respuestas a la licitación. Un sistema de precalificación también elimina a los contratistas sin experiencia, que pueden ofertar mucho menos que los competidores más experimentados, pero que carecen de la experiencia necesaria para ejecutar con éxito el proyecto de reconstrucción.

Contratación acelerada. Acelerar las adquisiciones significa utilizar procesos de licitación y compra simplificados y acordados para hacer llegar rápidamente los bienes y servicios a las zonas en las que se necesitan. Para agilizar aún más las adquisiciones, podría predeterminarse una única fuente para la compra de bienes y servicios específicos.

Los sistemas de adquisición acelerada pueden ser utilizados tanto por el sector privado como por las entidades no gubernamentales. Para facilitar la supervisión y el control, es útil que todas las partes interesadas que adquieren bienes y servicios compartan algunos de los procedimientos. Como parte de la auditoría de terceros mencionada en la sección de transparencia del capítulo 5, es necesario examinar de cerca la contratación pública. Por ejemplo, durante las emergencias, el Instituto Nacional de Gestión de Catástrofes (INGC) de Mozambique puede suspender los derechos e impuestos que gravan la compra de suministros de emergencia. Después de la emergencia, el INGC está obligado a conciliar estas exenciones con las autoridades fiscales.

Establecer una estrategia de comunicación para la recuperación

A lo largo del proceso de recuperación, al gobierno le interesa mantener un diálogo continuo y compartir información con todas las demás partes interesadas y socios en la recuperación. Una estrategia de comunicación interna y pública bien definida reconoce los diferentes tipos de partes interesadas e identifica los medios más eficaces para comunicarse con ellas.

Comunicación interna entre los socios de la recuperación. La comunicación interna incluye a todas las partes interesadas que participan directamente en el proceso de recuperación. Esta comunicación puede adoptar muchas formas. Por ejemplo, un sitio web dedicado al intercambio de información interna que incluya el acceso a la base de datos de seguimiento y evaluación, diálogos entre organismos gubernamentales, debates de grupos de discusión con las comunidades o diálogos políticos con los donantes. Este tipo de intercambio de información puede contribuir a la transparencia de la recuperación, a crear credibilidad y consenso sobre los objetivos de recuperación y a identificar las lagunas de cobertura y los solapamientos de los proyectos.

Por ejemplo, los flujos de información entre los sectores y los ministerios competentes pueden dar lugar a menos lagunas de cobertura y solapamientos de proyectos entre los programas multisectoriales. El gobierno puede programar reuniones mensuales de decisión con los socios internacionales en las que se comuniquen los objetivos de recuperación del gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Estas reuniones ahorrarán tiempo a los altos funcionarios del gobierno, permitiéndoles mantenerse centrados en el cumplimiento de sus respectivos hitos y objetivos de recuperación. Hablar con los planificadores, los ejecutores y los grupos comunitarios y trazar sus planes reforzará la transparencia, minimizará la duplicación de esfuerzos, pondrá de manifiesto las lagunas en la asistencia y creará un consenso para alcanzar los objetivos comunes de recuperación.

La comunicación interna crea un espacio de intercambio y retroalimentación entre todos los implicados. Esta comunicación también puede servir como mecanismo de reparación de agravios.

Comunicación pública eficaz. Una estrategia de comunicación pública eficaz puede dar a conocer el esfuerzo de recuperación -políticas, planes y proyectos- entre el público en general, tanto nacional como internacional, especialmente en los países donantes. La estrategia debe definir las comunicaciones clave para la radiodifusión, la prensa y los medios sociales. Estos mensajes tienen por objeto informar a la opinión pública sobre el alcance y el calendario de la recuperación. Además, al reconocer los signos visibles de la recuperación física temprana y anunciar los objetivos a más largo plazo, una estrategia de comunicación pública eficaz puede mantener a toda la comunidad de recuperación y al público en general estimulados para las fases posteriores de recuperación y reconstrucción. Las iniciativas de comunicación pública pueden consistir en:

- Utilizar marcadores de tiempo (como el punto álgido de cada oleada del COVID-19, el inicio del programa de vacunación, el fin de las medidas de bloqueo, etc.) para mostrar pruebas e imágenes visibles de los avances en los sitios web de los diferentes actores institucionales de la recuperación

- Facilitar el acceso de los medios de comunicación, si es un problema, para hacer reportajes desde las zonas afectadas
- Organizar conferencias de prensa en las que se destaquen los resultados de las evaluaciones actualizadas o los comentarios de las visitas sobre el terreno
- Crear contenidos visuales o de texto que cuenten la historia de las diferentes etapas del proceso de recuperación

En el recuadro 6.3 se presenta un ejemplo del papel de una estrategia de comunicación en un programa de recuperación del COVID-19.

RECUADRO 6.3: Disposiciones de aplicación para la recuperación del COVID-19 en Gambia

Como parte de su Estrategia Nacional de Respuesta al COVID-19, Gambia ha desarrollado algunos mecanismos clave de implementación, incluyendo la coordinación, el seguimiento y las comunicaciones. En cuanto a las comunicaciones, señala que la comunicación y la gestión de la información eficaces son cruciales para la aplicación de la estrategia. Se ha preparado una estrategia de comunicación como instrumento de apoyo para facilitar la aplicación de la Estrategia y el Plan de Acción. Esta estrategia de comunicación tiene como objetivo apoyar la visibilidad y los esfuerzos de promoción de la Secretaría Nacional del Covid-19. Concibe una estructura ajustable que proporciona dirección y orientación de las acciones de concienciación, promoción y fortalecimiento de la movilización social sobre la respuesta y la recuperación del Covid-19 en Gambia.

FUENTE: Gobierno de Gambia 2020. Estrategia nacional de respuesta al COVID 19.

Promover la transparencia en la recuperación

Uno de los retos de la implantación de un programa de recuperación es controlar la corrupción y aumentar la transparencia. Estos dos objetivos requieren la instauración de un sistema de auditoría. El sistema abarca la auditoría pública de las adquisiciones y los desembolsos, la realización de una auditoría técnica de las obras realizadas y la realización de una auditoría social de las prestaciones entregadas. Mientras que, en la mayoría de los países, la auditoría financiera de las cuentas y los gastos es un sistema bien establecido, las auditorías técnicas y sociales son conceptos relativamente nuevos y en evolución. Una auditoría técnica es una auditoría realizada por un auditor, ingeniero o experto en la materia para evaluar las deficiencias o las áreas de mejora de un proceso, sistema o propuesta. La auditoría técnica abarca los aspectos técnicos del proyecto implantado en la organización. La auditoría social es un proceso a través del cual un programa de recuperación y reconstrucción es capaz de controlar sus beneficios sociales, económicos y medioambientales mediante la participación de todas las partes interesadas: ONG, propietarios de viviendas, donantes y el organismo de ejecución. El fomento de la transparencia se apoya también en el establecimiento de mecanismos de retroalimentación y gestión de quejas, que permitan a las distintas partes interesadas en la recuperación y a las comunidades beneficiarias expresarse sobre lo que funciona y lo que no, y cómo adoptar medidas correctoras.

Siguientes pasos para la aplicación del Marco

El Marco de Recuperación ofrece orientación para que los países y regiones de África preparen o revisen sus propios enfoques para la recuperación del COVID-19. El recuadro 6.4 ofrece un ejemplo de un país que ha integrado la recuperación del COVID en su marco de planificación.

Para que otros países lo hagan, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Difundir ampliamente el Marco de Recuperación a nivel nacional y regional como recurso y guía para la planificación;
2. Llevar a cabo evaluaciones de las necesidades de recuperación del COVID-19 (CRNA) para identificar los impactos de la pandemia específicos de cada país o región y las correspondientes necesidades de recuperación socioeconómica;
3. Basarse en los resultados de las ERNC para iniciar procesos de planificación participativa con el fin de desarrollar marcos de recuperación específicos para cada país o región;
4. Garantizar que los acuerdos institucionales, los mecanismos de financiación y los enfoques para la aplicación acelerada están en marcha; y
5. Iniciar la aplicación de los marcos.

La Unión Africana y sus socios están dispuestos a ayudar a los países individuales y a las CER con asistencia técnica para el desarrollo de las CRNA y/o los marcos de recuperación. Se puede proporcionar un apoyo similar para ayudar a identificar fuentes de financiación externa para la aplicación de los marcos.

RECUADRO 6.4: Un programa de respuesta integral en Senegal

The government of Senegal responded to COVID-19 in 2020 with a comprehensive El gobierno de Senegal respondió a la COVID-19 en 2020 con un amplio Programa de Resiliencia Económica y Social, estimado en un 7% del PIB. Las intervenciones de protección social fueron uno de los cuatro pilares, junto con el fortalecimiento del sistema de salud, la estabilización de la economía para proteger los puestos de trabajo y las empresas, y el aseguramiento del suministro de alimentos y medicamentos.

Senegal was one of very few countries in Africa that did not implement a cash transfer Senegal fue uno de los pocos países de África que no implementó una respuesta de transferencia de efectivo. En su lugar, la principal intervención de asistencia social fue en forma de ayuda alimentaria. El gobierno compró y distribuyó paquetes de alimentos (pasta, arroz, azúcar, también jabón para higienizar) a un millón de hogares pobres.

In May and June 2020, the government suspended electricity and water bills for 975,000 En mayo y junio de 2020, el gobierno suspendió las facturas de electricidad y agua de 975.000 y 670.000 hogares pobres, respectivamente. Este mecanismo -que proporciona ayuda financiera a los hogares vulnerables subvencionando los pagos de los servicios públicos durante algunos meses- fue muy popular en todos los países francófonos de África Occidental y Central. El plazo para el pago de impuestos también se amplió varios meses.

The Ministry of Labour passed an Ordinance in April 2020 to prevent the dismissal of El Ministerio de Trabajo aprobó una ordenanza en abril de 2020 para impedir el despido de trabajadores durante el cierre, salvo en casos de negligencia grave. Se ordenó a los empleadores que aplicaran acuerdos alternativos, como la reducción de la jornada laboral o los permisos remunerados. Durante este periodo, los empleados debían recibir no menos del 70% de sus salarios anteriores a la crisis. Los empleadores que cumplieron recibieron apoyo financiero y garantías parciales de crédito (20% para las grandes empresas, 50% para las PYMES), especialmente en sectores muy afectados como el turismo y el transporte.

Throughout francophone West Africa, including Senegal, the West Africa Central Bank (En toda el África Occidental francófona, incluido Senegal, el Banco Central de África Occidental (BCEAO) vio en el COVID-19 una oportunidad para promover el uso de las transacciones financieras electrónicas, lo que hizo facilitando el procedimiento de apertura de una cuenta de dinero móvil y ofreciendo transferencias gratuitas entre estas cuentas durante un periodo limitado.

One strategic outcome of the pandemic in Senegal was a revised national development Uno de los resultados estratégicos de la pandemia en Senegal fue la revisión de la estrategia nacional de desarrollo, que incluye un nuevo plan de acción que hace hincapié en lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos básicos para reducir la dependencia de las importaciones. El presupuesto revisado para 2021 también incluye más apoyo al empleo de jóvenes y mujeres

Capítulo VI Lista de comprobación

Esta lista de comprobación abarca los diferentes pasos necesarios para crear acuerdos institucionales eficaces para la recuperación. La lista no es exhaustiva, pero ofrece una visión general de los principales pasos que hay que seguir.

Agencia líder de la recuperación

- Establecer y poner en marcha diferentes mecanismos de coordinación. Coordinar la responsabilidad de la recuperación entre el gobierno nacional, el gobierno local, los donantes, la sociedad civil y la comunidad
- Establecer procedimientos estándar para la aprobación de proyectos, adquisiciones, informes y contratos
- Definir las normas de reconstrucción
- Establecer procedimientos rápidos de adquisición
- Apoyar la ejecución descentralizada de las actividades de recuperación

- Establecer una buena comunicación interna entre los socios de la recuperación. Disuadir a los actores de la recuperación de trabajar de forma aislada
- Dar a conocer el progreso de la recuperación mediante una comunicación pública eficaz. Establecer objetivos claros y realistas para minimizar las expectativas poco realistas, y ofrecer una vía de reclamación a las comunidades
- Garantizar la transparencia en todas las actividades relacionadas con el programa de recuperación
- Realizar el seguimiento y la evaluación de los proyectos de recuperación
- Proponer correcciones a medio camino para mejorar las actividades de recuperación

Anexo 1: Información detallada sobre la metodología

La metodología para desarrollar el **Marco de Recuperación del COVID-19 para África** contempla un proceso de tres fases:

- (iv) **Alcance y Evaluación de la Situación** para el Marco de Recuperación del COVID-19 para África;
- (v) **Redacción del Marco de Recuperación** del COVID-19 para África; y
- (vi) **Apoyo a la Comisión de la Unión Africana** para que apruebe el Marco de Recuperación del COVID-19 para África tras amplias consultas con los Estados miembros de la UA y los actores regionales.

Las tres fases están dirigidas por la UA, con el apoyo técnico del PNUD, la OMS, la FAO, el UNDRR y el Banco Africano de Desarrollo, y en estrecha consulta con todas las partes interesadas continentales, regionales y nacionales pertinentes. Se movilizó a toda una serie de partes interesadas para que aportaran sus contribuciones y conocimientos críticos sobre la recuperación socioeconómica resiliente del COVID-19, incluidas autoridades nacionales de gestión de catástrofes, organismos de las Naciones Unidas, otros socios en el desarrollo y actores regionales.

Fase I: Alcance y Evaluación de la Situación para el Marco (julio-agosto 2021)

Los objetivos de esta fase eran: (i) definir el alcance del trabajo y la metodología para desarrollar un marco de recuperación del COVID-19 en África; y (ii) llevar a cabo una evaluación de la situación para informar el marco de recuperación del COVID-19 para África. La evaluación de la situación abarcará los efectos macroeconómicos, los impactos humanos, las consecuencias económicas y los efectos transversales de la pandemia en África.

La metodología para llevar a cabo la Fase I incluye: a) la preparación de un informe inicial; b) una revisión bibliográfica; c) la identificación de recursos de datos clave; y d) consultas preliminares. El informe inicial fue preparado por el equipo de expertos para su validación por la UA y el PNUD. Incluía la metodología propuesta, un calendario, un mecanismo de coordinación, un esquema anotado del informe marco y referencias preliminares. El informe inicial orientó a los expertos y socios en la recopilación, análisis y presentación de la información, así como en la estructuración del Marco.

Los consultores individuales y los grupos de trabajo sectoriales llevaron a cabo revisiones de la literatura sobre el COVID-19 y la recuperación tras la crisis en África. El consultor principal identificó ejemplos de buenas prácticas no africanas para que los utilizara el equipo que estaba redactando el Marco. Se hizo un esfuerzo por captar los conocimientos de la literatura formal e informal (gris). La CUA facilitó el acceso a las publicaciones pertinentes de la UA y las comunidades económicas regionales (CER).

Los consultores individuales y los grupos de trabajo sectoriales identificaron simultáneamente las fuentes de datos más relevantes y fiables para preparar el Marco. Entre las distintas dimensiones de los datos que se necesitaban figuran las siguientes: geográficas (a nivel continental, regional y nacional), temáticas, sectoriales, de referencia y por gestión de riesgos (comprensión del riesgo, reducción del riesgo, preparación y respuesta, financiación del riesgo y recuperación resiliente). Una importante fuente de información han sido las Evaluaciones de las Necesidades de Recuperación del COVID-19 a nivel de país (CRNA) que han sido preparadas por varias naciones africanas (PNUD, 2020c). Se buscó el acceso a los metadatos por parte de los socios de desarrollo, por ejemplo, las agencias de la ONU y el BaFD.

Se tuvo cuidado de maximizar la compatibilidad de las diferentes bases de datos, por ejemplo, las diferentes fuentes de datos pueden utilizar regiones diferentes para el continente africano³⁶. Todas las fuentes de datos han sido claramente identificadas con referencias enlazadas que estarán disponibles en un repositorio continental de conocimientos.

Durante esta fase inicial se han realizado consultas preliminares con la UA. La CUA organizó un seminario de lanzamiento para presentar el estudio (objetivos del marco, enfoque, informe inicial) al equipo técnico interdepartamental y a otros miembros clave del personal de la UA, con el fin de dar a conocer la iniciativa a nivel interno y buscar aportaciones. A continuación, se celebraron varios seminarios técnicos para compartir los resultados iniciales, obtener comentarios y desarrollar el consenso con las partes interesadas internas (UA) y externas (por ejemplo, las CER, los socios en el desarrollo y otras partes interesadas).

Con el fin de garantizar que el Marco esté suficientemente calibrado para las especificidades del complejísimo continente africano, se identificaron áreas prioritarias para informar sobre la recuperación resiliente. Los principios rectores para la identificación de esas áreas incluyen el enfoque en la comprensión del riesgo sistémico y sus ramificaciones críticas a nivel nacional, regional y continental.

Una vez identificadas estas áreas prioritarias, se llevó a cabo una exhaustiva evaluación de la situación para revelar el impacto de la pandemia del COVID-19 en estas áreas prioritarias. Por ejemplo, se prestó especial atención al impacto de la pandemia en los niños y los jóvenes, que han sufrido la pandemia de forma desproporcionada. La evaluación incluyó un análisis de impacto (impactos humanos, daños y pérdidas económicas, efectos en la gobernanza, interacciones con crisis y riesgos humanitarios, medioambientales y políticos existentes). Todos los materiales y conjuntos de datos pertinentes se organizaron en un depósito continental sobre el impacto del COVID-19 en África para que sirviera como fuente de información adicional.

Los **resultados** de la Fase I fueron los siguientes:

1. Un informe inicial para orientar la preparación del marco de recuperación del COVID-19 para África;
2. La evaluación de la situación centrada en las áreas prioritarias; y
3. Un repositorio continental de productos de conocimiento relevantes y enlaces útiles.

Fase II: Redacción del marco de recuperación del COVID-19 para África **(septiembre-diciembre de 2021)**

El objetivo de la Fase II fue redactar el Marco de Recuperación del COVID-19 para África. El Marco es una iniciativa a nivel continental que aborda el impacto de la pandemia desde una perspectiva multi-riesgo. Ofrece una visión panafricana de la recuperación socioeconómica resiliente, un curso de acción compartido y recomendaciones políticas y programáticas específicas para sus Estados miembros que reflejan los determinantes continentales, regionales y nacionales de las soluciones de recuperación en África.

A falta de un equivalente nacional para la recuperación socioeconómica resiliente del impacto del COVID-19, para los numerosos Estados miembros de la UA, este documento puede servir de referencia clave para la orientación en materia de políticas de recuperación.

La metodología para llevar a cabo la Fase II implicó: a) una clara división del trabajo basada en un esquema común anotado del Marco; b) el análisis, la identificación de opciones y los resultados escritos por parte de consultores individuales, grupos de trabajo sectoriales y organizaciones asociadas principales; y c) consultas con Estados miembros seleccionados y otras partes interesadas.

³⁶El equipo de expertos del Marco ha acordado utilizar, siempre que sea posible, las cinco agrupaciones regionales de la UA para África (véase la lista de países por región en el Anexo 4).

Para organizar claramente el trabajo, el informe inicial contenía un esquema anotado que identificaba quién sería responsable de las secciones clave del informe del Marco. El consultor principal se coordinó con los miembros del equipo y otros socios para garantizar la elaboración de aportaciones completas, oportunas y coherentes.

Las aportaciones de los miembros del equipo se basaron en los análisis realizados según sus áreas de responsabilidad, que pueden ser sectoriales, temáticas o ambas. Con la Evaluación de la Situación como documento de referencia, identificaron los principales retos, las necesidades de recuperación y las oportunidades para superar los obstáculos a la recuperación. Este trabajo se basó en ejemplos de buenas prácticas del continente africano y de otros lugares.

Las consultas adoptaron un enfoque a tres niveles:

1. **Continental** – se preparó un pequeño conjunto de preguntas semiestructuradas, desarrolladas por cada equipo sectorial, que buscaba aportaciones generales de los 55 Estados miembros. Las preguntas se configuraron como una encuesta web administrada a través de la AUC en las cinco lenguas oficiales de la organización. Este proceso también sirvió para dar a conocer el propio ejercicio del Marco;
2. **Estudios de caso** – se centró en un subconjunto de países para obtener información sectorial y temática detallada que se basó en las preguntas semiestructuradas. Los criterios para seleccionar el subconjunto de países fueron: geografía (por ejemplo, dos de cada región), economía política, situación socioeconómica (exportadores de productos básicos, economías diversificadas, economías en transición, economías en pre-transición, economías insulares), grado de vulnerabilidad, estado de desarrollo humano, conflicto y fragilidad, e impacto de COVID-19 (alto, medio, bajo). La elección de los países se ultimó en colaboración con la CUA; y
3. **Grupos de partes interesadas** – aprovechando la red de organismos de las Naciones Unidas y las oficinas de los países con otros socios de desarrollo, se celebraron debates de grupos de discusión con representantes de las principales partes interesadas, especialmente del sector privado, la sociedad civil y socios en el desarrollo.

Sobre la base de los resultados de la Fase I, la CUA organizó debates adicionales de alto nivel para dar forma al contenido del Marco de Recuperación del COVID-19 para África, más concretamente sobre: (i) visión y principios para la recuperación en África; (ii) cada una de las áreas prioritarias, (iii) mecanismos de gobernanza, seguimiento y evaluación (M&E), y (iv) acuerdos para la financiación del Marco.

El Marco incluye escenarios (peor caso, caso medio, mejor caso) que presentan resultados probables basados en la eficacia del control de COVID-19, las tendencias económicas mundiales y regionales, la vulnerabilidad a los peligros naturales, la vulnerabilidad a otras amenazas como los conflictos y la fragilidad, y las oportunidades para dar un salto en el desarrollo, por ejemplo, la digitalización. Dadas las limitaciones de tiempo y recursos, estos escenarios son indicativos y generales más que basados en una modelización rigurosa.

El Marco se benefició de la revisión por pares de un grupo selecto de expertos internacionales independientes y organizaciones asociadas para su información y comentarios.

Fase III: Aprobación del marco de recuperación del COVID-19 para África (enero - febrero de 2022)

El objetivo de la Fase III era organizar consultas con las CER y los Estados miembros y facilitar la aprobación final del Marco de Recuperación del COVID-19 para África.

La metodología de la Fase III incluye: a) una labor de promoción; b) un proceso de aprobación; y c) la difusión. La labor de promoción a nivel nacional entre los Estados miembros de la Unión Africana debía contribuir a garantizar su plena apropiación del Marco. Se realizaron presentaciones y debates sobre el proyecto de Marco con los dirigentes de la UA, las organizaciones regionales, los países individuales y los grupos interesados.

La aprobación oficial del documento sentará las bases para una mayor adhesión a los esfuerzos de recuperación resiliente a nivel continental, regional y nacional, creando así un impulso y una sinergia entre los distintos socios. La oportunidad de refrendar el Marco se encuentra en la más alta plataforma de toma de decisiones, la Cumbre de la CUA, e incluye los siguientes hitos a cumplir:

- **Plataforma Regional de África y Reunión Ministerial de Alto Nivel sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, del 16 al 19 de noviembre de 2021.**
El anteproyecto del Marco COVID-19 para África se presentó, durante la Plataforma Regional de África, a los expertos de los Estados miembros y a las partes interesadas en general el 17 de noviembre y a los Ministros africanos responsables de la Reducción del Riesgo de Desastres el 19 de noviembre de 2021. La sesión ministerial dio lugar a la “Declaración de Nairobi sobre la aceleración del camino hacia la consecución de los objetivos y metas del Programa de Acción para la Aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en África”. La Declaración de Nairobi “solicitó a la Comisión de la Unión Africana que acelerara el desarrollo del Marco de Recuperación del COVID-19 para África para su consideración y adopción por parte de la 4ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico Especializado en Agricultura, Desarrollo Rural, Agua y Medio Ambiente; e instó a los Estados Miembros, Comunidades Económicas Regionales y otras partes interesadas a apoyar el proceso”
- Validación técnica por parte de los estados miembros de la UA el 2 de diciembre de 2021.
- **4ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico Especial (STC) sobre Agricultura, Desarrollo Rural, Agua y Medio Ambiente (ARDWE).** 13-17 de diciembre de 2021.
El marco se presentará al STC-ARDWE para su aprobación por el STC. Y dado su coste, se presentará de nuevo para su inclusión en la agenda de la Cumbre de la UA en enero/febrero de 2022.
- **La Cumbre de la UA tendrá** lugar los días 6 y 7 de febrero de 2022. El Marco sólo podrá ser refrendado oficialmente en la Cumbre de la CUA y sólo si éste ha recibido una respuesta positiva en las etapas anteriores.

Se desarrollará una estrategia de difusión para dar a conocer y utilizar el Marco. A continuación, se aplicará la estrategia de difusión entre los Estados miembros, los socios en el desarrollo y otras partes interesadas, con el fin de orientar y financiar la recuperación tras el COVID a nivel nacional, regional y continental. Esto incluirá también la divulgación dirigida a los socios en el desarrollo para facilitar el apoyo a la preparación y aplicación de los marcos de recuperación a nivel nacional.

Los **resultados esperados** de la Fase III son (i) reuniones organizadas en cada REC con los socios regionales y nacionales para presentar el Marco, (ii) el Marco de Recuperación aprobado para África y (iii) una estrategia de difusión.

Anexo 2: Recomendaciones detalladas para la recuperación del sector sanitario

Corto plazo
<p>Sistemas de información sanitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar y actualizar las modalidades y plataformas de recopilación de datos, para adaptarlas a las medidas de COVID-19, garantizando al mismo tiempo que los datos estén desglosados por edad, género y discapacidad • Reforzar los mecanismos y sistemas de vigilancia pasiva y activa del COVID-19 • Vincular la vigilancia del COVID-19 con los datos hospitalarios y de laboratorio e integrar los en los Centros de Operaciones de Emergencia de Salud Pública (PHEOC) • Mejorar los mecanismos y sistemas de notificación para garantizar que haya datos oportunos que informen las operaciones coordinadas por el SGI del COVID-19 • Reforzar los mecanismos de intercambio de información, asegurando que el flujo entre los niveles comunitario, distrital, regional y central sea efectivo • Formar a los trabajadores sanitarios sobre cualquier adaptación del sistema de información sanitaria
<p>Personal sanitario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar la capacidad del personal sanitario e identificar cualquier déficit en cantidad y calidad, en todas las áreas, para asegurar que los planes de respuesta del COVID-19 puedan ser implementados • Crear capacidad de aumento, incluso mediante la activación de la fuerza de trabajo inactiva, la formación acelerada, la redistribución o el cambio de tareas • Formar al personal en las nuevas directrices, protocolos y orientaciones, empleando enfoques innovadores para maximizar la efectividad y la eficacia • Formar al personal sanitario sobre cómo comunicarse correctamente y con sensibilidad con los pacientes y el público durante el brote del COVID-19 • Abordar los principales problemas del personal sanitario, como la seguridad, el alojamiento, el transporte, el cuidado de los niños, etc., para garantizar que puedan estar en condiciones de trabajar libremente • Abordar los posibles riesgos de salud laboral y proporcionar apoyo psicosocial al personal que lo necesite
<p>Productos médicos, vacunas y tecnología</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar y crear una lista de las existencias esenciales necesarias para el brote del COVID-19, así como las condiciones no relacionadas con el COVID • Revisar los procesos de adquisición y el sistema de gestión de la cadena de suministro para garantizar el rápido despliegue de los productos necesarios • Utilizar las capacidades de los fabricantes locales para producir los productos médicos y los productos básicos necesarios, como EPP, mascarillas, gel hidroalcohólico y dispositivos de asistencia • Colaborar a nivel internacional/regional, en el desarrollo, fabricación y distribución de vacunas, medicamentos y otros productos consumibles • Colaborar a nivel internacional/regional, en la fabricación y distribución de medicamentos, equipos y tecnología • Reforzar la capacidad de hacer pruebas de laboratorio, entre otras cosas, adaptando las modalidades y plataformas de pruebas, garantizando la disponibilidad de equipos de laboratorio, reactivos y otros consumibles, y aumentando los recursos humanos

Financiación de la salud

- Estimar las pérdidas causadas por el brote del COVID-19 basándose en la metodología adaptada del PDNA o en las herramientas y metodologías propias del país
- Estimar los recursos financieros necesarios para que el sistema de salud continúe prestando atención en casos de COVID-19 y no relacionados con el COVID
- Identificar las fuentes de financiación necesarias para la recuperación de los sistemas de salud utilizando el enfoque de reconstrucción y mejora
- Elaborar un plan para obtener la financiación necesaria, de los gobiernos, los ministerios de finanzas y los socios externos cuando sea necesario
- Identificar y abordar los desafíos adicionales para la recaudación de ingresos, la puesta en común y la compra, causados por la pandemia
- Desarrollar e implementar programas de protección financiera para garantizar el acceso a los servicios para todos sin el riesgo de dificultades financieras

Prestación de servicios

- Evaluar y abordar los desafíos en el acceso y la accesibilidad a los servicios de salud, incluidos los causados por la reorganización de la prestación de servicios relacionada con el COVID
- Ampliar el conjunto de prestaciones de los servicios de salud para garantizar la cobertura de las necesidades sanitarias derivadas del brote del COVID-19
- Establecer prioridades para los servicios sanitarios no relacionados con el COVID-19, para garantizar la prestación ininterrumpida de servicios urgentes que salvan vidas y que son esenciales y rutinarios
- Adaptar las plataformas y modalidades de prestación de servicios según sea necesario
- Reforzar los servicios integrados de atención de emergencia, incluyendo la comunidad, la atención pre-hospitalaria y el transporte, y los servicios basados en instalaciones (hospital)
- Desarrollar y aplicar la estrategia hospitalaria, para la admisión, la derivación, el traslado interno, el alta de pacientes con infecciones respiratorias agudas graves, de acuerdo con los criterios y protocolos pertinentes, y en coordinación con las autoridades sanitarias locales
- Designar los centros para recibir, tratar y rehabilitar a los pacientes con COVID-19, evaluando su preparación y capacidad y supervisando su rendimiento y la calidad de la atención para garantizar una atención centrada en la persona
- Establecer y mantener equipos especializados en COVID-19, incluyendo equipos de respuesta rápida, de control y de prevención de infecciones, etc.

Medio a largo plazo

Sistemas de información sanitaria

- Integrar los sistemas de detección y notificación de casos de COVID-19 en el sistema nacional de información sanitaria, utilizando un enfoque de vigilancia integrada de la enfermedad y coordinando el intercambio de información y la comunicación para garantizar que el proceso sea eficiente y eficaz
- Reforzar los sistemas de alerta temprana y vigilancia de las enfermedades infecciosas
- Revisar y reforzar las plataformas y modalidades de recogida de datos
- Fortalecer los sistemas a nivel de distrito para apoyar la toma de decisiones basada en la evidencia
- Reforzar los mecanismos de seguimiento de las desigualdades sanitarias

Personal sanitario

- Reactivar los mecanismos normales de regulación que puedan haber sido suspendidos o adaptados para mejorar la capacidad de respuesta ante el brote
- Crear o revisar la base de datos del personal sanitario para obtener una visión general de los recursos humanos, teniendo en cuenta la capacidad de aumento y las pérdidas por el brote
- Desarrollar una planificación de la fuerza de trabajo a corto y largo plazo teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de la población
- Absorber la fuerza de trabajo creada por el brote, mediante la aplicación de medidas como la redistribución, la reconversión profesional o la decisión de hacer que algunos vuelvan a estar inactivos

Productos médicos, vacunas y tecnología

- Integrar los sistemas de adquisición y distribución específicos de COVID en el sistema existente
- (Re)establecer la cadena normal de adquisición y suministro de medicamentos
- Reforzar las capacidades nacionales de adquisición, distribución y cadena de suministro
- Reforzar la capacidad farmacéutica nacional, incluso en lo que respecta a la fabricación, la inspección y la regulación
- Reforzar la capacidad de investigación y promover la colaboración entre el sector público y el privado, incluso con el mundo académico y los laboratorios

Financiación de la salud

- Identificar y abordar cualquier reto relacionado con la recaudación de ingresos, la puesta en común y las compras
- Abogar ante el gobierno para que aumente la financiación pública interna de la sanidad
- Abogar ante el gobierno para que dé prioridad a la atención sanitaria en su presupuesto, especialmente cuando los recursos escasean
- Cuando sea necesario, abogar ante los donantes para que aumenten la financiación y el apoyo, preferiblemente a través de un fondo común para la recuperación de los sistemas sanitarios y dedicado a exclusivamente a este fin
- Aplicar políticas y planes para mejorar el acceso a la salud

Prestación de servicios

- Revisar y, cuando sea necesario, integrar las modalidades de prestación de servicios específicas del COVID en el sistema existente
- Revisar las modalidades y plataformas de prestación de servicios, adaptarlas a las necesidades de la población y subsanar las deficiencias
- (Re)implementar políticas que garanticen el acceso sin barreras y la accesibilidad a los servicios sanitarios
- (Re)activar la atención primaria de salud, reforzando la funcionalidad de los sistemas de derivación y los vínculos entre los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria

Anexo 3: Recomendaciones detalladas para la recuperación económica

Continental

1) Facilitar los intercambios y el comercio

Medidas a corto plazo:

- I. Las autoridades fronterizas deben mostrar unas sencillas directrices paso a paso sobre la normativa fronteriza COVID-19 para los operadores y comerciantes de transporte transfronterizo
- II. Se puede acordar un certificado común de prueba del COVID-19 o una prueba de vacunación para permitir el comercio a los pequeños comerciantes y negocios informales en las fronteras. Sin embargo, este acuerdo debería tener en cuenta los riesgos del movimiento no regulado de patógenos y mercancías peligrosas
- III. En aquellos países que no estén dispuestos a reabrir los pasos fronterizos oficiales a los comerciantes informales a pie, las autoridades de la frontera pueden facilitar la agregación, el transporte y el despacho de sus mercancías y extender el alivio social a los comerciantes informales a través de las asociaciones comerciales transfronterizas
- IV. Aplicar medidas anticorrupción para atender las necesidades de los pequeños comerciantes informales, controlando la entrega y aceptación de sobornos y poniendo fin al acoso y la violencia

Medidas de medio a largo plazo:

- I. Mejorar y ampliar los Regímenes Comerciales Simplificados (RTS): Los miembros de COMESA han acordado un régimen de comercio simplificado para formalizar y mejorar la actuación de los pequeños comerciantes transfronterizos para que puedan beneficiarse de un trato preferente regional al importar o exportar mercancías dentro de la región. Puede recomendarse un esfuerzo colectivo coordinado por las CER y los Estados miembros para abordar específicamente esta cuestión como medida de recuperación a corto y medio plazo
- II. Algunas de las medidas para simplificar los regímenes comerciales con el fin de adaptarlos mejor a los comerciantes informales pueden ser la exención del certificado de origen, la flexibilización de los requisitos para los permisos de exportación/importación y la certificación sanitaria y fitosanitaria, por ejemplo, en el comercio de bienes esenciales, o la ampliación de las listas de bienes que pueden recibir el tratamiento de RTS. Mejorar los RTS y hacerlos más inclusivos para los comerciantes informales podría contribuir a atraerlos, especialmente a las mujeres, que constituyen la mayor parte de los comerciantes transfronterizos, a la formalización
- III. Facilitar el comercio transfronterizo a través de la banca móvil y los sistemas de pago y fomentar la reducción de los pagos arriesgados en efectivo

2) Abordar el desempleo de los jóvenes

Medidas a corto plazo:

- I. Extender las medidas de apoyo a los ingresos y la cobertura de la protección social, incluidas las prestaciones por desempleo, a los jóvenes vulnerables
- II. Dotar a los jóvenes de las destrezas adecuadas y promover la formación empresarial entre ellos

para estimular el empleo en nuevos sectores. Un entorno propicio consistente en redes sociales, mentores, financiación y tecnología puede ser eficaz para promover el espíritu empresarial de los jóvenes

- III. Promover la demanda de mano de obra y el empleo apoyando al sector privado, especialmente a las MIPYMES

Medidas de medio a largo plazo:

- I. Desarrollar políticas integrales de empleo para promover empleos de calidad entre los jóvenes.
- II. Centrarse en la identificación de oportunidades de crecimiento del empleo para las mujeres jóvenes y los jóvenes vulnerables a través de políticas de desarrollo sectorial. Centrarse en las políticas de EFTP y en las acciones necesarias podría aumentar las perspectivas de empleo de los jóvenes
- III. Identificar lagunas de la oferta y la demanda y diseñar políticas de desarrollo del capital humano para adecuar la oferta a la demanda

3) Facilitar la digitalización de la economía

Medidas a corto plazo:

- I. Reducción de los costes de las transacciones digitales y garantía de asequibilidad. La asequibilidad es un obstáculo persistente para la adopción de la digitalización, dado el elevado coste global en relación con los ingresos. La reducción de los costes de transacción puede ayudar a los consumidores a acceder a otros servicios financieros, como las opciones de gestión de riesgos y las inversiones, ayudando a los hogares a mejorar su estabilidad y resistencia financiera.
- II. Adopción de tecnologías financieras. Los servicios de dinero móvil proporcionados por la tecnología financiera y los operadores de telecomunicaciones están rellenando cada vez más las lagunas que los bancos tradicionales nunca han podido abordar. El impulso de inclusión financiera del Banco Central, las políticas reguladoras favorables y la revisión de los requisitos de "Conozca a su cliente" son algunos de los incentivos para acelerar el desarrollo.
- III. Reducir las brechas de género en el acceso digital. Promover políticas y estrategias que tengan en cuenta el género, utilizar soluciones digitales para aplicar las medidas de ayuda del COVID-19 dirigidas a las mujeres y las niñas de las zonas rurales, dedicar fondos para apoyar a las empresas y cooperativas dirigidas por mujeres a través de las tecnologías digitales, invertir en la protección de los usuarios de Internet (prestando especial atención a los analfabetos y a los vulnerables frente a la ciberdelincuencia, incluido el acoso sexual) pueden ser algunas de las medidas para reducir la brecha digital de género.
- IV. Cerrar la brecha digital para las microempresas. Las finanzas digitales tienen un potencial sin explotar en el ASS, en términos de adaptación de los servicios financieros al contexto local y a las características del usuario final. En general, la inclusión financiera puede aumentar la producción económica. Los productos financieros accesibles a precios asequibles pueden impulsar el crecimiento económico. Animar a las MIPYMES a adoptar herramientas digitales es importante para que sean más resistentes a la hora de luchar contra la pandemia. Para apoyar a estas empresas, puede ponerse en marcha un enfoque para aprovechar la tecnología existente y crear nuevas ofertas adaptadas a las MIPYMES en África con el apoyo de los respectivos Estados miembros de la UA.

Medidas de medio a largo plazo:

- I. Ciber-salud y ciber-educación. Deben establecerse asociaciones público-privadas para fortalecer áreas como la salud y la educación. Proporcionar al público servicios digitales de salud y educación de alta calidad comprometería a la sociedad a seguir adoptando vías de desarrollo digital.
- II. La mejora de las competencias digitales de los usuarios y el impulso de la incipiente demanda de servicios digitales son los dos mayores obstáculos para el emprendimiento digital de los países africanos en desarrollo. La inversión debe canalizarse para (a) desarrollar un ecosistema digital africano de contenidos y servicios digitales locales, y (b) el desarrollo de habilidades de base amplia para que todos los ciudadanos saquen el máximo provecho de la conectividad.
- III. Se necesitan nuevos modelos de inversión en infraestructuras digitales incluida la financiación de asociaciones entre operadores de telefonía móvil y gobiernos para construir infraestructuras compartidas, con el fin de desbloquear la recuperación y dar un salto en el desarrollo de muchas zonas rurales o remotas. La adopción de soluciones FinTech basadas en big data y aprendizaje automático puede conducir a una disminución del coste de los riesgos crediticios.
- IV. La Estrategia de Transformación Digital de la UA establece que es necesario impulsar un programa de “habilidades digitales masivas en línea para todos”. A medida que los gobiernos integren la adquisición de habilidades digitales en los planes de estudio nacionales para los estudiantes, puede extenderse a las empresas y organizaciones comunitarias para ofrecerles opciones de aprendizaje permanente sobre temas digitales.
- V. Expansión de las redes de fibra. El aumento de la demanda local de servicios en la nube y de gran ancho de banda ha hecho más urgente la ampliación de las redes de fibra óptica. Hay que animar cada vez más a los operadores privados a que inviertan en nuevas infraestructuras troncales, lo que ayudará a expandir la fibra más allá de sus centros tradicionales en los suburbios más ricos y en las zonas comerciales de alta densidad.

Medidas comunes a todas las regiones

1) Fomentar las cadenas de valor hortícolas

Medidas a corto plazo: (a) reconstruir los activos operativos, como el riego, las espalderas y las estructuras de sombra, (b) proporcionar planes de subvención para la pérdida inmediata de productos perecederos, (c) compras del gobierno para mejorar la actividad agrícola en la próxima temporada de cosecha, (d) facilitar un entorno institucional de apoyo para el almacenamiento y la logística, (e) formar organismos superiores de todas las partes interesadas (como la Junta del Cacao de Ghana), para asesorar y ayudar a poner fondos a disposición del sector hortícola.

Medidas a medio plazo: (a) acelerar la adopción digital y mejorar el acceso de los agricultores a los mercados ascendentes y descendentes, fortalecer los vínculos rurales y urbanos y ayudar a construir cadenas de suministro resistentes, (b) adopción de tecnología para optimizar la producción de frutas y verduras que cumpla con los requisitos del mercado tanto en términos de precio como de calidad, (c) desarrollar las capacidades de los agricultores, (d) adoptar cultivos genéticamente modificados (GM) basados en la evidencia científica: África tiene la mayor superficie de tierra cultivable no cultivada del mundo y, sin embargo, la mayoría de las explotaciones agrícolas ocupan menos de dos hectáreas. (e) Adoptar sistemas de riego eficientes desde el punto de vista del agua para mejorar la productividad, incorporar la tierra no cultivada a las zonas de cultivo, crear puestos de trabajo tanto en la agricultura, aumentando así los ingresos de los agricultores, como en el mantenimiento de los sistemas y el apoyo técnico a los agricultores. (f) Desarrollar cooperativas que incluyan agentes de múltiples sectores hortícolas y asociaciones centradas en cada uno de los cultivos para ayudar a resolver los problemas de acceso al crédito, las semillas, los viveros, la obtención de material de siembra libre de enfermedades y otros insumos agrícolas.

Medidas a largo plazo: (a) reformar la propiedad de la tierra teniendo en cuenta la productividad y la inclusión. África tiene la mayor superficie de tierra cultivable no cultivada del mundo y, sin embargo, la mayoría de las explotaciones agrícolas ocupan menos de dos hectáreas, (b) las explotaciones comerciales, así como los agricultores con recursos limitados, pueden plantar cultivos frutales de hoja caduca, otros cultivos frutales y porta-injertos adecuados a sus condiciones climáticas y de suelo específicas, (c) construir un sólido ecosistema de comercio electrónico, (d) establecer una vinculación institucional formal, (e) invertir en planes de recuperación verde/agricultura sostenible para hacer frente a la crisis climática.

2) Aprovechar el potencial de la economía azul

Medidas a corto plazo:

Las estrategias a corto plazo que se exponen a continuación se centran principalmente en garantizar la salud y la seguridad de los agentes de la cadena de valor, y en velar por su seguridad alimentaria, nutricional y económica.

- I. La mayoría de los gobiernos de África han tomado medidas inmediatas para atender las necesidades financieras de las empresas, proporcionando exenciones fiscales y facilidades de crédito. Estas medidas deberían continuar a corto plazo. Deberían tomarse medidas para favorecer el acceso de las mujeres al crédito.
- II. Los paquetes de ayuda deben ampliarse progresivamente. Hay que tener cuidado para que estos programas no agraven las desigualdades en lugar de reducirlas. Por ejemplo, la ayuda financiera puede ponderarse a favor de las embarcaciones o explotaciones más pequeñas en lugar de asignar una cuota fija por tamaño o superficie de la unidad. Transferencias en efectivo y en especie por parte de las instituciones locales (cuando no existan planes nacionales de protección social) para apoyar a los más vulnerables.
- III. La reapertura de los mercados físicos y el transporte y la logística son esenciales para el buen funcionamiento de la cadena de valor de los alimentos acuáticos. Deben mantenerse abiertos aunque con la aplicación de los protocolos específicos del COVID-19. Debe prestarse apoyo a las pequeñas empresas para facilitar las instalaciones de saneamiento y lavado de manos en las unidades de procesamiento y en las fábricas de pescado.
- IV. Vacunar a los actores de la cadena de valor acuática. Proporcionar equipos de protección personal a la tripulación de los buques pesqueros.
- V. Iniciar la cobertura de la protección social para la mano de obra vulnerable a lo largo de la cadena de valor acuática. Esto debería incluir un gran número de mujeres que se dedican en gran medida a las actividades de procesamiento. Deben tenerse en cuenta especialmente los trabajadores migrantes, que constituyen una parte importante de la mano de obra acuática.
- VI. Eliminar los cuellos de botella en la facilitación del comercio, en particular abordando con decisión la búsqueda de rentas por medio de malas prácticas en los múltiples puestos de control fronterizos.
- VII. Establecer un proceso regular de consultas entre el gobierno, los profesionales de la pesca, los trabajadores pertinentes y las asociaciones empresariales para identificar los problemas emergentes y las soluciones de abajo hacia arriba.
- VIII. Ayudar a las pequeñas empresas de la cadena de valor acuática a unirse a las plataformas de comercio electrónico.
- IX. A la hora de promover la acuicultura y la pesca como estrategia en favor de los pobres, elaborar un plan que tenga en cuenta las especificidades de género, ya que los patrones basados en el género son predominantes a lo largo de la cadena. Por ejemplo, las mujeres suelen participar en la comercialización doméstica de productos pesqueros frescos y curados, mientras que la exportación de productos secos ahumados la realizan principalmente los hombres.

Medidas a medio plazo:

A medio plazo, hay que esforzarse por identificar y corregir los puntos débiles del sistema actual e iniciar cambios sistémicos y políticos. El apoyo a los grupos vulnerables debe continuar. La asistencia financiera y el alivio de los pagos a las pequeñas empresas sólo podrán suprimirse tras la debida evaluación y valoración de las necesidades.

- I. Establecer sistemas para mejorar la recogida de datos y la supervisión a fin de hacer un seguimiento de los cambios y realizar intervenciones rápidas siempre que sea necesario.
- II. Mejorar los marcos de gobernanza alentando al sector privado y a la sociedad civil a participar en la formulación de políticas sectoriales y medidas de gestión de recursos.
- III. Impartir formación sobre alfabetización digital a los agentes de la cadena de valor acuática.
- IV. La calidad del agua desempeña un papel importante a la hora de mantener sanos y prósperos tanto a los peces como al ecosistema circundante. Deben realizarse periódicamente análisis de la calidad del agua.
- V. Abordar las cuestiones relacionadas con las cadenas de valor alimentarias acuáticas y la alimentación, la seguridad y la nutrición en un marco político integrado y elaborar estrategias para su aplicación real.
- VI. Invertir en sistemas de manipulación y almacenamiento en frío para evitar que el pescado se pierda y se desperdicie.
- VII. Invertir en plantas de procesamiento de pescado para convertir el pescado fresco o congelado en varios tipos de productos procesados. La demanda de productos procesados aumentó durante la pandemia.
- VIII. Facilitar el comercio intrarregional de pescado y productos acuáticos en el ámbito del AfCFTA.

Medidas a largo plazo:

Dichas intervenciones se han formulado con el objetivo de diseñar una recuperación duradera y resistente alineada con los futuros objetivos de desarrollo de la economía azul.

- I. Mejorar las infraestructuras críticas, tales como las carreteras, la electricidad y los mercados
- II. Invertir en capital humano y formación de alta cualificación para los actores de la cadena de valor acuática
- III. Invertir en I+D para promover la producción de alimentos marinos ricos en nutrientes
- IV. Desarrollar sistemas integrales de protección social para la mano de obra del sector acuático, a fin de que sea resistente a futuras crisis
- V. Desarrollar un marco nacional integral para la economía azul. Prestar apoyo a la elaboración de políticas basadas en pruebas desarrollando sistemas de información mejorados sobre los ecosistemas marinos vulnerables y los hábitats frágiles
- VI. Apoyar la pesca responsable y el crecimiento sostenible de la acuicultura en consonancia con los principios del CODE (Código de Conducta para la Pesca Responsable) y los objetivos de desarrollo sostenible
- VII. Profundizar en el comercio intrarregional e internacional de especies acuáticas de alto valor y de productos de valor añadido y procesados

3) Apoyo al desarrollo de las microempresas

A. Minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)

Medidas a corto plazo:

- I. Vacunación de los operarios de la MAPE. La MAPE es una actividad intensiva en mano de obra con miles de mineros que trabajan en espacios reducidos, lo que supone un mayor riesgo de transmisión. Su vacunación masiva es esencial.
- II. Medidas de protección social y bienestar para los mineros del sector de la MAPE. Los mineros de la MAPE, especialmente los del sector del oro, se han visto afectados negativamente a pesar de los precios relativamente altos del oro. Dado que casi el 80% de la MAPE es informal, hay pocas garantías de que el reciente aumento de los precios del oro beneficie a este grupo de mineros. Por lo tanto, las transferencias de efectivo, la creación de puestos de trabajo y el suministro de alimentos y salud pueden ser algunas de las formas de protegerlos.
- III. Exención de los actores de la cadena de suministro de la minería del cierre de fronteras y de las restricciones de viaje.
- IV. Facilitar las medidas de crédito, el acceso a los mercados, las habilidades de marketing esenciales y los conocimientos, especialmente al sector de la MAPE.
- V. Crear un foro de diálogo entre los mineros de la MAPE. los grandes mineros, las organizaciones de trabajadores y otros actores institucionales. Este foro también podría ayudar a facilitar la integración de los actores de la MAPE en las cadenas de valor regionales y globales, normalmente controladas por los operadores corporativos y del conglomerado. Poner en marcha la creación de capacidades y la formación basada en las necesidades empresariales y de SST en la que podrían colaborar las instituciones y las empresas. La formación de los trabajadores de la MAPE y el suministro de EPI/equipos de SST pueden ser un incentivo para que las MAPE se adhieran a los protocolos sanitarios del COVID-19 y adopten prácticas de trabajo decente.

Medidas a medio plazo:

- I. Establecer políticas para frenar los conflictos entre los trabajadores de la MAPE y de la minería a gran escala.
- II. Mayor protección de los derechos de propiedad de los trabajadores de la MAPE.
- III. Es importante que los países impongan el cumplimiento de los acuerdos mineros en sus operaciones con los códigos mineros de los países pertinentes (especialmente los países productores de oro). Para adherirse a los códigos, las empresas mineras pondrían en marcha Planes de Riesgo de Desastres y de Continuidad de Negocio, que mitigarían los efectos adversos de las perturbaciones que sufre el sector.
- IV. Introducción de un impuesto sobre los beneficios inesperados que podría entrar en vigor cuando los precios del oro alcancen un determinado umbral.
- V. Atajar el contrabando y el blanqueo de dinero en el sector de la MAPE de oro. La minería ilegal amenaza la viabilidad del sector minero y de la economía en general.
- VI. Acelerar la digitalización. Existe un importante potencial para la digitalización en el subsector de la MAPE, ya que ayuda a los pequeños mineros a lograr eficiencias, a ampliar su negocio al formar parte de cadenas de suministro más amplias y a generar mejores soluciones medioambientales y económicas. La formación de cooperativas y otros grupos puede integrar el fragmentado sector de la MAPE. Esto, a su vez, puede facilitar que los mineros de la MAPE aumenten su producción y su acceso al mercado.
- VII. Mejorar el acceso a la electricidad y considerar la posibilidad de invertir en energía solar en el sector minero. Los paneles solares pueden producir electricidad a un coste menor y con un recurso local.

Medidas a largo plazo:

- I. Transformación estructural del sector: La excesiva dependencia de la demanda china de materias primas africanas ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de las estructuras de varias economías. Si bien el COVID-19 ha exacerbado estas vulnerabilidades, al mismo tiempo ha presentado una oportunidad de transformación estructural. Los países con abundantes recursos para alimentar las revoluciones mundiales de la energía y el transporte (como el cromo, el manganeso, el cobre, el cobalto y el litio) deberían aprovechar ahora la oportunidad de reformar la gobernanza para reducir la dependencia de los hidrocarburos y desarrollar mercados mundiales para otros materiales, preferiblemente con algún nivel de valor añadido antes de la exportación.
- II. Crear capacidad de refinado de oro: Es importante que los países africanos pongan en marcha medidas que fomenten la creación de refinerías de oro en el continente, como forma de añadir valor al producto a nivel local. Esto no sólo permitiría a los países captar más valor de la mercancía, sino que también es probable que reduzca el riesgo de mercado para los mineros de la MAPE.
- III. Construir industrias para dar servicio a las minas: Las empresas multinacionales de Europa, Norteamérica y, más recientemente, China, siguen dominando la extracción y el refinado de la mayoría de los minerales extraídos en África, con un papel mínimo para las empresas africanas. A partir de estos minerales, las empresas manufactureras extranjeras producen bienes de consumo e industriales que se venden en los mercados mundiales a precios mucho más altos que los que se pagan por las materias primas. África puede sacar más provecho de sus minerales creando industrias que den servicio a las minas y añadan valor a sus propios recursos naturales para impulsar el desarrollo económico.
- IV. Formación de marcos propicios y legales. Las estructuras de concesión de licencias altamente centralizadas [12] presentan fallos del Estado y fomentan un sector informal de la MAPE, que atrae a empresarios ilegales extranjeros y locales, oportunistas, pero con buenos recursos, que suelen operar con maquinaria pesada para el movimiento de tierras, con un impacto medioambiental devastador [13]. Por lo tanto, hay que esforzarse por desarrollar marcos legales propicios y completos, no sólo para facilitar las restricciones en la adquisición de licencias, sino también el acceso a la tierra, la igualdad de género, la participación de la comunidad, la seguridad medioambiental y las normas laborales.
- V. Aplicar los cambios legislativos en los códigos mineros: Esto aumentaría los ingresos del gobierno y garantizaría su uso adecuado. A medida que se actualizan los códigos mineros, los gobiernos deben seguir adelante e invertir en las comunidades donde se encuentran las minas. Es muy importante que el gobierno reserve fondos que puedan utilizarse para apoyar los trabajos de socorro en caso de crisis como la pandemia.

B. Abordar las necesidades del sector turístico. Con una recuperación que se prevé lenta y desigual entre las regiones, especialmente debido a la nueva variante del COVID-19 Omicron, el apoyo al sector turístico en África en estos tiempos difíciles será fundamental. La preocupación inmediata es el daño que las restricciones están causando a las familias, a las industrias de viajes y turismo y a las empresas. En estos tiempos difíciles, es necesario apoyar y aplicar políticas que garanticen que el sector pueda beneficiar a las comunidades y a la población vulnerable que depende de él.

Destinos insulares y costeros. Algunos de los destinos insulares más populares de África oriental y meridional son Mauricio, Seychelles y Zanzíbar (Tanzania). El principal reto de este segmento es su capacidad de recuperación si la pandemia continúa en sus principales mercados de origen más allá de 2021, y sus propias tasas de vacunación están por debajo de los umbrales aceptables. Algunos de los países costeros de estas regiones también cuentan con lugares de ocio muy populares que atraen a los turistas con una duración media de la estancia más larga (por ejemplo, la Ruta de los Jardines de Sudáfrica) y que generan mayores ingresos per cápita que otros lugares.

Destinos artísticos y patrimoniales. Los países del norte de África, como Egipto, Marruecos y Túnez, son destinos turísticos populares por su atractivo arte y patrimonio y también por el mar Mediterráneo. Los principales retos para estos países son las bajas tasas de vacunación (especialmente en Egipto) y el contagio de la inestabilidad regional y los problemas de inseguridad. Las diferencias entre hombres y mujeres son mayores y existe un desajuste de competencias en el sector, donde las mujeres, los jóvenes y los licenciados suelen quedar excluidos del mercado laboral a pesar de haber adquirido cualificaciones y títulos.

Safaris y destinos turísticos. África es el primer destino mundial de safaris que van desde lo más sencillo a lo exótico. Los países de África Oriental, como Kenia, Tanzania y Uganda, dependen en gran medida de la industria del turismo para generar ingresos. La gran migración de ñus del Serengeti, en Kenia y Tanzania, se ha convertido en un popular destino de safari. También son populares los parques nacionales y las reservas de caza de Sudáfrica, Zambia, Zimbabue y algunos otros países vecinos. Las cataratas Victoria (Zimbabue/Zambia), el monte Kilimanjaro (Tanzania) y algunos otros lugares son también destinos paisajísticos populares. Todos estos destinos han sufrido un descenso en la llegada de turistas durante la pandemia.

Medidas a corto plazo:

- I. Aumentar las tasas de vacunación en el país, lo que devolverá la confianza a los viajeros
- II. Asistencia social, programas de transferencia de efectivo a los hogares dependientes del turismo profundamente afectados y, especialmente, a los trabajadores informales y estacionales, aumentar las prestaciones de desempleo. Asistencia para el alivio de la deuda de las microempresas informales y los trabajadores por cuenta propia.
- III. Relanzar los destinos a través de promociones de “vuelta al negocio” a los mercados de origen clave. Además, las empresas deben tratar de entender las contrapartidas de la ampliación de las ofertas de descuentos.
- IV. Reducir el coste de hacer negocios para seguir manteniendo las licencias operativas durante estos tiempos.
- V. Iniciar servicios de crédito para las MIPYMES, especialmente las de propiedad femenina, es necesario para estimular el espíritu empresarial en la economía.
- VI. Abordar la “burocracia bancaria” para facilitar las facilidades crediticias a las MIPYMES. La excesiva regulación o la rígida conformidad de los bancos dificulta el acceso al crédito.
- VII. Mejorar la cualificación y la recualificación de los trabajadores: Es probable que la reactivación del sector turístico lleve mucho tiempo. Una parte de la mano de obra puede necesitar ser re cualificada para darles opciones alternativas de subsistencia o aprovechar las oportunidades de trabajo en otros sectores de la economía o proporcionar capital inicial para crear sus propias microempresas. Para apoyar estos programas de reorientación del mercado laboral puede ser necesario crear institutos de formación profesional, ofrecer programas de formación en el puesto de trabajo y becas de aprendizaje.

Medidas a medio plazo:

- I. Digitalización: Aunque la mayoría de los países han tomado medidas para desarrollar la infraestructura digital, una nueva forma de introducir un pasaporte sanitario digital para garantizar que la salud esté integrada en todos los aspectos del viaje puede aumentar la sensación de seguridad de los pasajeros cuando viajan. El uso de la identidad digital y de las tecnologías biométricas puede restablecer la confianza y garantizar un viaje sin contratiempos.
- II. Ampliar la cobertura y mejorar la orientación de los programas de protección social para la gran población de trabajadores del sector informal en el sector turístico.
- III. Desarrollar una estrecha colaboración entre las partes interesadas del sector turístico y una sólida asociación público-privada.

Medidas a largo plazo:

- I. Establecimiento de infraestructuras críticas: La economía del turismo necesita una terminal aeroportuaria mejorada con equipos de seguridad internacionales; conexiones aéreas con las grandes ciudades cercanas; inversores en instalaciones de ocio y servicios turísticos; y la limpieza y regeneración de los lugares de atracción. El cambio de hoteles a villas, casas particulares y otros alojamientos no tradicionales puede acelerar la demanda en el caso de Mauricio y Seychelles. La ampliación de la capacidad de producción nacional es fundamental para que Seychelles frene su excesiva dependencia de los insumos importados.
- II. En los últimos años, el turismo ecológico ha sido importante para los turistas a la hora de elegir un destino de vacaciones, principalmente debido a cuestiones medioambientales y al cambio en las preferencias de los consumidores.
- III. Convergencia del turismo sostenible y la economía azul. Por ejemplo, en Santo Tomé y Príncipe hay que crear un puerto pesquero para barcos industriales y semi-industriales y un puerto de aguas profundas. Ningún barco grande puede atracar, así que toda la carga se descarga en pequeños barcos en el mar y luego se vuelve a descargar en el pequeño y congestionado puerto del país. Este es uno de los principales factores que faltan para apoyar la economía azul en Santo Tomé y Príncipe.
- IV. Diversificación: El desarrollo de la manufactura ligera; la convergencia del turismo sostenible y la economía azul, el procesamiento de mariscos y las actividades portuarias; la expansión de la agricultura/horticultura pueden ser formas de diversificar la economía para reducir el riesgo de que se vea afectada por futuras crisis. Los países necesitan políticas de desarrollo para salvaguardar los conflictos de uso del suelo entre la agricultura y el turismo y la escasez de agua.

En el informe de evaluación de las necesidades de recuperación del COVID-19 del turismo de Zambia se pueden encontrar algunos buenos ejemplos de iniciativas propuestas. Las iniciativas pretenden reabrir el sector y aplicar medidas a medio y largo plazo que den prioridad a la sostenibilidad y al desarrollo inclusivo mediante reformas políticas y cambios institucionales (PNUD, 2021).

C. Desarrollar la fabricación ligera mediante empresas ecológicas. Las medidas de recuperación para apoyar a las MIPYMES de la fabricación ligera (muchas de las cuales pueden ser empresas no registradas) y el comercio deben contemplarse como un continuo en el que la aplicación comienza a corto plazo, pero luego pasa a medio y largo plazo. Las recomendaciones para la recuperación de estas microempresas pueden agruparse en cinco categorías, a saber: (a) facilitar el acceso al crédito a tipos de interés más bajos y con garantías mínimas, (b) apoyo a la creación de empleo para las microempresas y las pequeñas empresas, (c) orientación empresarial, formación, desarrollo de capacidades y apoyo, (d) facilitar la adopción de tecnología en las economías africanas emergentes y en transición, y (e) mejorar la calidad de las estadísticas industriales y el seguimiento de la política industrial.

Medidas a corto plazo:

- I. Facilitar el acceso al crédito, con tipos de interés más bajos y exigiendo garantías mínimas. La ampliación de estas medidas a las empresas de la economía informal, a las empresas no registradas y a los trabajadores por cuenta propia les ayudará a mantenerse a flote y a apoyar la recuperación. Además, teniendo en cuenta la magnitud de la pérdida de ingresos sufrida por las MIPYMES y la pérdida de ingresos de sus trabajadores, es necesario aumentar la reserva de recursos para concederles créditos con el fin de apoyar su recuperación.
- II. Apoyo a la creación de empleo para las MIPYMES. El apoyo en épocas de tensión en las finanzas públicas debe estructurarse cuidadosamente y aplicarse con criterio para obtener los máximos beneficios socioeconómicos de las inversiones públicas o de los ingresos que deja de percibir el erario público.

- III. Apoyar la orientación empresarial, la formación, el desarrollo de capacidades y el acompañamiento. Además de la asistencia crediticia, la mayoría de los microempresarios también necesitarán formación para el desarrollo de capacidades y apoyo mediante asistencia técnica especializada, ya que no están preparados para salir de la crisis por sí solos. Por lo tanto, para una aplicación eficaz, el paquete de asistencia crediticia debe ir acompañado de asistencia técnica para que los empresarios comiencen a recuperar sus negocios.
- IV. Mejorar la facilitación del comercio. El cambio de enfoque, desde el actual gasto en infraestructuras fronterizas hasta el aumento de los recursos humanos y las medidas operativas para reducir el tiempo de permanencia en las fronteras, puede ser eficaz. La mejora del comercio intra africano a través del AfCFTA podría facilitar el salto a las industrias verdes y a las tecnologías basadas en recursos renovables. Al reducir las barreras comerciales, los acuerdos comerciales también pueden facilitar la difusión de bienes y servicios medioambientales.

Medidas a medio plazo:

- I. Mejora de la calidad de las estadísticas industriales y del seguimiento de la política industrial. La adopción de normas nacionales alineadas con las internacionales es un imperativo para que cualquier país mejore su competitividad en las exportaciones.
- II. Facilitar la transferencia y adopción de tecnología por parte de las economías africanas emergentes y en transición El cambio tecnológico provocado por las Tecnologías Verdes Emergentes (TVE) es importante tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Las TEG en el sector manufacturero pueden aportar soluciones a los problemas medioambientales al tiempo que mejoran la competitividad de los países.
- III. Concienciar sobre las oportunidades de la economía verde (como los materiales de construcción ecológicos), especialmente a las empresas que siguen abasteciéndose de insumos no sostenibles y continúan contaminando el agua y el aire. Asimismo, la mejora de las instituciones de EFTP y el perfeccionamiento de la mano de obra en los sectores de uso intensivo de tecnología será un factor clave en el proceso de transformación estructural para aumentar el valor añadido, ayudando así a los países a alcanzar la competitividad industrial.

Medidas a largo plazo:

- I. Establecimiento de un marco legal y reglamentario adecuado de economía verde que actúe como incentivo para que las MIPYMES avancen hacia operaciones sostenibles. Para proteger la economía de la virtual desindustrialización y el crecimiento de las MIPYMES informales, es urgente establecer un marco de economía legal.
- II. Mejorar el funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales que se enfrentan a limitaciones de infraestructura (por ejemplo, déficit de energía), disposiciones inadecuadas de servicios empresariales, reglamentos y procedimientos empresariales onerosos, un marco de incentivos fragmentado, fallos de coordinación institucional y un diseño débil que no aprovecha las industrias clave estratégicas para lograr mayores economías de aglomeración. Puede aumentar la competitividad de los corredores económicos y promover el crecimiento económico.

Un buen ejemplo es el Green EnterPRIZE Innovarían and Development de Zimbabue, dotado con 3,4 millones de dólares, cuyo objetivo es promover empresas sostenibles para crear empleos verdes y decentes, especialmente para mujeres y hombres jóvenes. Los resultados muestran que se crearon 2.000 empleos de este tipo, se mejoraron 1.000 puestos de trabajo y se formó a 3.000 jóvenes. Estas intervenciones pueden estimular el mercado de productos y servicios verdes mediante la ampliación del acceso a competencias para los empleos verdes e invirtiendo en la ecologización de las empresas existentes (OIT, 2017).

D. Servicios de transporte. Las recomendaciones de recuperación para el sector del transporte se agrupan a corto, medio y largo plazo y se enumeran a continuación.

Medidas a corto plazo:

- I. Dar prioridad a la vacunación, aplicar medidas sanitarias y de seguridad en el sector del transporte con el suministro de guantes de látex, desinfección, distanciamiento social, pruebas aleatorias y racionalización de las medidas de cuarentena, especialmente para garantizar un comercio transfronterizo seguro.
- II. Apoyar a los operadores de transporte público mediante la aplicación de protocolos sanitarios; para proteger al personal y a los pasajeros, frenar la propagación del COVID-19, así como para hacer funcionar la economía al mismo tiempo.
- III. Apoyo financiero inmediato a las empresas de transporte público, centrándose en los operadores informales, a través de asociaciones o sindicatos bajo condiciones específicas; exenciones de impuestos o del pago de licencias dirigidas a los operadores formales e informales; concesiones a los operadores de transporte informales para compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de las restricciones; ayudar a las poblaciones vulnerables y negociar un nivel mínimo de servicio y disponibilidad de transporte público con los operadores.
- IV. Facilitar la concesión de créditos para cubrir los costes variables, tales como las necesidades operativas continuas o la renovación de las flotas.

Medidas a medio plazo:

- I. Introducir una licencia competitiva basada en la calidad, teniendo en cuenta la situación financiera, legal y ética de las empresas, así como la calidad de los camiones y la formación de los conductores.
- II. Adoptar la armonización regional de las normas de transporte por carretera, los estándares de los vehículos y los acuerdos de licencia para promover la integración transfronteriza.
- III. Facilitar la circulación de los conductores de camiones adoptando la entrada múltiple o la entrada sin visado para los conductores de camiones con el fin de aumentar la flexibilidad de las operaciones de carga.
- IV. Utilizar herramientas digitales para mejorar el despacho de aduanas y otros procesos de facilitación del comercio transfronterizo, agilizando así los despachos y minimizando el contacto físico. Las aduanas y las agencias sanitarias y fitosanitarias (SPS) deben trabajar juntas para diseñar regímenes especiales para acelerar el despacho de mercancías críticas.

Medidas a largo plazo:

- I. Desplegar nuevas tecnologías. La introducción del cobro de billetes sin dinero en efectivo y la gestión de la flota, así como la implantación de la movilidad electrónica en los sistemas de transporte de masas pueden contribuir a mejorar la eficiencia.
- II. Colaboración del sector privado con las agencias fronterizas. El sector privado debería dar un paso adelante y colaborar con las agencias fronterizas para llevar a cabo una evaluación previa de las importaciones a través de un control anticipado de la documentación. Esto ayudará a identificar y priorizar las actividades de importación antes de la llegada de la mercancía.
- III. Inversión en hacer más ecológico el sector del transporte. La inversión en la transformación del sector del transporte como medida de recuperación tras la pandemia podría crear empleo adicional y ayudar a los países a avanzar hacia economías más ecológicas y saludables.
- IV. Establecer carriles verdes para camiones en todas las fronteras. This will prevent additional stopping of trucks at borders thereby reducing the wait time.

Un buen ejemplo es el Proyecto de Competitividad de los Servicios de Comercio y Logística, de 18 millones de dólares, cuyo objetivo es mejorar el marco jurídico, la facilitación del comercio, la modernización de los camiones y la formación de los profesionales del transporte en Togo (Banco Mundial, 2022). Sudáfrica ya ha puesto en marcha una estrategia de transporte ecológico que permitirá al sector del transporte generar más oportunidades de empleo y beneficios para la salud pública. (<https://sdg.iisd.org/news/south-africa-launches-green-transport-strategy/>)

Anexo 4: Debates en grupo

Se celebraron debates de grupos de discusión en todo el continente para obtener las aportaciones y perspectivas de diversas partes interesadas sobre los aspectos de la recuperación para África. Cada una de las sesiones se llevó a cabo de forma virtual a través de Zoom, aparte de las reuniones de Afstag/Periperi U y de la IGAD, que se celebraron en persona en el Hotel Trademark de Nairobi y en el Centro de Predicción y Aplicaciones Climáticas de la IGAD en Ngong (Kenia). En los casos en que las reuniones se celebraron físicamente, se tomaron las debidas precauciones de seguridad COVID-19. La tabla proporciona información sobre el sector o el enfoque geográfico de la FGD, la fecha en que se llevó a cabo y la lista de participantes con sus afiliaciones por país. Cada una de las sesiones duró una media de una hora y la lista de participantes refleja los datos de los que consiguieron participar en los debates, aunque en cada caso se invitó a muchos más participantes.

#	Debate	Fecha	Lista de participantes
1	Afstag/ Periperu U (investigación y mundo académico)	23/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Djilali Benouar (Algeria) 2. Dr. Nicodemus Nyandiko (Kenia) 3. Adama Bamba 4. Abdoul Oubeidillah (Comoros) 5. Mady Ibrahim Kante (Mali) 6. Assial Alladoumngue (Chad) 7. Thabo Ndlovu (Zimbabwe) 8. Paulina Ekua Amponsah (Ghana)
2	IGAD (Cuerno de África, Valle del Nilo y Grandes Lagos africanos)	24/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ahmed Amdihun (IGAD) 2. Emmanuel Okecho (Oficial de preparación para desastres en la oficina del primer ministro- Uganda) 3. Betty Scopas (Jefa del Sistema de Alerta Temprana en el Ministerio de Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres de Sudán del Sur) 4. Abeba Kiros (Comisión de gestión de riesgos de catástrofes- Etiopía) 5. Dr. Martin Talian (Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres en el Centro Nacional de Operaciones de Desastres- Kenia) 6. Abdalla Osman (Centro de Alerta Temprana de la Comisión de Ayuda Humanitaria- Sudán del Sur) 7. Hassan Mohammed Anshur (Somalia) 8. Dr. Nicodemus Nyandiko (Kenia)

3	Sociedad civil	25/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cleche Batamio (AYAB- Congo Brazzaville) 2. Walekhwa Abel (AYAB- Uganda) 3. Constant Admisse (AYAB- África Central) 4. Edward Wanyonyi (Red de Riesgo de Desastres para Periodistas Africanos) 5. Tabi Joda (Representante de la Alianza para el Conocimiento y las Prácticas Indígenas y del Movimiento de Ayuda Verde) 6. Kossivi Adesou (Coordinador Regional de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres con sede en Senegal) 7. Boroto Ntakobajira (Experto en género de Africa Risk Capacity (AU) en Johannesburgo, Sudáfrica)
4	ECCAS (África central)	2/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Constantin Michel Mbarga (Camerún) 2. Joseph Makundi (Congo) 3. HABINSHUTI Philippe (Ruanda)
5	Sector privado	3/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loy Rego (MPN- Egipto) 2. Nichole Solomons (Pacto Mundial de Sudáfrica) 3. Annette Kimitei (SENECA EA) 4. Judy Wambugu (KEPSA, Junta del Sector de la Seguridad) 5. Harrison Ngatia (KEPSA) 6. Haron Akala (Centro Africano de Estudios Tecnológicos y Nairobi Risk Hub) 7. Vinesh Chintaram (Arquitecto y urbanista) 8. Debabani Chakravarty
6	África occidental	9/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atikatou Dieng (Alliance Citoyenne- Mauritania) 2. Dr. Usman Kibon (Centro de Gestión de Riesgos de Desastres y Estudios de Desarrollo, Universidad Ahmadu Bello (ABU)- Nigeria) 3. Moutaye Whoor Hamit (Director Adjunto de Promoción de la Atracción Nacional- Chad) 4. Daniel Obot (Agencia Nacional de Gestión de Emergencias- Nigeria) 5. Ouedraogo Rimzissa (Burkina Faso)
7	África meridional	10/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Victor Mahlalela (Director de Programas de la Agencia de Gestión de Riesgos de Desastres en Eswatini) 2. Eric Seyama (NDMA Eswatini) 3. Sihle Mzileni (NDMA- Eswatini) 4. Bruno Emmanuel (BNGRC- Madagascar) 5. Coronel Felipe (BNGRC- Madagascar) 6. Amelie Yan-Gouiffes (Oficina del Coordinador Residente de la ONU para RRD y recuperación)

Consultas con los economistas de las oficinas del PNUD en África

Fecha	País	Lista de funcionarios consultados	Puesto/ Organización
11 de enero de 2022	Nigeria	Ms. Nabila Aguele	Asesor especial del Honorable Ministro de Finanzas de Nigeria
		Dr. Armstrong Takang	Ministerio de Finanzas de Nigeria
30 de diciembre de 2021	Sierra Leona, Liberia	Mr. Ligane Sene	PNUD, Sierra Leona/ Liberia
29 de diciembre de 2021	Rep. Dem. Congo	Mr. Taib Diallo	PNUD, RDC y Burundi

22 de diciembre de 2021	Nigeria	Ms. Clare Henshaw	PNUD, Nigeria
20 de diciembre de 2021	Madagascar, Comoros	Mr. Daniel Gbetnkom	PNUD, Madagascar
20 de diciembre de 2021	Mozambique	Mr. Alex Warren-Rodriguez	Economista superior, PNUD, Mozambique
20 de diciembre de 2021	Kenia	Mr. Benson Kimani	PNUD, Kenia
		Mr. Bheki Bhembe	
10 de diciembre de 2021	Zambia	Mr. Domigos Mazivila	PNUD, Zambia
6 de diciembre de 2021	Regional	Fitsum G. Abraha	Asesor económico regional, Nairobi, Kenia

Reuniones con otras instituciones sobre la recuperación económica de África

Fecha	Institución	Lista de funcionarios consultados	Función
21 de diciembre de 2021	ONUDI	Mr. Irhad Puce (aportaciones escritas proporcionadas)	División de Infraestructura de Calidad y Producción Inteligente, ONUDI
9 de diciembre de 2021	AfDB	Dr. Zerihun Alemu	Economista Jefe de País, Kenia

Referencias

- Abay, K., Berhane, G., Hoddinott, J., & Tafere, K. (2020). COVID-19 y seguridad alimentaria en Etiopía: ¿protegen los programas de protección social?
- Centro Africano para el Control de Enfermedades (CDC) (2020) & London School of Hygiene & Tropical Medicine, (2020). La mayoría de los africanos se vacunarían contra el COVID-19 de forma segura y eficaz. <https://africacdc.org/news-item/majority-of-africans-would-take-a-safe-and-effective-covid-19-vaccine/>
- Centro Africano para el Control de Enfermedades (CDC) (2021). Percepciones de la vacuna COVID-19: A 15-country study. <https://africacdc.org/download/covid-19-vaccine-perceptions-a-15-country-study/>
- Banco Africano de Desarrollo (AfDB) (2020). Perspectivas Económicas del Norte de África: Cómo hacer frente a la pandemia del COVID-19
- Banco Africano de Desarrollo (BAfD) (2021). From Debt Resolution to Growth: The Road Ahead for Africa. Perspectivas Económicas de África 2021. Perspectivas Económicas de África 2021 | Banco Africano de Desarrollo - Construir hoy, un África mejor mañana (afdb.org)
- Consortio de Investigación Económica de África (AERC) (2021). Evaluación del impacto de la pandemia del COVID-19 en la industria del turismo y la hostelería en la CAO y estrategia de recuperación posterior para el sector. Documento de trabajo AERC COVID-19 018. [AERC-Working-Paper-COVID-19_018.pdf](https://aercafrica.org/AERC-Working-Paper-COVID-19_018.pdf) (aercafrica.org)
- Comisión de la Unión Africana (CUA) 2022. Primer informe continental sobre la aplicación de la Agenda 2063. https://au.int/sites/default/files/documents/38060-doc_agenda_2063_implementation_report_en_web_version.pdf
- Akiwumi. P. (2020). COVID-19: Una amenaza para la seguridad alimentaria en África. <https://unctad.org/news/covid-19-threat-food-security-africa>
- Allen, C. (2021). Remittances in Sub-Saharan Africa: An Update 2021, 1-5
- ASEAN (2012). Advancing Disaster Risk Financing and Insurance in ASEAN Member States: Framework and Options for Implementation
- AUDA-NEPAD (2021). African Fisheries and Aquaculture in the Macro Economy. <https://www.nepad.org/publication/african-fisheries-and-aquaculture-macro-economy>
- BBC (2021). Coronavirus: Cómo la pandemia ha cambiado la economía mundial. <https://www.bbc.com/news/business-51706225>
- Bonn Challenge (2017). African Leadership Commitment to support Forest Landscape Restoration. <https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Kigali%20Declaration%20on%20Forest%20Landscape%20Restoration%20in%20Africa.pdf>
- Iniciativa Brookings para el Crecimiento de África (2021). Informe Foresight Africa
- Brookings (2021). Human Development - Protecting Vulnerable Populations, Foresight Africa 2021
- Carpenter, J. W. (2020). The Main Oil Producing Countries in Africa. <https://www.investopedia.com/articles/investing/101515/biggest-oil-producers-africa.asp>
- Chuku, C., Mukasa, A., & Yenice, Y. (2020). Putting women and girls' safety first in Africa's response to COVID-19. Brookings, mayo de 2020
- Curran, E. y Kennedy, S. (2021). Covid Will Leave Deep Scars in World Economy Even After Recovery. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-17/economic-recovery-after-covid-scars-will-remain-after-the-rebound>

Deloitte (2020). Seven lessons COVID-19 has taught us about data strategy - How governments can maximise the value they derive from data <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/government-data-management-lessons.html>

Devereux, S. (2021). Social protection responses to COVID-19 in Africa, *Global Social Policy*, 1-27

FAO (2018). National gender profile of agriculture and rural livelihoods, Uganda. <https://www.fao.org/3/i8436en/I8436EN.pdf>

FAO (2021). Perspectivas de los cultivos y situación alimentaria - Informe mundial trimestral n.º 2, julio de 2021; y n.º 1. Roma. <https://doi.org/10.4060/cb5603en>

FAO, IFAD, UNICEF, PMA Y OMS (2021). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021

República Democrática Federal de Etiopía (FDRE) (2020). COVID-19: Plan Nacional de Respuesta a la Emergencia. Addis Abeba: FDRE

Freeland, N., S. Devereux y L. Mookodi (2020). Botswana National Social Protection Recovery Plan. Gaborone: República de Botsuana y Naciones Unidas Botsuana

Presidencia francesa (2021). Cumbre sobre la financiación de las economías africanas. Declaración, 18 de mayo de 2021. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Summit%20on%20the%20Financing%20of%20African%20Economies.pdf>

Gentilini et al. (2021). Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures, versión 15 (14 de mayo de 2021). Washington DC: Banco Mundial. <http://documents.worldbank.org/curated/en/281531621024684216/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-May-14-2021>

Gikandi, L. (2020). COVID-19 y los kenianos vulnerables y trabajadores: Why it's time for a strong social protection plan. Documento informativo de Oxfam. Oxford: Oxfam International

Fondo Mundial (2021). The Impact of COVID-19 on HIV, TB and Malaria Services and Systems for Health: A Snapshot from 502 Health Facilities Across Africa and Asia

Gobierno de Gambia (2020). Plan de acción nacional para la respuesta al COVID-19: Abril 2020 - Marzo 2021; publicado en septiembre de 2020

Gobierno de Nigeria (2021). <https://nasims.gov.ng/programs/npower>

OIT (2017). Green EnterPRIze Innovation & Development in Zimbabwe. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-harare/documents/projectdocumentation/wcms_623950.pdf

OIT (2020). Informe sobre el empleo en África (Re-Africa): Abordar el desafío del empleo juvenil

OIT (2021). Social Protection Responses to COVID-19 Crisis around the World. <https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417>

FMI (2021). Policy Responses to COVID-19. <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>

Leo, B. y Winn, C. (2020). Localized communication plans help Senegal control COVID-19. Brookings. <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/11/10/localized-communication-plans-help-senegal-control-covid-19/>

Mahler, D. G., Yonzan, N., Lakner, C., Aguilar, R. A. C., & Wu, H. (2021) Estimaciones actualizadas del impacto del COVID-19 en la pobreza mundial: ¿dando la vuelta a la pandemia en 2021? <https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021>

OCDE (2020). COVID-19 y África: Implicaciones socioeconómicas y respuestas políticas, OCDE, 07-mayo-2020. <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-africa-socio-economic-implications-and-policy-responses-96e1b282/>

Osendarp, S., Akuoku, J. K., Black, R. E., Headey, D., Ruel, M., Scott, N., ... & Heidkamp, R. (2021). The COVID-19 crisis will exacerbate maternal and child undernutrition and child mortality in low-and middle-income countries. *Nature Food*, 2 (7), 476-484

Pardee Center for International Futures y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021). Perseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un mundo reconfigurado por COVID-19

Premium Times (2021). <https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/426157-nigerian-govt-plans-to-spend-n400-billion-on-npower-tradermoni-others-in-2021.html>

Ratha, D.K., Dilip K., Plaza, S., & Seshan, G.K. (2021). Migration and Development Brief 34: Resilience: La crisis de COVID-19 a través de la lente de la migración

Roy C.M., Bukuluki P., Casey S.E., Jagun, M.O., John, N.A., Mabhena, N., Mwangi, M., & McGovern T., (2022). Impact of COVID-19 on Gender-Based Violence Prevention and Response Services in Kenya, Uganda, Nigeria, and South Africa: A Cross-Sectional Survey. *Front. Glob. Womens Health* 2:780771. doi: 10.3389/fgwh.2021.780771

Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2021). Sustainable development report 2021. Cambridge University Press

Secretaría, A. S. E. A. N. (2020). Marco integral de recuperación de la ASEAN

Silwal, A. R., Engilbertsdottir, S., Cuesta, J., Newhouse, D., & Stewart, D. (2020). Estimación mundial de niños en situación de pobreza monetaria: An Update. Documento de debate sobre la pobreza y la equidad <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34704>

Suzuki, E. (2019). La población mundial seguirá creciendo y llegará a casi 10.000 millones en 2050. Blogs del Banco Mundial

The Economist (2020). Covid-19 ha estrangulado la economía de Sudáfrica. En: The Economist [en línea]. Londres. <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/07/18/covid-19-has-throttled-south-africas-economy>

The Lancet for Global Health (2021). Estimaciones tempranas de los efectos indirectos de la pandemia del COVID-19 sobre la mortalidad materna e infantil en países de ingresos bajos y medios: un estudio de modelización

The Sustainable Development Goals Center for Africa & Sustainable Development Solutions Network (2020): Africa SDG Index and Dashboards Report 2020. Kigali y Nueva York: Centro de los ODS para África y Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible

Naciones Unidas (2020). The Impact of COVID-19 on older persons; Vulnerability and neglect; UN Policy Brief

ONUSIDA (2021). Estadísticas mundiales sobre el VIH y el SIDA Hoja informativa <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>

UNCTAD (2018). Informe sobre los países menos adelantados 2018: Emprendimiento para la transformación estructural: Más allá de lo habitual 2018, Naciones Unidas

UNCTAD (2019). Desarrollo económico en África

UNDESA (2019). Datos de población. <https://www.un.org/development/desa/pd/data/living-arrangements-older-persons>

PNUD (2019). El estado de la asistencia social en África. <https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/the-state-of-social-assistance-in-africa-report.html>

PNUD (2019a). Informe sobre Desarrollo Humano 2019

PNUD (2020). Evaluación del impacto socioeconómico de COVID-19 en Guinea Ecuatorial. Malabo: PNUD

PNUD (2020a). Más allá de la recuperación: Towards 2030. <https://www.undp.org/publications/beyond-recovery-towards-2030>

PNUD (2020b). Proyecto de nota de orientación para la evaluación de las necesidades de recuperación del COVID-19. <https://recovery.preventionweb.net/publication/covid-19-recovery-needs-assessment-crna-draft-guidance-note>

PNUD (2020c). Metodología de la evaluación de las necesidades de recuperación del COVID-19 (CRNA), 2020, https://www.za.undp.org/content/south_africa/en/home/library/rapid-emergency-needs-assessment/, Pg 17-18

PNUD Y UNICEF (2021). African Solidarity Funding Mechanism, Desk Review and Fund Options Report, 16 de diciembre de 2021

PNUD y ONU Mujeres (2021). COVID-19 Global Gender Response Tracker. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. <https://data.undp.org/gendertacker/>

Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA) (2020). "ECA estimates billions worth of losses in Africa due to COVID-19 impact", UN Economic Commission for Africa, 13-Mar-2020. <https://www.uneca.org/stories/eca-estimates-billions-worth-losses-africa-due-covid-19-impact>

UNESCO (2019). Conectar África a través de la banda ancha Una estrategia para duplicar la conectividad en 2021 y alcanzar el acceso universal en 2030. <https://www.broadbandcommission.org/publication/connecting-africa-through-broadband/>

UNESCO (2020). Una instantánea de los desafíos educativos y las oportunidades de recuperación en África

UNESCO (2021). Global monitoring of school closures caused by COVID-19. <https://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/regional-dashboard/>

UNFPA (2020). Impacto de la pandemia del COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Nota técnica provisional. Abril de 2020.

ACNUR (2020). COVID-19 y los derechos de las personas con discapacidad: Orientación

ACNUR (2021). Tendencias Globales 2020

UNICEF (2020). ¿Cuántos niños y jóvenes tienen acceso a Internet en casa? Estimación de la conectividad digital durante la pandemia del COVID-19. <https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home-during-covid19/>

UNICEF (2020a). Covid-19 - Una catástrofe para los niños del África subsahariana

UNICEF (2021). La pandemia del COVID-19 provoca un gran retroceso en la vacunación infantil, según nuevos datos de la OMS/UNICEF. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/progresses-and-challenges-with-sustaining-and-advancing-immunization-coverage-during-the-covid-19-pandemic>

UNICEF, OMS Y UHC (2021). Levantarse, responder, recuperarse: Renovar el progreso en la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes en la era de la COVID-19

Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil (2019). Niveles y tendencias de la mortalidad infantil, Informe 2019

ONU OCHA (2022). Informe de situación de Kenia - septiembre de 2020. <https://reports.unocha.org/en/country/kenya/>

ONU Mujeres y Azcona et al. (2020). From insight to action. Gender equality in the wake of COVID-19

PMA (2020). Estado de la alimentación escolar en el mundo 2020

PMA Y FAO (2021). Hunger Hotspots: Alertas tempranas de la FAO y el PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda - Perspectiva de marzo a julio de 2021

PMA Y UNICEF (2021). COVID-19: Falta algo más que un aula. El impacto del cierre de escuelas en la nutrición de los niños

OMS (2020). COVID-19 Estrategia mundial de comunicación de riesgos y participación de la comunidad - orientación provisional. <https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-global-risk-communication-and-community-engagement-strategy>

OMS (2020a). Informe mundial sobre la tuberculosis

OMS (2020b). Consideraciones sobre la discapacidad durante el brote del COVID-19

OMS (2021a). Hoja informativa de la OMS sobre el paludismo, 2021. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria>

OMS (2021). Últimas estimaciones sobre el VIH y actualizaciones de las políticas sobre el VIH

OMS (2021). Impacto de la pandemia del COVID-19 en la detección de la tuberculosis y la mortalidad en 2020. <https://www.who.int/publications/m/item/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-tb-detection-and-mortality-in-2020>

OMS (2021b). Segunda ronda de la encuesta nacional de pulso sobre la continuidad de los servicios sanitarios esenciales durante la pandemia del COVID-19: Enero-marzo de 2021

OMS (2022). Tercera ronda de la encuesta mundial de pulso sobre la continuidad de los servicios de salud esenciales durante la pandemia del COVID-19: Noviembre-diciembre de 2021: informe provisional, 7 de febrero de 2022. Organización Mundial de la Salud. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/351527>

OMS Y UNICEF (2021). Progress and Challenges with Sustaining and Advancing Immunization Coverage During the pandemics of COVID-19. <https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-pandemic-leads-major-backsliding-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data>

OMS, UNICEF, UNFPA y Banco Mundial (2019). Tendencias de la mortalidad materna: 2000 a 2017

OMS y Banco Mundial (2011). Informe mundial sobre la discapacidad

WIEGO (2020). Respuestas de protección social a COVID-19. <https://www.wiego.org/social-protection-responses-covid-19>

Banco Mundial (2020). Pobreza y prosperidad compartida 2020: Reversos de la fortuna. Washington, DC: Banco Mundial. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34496>

Banco Mundial (2020a). La pandemia del COVID-19: Choques en la educación y respuestas políticas

Blog del Banco Mundial (2020b). Una respuesta inclusiva a COVID-19 para los trabajadores informales de África. <https://blogs.worldbank.org/africacan/inclusive-response-covid-19-africas-informal-workers>

Banco Mundial (2020c). Perspectivas económicas para la República Centroafricana: Diversificación de la economía para crear resiliencia y fomentar el crecimiento. Comunicado de prensa de noviembre de 2020. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/11/30/perspectives-economiques-en-republique-centrafricaine-diversifier>

leconomie-pour-renforcer-la-resilience-et-favoriser-la-croissance

Banco Mundial (2020d). Programa de África para la Pesca, <https://www.worldbank.org/en/programs/africa-program-for-fisheries#2>

Banco Mundial (2021). COVID-19 en África oriental y meridional: Cuatro obstáculos para la recuperación en la carrera por la protección de los más pobres de la región. Op-Ed, marzo de 2021. <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2021/03/23/covid-19-in-eastern-and-southern-africa-four-hurdles-to-recovery-in-the-race-to-protect-the-region-s-poorest>

Banco Mundial (2021a). Macro Poverty Outlook for Sub Saharan Africa; Análisis y proyecciones país por país para el mundo en desarrollo

Banco Mundial (2021b). Cabo Verde Economic Update: Rebounding from the crisis - Restoring fiscal sustainability and leveraging the private sector for a more resilient and sustainable recovery. Washington DC: Banco Mundial

Banco Mundial (2021c). Kenia: Off-grid Solar Access Project for Underserved Counties. <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160009>

Banco Mundial (2022). Togo: Proyecto de competitividad de los servicios comerciales y logísticos. <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158982>



African Union Headquarters
P.O. Box 3243, Roosevelt Street
W21K19, Addis Ababa, Ethiopia
Tel: +251 (0) 11 551 77 00
Fax: +251 (0) 11 551 78 44
www.au.int